Temas

–CULTURA · IDEOLOGÍA · SOCIEDAD–

113 - 114

ENE. - JUN. 2023

¿Revolución Francesa en 1868? ◖ Para una ética de futu ◖ Poéticas posorigenistas

Derechos a mano

¿Cómo se llevan emprendedores y empleados?

SUMARIO

Temas 113-114

cultura ideología sociedad

enero-junio 2023

ENFOQUE
Derechos y políticas sociales

Los derechos sociales y sus diversos caminos. Del constitucionalismo liberal al socialista /4
Mylai Burgos Matamoros

Transición en América Latina en términos de bienestar (1950-2000)/13
Amílcar E. Challú y Sergio Silva Castañeda

La paradoja estadounidense: derechos sociales e individuales /19
Carlos L. Garrido

Derechos civiles: una mirada desde el profundo Sur. Una entrevista a Stanley Murphy /27
Rafael Hernández

Virajes del constitucionalismo social mexicano: las reformas de la Constitución de 1917 /30
Aleida Hernández Cervantes

Constitución y derechos sociales en España: crisis y reestructuración económico-social /39
Albert Noguera

La vivienda y los derechos sociales en la gestión pública venezolana actual /48
Luz Marina Toro Vegas y Fernando Giuliani Nacheli

La realización de los derechos humanos sociales: una mirada a Cuba y Alemania /55
Eberhard Shultz

El enfoque de derechos en la política social. El caso cubano /62
Edmundo del Pozo Martínez

Impacto de las reformas constitucionales sobre el Derecho laboral en Cuba /69
Guillermo Ferriol Molina

76/ Feminismos, instituciones y organización social en Cuba
Alina Herrera Fuentes

85/ Políticas públicas de género y el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres en Cuba
Tania Gómez Barrios

93/ La educación superior cubana: un paradigma en cambio
Danay Quintana Nedelcu

CONTROVERSIA
104 / Emprendedores y empleados: ¿cuáles relaciones laborales?
Oscar Rafael Brito, Ileana González Arteaga, Caridad L. Limonta, Ramón Manuel López Alarcón, José Luis Martín Romero, Rafael Hernández

ENTRETEMAS

120/ La ética en el centro de definición sobre el futuro de Cuba
Gabriel Ramos Carrasco

128/ Documentos en Cuba: reflexiones desde la historia de la legislación archivística
Yorlis Delgado López

136/ El significado simbólico de construcciones sociales en la cultura totonaca
Arianna Re

LECTURA SUCESIVA

144/ Cosmos visual, nueva semántica poética: hacia un posorigenismo
Ivette Fuentes de la Paz

153/ Una aproximación al cine coreográfico de las pioneras norteamericanas
Carolina Martínez

160/ La presencia de directoras en el cine colombiano
Jerónimo Rivera-Betancur

temas
cultura ideología sociedad

Temas es una publicación trimestral, dedicada a la teoría y el análisis de los problemas de la cultura, la ideología y la sociedad contemporáneas. Está abierta a la colaboración de autores cubanos, caribeños, latinoamericanos y de otros países. Los artículos expresan la opinión de sus autores.

No se devuelven originales no solicitados.
Prohibida la reproducción sin autorización de los artículos publicados en *Temas* por primera vez.

ISSN 0864-134x.

Inscrita en el Sistema de Publicaciones Seriadas Científico-Tecnológicas, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (CITMA).
Registro #0616307-2007

Revista *Temas*
Calle 23 #1109
entre 8 y 10, El Vedado,
Ciudad de La Habana, Cuba.
CP 10400.
Teléfono: (53) 7838 3010
Email: temas@icaic.cu
www.temas.cult.cu
www.facebook.com/revistatemascuba

CONSEJO EDITORIAL

Director
Rafael Hernández

Subdirector
Enrique García

Asesor artístico
Frémez (†)

Natalia Bolívar
Jorge I. Domínguez
Mayra Espina
Pedro Martínez Pírez
Margarita Mateo Palmer
Ernesto Rodríguez Chávez
Joaquín Santana Castillo
Nelson P. Valdés
Oscar Zanetti Lecuona

Diseño de cubierta
Ernesto Niebla

Coordinadora de redacción, maquetación y web
Vani Pedraza García

Edición
Denia García Ronda
Paula Guillarón
Suntyan Irigoyen

Sitio web y redes sociales
Disamis Arcia
Rafael Betancourt
Belsis I. Rodríguez

Promoción
Gladys García Durán

Secretaria
Maritza Arbesú

CONSEJO ASESOR

Jorge Luis Acanda, *Universidad Central del Ecuador.*
Antonio Aja Díaz, *CEDEM, UH.*
Félix Julio Alfonso, *Colegio de San Gerónimo.*
Aurelio Alonso, *Casa de las Américas.*
Georgina Alfonso, *Instituto de Filosofía.*
Carlos Alzugaray, *UNEAC.*
María del Carmen Barcia, *Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz.*
Alain Basail, *CESMECA.*
Mayerín Bello, *UH.*
José Francisco Bellod, *Universidad de Murcia.*
Raúl Benítez, *UNAM.*
Rafael Betancourt.
Mylai Burgos Castellanos. *UACM.*
Zaida Capote, *ILL.*
Julio Carranza, *UNESCO.*
Nils Castro.
Javier Colón, *Universidad de Puerto Rico.*
Yoel Cordoví, *IHC.*
Roberto Corral, *UH.*
Ramón de la Cruz, *Sociedad Cubana de Ciencias Penales.*
Carlos Delgado, *UH.*
Ileana Díaz, *CEEC.*
Marlen Domínguez, *UH.*
Armando Fernández, *FANJ.*
Oscar Fernández, *UH.*
Raúl Fernández, *Universidad de California, Irvine.*
Juan Antonio García Borrero.
Tania García Lorenzo.
Humberto García Muñiz, *Universidad de Puerto Rico.*
Carlos García Pleyán, *COSUDE.*
Denia García Ronda.
Rolando González Patricio.
Jesús Guanche, *Universidad de Hebei, China.*
Julio César Guanche.
Yan Guzmán, *UH.*
Antoni Kapcia, *Universidad de Nottingham.*
Hal Klepak, *Royal Military College, Canadá.*
Par Kumaraswami, *Universidad de Nottingham.*
Francisca López Civeira, *UH.*
Sheryl Lutjens, *Universidad de California.*
Luis Marcelo Yera, *INIE.*
Antonio Raudilio Martín, *Sociedad Cubana de Derecho Laboral.*
Consuelo Martín, *UH.*
José Mateo Rodríguez, *UH.*
Jesús Menéndez.
Alberto Montero, *Universidad de Málaga.*
Armando Nova, *CEEC, UH.*
Marta Núñez, *UH.*
Daybel Pañellas, *UH.*
Esther Pérez, *Centro Memorial Martin L. King, Jr.*
Lisandro Pérez, *City University of New York.*
Manuel Pérez Paredes, *ICAIC.*
Marta Pérez-Rolo, *GESTA.*
Omar Everleny Pérez Villanueva.
José Luis Rodríguez, *CIEM.*
Pedro Pablo Rodríguez, *Centro de Estudios Martianos.*
Rogelio Rodríguez Coronel, *UH.*
Francisco Rojas Aravena, *Universidad de la Paz, Costa Rica.*
Zuleica Romay, *Casa de las Américas.*
Cira Romero, *ILL.*
Joel Suárez, *Centro Memorial Martin L. King, Jr.*
Luis Suárez Salazar.
Miguel Tinker Salas, *Pomona College.*
Jorge Enrique Torralbas, UH.
Ricardo Torres, *CEEC, UH.*
Gilberto Valdés, *Instituto de Filosofía.*
Omar Valiño.
John Womack, *Universidad de Harvard.*
Yolanda Wood, *Casa de las Américas.*
Mirta Yáñez.

ENFOQUE

Derechos y políticas sociales

El progresismo latinoamericano del siglo XXI ha enarbolado banderas antineoliberales y de lucha contra la desigualdad, repensando normas jurídicas y políticas públicas que satisfagan las necesidades básicas para una vida digna.

¿Cómo se han concebido esos derechos y políticas sociales, y en qué medida han sido efectivos? ¿Hasta qué punto han estado mediados por desigualdades de género, color de la piel, territorios, países, regiones?

Investigadores de España, México, Estados Unidos, Venezuela y Cuba, abordan las complejas relaciones entre la ley, la política y la sociedad, desde las perspectivas del nuevo constitucionalismo, las luchas por los derechos civiles, el acceso a los derechos laborales, las políticas de género y de educación superior, y el bienestar como medida de desarrollo y democracia efectivas, en sistemas capitalistas y socialistas.

Temas **agradece a Mylai Burgos, profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y miembro de nuestro Consejo Asesor, editora invitada de este número, y a los autores que nos han confiado sus investigaciones para exponerlas al escrutinio afilado de nuestros lectores.**

Los derechos sociales y sus diversos caminos. Del constitucionalismo liberal al socialista

Mylai Burgos Matamoros
Profesora investigadora.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Los derechos humanos (DDHH) son pretensiones, o reivindicaciones justificadas, de sujetos individuales o colectivos. A las personas se les reconoce la facultad de hacer algo o no, transitar libremente, elegir su ocupación, seleccionar el lugar donde desea vivir, no realizar acciones que vayan contra la integridad física o psicológica de una persona, entre otras situaciones. Respetar esto no queda a la buena voluntad de terceros, sean personas físicas, grupos o instituciones, sino que existe la posibilidad de dirigir un reclamo al Estado (Courtis y Abramovich, 2006: 5-6), y requiere una respuesta obligatoria de la entidad estatal. Por tanto, todo órgano gubernamental debe actuar según lo establecido por los derechos y las obligaciones que le son propios. Estas últimas son, esencialmente, de hacer y no hacer (Ferrajoli, 1999). Las de hacer se explicitan mediante el desarrollo legislativo sobre derechos, la construcción e impulso de mecanismos de exigibilidad para defenderlos ante vulneraciones, y la ejecución de acciones como facilitar y promover recursos, políticas públicas y vías institucionales a fin de que se cumplan. Las de no hacer exigen no realizar actos que violen los derechos y sus garantías, por ejemplo: desalojar a personas de sus viviendas, usar excesivamente la fuerza policial o militar, eliminar recursos presupuestarios para tratar problemas sociales, etcétera.

Todos los DDHH comprenden la misma estructura: sujetos titulares, bienes jurídicos que se protegen y la persona obligada respecto a la violación de los derechos. La diferencia fundamental entre ellos está en los bienes protegidos:

- Los derechos civiles se relacionan con la vida, la integridad física y psicológica, el desarrollo de la libre personalidad, la no discriminación y las libertades.
- Los políticos están vinculados a los procesos de participación en la toma de decisiones en una sociedad política, asociada a instituciones —que pueden estar vinculadas al Estado— y organizaciones como partidos y asambleas comunitarias, entre otras.
- Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), también conocidos como sociales, comprenden bienes relacionados a la satisfacción de necesidades básicas de personas y grupos sociales (Pisarello, 2011: 11), como trabajo, salario digno, jornada laboral de ocho horas, seguridad y asistencia social, tierra para campesinos y campesinas, salud, vivienda, agua, alimentación, educación, cultura y ambiente.

El reconocimiento de los DESC como DDHH es el resultado de un proceso histórico marcado por luchas sociales y debates ideológicos. Este trabajo analiza cómo estos derechos fueron concebidos teóricamente, con algunas perspectivas prácticas, en los modelos constitucionales de la modernidad madura,[1] y da cuenta de su devenir histórico, contradicciones y diferencias.

El proceso histórico de los derechos sociales

El discurso de los DESC (Fioravanti, 1996; De Cabo, 1993; Doménech, 2004; Pisarello, 2011) surge en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de la crítica a las doctrinas del liberalismo clásico que fundamentaron las primeras constituciones liberales —la francesa y la estadounidense—, en la modernidad madura, las cuales no regularon los DESC, sino los denominados civiles y políticos (DCyP) relacionados con la vida, algunas libertades y la propiedad. ¿Por qué no se reconocieron y protegieron los DESC en estas cartas magnas, devenidas de las luchas revolucionarias contra el *ancien regime*, donde la libertad, igualdad y fraternidad fueron reclamos históricos que contenían bienes sociales?

Constitucionalismo liberal y DESC

El constitucionalismo liberal se basa en principios del liberalismo político y económico. El primero asume los DDHH como prerrogativas de las personas individuales frente al poder estatal y al resto de las personas; es decir, los derechos constituyen los límites del ejercicio del poder del Estado, el cual nunca puede realizar sus funciones invadiendo los derechos de las personas. También existen limitaciones entre los sujetos, en la actuación de uno frente al otro. De esta manera, el ejercicio de los DDHH no es infinito, sino que termina donde comienza el de la otra persona. Por otro lado, el liberalismo económico asume a los seres humanos como individuos libres e iguales, con igual capacidad para participar y producir en el mercado, y hacer circular e intercambiar bienes y servicios.

Si vemos el trabajo como la relación social por excelencia en el siglo XIX, sus actores fundamentales, patrón y trabajador, eran considerados iguales. Sus relaciones se supeditaban a lo pactado entre ellos, porque, en teoría, los dos ejercían libremente su voluntad. Así se concebían las relaciones socioeconómicas basadas en la libertad, con supuesta certeza, previsibilidad y seguridad. Pero si un trabajador precisaba vender su fuerza laboral (trabajo) para satisfacer necesidades, en un mercado laboral reducido, y un patrón tenía la capacidad de comprarla, el margen de negociación no podía considerarse equitativo en cuanto a las partes. Conforme al pensamiento liberal, esto no era un problema, sino el ejercicio de la libertad en el ámbito del mercado, como mecanismo ideal para el desenvolvimiento de todo tipo de relaciones socioeconómicas.

Si surgía un conflicto entre las partes, el Estado fungía de interventor, asegurando, mediante el derecho, que el desarrollo de estas relaciones se efectuara con estricta igualdad de trato entre las partes; la conocida igualdad formal o ante la ley. El ente estatal se concebía como un gendarme, limitado en el ejercicio del poder, para que no interviniera en el desenvolvimiento del mercado, y resultara un peligro para las supuestas libertades de los seres humanos.

En el campo del derecho, lo anterior refleja el vínculo socioeconómico capital-trabajo como una relación jurídica civil contractual entre patrón y empleado, como particulares y en condición de igualdad. Ambos pactaban «libremente» el intercambio de bienes, servicios y fuerza laboral por un precio o salario fijado por el mercado, sin intervención estatal, ni de institución gremial o sindical, porque podrían provocar interferencia en el principio básico del sistema político jurídico: la autonomía de la voluntad de las partes. Si alguno de los sujetos contratantes incurría en responsabilidad —voluntaria o por negligencia—, debía indemnizar por daños y perjuicios al otro, dentro del marco del derecho civil, el ámbito de lo privado, donde no debía incidir lo público.

Bajo tales premisas, los derechos potenciados y regulados, fundamentalmente en el constitucionalismo liberal clásico, eran los de libertad, autonomía, y los civiles y políticos, como la vida, la libre expresión, el libre tránsito; así como el derecho de propiedad, a votar y ser votado y a participar políticamente en las decisiones estatales, entre otros. Todos sustentados en

los principios de autonomía de la voluntad, igualdad formal y legalidad, es decir, los individuos son iguales ante la ley, sin distinción de nacimiento, preferencias o estatus social. En este sentido, como todo derecho requiere protección, el gendarme estatal ejerce esta función mediante las instituciones policiacas, de vigilancia y judiciales, para garantizar las libertades, sobre todo las de la *lex mercatoria*,[2] como pilar del funcionamiento social de la época. Las normativas constitucionales derivadas de las revoluciones antiabsolutistas consagraban los mencionados principios, pero, a la vez, legalizaban un régimen de desigualdad (Courtis y Abramovich, 2006: 13), en especial, entre capitalistas empleadores y trabajadores empleados.

Todo lo anterior se enmarca en el ámbito de los derechos civiles y políticos, como hemos comentado, y estaba dirigido a desmantelar las concepciones elitistas, de castas y nobleza defendidas por regímenes monárquicos y aristocráticos, desde los movimientos revolucionarios antiabsolutistas de la época, fundamentados en las ideas ilustradas.

Este fue el canon dominante, pero realmente las demandas por los bienes jurídicos contenidos en los derechos sociales estuvieron presentes en las luchas ciudadanas, por ejemplo, desde los jacobinos en cuanto al derecho a la existencia en primer lugar. Maximiliano Robespierre (2005) en su discurso de 2 de diciembre de 1792 en la Convención, así lo expresa:

> ¿Cuál es el primer objetivo de la sociedad? Es mantener los derechos imprescriptibles del hombre. ¿Cuál es el primero de estos derechos? El derecho a la existencia. La primera ley social es pues la que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios de existir. Todos los demás están subordinados a este. La propiedad no ha sido instituida o garantizada para otra cosa que para cimentarlo. Se tiene propiedades, en primer lugar, para vivir. No es cierto que la propiedad pueda oponerse jamás a la subsistencia de los hombres. (157)

Las relaciones de materialidad económica y de poder del capitalismo industrial propiciaron que las instituciones políticas y jurídicas respondieran a sus necesidades. En primera instancia, defender la propiedad individual exclusiva y excluyente como baluarte del sistema, y desde ahí, la libertad económica de los propietarios. Esto hace evidente que los derechos civiles y patrimoniales fueran los pilares constitucionales del momento, pues el Derecho es un campo en disputa, y las normas jurídicas reflejaron relaciones de poder, donde dominó la perspectiva defendida por el capital.

Además, el tema no era solo regular derechos, sino que estos fueran efectivos. ¿Era real que todos, universalmente, tenían acceso a la libertad económica y a la propiedad? No. Las libertades y la propiedad comprendían una universalidad falaz. La esencia del sistema capitalista es la acumulación, exclusiva y excluyente, mediante la explotación de la fuerza laboral, la extracción con despojo de los recursos naturales como materias primas, y la tecnología, a través de dispositivos de dominación y hegemonía que implican diversas violencias. Como diría Carlos Marx (1980):

> El hombre que no dispone de más propiedad que su fuerza de trabajo tiene que ser, necesariamente, en toda situación social y cultural, esclavo de otros hombres, de aquellos que se han hecho con la propiedad de las condiciones materiales de trabajo. Y no podrá trabajar ni por consiguiente vivir, más que con su permiso. (3)

Bajo esta lógica, es imposible en el sistema capitalista, y menos en su comienzo y desarrollo industrial, que exista materialmente libertad universal, ni económica y, por ende, tampoco acceso a la propiedad, pues los seres humanos son «esclavos» de otros mediante la relación social laboral y de propiedad. Y mucho menos hay igualdad, por lo que el resto de los bienes que configuran derechos sociales como alimentación, salud, vivienda, educación, cultura, quedan supeditados a dichas relaciones, y en total rezago respecto a su cumplimiento.

Por otro lado, también se establecen protecciones de derechos civiles como la vida y la integridad física; otras libertades como la de tránsito, o de formas de vida; y derechos políticos vinculados al voto, en relación con formas de gobierno parlamentarias o presidencialistas. Pero tampoco hubo universalidad realizable: la totalidad de las personas no podían disfrutar de estos derechos, ni los esclavos de la emergente nación estadounidense podían elegir sus formas de vida, ni las mujeres ni hombres blancos no propietarios, del mundo occidental liberal, tenían acceso a la participación política.

En este sentido, no solo no se regularon ni satisficieron los derechos sociales en general; tampoco los defendidos en las constituciones liberales comprendieron tal universalidad, ni en la dogmática ni en la práctica social, como la historia de los vencedores nos ha querido imponer. La legalidad, seguridad y autonomía de la voluntad tuvo efectividad para los hombres blancos propietarios, ciudadanía exclusiva y excluyente frente al resto de la población. Nuevamente han sido las luchas sociales las que han impuesto, dentro de la disputa antagónica, un tipo de derecho, sus contenidos y marcos de exigibilidad.

Constitucionalismo social

La perspectiva social del derecho surgió en el contexto histórico de finales del siglo XIX e inicios del XX, debido a que el modelo liberal clásico presentó serias insuficiencias en la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías poblacionales. El sistema

Los Estados en su devenir histórico —como toda institución— se fetichizan en el ejercicio del poder, porque se vuelven autorreferenciales. Pensar que nunca quebrantan derechos es una concepción idealista, alejada de la materialidad social, de sus antagonismos y, por ello, traen consigo la vulnerabilidad de personas y grupos dentro de los propios sistemas jurídicos políticos.

político-económico instaurado sobre el capitalismo industrializado hacía surgir desde su fuero interno sus propias críticas antagónicas.

Las luchas sociales —fundamentalmente obreras— fueron contra el individualismo desmedido, el patrimonialismo y la mercantilización de la vida social. Pugnaron por el cambio de las condiciones desfavorables del sector laboral, demostrando fuerte capacidad organizativa. Las confrontaciones constituyeron el punto de partida para la elaboración de un discurso por los derechos sociales. Así nació el modelo político-jurídico de corte social que, poco a poco, desplazó al liberal clásico. Este desplazamiento se caracteriza por las siguientes transformaciones (Courtis y Abramovich, 2006: 14-5):

- Principio de igualdad: La noción de igualdad formal entre las partes, ante la ley, es desplazada por la de desigualdad material entre los contratantes, lo que propicia la idea del trato diferenciado entre partes en condición desigual; en este caso, el empleador y el trabajador.
- De lo individual a lo colectivo: Se realiza una fuerte crítica a la perspectiva individual de las relaciones laborales contractuales, asumiendo que tienen un carácter plural, lo cual propició el reconocimiento de los organismos sindicales como cuerpos colectivos que, entre otros aspectos, podían gestionar, como actores jurídicos, las regulaciones laborales para todo el grupo empleado. También se establecieron instrumentos jurídicos de defensa de los trabajadores, como el derecho a huelga.
- Función del Estado: La entidad estatal dejaba atrás sus límites ante el mercado y las supuestas relaciones contractuales libres, para constituirse en mediador entre patrones y trabajadores, sobre todo, asumiendo un papel protector de los empleados. Este papel activo del Estado pasa por regular en materia laboral, vigilar el funcionamiento de las condiciones de trabajo establecidas, así como ejercer como árbitro en los conflictos capital-trabajo.
- Responsabilidad contractual laboral: Deja de ser subjetiva, por negligencia o dolo; es decir, independientemente de la voluntad, daño o perjuicio ocasionado y pasa a ser objetiva. Siempre habría una indemnización al trabajador, sobre todo por enfermedad o accidente laboral.[3]

Estos cambios no se concentraron solo en lo laboral. Dado que el mercado no era suficiente para satisfacer las necesidades básicas de las personas, el Estado, inmerso en un ambiente de conflictividad social, tuvo que intervenir en esferas que, según la doctrina liberal, debían suplirse por la sociedad, entre ellas: los sistemas de seguridad y asistencia social, de salud y educación pública, acceso a la vivienda, al transporte, al agua, a la tierra para campesinos/as, abastecimiento de alimentos, socialización de la propiedad y limitación de su carácter exclusivo y excluyente.

El Estado deja de ser un mero vigilante para adquirir responsabilidades sociales y jurídicas con la ciudadanía. Es un organizador institucional y también se dedica a la distribución, mediante la intervención económica del mercado en aras de los más vulnerables. Además, adquiere deberes vinculados con la igualdad sustancial (económica), más allá de la formal (ante la ley), pues tiene la obligación de generar recursos materiales y oportunidades para que todas las personas y grupos vivan en condiciones básicas y cierta dignidad. Esto se consolidó jurídicamente entre la segunda década del siglo xx hasta la posguerra. Las cartas magnas precursoras del constitucionalismo social[4] son la mexicana (1917), la Constitución de la República Socialista Federativa de los Consejos (Soviets) de Rusia (1918),[5] —junto con la Declaración rusa de derechos del pueblo trabajador y explotado—, y la de Weimar, Alemania (1919).

En todo este devenir histórico, las contradicciones del movimiento de lo real en las sociedades capitalistas fueron muy relevantes. De una parte, se encontraban los mencionados movimientos revolucionarios y sociales de obreros, campesinos y mujeres, que exigieron y lograron cambios fundamentales en la satisfacción de necesidades básicas, como trabajo, salud, educación, vivienda; y de la otra, los de participación política, como la lucha por el derecho al voto de las mujeres.

Por otro lado, el sistema capitalista sufrió su primera gran crisis económica con «la gran depresión», en 1929 —propia del funcionamiento cíclico del capital—, en el contexto del reordenamiento hegemónico del sistema mundo ocurrido con las dos guerras mundiales, y tuvo que dar respuestas a la crisis. También constató, junto con la búsqueda de solución a los conflictos sociales, la necesidad de una fuerza laboral con mayor calificación técnica y profesional, y mejores condiciones de salud,

alimentación y descanso que posibilitarían mayor rendimiento y productividad en el trabajo. Todo ello influyó en la modificación de la relación capital-trabajo, en sus condiciones y realizaciones.

En este contexto, fue instaurándose paulatinamente el modelo del constitucionalismo social. El capitalismo generó, hasta cierto punto, condiciones para un funcionamiento sociojurídico diferente al liberal, y tuvo avances sociales significativos, aunque siempre habría que tener en cuenta el comportamiento de los espacios históricos concretos y sus relaciones, sobre todo de los centros hegemónicos del Norte global respecto a las periferias del Sur. No era la misma situación de bienestar social y condiciones de vida digna en un país de Europa occidental que en uno latinoamericano; ni, en general, para grupos en mayor desventaja social, propia de la relación centro-periferia. Hay que destacar también que el modelo regulativo y su puesta en práctica tuvieron deficiencias y obstáculos tanto en la dogmática constitucional y los mecanismos de garantías para el cumplimiento de los derechos, como en las políticas públicas para hacer efectivo los de carácter social. En mi criterio, no es una falla doctrinal jurídica ni política, sino que las teorías reflejaron la propia esencia del sistema capitalista: la acumulación exclusiva y excluyente, que siempre tendrá reparos para satisfacer plenamente los DESC, porque van en contra del desarrollo de ese sistema.

En este sentido, se plantearon problemas estructurales respecto a su aplicación, sobre todo en comparación con los derechos civiles y políticos (DCyP), pues aquellos comprenden obligaciones positivas de hacer, desde el Estado, que implican construir hospitales, escuelas, redes hidráulicas, etc. Por su parte, los DCyP generan obligaciones negativas de no hacer, como no matar o no agredir a una persona, cuyo cumplimiento es inmediato. Así el modelo configura una regulación, protección y cumplimiento de los DESC con los siguientes límites:

- Costos: Las acciones tendientes al cumplimiento de los DESC son costosas y su realización se condiciona a los recursos económicos disponibles. Por su parte, los DCyP, al referir obligaciones de abstención, implica que no son onerosos. La pregunta es: ¿cuánto cuesta el funcionamiento de todo un sistema electoral, que propicia los derechos políticos, o el del sistema penitenciario, vinculado a delitos contra la vida o integridad física que protegen derechos civiles? La satisfacción de todos los derechos implican costos.
- Contenido: Las conductas derivadas de los bienes sociales son confusas, parece no haber consenso respecto a lo que debe entenderse por términos como *salud de calidad* o *alimentación adecuada*. Por otro lado, los bienes que protegen los DCyP son suficientemente determinados y claros, se comprenden por sí mismos: votar, ser votado, y respeto a la vida e integridad física de una persona en concreto; pero, igualmente, el argumento es muy cuestionable. Por ejemplo, el acceso a la información, uno de los derechos civiles más relevantes en la actualidad, debe ser adecuado, veraz, oportuno; ¿qué significan estas características? Existen niveles de indeterminación en los contenidos de todo derecho, los cuales se van acotando con la práctica sociojurídica.
- Sujetos obligados: Parece no haber certeza en cuanto a quiénes están obligados a cumplir los DESC: ¿a cuáles de las instituciones del Estado?, ¿a la familia, a la sociedad en su conjunto? Por su parte, los sujetos obligados a respetar los DCyP son personas —fáciles de identificar—, igual para invocar su cumplimiento como para detectar la responsabilidad por su vulneración. Igual es un argumento erróneo, pues las personas no pueden moverse libremente de un territorio a otro porque hay fronteras establecidas, ¿a qué autoridad se le exige el derecho de libertad de tránsito?, ¿a la migratoria?, ¿de cuál país?, ¿en qué nivel?, ¿a cuál funcionario se le imputa la vulneración del derecho?
- Sujetos de derechos: Se alega que los DESC tienen una dimensión colectiva; por lo que no están determinados con claridad los sujetos a proteger, salvo si son personas individuales, es muy difícil exigir su cumplimiento ante instancias jurisdiccionales. En cambio, los DCyP pueden ser de fácil protección y contar con tutelas ante los tribunales, porque el titular es un individuo. Volvemos al argumento falaz.
  Todos los DDHH tienen dimensiones individuales y colectivas en su titularidad, ejercicio y exigibilidad. Una comunidad indígena es un sujeto colectivo y puede ser vulnerado tanto en los derechos políticos como en los sociales, al igual que una persona particular. Plantear lo contrario es una perspectiva coartadora de la realidad social en materia de estos derechos, fundamentada en perspectivas liberales decimonónicas. El individualismo posesivo ha sido superado, incluso, por toda la legislación internacional de los DDHH y desde las realidades y luchas sociales.

Como consecuencia de estas ambigüedades, se les negó a los DESC la categoría de auténticos derechos y se los calificó, dentro del propio constitucionalismo social, como líneas programáticas, principios de políticas legislativas, directrices socioeconómicas y planes focalizados, los cuales se pueden plasmar en las constituciones, pero que fácticamente se traducen en programas sociales que se ejecutan mediante intervenciones discrecionales del Estado.

Estas «políticas sociales» no se dirigieron a todos los sujetos individuales o colectivos, sino a grupos específicos. La búsqueda de protección y satisfacción de los DESC dio pie a la corrupción y clientelismo de los gobiernos de turno. En muchos contextos, los grupos más desfavorecidos se convirtieron en peones de un juego de políticas electorales, para recibir «favores» de personas que manejaban recursos públicos que, por derecho propio, debían ser distribuidos para todos. Ante esta situación, nadie podía exigir a las entidades estatales el cumplimiento de estos derechos por su falta de tutela jurídica (Arango, 2005: 61-6; Courtis y Abramovich, 2006: 19-20).

Las problemáticas aquí expuestas atañen no solo a los DESC, sino a todos los DDHH. Cuando se analiza con detalle el bien que se intenta regular y proteger, todos, sin excepción, se tornan positivos y negativos, con determinados niveles de costos, de indeterminación y vaguedad en sus contenidos y en las conductas que se derivan de él; a la vez, todos pueden dimensionarse como individuales o colectivos. En este sentido, los problemas planteados no son parte de la génesis de los DESC, sino intrínsecos al funcionamiento estructural de todos los DDHH. Se demuestra lo anterior porque estos son un *continuum* en su funcionamiento, por su carácter interdependiente, indivisible e integral (Courtis y Abramovich, 2002: 27; Pisarello, 2007: 77). Donde sí se pueden afirmar diferencias es en la eficacia de los DDHH. Existen contraposiciones entre los derechos socializados y privatizados, entre los que son generalizables y los que se constituyen privilegios excluyentes, ya sean sociales, civiles o políticos.

Constitucionalismo socialista

El modelo político-jurídico socialista, incluyendo el constitucionalista, se fue construyendo desde el triunfo de la Revolución de Octubre, en 1917. Los juristas rusos comenzaron debates sobre la conceptualización de una teoría del Derecho y el Estado socialista, a partir de las interpretaciones doctrinarias del marxismo clásico, y desde ahí, elaborar su modelo constitucional. Su desarrollo se enriqueció con el decursar del sistema en sus diversas etapas, y con las experiencias socialistas de Europa del Este, Asia y América Latina en torno a la posguerra.

Los principios y conceptos básicos fueron compartidos por los sistemas político-jurídicos socialistas y establecidos en sus constituciones. La soviética de 1936 fue uno de los pilares normativos, y la de 1977 (Becerra Ramírez, 1992: 169-216) mostró una base teórica consolidada del paradigma del constitucionalismo socialista, aunque cada país que se encontraba en el proceso de construcción del socialismo hiciera aportes de acuerdo con sus particulares contextos geopolíticos y culturales. Por ejemplo, no es lo mismo el modelo cubano, que el chino o el vietnamita, ni los diferentes momentos de desarrollo del socialismo en cada nación.

Según M. Atienza y J. Ruiz Manero (2004), el sistema jurídico socialista presenta las siguientes etapas —primero, centradas en la URSS y, a partir de la posguerra, en el resto de los países socialistas—: el comunismo en la Primera Guerra Mundial (1917-1920), Nueva Política Económica (1921-1927), período estalinista (1928-1953), etapa posestalinista (1953-1991) y la actual. Esta última referida a los cambios durante el proceso de desintegración del campo socialista europeo.

La doctrina jurídica posestalinista (Burgos Matamoros, 2017; 2019; 2020) es la menos estudiada, a pesar de recoger las concepciones más elaboradas sobre el Derecho y el Estado e, incluso, los debates entre sus autores y sus predecesores. El motivo principal es que se asocia, en muchos aspectos, a las concepciones del reduccionismo o voluntarismo político estalinista. Sin embargo, las doctrinas iusmarxistas posestalinistas, que perduraron hasta la caída del campo socialista, son perspectivas teóricas eclécticas que usan el condicionamiento económico de las relaciones sociales para la conformación de lo jurídico, los análisis dialécticos e históricos y la voluntad política estatal en su concepción del fenómeno jurídico; es decir, presentan influencias de todo lo que se había elaborado previamente. Estas teorías son la base fundamental de las relacionadas con los DDHH, vinculada al modelo teórico constitucional que desarrollaron los países socialistas.

En el constitucionalismo socialista, los DDHH (y los DESC como parte de ellos) no se conciben como límites al poder, sino como ejercicios positivos sociopolíticos de la ciudadanía, y se basan en una conjugación de intereses personales que se supeditan al general o colectivo, no pensado como de un grupo social con intereses específicos, sino como el interés del pueblo como sujeto abstracto (Yavich, 1985; Prieto Valdés y Pérez Hernández, 2000).

La realización de los derechos está sustentada en el desarrollo socioeconómico, donde el eje articulador es la participación política y económica de las personas individuales, encarnadas como sujeto pueblo, que junto al Estado, trabajan en aras del progreso de la sociedad. Esto implica reconocer la igualdad material por encima de la formal, y al ámbito socioeconómico como campo de posibilidades iguales para todas las personas. Esto se explica, porque las personas se hallan en igual situación respecto a los instrumentos y medios de producción, que son propiedad de todo el pueblo, pero que se materializa a través de la propiedad estatal. A la vez, el trabajo personal es la fuente principal de los bienes

materiales indispensables para la vida, retribuido de conformidad con su cantidad y calidad. De esta forma, el sistema debe ofrecer iguales oportunidades a todas las personas para adquirir una profesión u oficio, perfeccionar sus conocimientos y experiencia, y desarrollar sus aptitudes. Por tanto, aunque tengan derechos iguales, dependerá de sus aptitudes y trabajo para determinar su situación en la sociedad (Denisov y Kirichenko, 1959; Vega, 1988).

En este proceso, el papel del Estado es esencial. Se convierte en el centro y mediador institucional entre actores, porque debe favorecer la materialización del ejercicio de los derechos, y, a la vez, controlar su exigibilidad y satisfacción. A diferencia de las teorías constitucionales liberales, el poder estatal es positivo, y no se limita como en el liberalismo, sino que se constituye en la extensión de la actuación cívica positiva (Mednikov, 1988).

Las personas titulares de los derechos se interrelacionan con las expectativas de hacer y no hacer como en el liberalismo, pero también, con los deberes que derivan de ellas para con la sociedad y el Estado, los cuales implican garantías como mecanismos materiales de satisfacción de los derechos, donde el ámbito jurisdiccional no desempeña ningún papel ante la vulneración de alguno.

No existen, entonces, garantías jurisdiccionales de los DDHH, sino políticas, económicas, ideológicas y jurídicas; estas últimas relacionadas con las estructuras legislativas y de administración de justicia, pero no mediante procesos como el amparo o la tutela judicial. Tal concepción se fundamenta en que el pueblo detenta el poder soberano, a la manera rousseauniana, y toma el poder estatal. Entonces, en un proceso revolucionario, el pueblo se subsume dentro del Estado adjudicándose y ejerciendo los derechos. El ente estatal-pueblo es responsable de su cumplimiento, y se supone que nunca ejercería acciones para su vulneración: no iría contra sí mismo.

Los DESC están montados sobre la estructura descrita previamente, pero tienen características específicas y son diferentes a los constitucionalismos liberales y sociales.

Los económicos comprenden los laborales como el trabajo, salario digno, asistencia y seguridad social, descanso y derecho a la propiedad personal. Estos se basan en el concepto de *propiedad personal*, el cual comporta los bienes de uso y consumo personal, que no pueden ser obtenidos por la explotación del trabajo ajeno. Esta propiedad está ligada a bienes que implican la satisfacción de las necesidades básicas materiales y culturales, y son expresión práctica de la realización de los DESC, como la vivienda, el transporte particular, el vestido, el disfrute del ocio en vacaciones, el acceso a servicios culturales, etc.; en fin, todo tipo de medios personales para la vida cotidiana (Grigorian y Dolgolopov, 1975). El resto de los DESC se protegió en las constituciones y son de acceso universal y gratuito, entre ellos: salud —en cuanto a la prevención y atención—, condiciones de vida salubres, acceso a deportes y disfrutar del ocio —*espacios de recreación* es la denominación normativa—; y los derechos culturales que abarcan educación, cultura, ciencia y todas las formas del arte en cuanto acceso, disfrute y participación.

Durante el socialismo real en la Unión Soviética, Europa del Este y otros países, hubo una realización plena de los DESC, con acceso y calidad. Aunque siempre según la disposición de recursos económicos, fueron una prioridad política y un pilar de su razón de ser y funcionamiento. En la medida en que estos países se insertaron en los mecanismos del capitalismo global, esto ha mermado consecuentemente.

A pesar de los reconocidos esfuerzos y logros sociales de los sistemas socialistas, hay que plantear las limitaciones de este modelo constitucional sobre los DDHH en su totalidad, las cuales afectaron su ejercicio, incluyendo los DESC, en cualquiera de estas sociedades.

El diseño de los DDHH en el constitucionalismo socialista es esencialista, circular, evolucionista, y no refleja las contradicciones sociales; pretende ser espejo de una sociedad idílica que no existió ni existe en la actualidad. Si bien los conceptos jurídicos y su expresión normativa expresan un sentido deontológico, las concepciones mencionadas tienen un sentido mayormente idealista y olvidan una de las características principales del marxismo: la historicidad dialéctica, base doctrinal de las teorías vinculadas al socialismo.

En esta concepción no se pensaron los procesos materiales desde sus propios antagonismos y tensiones, sino a partir de un movimiento social que respondería siempre de manera positiva al devenir de la sociedad, sin analizar la realidad social de sujetos personales, colectivos, el pueblo y el país en su propio devenir sociohistórico. ¿Qué pasaba si existían contradicciones entre algunos de los sujetos titulares de derechos: una persona contra otra, un grupo frente a otro, o respecto al Estado? Esto no se comprendía porque se partía del esencialismo positivo de los sujetos, que cumplirían irremediablemente sus funciones de manera efectiva y consciente, sin ninguna contingencia.

La base de las nociones de los derechos es el determinismo economicista. Si se toma como eje que el proceso económico siempre otorga las condiciones para avanzar social, política y culturalmente, sin tener en cuenta otras complejidades sociales, se genera un pacto de ciegos ante las tensiones fuera del ámbito

económico que, incluso, condicionan el ejercicio pleno de los propios derechos.

Si solo las relaciones económicas generan estados de opresión, ¿desaparece, al eliminarlas, la dominación y se construye así una sociedad justa y desarrollada? ¿Se arriba desde ahí, artificialmente, a la homogeneidad social, donde todos, unidos en lo político y social, pueden lograr los fines planteados? No. La dominación no solo pasa por factores exclusivamente económicos, sino que existen rasgos sociales y culturales estructurales, arraigados en la conciencia colectiva, que implican opresiones diversas. La minusvaloración por color de la piel, sexo, orientación e identidad sexual u origen étnico, en muchas ocasiones va de la mano con la condición socioeconómica, generando un círculo opresor. Las personas intentan salir de ese estado económico, pero sus propias características socioculturales no les permiten tener las mismas condiciones que el resto de los grupos históricamente dominantes —blancos, hombres, heteronormativos— para la satisfacción de sus derechos.

En este sentido, la homogeneidad es reduccionista e incide en lo económico, social y político, propiciando procesos de opresión que no pueden solventarse desde estas concepciones. Esta visión homohegemónica se fundamenta concibiendo las clases antagónicas como dicotómicas y abstractas, no como ámbitos plurales en lo interno y de unas respecto a otras, pues la dominación es de clase, pero también es de género y por origen étnico. La economía es condición de posibilidad para la opresión, pero no la única determinante, como plantea la teoría marxista.

Además, si la economía falla en la realización de los DESC como la alimentación, vivienda y transporte, ¿a quién responsabilizar y exigir la resolución de tales problemas y vulneraciones? Si el Estado es el centro de control de todo el proceso de satisfacción y sus garantías, cualquier exigencia se haría mediante sus propias instituciones no jurisdiccionales: los mismos que ejecutan políticas públicas en la administración estatal o del ámbito político, volviéndose un círculo alrededor de la ineficiencia, inefectividad e, incluso, la arbitrariedad.

Para culminar, todo el diseño tiene su fin en el proceso de garantías al no regular instrumentos jurisdiccionales para que las personas puedan protegerse por incumplimientos de sus derechos. Las garantías económicas, políticas y sociales son el espejo del esencialismo, la circularidad del proceso social, el determinismo economicista con carácter evolucionista y el estadocentrismo para el funcionamiento social que manifiesta voluntarismo y dominación, desde las estructuras de poder.

Los Estados en su devenir histórico —como toda institución— se fetichizan en el ejercicio del poder, porque se vuelven autorreferenciales. En ese sentido, pensar que nunca quebrantan derechos es una concepción idealista, alejada de la materialidad social, de sus antagonismos y, por ello, traen consigo la vulnerabilidad de personas y grupos dentro de los propios sistemas jurídicos políticos.

Notas

1. El concepto de modernidad temprana, en la historiografía latinoamericana, se concibe como un período histórico iniciado en 1492, con la colonización del continente americano, que trajo consigo el proceso de acumulación originaria del capital y las consecuentes dominaciones políticas, económicas, culturales, religiosas e ideológicas. La modernidad madura, por su parte, se relaciona con la revolución industrial y las luchas antiabsolutistas producidas en Inglaterra en el siglo XVII, y en Francia y los Estados Unidos en el XVIII, y que se vincula con el proceso económico y político colonial.

2. Término utilizado para el mercado medieval europeo en su funcionamiento, relaciones, usos y costumbres, contratos, términos y condiciones, que eran ajenos a las normativas jurídicas establecidas por los Estados feudales. En el texto se emplea este concepto como analogía para explicar la función supeditada del Estado-nación del siglo XIX frente a las relaciones comerciales y mercantiles del capitalismo industrial de la época. Hoy se plantea que el ejercicio del comercio internacional se realiza mediante una nueva *lex mercatoria,* diferente a las regulaciones estatales.

3. La responsabilidad subjetiva hace referencia a la establecida entre sujetos en igualdad de condiciones, que asumen las consecuencias de los actos que realizan, en tanto tienen capacidad de discernir entre lo legal y lo que no lo es, y entre lo que debe ser y lo que no. Está ligada a la capacidad legal de obrar; por lo que una persona con discapacidad mental puede no ser sujeta a ella. Además, se vincula con la culpabilidad por actuación negligente, irresponsable o con intencionalidad para causar un daño y es objeto de indemnización. (Boffi Boggero, 1973). La responsabilidad objetiva, por el contrario, se fundamenta en el hecho que produjo el daño, sin importar si fue cometido por negligencia o dolo. No es relevante la conducta sino el suceso, por tanto, debe haber indemnización. Esta responsabilidad surge en el siglo XIX, debido a demandas laborales, ya que las máquinas provocaban accidentes a los trabajadores y estos no podían alegar que el artificio tenía capacidad jurídica ni conciencia de lo que había realizado, ni, por ende, su culpabilidad.

4. Para conocer más sobre el Estado social de derecho y el constitucionalismo social, véase Ferrajoli (2003) y Pisarello (2003). Para una visión actualizada sobre el tema en América Latina, véase Nogueras (2010).

5. Aunque la Constitución soviética es considerada la primera de carácter socialista, la doctrina jurídica la incluye entre las precursoras del constitucionalismo social por sus puntos comunes con el modelo constitucional, y porque el sistema socialista apenas estaba enunciado, política y jurídicamente, en ese momento.

Referencias

Alemania. Constitución del Imperio (Reich) Alemán (1919), de 11 de agosto. Disponible en <https://goo.su/M8QbpO> [consulta: 26 marzo 2023].

Arango, R. (2005) *El concepto de derechos sociales fundamentales.* Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Atienza, M. y Ruiz Manero, J. (2004) *Marxismo y filosofía del derecho.* Ciudad de México: Editorial Coyoacán.

Becerra Ramírez, M. (1992) *El factor jurídico en la transformación de la Unicón Soviética a la Comunidad de Estados Independientes.* Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), UNAM.

Boffi Boggero, L. (1973) «Elementos de la llamada responsabilidad subjetiva». *Revista Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana*, n. 5, 88-131. Disponible en <https://goo.su/imx20> [consulta: 26 marzo 2023].

Burgos Matamoros, M. (2017) «Los derechos humanos en el iusmarxismo. Análisis crítico para una revisión de las concepciones teóricas de los derechos humanos en Cuba». En: *Nueve razones para (des)confiar de los derechos humanos.* Estévez, A. y Vázquez, D. (coords.), Ciudad de México: FLACSO/CISAN/UNAM.

_____ (2019) «De simplismos reduccionistas y relevancias: análisis conceptual de los marxismos jurídicos ortodoxos para las teorías jurídicas críticas en la actualidad». En: *Derecho, conflicto social y emancipación. Entre la depresión y la esperanza.* Benente, M. y Navas Alvear, M. (comps.), Universidad de Nariño.

_____ (2020) «Tensiones y porosidades en las perspectivas críticas marxistas del derecho en América Latina». En: *Tensiones y porosidades. Fronteras que resignifican la vida.* Rodríguez, R. y Arteaga, E. (coords.), Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)/Universidad Ítaca, Ciudad de México.

Courtis, C. y Abramovich, V. (2002) *Los derechos sociales como derechos exigibles*. Madrid: Trotta.

_____ (2006) *Los derechos sociales en el debate democrático. Fundación Sindical de Estudios*. Madrid: Editorial Bomarzo.

De Cabo, C. (1993) *Teoría histórica del Estado y del Derecho Constitucional*. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU), v. II.

Doménech, A. (2004) *El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista*. Barcelona: Editorial Crítica.

Denisov, A. I. y Kirichenko, M. (1959) *Derecho constitucional soviético*. Moscú: Ediciones en Lenguas Extranjeras.

Ferrajoli, L. (1999) *Derechos y sus garantías. La ley del más débil*. Ibídem.

_____ (2003) «Estado social y Estado de derecho». En: *Derechos sociales. Instrucciones de uso*. Courtis, C. *et al.* (comps.), Ciudad de México: Fontamara.

Fioravanti, M. (1996) *Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las Constituciones.* Madrid: Trotta.

Grigorian, L. y Dolgopolov, V. (1975) *Fundamentos del derecho estatal soviético*. La Habana: Orbe.

Marx, C. (1980) *Crítica al Programa de Gotha.* Moscú: Progreso.

Mednikov, V. (1988) *Teoría, Estado y Derecho URSS*. Ibídem.

México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917). Disponible en <https://goo.su/hSD6Uw> [consulta: 26 marzo 2023].

Nogueras, A. (2010) *Los derechos sociales en las nuevas constituciones latinoamericanas.* Valencia: Instituto de Estudios Políticos (IEP)/ Universidad Central de Venezuela/Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS)/Editorial Tirant lo Blanch.

Pisarello, G. (2003) «El Estado Constitucional como Estado Social: mejores garantías, más democracia». En: *Derechos sociales. Instrucciones de uso.* Ob. cit.

_____ (2007) *Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción.* Madrid: Trotta.

_____ (2011) *Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático.* Ibídem.

Robespierre, M. (2005) *Por la felicidad y la libertad. Discursos.* Barcelona: El Viejo Topo.

Prieto Valdés, M. y Pérez Hernández, L. (comps.) (2000) *Temas de derecho constitucional cubano.* La Habana: Félix Varela.

Rusia. Constitución de la República Socialista Federativa de los Consejos (Soviets) de Rusia (1918). Disponible en <https://goo.su/DlkaJL> [consulta: 26 marzo 2023].

_____ Declaración rusa de derechos del pueblo trabajador y explotado (1918). Disponible en <https://goo.su/dwGo> [consulta: 26 marzo 2023].

URSS. Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1936). Disponible en <https://goo.su/7rrCB> [consulta: 26 marzo 2023].

Vega, J. (1988) *Derecho constitucional revolucionario en Cuba*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

Yavich, L. S. (1985) *Teoría general del derecho.* Ciudad de México: Nuestro Tiempo.

©TEMAS, 2023

Transición en América Latina en términos de bienestar (1950-2000)

Amílcar E. Challú
Profesor. Departamento de Historia,
Universidad Pública en Bowling Green, Ohio.
Sergio Silva Castañeda
Investigador. Banco de México.

En diciembre de 1983, durante su discurso de toma de posesión como presidente de Argentina, Raúl Alfonsín (2018) repitió un lema de su campaña presidencial que condensó de manera memorable las expectativas de la transición democrática: «Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura». La transición democrática en aquella nación fue parte de una regional hacia regímenes democráticos electorales. Tanto en Argentina como en buena parte de América Latina, coincidió con un importante cambio de paradigma económico: la irrupción de lo que hemos llamado, en términos muy generales, neoliberalismo. No cabe duda de que ese ciclo de coincidencia entre democratización y neoliberalismo está llegando a su fin, y va siendo el momento de analizarlo. ¿Cómo evaluar lo que significó, para la mayoría de la población latinoamericana, esta aparente contradicción entre un fortalecimiento de la democracia electoral y que, al mismo tiempo, legitimara un programa económico regresivo?

Esta es una pregunta que resulta difícil, e incluso engañoso, tratar de responder con las herramientas tradicionales del análisis económico, pues en la actualidad es complejo sostener que el bienestar de la población es simplemente producto del ingreso, en particular en sociedades tan desiguales como las latinoamericanas. En los últimos años, varios pensadores han estado tratando de entender mejor esta relación entre cambios políticos y bienestar, en términos más amplios. Por ejemplo, Amartya Sen (1999a; b) señala que ninguna hambruna importante

ha surgido en un país independiente y democrático, con una prensa relativamente libre, pues, sin contar el nivel de ingresos, es fácil de prevenir; y un gobierno democrático, que enfrenta una prensa libre y a partidos de oposición, con independencia de su ideología y recursos, tiene incentivos para intentar evitarla, o al menos para no insistir en políticas fallidas durante un período extenso. El propio autor señala que este mecanismo, que permite que un sistema democrático tenga un efecto sobre el bienestar, tiene límites importantes, pues por esta vía no necesariamente se reducen los niveles de desnutrición crónica. Detrás de esta evaluación se encuentra un concepto de bienestar multidimensional que incluye parámetros como la salud o la educación, que van más allá del ingreso (Stiglitz *et al*., 2009).

Siguiendo estos antecedentes, varios académicos se han abocado a la tarea de entender cómo se relacionan estos dos procesos. D. Brown y W. Hunter (2004) estudiaron el efecto de la democratización sobre la inversión pública en educación; y concluyeron que la democracia, a través de mecanismos aun imperfectos, incentiva una mayor inversión en educación en general, y aumenta la proporción del gasto educativo que se destina a la enseñanza primaria. Por su parte, James W. McGuire (2010) ofrece una versión optimista sobre el reciente desarrollo humano de América Latina, desde una perspectiva que integra el enfoque de economía política, el estudio de casos, y un concepto sobre el bienestar que utiliza la mortalidad infantil como métrica central. McGuire estudia si su reducción es afectada solo por el nivel de ingresos o si también tiene un efecto la forma en cómo una sociedad decide cuántos recursos dirigir hacia la provisión de servicios sociales básicos. Igualmente, muestra que la disminución de la mortalidad infantil en América Latina excede lo esperable, dada la trayectoria del crecimiento económico. Para él, la democratización ha tenido efectos concretos en los niveles de vida de la población latinoamericana más vulnerable, porque cambió los mecanismos de decisión sobre cómo se distribuyen los recursos públicos. Peter Smith (2005) coincide con esta visión positiva de la democracia en la salud, pero al mismo tiempo señala su nulo beneficio en términos de reducir la pobreza o fomentar el crecimiento económico (233). Finalmente, Christina Ewig (2016) encuentra convergencias, en términos de equidad, en el acceso a servicios médicos en Brasil, Chile y Colombia. Esta autora explica que el proceso es atribuible a la democratización y no, como podría haberse pensado, a la llegada de gobiernos de izquierda a la región. Como consecuencia de ella, el mecanismo democrático aquí resulta de la alianza entre tecnócratas y políticos.

Una herramienta novedosa y que podría ayudarnos a estudiar los efectos de esa doble transición sobre la población latinoamericana es el uso de mediciones corporales (antropometría) que se relacionan con el bienestar biológico. Recientemente, Alberto Batinti y Joan Costa-Font (2022) han encontrado evidencias de que la democratización en ciertos países europeos está relacionada con aumentos en la estatura promedio de los hombres, aunque no así de las mujeres. Estos investigadores sostienen que la clave para explicar esto estriba en la calidad de la democracia durante la primera infancia. ¿Cómo se verían estos resultados en el contexto latinoamericano?

La antropometría como una ventana al estudio histórico del bienestar

El nivel de bienestar biológico de una población supone un dato importante para el estudio multidimensional de su calidad de vida, y está íntimamente ligado a indicadores más tradicionales como el ingreso, la ocurrencia de enfermedades y la mortalidad. Sin embargo, el acceso a estos indicadores es extremadamente limitado de manera consistente. Por este motivo, indicadores de bienestar biológico, como la estatura adulta promedio y el peso, pueden aportar una perspectiva para estudios de largo plazo. La primera, en particular, sirve para medir la morbilidad y el estado nutricional de una población.

La estatura adulta es el resultado de un proceso biológico de crecimiento acumulado en los primeros años de vida. Si el consumo de nutrientes excede el gasto energético en el metabolismo basal, la actividad física y la recuperación de enfermedades, aquellos contribuyen a un desarrollo corporal más acelerado del niño y el adolescente. Dado que la plasticidad del cuerpo es muy elevada, los tres años iniciales determinan gran parte del potencial de crecimiento de un individuo. En la adolescencia se produce el llamado «estirón», que puede compensar, de manera parcial, las deficiencias de años anteriores. Entre las niñas, este se reduce, en promedio, a partir de los quince años, hasta que la estatura alcanza su nivel adulto alrededor de los veinte.

El interés por el desarrollo humano suscitado a partir de los años 80 ha contribuido a producir bases de datos que sirven como materia prima para este tipo de análisis. En particular, distintas oficinas de estadísticas y salud pública de toda la región han realizado encuestas que miden la salud, la nutrición y otras medidas multidimensionales de bienestar, siguiendo técnicas de alta calidad; lo que hizo posible construir una base de datos con información de estaturas de mujeres adultas (entre 15 y 50 años) para la segunda mitad del siglo XX (Challú y Silva Castañeda, 2016). Para esta contribución, agregamos nuevas encuestas, lo que permitió expandir la cantidad de países y cubrir los primeros años del siglo XXI. En total

utilizamos 49 encuestas nacionales cubriendo trece países con distintos procesos de desarrollo económico y político. Por cada país utilizamos al menos dos encuestas. Los datos de estatura se promediaron por cohortes de nacimiento quinquenales, corrigiendo el efecto de edades preadultas en cada país de la muestra, así como otros sesgos de las encuestas.[1]

La utilidad de este análisis antropométrico radica en que proporciona una medida objetiva y confiable del bienestar biológico de una población. Brinda una medida que resulta de procesos acumulados durante varios años y que es relativamente abundante en períodos históricos cuando no se suele encontrar otros indicadores de bienestar. Además, al utilizar datos provenientes de diversas encuestas, podemos obtener un panorama más completo y representativo de la evolución de la estatura promedio en la región latinoamericana.

Tendencias antropométricas en América Latina (1950-2000)

¿Cómo fue el desempeño de América Latina en materia de bienestar físico en la segunda mitad del siglo pasado? De acuerdo con los datos sumarizados en la tabla 1, la estatura de las mujeres latinoamericanas mantuvo un crecimiento sostenido. En cada década, sumó 6 mm en promedio. En ningún momento hubo, a nivel regional, un retroceso. Pese a la constancia, el ritmo de crecimiento no es impresionante. Si comparamos los resultados de una muestra de todo el mundo J. Bentham *et al*, (2016) con los que obtuvimos Amílcar E. Challú y Sergio Silva Castañeda (2016) para América Latina, encontramos que las mujeres latinoamericanas aumentaron su estatura promedio 21 mm entre 1955 y 1994, contra 10 mm entre 1951 y 1996 para el mundo entero; sin embargo, en el período de mayor crecimiento económico de la región, la comparación con otras partes del mundo parece menos afortunada. Entre 1950 y 1979, dicho promedio se mantuvo considerablemente por debajo del de los países desarrollados, y muy inferior al de los del sur de Europa. España, Grecia, Italia, y Portugal registraron un crecimiento de casi 18 mm por década, frente a 6 mm en nuestra muestra latinoamericana (Deaton, 2007; Komlos y Lauderdale, 2007; Bozzoli *et al*., 2009; Challú y Silva Castañeda, 2016). Si bien, en términos comparativos, el crecimiento latinoamericano no es despreciable, hay que reconocer también sus limitaciones frente a otras experiencias con un fuerte proceso de transición democrática y crecimiento económico como estos del sur de Europa.

Por otra parte, el aumento de la estatura promedio en el continente ha sido bastante disparejo. Mientras en algunos países —Bolivia, Chile, El Salvador y México— estuvo cercano a 10 mm por década, en contraste, en Argentina, entre los años 50 y los 90, se estancó en 1 615 mm, y en Haití y Nicaragua progresó muy poco. En medio quedaron Brasil, Guatemala, Honduras, Perú y República Dominicana, con un crecimiento cercano al promedio regional.

Tabla 1. *Estatura de mujeres adultas por país y quinquenio* (mm).*

País	1950	1960	1970	1980	1990	2000	Cambio promedio por década
Argentina		1 620	1 616	1 615	1 614	1 614	-1,3
Bolivia	1 509	1 510	1 515	1 528	1 541	1 546	8,5
Brasil	1 571	1 580	1 587	1 598	1 608	1 597	7,3
Chile	1 548	1 562	1 568	1 580	1 585	1 592	9,0
Colombia	1 557	1 566	1 567	1 578	1 585		8,2
El Salvador		1 506	1 521	1 525	1 548		12,3
Guatemala	1 479	1 483	1 487	1 488	1 494	1 500	4,1
Haití	1 579	1 588	1 587	1 592	1 591	1 590	1,3
Honduras	1 529	1 532	1 535	1 537	1 548		4,7
México	1 527	1 534	1 540	1 551	1 564	1 570	9, 4
Nicaragua	1 535	1 537	1 537	1 542	1 544		2,4
Perú	1 505	1 512	1 516	1 521	1 529	1 542	6,7
República Dominicana	1 568	1 575	1 570	1 578	1 588		4,5
Total-13**		1 547	1 550	1 556	1 564		6,0
Total-7***	1 531	1 538	1 543	1 551	1 559	1 562	6,6

* Las estaturas están estandarizadas para las edades de 21 a 45 años; con los microdatos se calculó para cada país el efecto de edades preadultas (15 a 21) y se sustrajo el efecto para calcular los promedios quinquenales.
** Promedio de todos los países estudiados, pero solo para los años en los que hay datos disponibles.
*** Promedio de los siete países con datos consistentes a lo largo del período.

En regímenes en democracia la estatura es menos sensible a cambios en el crecimiento económico y existe un beneficio universal en términos de bienestar biológico que no es dependiente de la economía. En cambio, en regímenes autoritarios se necesita un mayor crecimiento económico para lograr el mismo resultado.

Los casos de estancamiento merecen una mención aparte en tanto reflejan importantes cambios en el balance regional. Hacia mediados del siglo xx, entre los países centroamericanos, incluyendo a México, de los que tenemos datos, Nicaragua tenía la estatura promedio más alta por un margen considerable. Sin embargo, cuatro décadas después todos los países de la muestra se acercaron, en mayor o menor medida, al nicaragüense, excepto México que rebasó considerablemente al anterior líder regional. Por su parte, Haití siempre ha tenido las cotas más altas de nuestra muestra, aun así, sorprende el muy limitado crecimiento en la segunda mitad del siglo pasado. Argentina, hasta el día de hoy, tiene la estatura promedio más alta de la región con 1 615 mm; sin embargo, no ha crecido en todo el período. Poblaciones como las de Chile y Brasil ahora se encuentran a menos de 20 mm del promedio argentino, mientras que en los años 50 eran 40 o 60 mm más bajas.

Como es de esperarse, los patrones de crecimiento de la estatura promedio en América Latina van de la mano con el desempeño económico de estos países. En este sentido destacan, en términos de PIB per cápita, Brasil, Chile y México, que tendieron a crecer más que el promedio en altura. Aunque, ciertamente, la correlación está lejos de ser perfecta, República Dominicana tuvo un crecimiento económico comparable al de Colombia y, sin embargo, la talla de las mujeres de ese país aumentó mucho menos. Bolivia es otro caso atípico: el bienestar físico se incrementó más de lo que se esperaba, de acuerdo con su desempeño económico.

Estas diferencias, no explicadas por el crecimiento económico nos obligan a pensar en otras variables que podrían estar afectando el bienestar económico latinoamericano. Dada la historia de la doble transición de los años 80, y lo que sugiere buena parte de la literatura sobre bienestar, pareciera que una posible explicación podría estar en la dinámica política de cada país.

Relación entre crecimiento económico y régimen político

A través de un análisis estadístico de regresión de panel,[2] podemos arrojar luz al problema de si la transición democrática trajo mejoras al bienestar biológico de la población. La variable a explicar es la estatura femenina adulta, y la unidad de análisis es el quinquenio de nacimiento por cada país. Las variables explicativas son el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo (Bolt y Van Zanden, 2020) y un indicador de democracia elaborado a partir del índice Polity IV (Marshall *et al*., 2017).

Para capturar la transición democrática, construimos una variable binaria que adquiere un valor 1 en una cohorte de nacimiento si el índice Polity IV iguala o supera los siete puntos en el año corriente y los veinte siguientes. Un valor de 7 es consistente con elecciones nacionales abiertas y derechos básicos. De este modo, se considera que las cohortes de brasileños que nacieron en el quinquenio 1985-1989 vivieron bajo regímenes democráticos; lo mismo para las chilenas nacidas a partir de 1990-1994; y solo 2000-2004 para el caso de las mexicanas. Estos tres ejemplos capturan casos de transición relativamente gradual, donde el punto de cambio es una elección presidencial abierta o un cambio constitucional. El único país que bajo esta métrica se asume como democrático con anterioridad a los años 80 es Colombia, al que se le considera con condiciones democráticas duraderas a partir de 1960-1964. En el otro extremo, ninguna cohorte nacida en Haití u Honduras está considerada como que vivió en un régimen democrático prolongado.

Al analizar los resultados del modelo preferido de regresión de panel,[3] el ingreso y la democracia tienen efectos aislados e interactuados (uno multiplica al otro). Detengámonos en lo que representan estos coeficientes. El modelo predice que, en ausencia de democracia, por cada mil dólares de ingreso, se puede sumar 3,18 mm de estatura al valor de base. En un régimen democrático, solo se suma 1,17 mm por cada mil dólares de ingreso, pero se le agrega un «bono» de 17,7 mm que es independiente del nivel de ingreso. En otras palabras: en regímenes en democracia la estatura es menos sensible a cambios en el crecimiento económico y existe un beneficio universal en términos de bienestar biológico (el «bono») que no es dependiente de la economía. En cambio, en regímenes autoritarios se necesita un mayor crecimiento económico para lograr el mismo resultado. Estos hallazgos pueden ayudar a entender por qué las estaturas continúan aumentando durante períodos de estancamiento económico y democratización en la región.

Tabla 2. *Efectos de ingreso y democracia en estaturas femeninas adultas* (mm).*

PIB (miles de dólares de 1990)	3,18
Régimen democrático	17,69
Interacción PIB/democracia	-2,01
Tendencia	0,31
Constante	913,23
R-cuadrada total	0,17
N (tamaño de la muestra)	153

* Todos los coeficientes son estadísticamente significativos a 1%. Este modelo utiliza efectos fijos.

En el marco de un análisis de regresión de panel, una herramienta que ilumina cómo ciertas variables influyen en otras a lo largo del tiempo y entre diferentes grupos, es crucial aclarar algunos conceptos claves. Las *variables independientes* son aquellas que se consideran posibles motores de cambio, mientras que la *dependiente* es la que deseamos comprender más profundamente, buscando desentrañar su comportamiento. En este caso, las independientes son el PIB y el tipo de régimen democrático, mientras que la dependiente es la estatura promedio de la población de cada uno de los países incluidos en el análisis. En este modelo en particular, los efectos de las variables independientes sobre la dependiente están medidos en milímetros.

Como es práctica común, cuando se utilizan estas herramientas cuantitativas en las ciencias sociales en general, hay que sumar otros elementos esenciales para darle sentido al estudio.

Una *variable de tendencia* se incorpora para calcular cambios que afectan a todas las unidades en estudio. La *constante* brinda un punto de partida al indicar el valor esperado de la variable dependiente cuando todas las independientes son nulas. Para evaluar la calidad del modelo, entra en juego la *R-cuadrada,* una métrica que dice qué parte de la variabilidad en la variable dependiente es aclarada por las independientes.

Es importante notar que la *variable de tendencia* y la *constante* comparten unidades con los coeficientes de las variables independientes, simplificando su interpretación. Por otro lado, *R-cuadrada* no tiene unidades, pues refleja relaciones porcentuales. Aunque no se expresa en valores concretos, ofrece una perspectiva esencial para medir la adecuación del modelo.

El ajuste a este modelo general varía de acuerdo con los países. Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, México y Perú son donde nuestro modelo explica más de 90% de las variaciones de las estaturas. Aun así, las observaciones ilustran dinámicas contrastantes. En Chile, el contexto más amplio, más que el régimen político específico, es más relevante. McGuire (2010) argumentó de modo convincente que el autoritarismo del período de Augusto Pinochet se montó sobre una estructura estatal con capacidades crecientes, y expectativas de la población en cuanto a salud pública; tal vez lo que resulta cuestionable entonces es la historia que el pinochetismo quiso contar de sí mismo en términos de ruptura con el pasado y desmantelamiento del Estado. En Guatemala, se evidencia claramente cómo la falta de democracia y la violencia estructural afectaron negativamente el bienestar físico de la población. Durante las décadas de los 70 y los 80, caracterizadas por la represión estatal y la violencia política y étnica, las estaturas se vieron perjudicadas. Sin embargo, en los últimos quince años del siglo xx, con la transición hacia la democracia, comenzaron a mejorar, reflejando los beneficios de un entorno político más inclusivo. En el caso de Bolivia, se observa una correlación clara entre democracia y bienestar biológico de la población. Durante el período de gobiernos conservadores y dictaduras militares, la estatura promedio estuvo por debajo de lo predicho por el ingreso. Sin embargo, a partir de la década de los 80, con la consolidación de un sistema democrático y la participación ciudadana en la implementación de centros de salud materno-infantil, se observó un progreso notable en las estaturas.

En Haití, Nicaragua y República Dominicana nuestro modelo explica entre 50% y 70% de las variaciones de estatura; mientras que en Argentina y El Salvador menos de 50%. De estos, Haití merece una mención especial, ya que ninguna de las variables analizadas parece tener un impacto en las estaturas observadas. A lo largo de su historia, el país caribeño ha visto una destrucción de las capacidades del Estado, lo que tal vez ayude a entender la ausencia de una mejoría significativa en la estatura de su población.

Conclusiones

El estado de la democracia en América Latina es ciertamente paradójico. Por un lado, existe una continuidad sostenida de regímenes electorales competitivos; por otro, a cuarenta o treinta años desde la transición, siguen mostrando significativas falencias en términos de progreso económico, igualdad y aumento de la calidad de vida. La brecha entre expectativas y resultados está detrás de cambios importantes en los regímenes —la «marea rosa» (triunfo de partidos de izquierda)—, quiebres de partidos tradicionales y surgimiento de liderazgos autoritarios (por ejemplo, el gobierno de Jair Bolsonaro).

En este contexto, hemos indagado si existe una relación entre estado nutricional, medido a través de la estatura adulta, las características del régimen político,

y el crecimiento económico. El efecto que encontramos en este último sobre la estatura no es sorprendente, aunque ciertamente desafía las conclusiones de algunos trabajos (Deaton, 2007). Lo más novedoso es que, en líneas generales, existe una relación medible, sin bien algo tenue, entre regímenes democráticos y estaturas poblacionales. En particular, respecto a esta última relación, la transición puede explicar los alrededor de 18 mm más en el cambio de la estatura, lo que no es poco, si tenemos en cuenta su progreso promedial en la región, de 30 mm, entre 1950 y 2000. Aún más, en esos regímenes el bienestar biológico es menos dependiente del crecimiento económico, mientras que en los autoritarios es la principal variable detrás de los cambios en el bienestar.

¿Con la democracia se come y se cura? En términos generales, sí: con la democracia mejoró la nutrición y la salud en mayor medida que lo que se pudiera prever a través del desarrollo económico o mejoras seculares. Pero esta relación no es homogénea y de universal aplicación. El contexto más amplio de la economía política que se observa en Chile, la destrucción de capacidades estatales en Haití, y el siempre paradójico caso argentino ilustran los límites de nuestra respuesta.

Notas

1. Las fuentes se citan en Challú y Silva Castañeda (2023). En particular, una minoría de encuestas (como las de factores de riesgo en Argentina) utilizan estaturas autorreportadas. El uso de múltiples encuestas en cada cohorte permite corregir el sesgo introducido por estas diferentes modalidades de medición.

2. La regresión de panel es un método estadístico utilizado para analizar datos longitudinales, donde se combinan datos de diferentes unidades individuales a lo largo del tiempo, permitiendo capturar tanto las variaciones entre las unidades como las de dentro de cada unidad.

3. Hemos elegido este modelo por ser una buena síntesis de la correlación. Los resultados se sostienen bajo distintas especificaciones: con o sin efectos fijos, en valores absolutos o en primeras diferencias, con o sin tendencia o usando estatura rezagada.

Referencias

Alfonsín, R. (2018) *Alfonsín por Alfonsín: discursos presidenciales ante la Asamblea legislativa*. Universidad de Buenos Aires.

Batinti, A. y Costa-Font, J. (2022) «Does democracy make taller men? Cross-country European evidence». *Economics & Human Biology*, v. 45, abril. Disponible en <https://acortar.link/tKs4iU> [consulta: 6 julio 2023].

Bentham, J. *et al*. (2016) «A century of trends in adult human height». *Elife*, v. 5, 26 de julio. Disponible en <https://acortar.link/FBxHH6> [consulta: 10 julio 2023].

Bolt, J. y Van Zanden, J. L. (2020) *Maddiso Project*. Working Paper WP-15, octubre. Disponible en <https://acortar.link/o2wEkN> [consulta: 6 julio 2023].

Bozzoli, C., Deaton, A., y Quintana Domeque, C. (2009) «Adult Height and Childhood Disease». *Demography*, v. 46, n. 46, 647-69. Disponible en <https://acortar.link/MClgNn> [consulta: 6 julio 2023].

Brown, D. y Hunter, W. (2004) «Democracy and Human Capital Formation: Education Spending in Latin America, 1980 to 1997». *Comparative Political Studies*, v. 37, n. 7, 842-64.

Challú, A. y Silva Castañeda, S. (2016) «Towards an anthropometric history of Latin America in the second half of the twentieth century». *Economics and Human Biology*, v. 23, 226-34.

_____ (2023) «Expanded dataset of female adult heights in Latin America, 1950-2000». Disponible en <https://blogs.bgsu.edu/achallu> [consulta: 6 julio 2023].

Deaton, A. (2007) «Height, health, and development». *Proc. Natl. Acad. of Sci*., v. 104, n. 33. Disponible en <https://acortar.link/X8kTZC> [consulta: 6 julio 2023].

Ewig, C. (2016) «Reform and Electoral Competition: Convergence Towards Equity in Latin American Health Sectors». *Comparative Political Studies*, v. 49, n. 2, 184-218.

Komlos, J. y Lauderdale, B. (2007) «Underperformance in Affluence: the Remarkable Relative Decline in U.S. Heights in the Second Half of the 20th Century». *Soc. Sci. Q*., v. 88, n. 2, 283-305. Disponible en <https://acortar.link/X8kTZC> [consulta: 6 julio 2023].

Marshall, M. G., Gurr, T. R. y Jaggers, K. (2017) *Polity IV Project*. Center for Systemic Peace. Disponible en <https://acortar.link/Z8fLRz> [consulta: 6 julio 2023].

McGuire, J. W. (2010) *Wealth, Health, and Democracy in East Asia and Latin America*. Nueva York: Cambridge University Press.

Sen, A. (1999a) «Democracy as a Universal Value». *Journal of Democracy*, v. 10, n. 3, 3-17.

_____ (1999b) *Development as Freedom*. Nueva York: Knopf.

Smith, P. H. (2005) *Democracy in Latin America: Political Change in Comparative Perspective*. Nueva York: Oxford University Press.

Stiglitz, J., Sen, A. y Fitoussi, J. P. (2009) *Report of the commission on the measurement of economic performance and social progress (CMEPSP)*. Disponible en <https://acortar.link/CLXStj> [consulta: 25 junio 2023].

©TEMAS, 2023

La paradoja estadounidense: derechos sociales e individuales

Carlos L. Garrido
Filósofo y editor. Instituto Midwestern Marx,
Estados Unidos.

En su Declaración de Independencia (1776) de la corona inglesa, los Estados Unidos se fundan bajo los valores —proclamados como derechos inalienables— de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Este documento histórico afirma que cuando un gobierno no protege estos derechos y oprime continuamente a su pueblo, este tiene no solo la potestad, sino el *deber*, de alterarlo o abolirlo. Ningún Estado en la historia del mundo moderno se había fundado sobre principios tan radicales. Un siglo y medio después, en 1945, Ho Chi Minh (1967) citaría estos ideales en la declaración vietnamita de independencia de Francia y Japón: «Todos los pueblos de la tierra son iguales por nacimiento, todos los pueblos tienen derecho a vivir, a ser felices y libres» (141). Luego, casi una década posterior, en 1953, Fidel Castro (2007) aludiría extensamente a este documento en su defensa *La Historia me absolverá*, tras el asalto al cuartel Moncada (102-3).

Aunque utilizados por las luchas de liberación, dentro y fuera de su país de origen, los principios expresados en la Declaración de Independencia norteamericana siempre han mantenido una existencia paradójica. Por un lado, los propios Estados Unidos han sido quizás los más notorios en romperlos. «Todos los hombres» nunca ha significado «todas las personas», pues en esta misma tierra donde se declararon los ideales políticos más radicales de la época, ocurriría el genocidio más cruel de los nativos, la esclavización de los africanos, la privación de derechos a las mujeres y el empobrecimiento de las masas trabajadoras. Donde se proclamó la igualdad de todos, se institucionalizarían los métodos de racismo

más venenosos y deshumanizantes, de forma tal que cuando los nazis buscaban leyes racistas para usar como modelos, «las encontraron en los Estados Unidos de América» (Whitman, 2018: 16). Asimismo, en los siglos XX y XXI, el país que promulgó el derecho inalienable de los pueblos a derrocar a sus gobiernos, ha liderado los esfuerzos globales para sofocar los movimientos de liberación y sancionar a la pobreza a los pocos que triunfan.

La paradoja que surge de esta Declaración es una expresión concreta de lo que Domenico Losurdo (2014) llama el «nacimiento gemelo» (37) que se encuentra en el desarrollo del liberalismo, donde se expresa la «maraña de libertad y opresión» (34); por un lado, en las feroces críticas liberales al absolutismo feudal, y por otro, en la proliferación de la esclavitud africana y el genocidio de los pueblos originarios (21). Sin embargo, esta contradicción se desarrollaría en una nueva forma: las luchas políticas de lo que Martin Luther King, Jr. (2015) llamó las «dos Américas», una que «perece en una isla solitaria de pobreza» en «medio» de la otra, que se adentra en «un vasto océano de prosperidad material» (237).

Estas dos Américas se reflejan en proyectos políticos que interpretan los ideales jeffersonianos contenidos en la Declaración de Independencia de dos maneras radicalmente diferentes. La que se adentra en la prosperidad —la de los dueños del capital y sus títeres políticos— y entiende la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad desde ese punto de vista. En este caso, el trabajo del Estado es defender la santidad de la capitalización. Como dijo John Locke (1980), su principal progenitor ideológico, «el gobierno no tiene otro fin que la preservación de la propiedad» (51). La vida y la libertad del capital es lo importante, la búsqueda de la felicidad se transformó en la de la ganancia. Esta interpretación sigue dominando, incluso si su cruda esencia continúa velada detrás de términos desprovistos de su noción genuina.

Por otro lado, en el fondo de esta historia dominante hay una rica tradición de radicalismo que se alinea fielmente con los ideales jeffersonianos. Esta América entiende que la conclusión práctica y lógica de los valores de la vida, la libertad, y la búsqueda de la felicidad, y de lo expresado por Abraham Lincoln en su discurso de Gettysburg, sobre un gobierno del, por y para el pueblo, solo son realizables bajo una sociedad socialista. Una mirada a su historia muestra que quienes tienen el poder económico y político nunca han estado a la altura de estos ideales; son las masas trabajadoras multirraciales las que han retomado estas consignas en sus luchas contra el capital, el Estado, el racismo y la guerra. Como escribió el historiador Staughton Lynd (1982):

> Durante casi doscientos años, todo tipo de radicales estadounidenses han rastreado sus orígenes intelectuales [en] la Declaración de Independencia y la Revolución que justificó. Se han negado obstinadamente a entregar la memoria de la Revolución Americana al liberalismo o a la reacción, insistiendo en que solo el radicalismo podría hacer realidad la retórica de 1776. (7)

Los Estados Unidos continúan siendo una nación fragmentada, que produce vastas riquezas para los pocos dueños del capital y gran pobreza deshumanizadora para sus masas trabajadoras y la creciente «sobrepoblación relativa» (Marx, 1982: 787). La lucha de clases que lo permea se ha reflejado jurídicamente como una pugna entre: 1) la defensa de los derechos individuales, basada en una ontología robinsoniana que considera a los individuos como mónadas reificadas, y se centra en la santidad de la propiedad privada capitalista; y 2) una batalla por los derechos sociales, que no solo opone lo social a lo individual, sino que trasciende a cómo se entienden estos, más allá del antiguo paradigma burgués.

La primera vertiente ha dominado, pero no de manera totalizadora, pues siempre ha tenido un carácter tubular y filtraciones en su edificio, por donde se han deslizado distintos derechos sociales (como algunos laborales, seguro social, Medicare/Medicaid, etc.); sin embargo, ninguno fue dado al pueblo por la clase propietaria, sino peleados durante décadas por movimientos obreros y socialistas. Como afirma el historiador Mitchell K. Jones (2021), «la verdad es que, si eres estadounidense, tienes más razones para agradecerle a un comunista por tu libertad que a un soldado». Por ejemplo, la Ley Nacional de Relaciones Laborales, de 1935, que otorga a los trabajadores del sector privado el derecho a la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, habría sido impensable sin la presión del Partido Comunista —entonces una organización con un millón de miembros— y la influencia de otros órganos de poder socialistas y laborales en la presidencia de Roosevelt (Markowitz, 2019).

No obstante, el ascenso de los Estados Unidos a una posición hegemónica imperial después de la Segunda Guerra Mundial, les proporcionó recursos para suprimir estas luchas, tanto en casa como en el extranjero. Cuando el fervor de los movimientos norteamericanos por los derechos civiles y la liberación negra, en la década de los 60, dio paso a una lucha de clases multirracial, el final de ese período estuvo marcado por la brutal violencia del Estado contra sus líderes orgánicos. A través de programas como COINTELPRO (Programa de Contrainteligencia), el FBI se infiltraría y desbarataría organizaciones socialistas y radicales negras, enmarcando a sus dirigentes en juicios ficticios y lo más notable, asesinando algunos, como Martin Luther King, Jr. (2015) —considerado «el

Lo que sugiere la historia de la lucha por los derechos sociales en los Estados Unidos es que, tanto estos como los individuales, pueden ser genuinamente garantizados como derechos solo en la medida en que las masas trabajadoras puedan llegar al poder y aplastar las presiones contrarrevolucionarias del viejo orden.

hombre más peligroso de América» por el FBI (x)—y Fred Hampton (Zambito, 2020). Este contexto de represión debe tenerse en cuenta en cualquier discusión sobre las luchas por derechos sociales en este país.

La expansión de los tentáculos imperiales alrededor del mundo siempre va acompañada de un discurso justificativo sobre las «violaciones de derechos humanos» de los países de su objetivo. Por tanto, es importante preguntarse, ¿qué tipo de derechos importan en los Estados Unidos? Este texto analizará: 1) las condiciones de los derechos sociales en ese país, entendidos como aquellos relacionados con «la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, en áreas de trabajo, seguridad social, salud, vivienda, agua, alimentación, educación, cultura, etc.» (Burgos, 2012: 6-7), principalmente, del sistema *for-profit* (dirigido a la ganancia) de salud y sus efectos, y de las condiciones en que se encuentran los demás derechos en general; 2) las limitaciones de los derechos individuales (entendidos como civiles y políticos), que el modo de vida capitalista prioriza. Argumentaré que no solo hay una crisis en la esfera de los derechos sociales, sino que la de los individuales tampoco es, en la práctica, tan universal e inalienable como la clase dominante postula. Además, que los Estados Unidos no cumplen con los enumerados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas en inglés) (ONU, 1966), ni con los individuales, como expresión y prensa, que afirma mantener en su Constitución.

Los efectos de la atención médica mercantilizada

En el primer libro de *La República*, de Platón (1997), Sócrates le pregunta a Trasímaco: «Dime, ¿es un médico en el sentido preciso… un hacedor de dinero o alguien que trata a los enfermos?» (341c). Por supuesto, ambos están de acuerdo: el médico es quien trata a los enfermos. Hoy, la Organización Mundial de la Salud (OMS) concuerda con Sócrates. Ella establece en el preámbulo de su Constitución, de 1946, que «el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social» (1). Sin embargo, en los Estados Unidos este estándar legalmente vinculante no se cumple: todos los aspectos de la atención médica se han mercantilizado con profundidad, su *telos* ya no es el efecto curativo producido en los pacientes, sino la ganancia monetaria. Como ha escrito el bioético estadounidense Edmund D. Pellegrino (1999),

> es un dicho fundamental de la atención administrada que la atención de la salud debe ser tratada como cualquier otro bien, es decir, su costo, precio, disponibilidad y distribución deben dejarse al libre funcionamiento de un libre mercado restringido por un mínimo de regulación gubernamental. [De forma tal que] la «calidad» de cualquier grupo de pacientes se mide por su rentabilidad económica. (244)

Una variedad de males sociales surge cuando la salud se trata como una mercancía. Por un lado, las áreas del país que son menos o no rentables estarán en una desventaja considerable. Esto ha impulsado la crisis en zonas rurales, donde millones carecen de acceso a hospitales y atención de emergencia (Warshaw, 2017; Smith, 2022a). Como muestra el referido politólogo Edward Smith,

> solo en la última década, se cerraron más de cien hospitales rurales debido a la falta de ingresos, lo que dejó a muchos residentes sin acceso a un hospital dentro de una distancia razonable.
> Estos problemas resaltan las ineficiencias del mercado cuando se trata de proteger los intereses de los ciudadanos de clase trabajadora, y la locura de la idea de que las empresas privadas *for-profit*, que trabajan en el sector de la salud, priorizarán los intereses de las poblaciones vulnerables sobre los monetarios propios. De hecho, las empresas no podrían priorizar los resultados de salud de la población, aunque quisieran. La competencia del mercado recompensa a quienes venden la mayor cantidad de atención médica con los mayores márgenes, pero castiga con dureza a quienes la llevan a una población de personas que no pueden pagar, tanto los costos de los servicios brindados, como las ganancias de los accionistas privados propietarios de las instalaciones que brindan atención.

La falta de acceso a la salud que experimentan estas zonas rurales es uno de los múltiples efectos producidos por la mercantilización de este derecho social. Los estudios han demostrado que, si bien «los Estados Unidos gasta, per cápita, mucho más en atención médica que otros países desarrollados», esta cubre a menos personas y tiene resultados significativamente peores (Johns Hopkins…, 2019; Kurani y Wagner, 2021). En 2020, sufragaron 4,1 billones de dólares, que

representan 20% del PIB (Fundación Peter G. Peterson, 2022). Dada la inmensa cantidad de recursos gastados se pensaría que sus efectos serían asombrosamente positivos, pero es lo contrario:

> Los Estados Unidos ocupan el último lugar entre las naciones industrializadas en resultados de salud y esperanza de vida, mientras que se sitúan en el puesto más alto en deuda médica, mortalidad materna y desigualdad. (Smith, 2022b: 17)

La fuente de esto reside en el modelo de atención *for-profit,* que permite que los seguros privados funcionen como parásitos intermediarios, que obtienen «miles de millones en ganancias [mientras] socavan la atención y roban fondos públicos» (Tillow, 2022). Este enfoque también ha producido niveles inimaginables de aumento de precios, de modo que la relación promedio de cargo a costo para el tratamiento hospitalario es de 331% y de 479% para los medicamentos (National Nurses United, 2014; Endocrinology Advisor, 2018).

Cuando el objetivo de la atención de la salud no es curar a las personas, sino obtener dinero, las instituciones públicas y privadas responden solo a los accionistas y no a los pacientes. Como informa Edward Smith (2022b), «los conglomerados de atención médica como United Health Group Inc., McKesson Corp., CVS Health Corp, Cigna Corp. y Amerisource Bergen Corp., por solo nombrar los cinco más grandes [...] han acumulado 775 000 000.97 de capital» (22) y como accionistas tienen compañías transnacionales valuadas en trillones de dólares (por ejemplo, The Vanguard Group Inc., Blackrock Inc., State Street Global Advisors Funds Management Inc., JP Morgan Chase y Fidelity Investments), ante las que deben responder (2022a). Un estudio del *American Journal of Public Health* (Wilper *et al.*, 2009) calculó que «aproximadamente 44 789 muertes, entre estadounidenses de 18 a 64 años, [están] asociadas a la falta de seguro médico» (2292). Mientras que se siga ingresando dinero, ni los accionistas, ni los seguros privados, ni el gobierno se preocuparán por las cuarenta y cinco mil almas que se pierden cada año, no por falta de recursos, sino porque no hubiera sido rentable atenderlas.

Un ejemplo de cuán bajo está dispuesto a llegar, para ganar dinero, el complejo industrial médico es la crisis de los opiáceos. El CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) (2022) informa que estos estuvieron involucrados en 68 630 (74,8%) de todas las muertes por sobredosis de drogas en 2020. Cientos de miles han muerto desde que las compañías farmacéuticas introdujeron los opioides, en la década de los 90. Sin embargo, como muestran los estudios, no es hasta el último decenio que se pagan cuarenta millones de dólares a casi sesenta y ocho mil médicos en los Estados Unidos, para recetar un medicamento que ellos creían que no tenía riesgo de adicción (Hadland *et al.,* 2019). En realidad, era todo lo contrario: muy adictivos y lucrativos. Cuando se produjeron movimientos para reclamar que la base de datos Arcos, de la Administración de Control de Drogas (DEA), se hiciera pública, esta, las compañías farmacéuticas, y el Departamento de Justicia, lucharon duro para detener la publicación (Higham *et al.*, 2019). Todos los jugadores, desde los cárteles privados hasta el Estado, ganaban bastante dinero con la epidemia que estaban (y están) creando las drogas. Como informó Esteban Guevara (2019),

> el gobierno de los Estados Unidos tuvo la oportunidad de evitar que la epidemia de opioides se convirtiera en una crisis nacional, pero optó por mirar hacia otro lado y proteger los intereses de las compañías farmacéuticas en lugar de los del pueblo.

En este país, la distinción «público-privado» comienza a colapsar. Ninguno de los polos representa realmente al pueblo, ambos trabajan juntos para ayudar a enriquecerse más a los principales conglomerados de asistencia de salud y sus accionistas. Un estudio del profesor de bioética, Jonathan H. Marks (2020), concluye:

> Hay evidencia abrumadora de que la crisis de los opiáceos, que ha costado cientos de miles de vidas y billones de dólares (y contando), ha sido creada o exacerbada por redes de influencia, tejidas por varias compañías farmacéuticas. Estas involucran a profesionales de la salud, grupos de defensa de pacientes, sociedades profesionales médicas, universidades de investigación, hospitales docentes, agencias de salud pública, formuladores de políticas, y legisladores. Las empresas de opioides las construyeron como parte de estrategias corporativas de influencia que fueron diseñadas para expandir el mercado de opioides de pacientes con cáncer a grupos más grandes, con dolor agudo o crónico, y así aumentar la dosis y el uso de estas sustancias, minimizar los riesgos de adicción y abuso y caracterizar las preocupaciones de los médicos sobre sus consecuencias como la «opiofobia». (173)

¡Qué estupendo faro de derechos humanos! Cuando un Estado colabora con conglomerados privados de atención médica y monopolios farmacéuticos para impulsar una lucrativa epidemia de opiáceos que ha matado a casi un millón de sus ciudadanos en las últimas dos décadas, ese país no tiene derecho a hablar sobre «derechos humanos», y mucho menos utilizar su discurso para promover operaciones imperialistas de cambio de régimen en el extranjero.

La catástrofe a que condujo la COVID-19 en los Estados Unidos solo se puede entender cuando se es consciente de que, como argumenta Radhika Desai (2023), «la pandemia fue en sí misma una crisis del capitalismo» (125), específicamente, del neoliberalismo financializado que predomina en este país y en Reino Unido. Ante un virus para el cual no resultó rentable prepararse (gracias a los últimos cuarenta años de

austeridad y privatización), las prioridades de los Estados Unidos mostraron lo que realmente era importante para el complejo industrial médico: las ganancias de los dueños del capital. Al respecto, Desai expresa:

> Las prioridades, articuladas como la necesidad de equilibrar «salvar vidas y medios de subsistencia», radican en proteger los intereses de sus clases capitalistas financializadas. Después de considerar inicialmente no hacer nada en el frente de la salud pública, dejar que la pandemia desgarrara, llevándose a quien quisiera, se conformaron con el curso aún asesino de «aplanar la curva», porque no hacer nada resultaría ruinoso para sus economías y abrumaría las infraestructuras de salud pública, ya debilitadas por cuatro décadas de recortes neoliberales y corporatización. (10-1)

Mientras que este país representa solo 4% de la población mundial, en relación con las muertes por COVID-19 constituye más de 16%. La pandemia ayudó a que las ganancias de los grandes monopolios farmacéuticos se dispararan (Scholl, 2020). Por otro lado, en la China socialista, donde las personas, no las ganancias, son prioridad, solo hubo una fracción muy pequeña del número de muertes en comparación con los Estados Unidos (0,49%), a pesar de que su población es cuatro veces mayor.

Otro efecto de la atención médica *for-profit* se puede ver cuando las personas que necesitan tratamiento no tienen seguro (30 millones), o poseen uno insuficiente, y no pueden pagar el resto de los costos (44 millones). Como mostró un estudio reciente (Yabroff *et al.*, 2019) de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, más de 137 millones de norteamericanos (56% de la población adulta) luchan con «dificultades financieras médicas». Muchos enfrentan facturas que no pueden pagar, y se ven obligados a acumularlas como deudas. Actualmente, más de la mitad tiene una deuda de salud tan agobiante que le ha impedido «comprar una casa o ahorrar para la jubilación» (Winters, 2022).

Hay otras áreas donde la ausencia de asistencia médica en los Estados Unidos se manifiesta en una variedad de males sociales e individuales. No puedo referirme a todas en este texto, pero me gustaría señalar una más.

Aunque enfrenta un bloqueo denunciado a nivel internacional, y seis décadas de guerra híbrida desde el más formidable de los imperios, hoy el sistema de salud cubano es reconocido mundialmente como uno de los mejores. Gran parte se debe al enfoque preventivo, activo e integrador de la atención sanitaria, que trata como un derecho humano.

Tal práctica médica parecería una locura en los Estados Unidos. ¿Por qué alguien haría algo que podría evitar que se obtenga más ganancia? Cuando lo que importan son las personas, el objetivo es destruir las condiciones —en este caso, de las enfermedades— que hacen necesario un tratamiento médico. Lo contrario es cuando el cuidado de la salud está sujeto a la misma lógica que todo lo demás, bajo el capitalismo, donde la tendencia es hacia la proliferación; es decir, a desarrollar más condiciones para las cuales se requiera tratamiento. Cuanto más se necesite, más *profit* se realiza.

Tal situación hace que el sistema de salud de los Estados Unidos —único país desarrollado sin medicina socializada— se encuentre en un antagonismo irreconciliable con la esencia de la asistencia sanitaria. Como argumentó Hipócrates (citado en Wheelwright, 1975: 266), «el objetivo de un médico al tratar cualquier enfermedad debe ser detener las condiciones que promueven su florecimiento»; no que se mantengan o se transformen para que el tratamiento lucrativo continúe.

¿Cómo se puede hacer valer el derecho a la vida en un país donde cuarenta y cinco mil mueren al año porque no tienen seguro médico y no pueden pagar el tratamiento? ¿Cómo es posible que exista el derecho a la libertad para los cientos de millones de estadounidenses esclavizados por deudas por lo que supondría un procedimiento médico necesario? ¿Cómo se otorga el derecho a buscar la felicidad a aquellos que fueron empujados a drogas adictivas y asesinas, por décadas de colusión entre el gobierno y los cárteles?

Estamos viendo una de las paradojas centrales en cuanto a los derechos: para garantizar los individuales de manera genuina, también deben asegurarse los sociales. Solo cuando estos —como el cuidado de la salud— se cumplimenten universalmente, se puede validar el derecho personal a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto se debe a que, contrario a las ilusiones de la ontología burguesa, los individuos no son entidades robinsonianas que, como las mónadas sin ventanas de Leibniz, existen con independencia de todo lo demás. Son la expresión singular del «conjunto de relaciones sociales» en el que están inmersos (Marx y Engels, 1976a: 4). Son impensables sin la sociedad, y recíprocamente, esta es inimaginable sin ellos.

Esta comprensión está ausente de los fundamentos ideológicos de los derechos burgueses. Por tanto, no solo no cumplen con los sociales, sino que, precisamente por esta razón, tampoco con los individuales básicos, que solo se garantizan a un porcentaje muy pequeño de la sociedad (los propietarios de capital). Como ya había señalado Marx en 1843, «la aplicación práctica del derecho de libertad es el derecho de propiedad privada» (Marx y Engels, 1975: 163); «la condición necesaria para cuya existencia es la inexistencia de propiedad alguna para la inmensa mayoría de la sociedad» (1976b: 500). La frase: «todos los hombres», usada para formular derechos en el capitalismo, es siempre bajo la comprensión del «hombre como burgués […],

el hombre egoísta, separado de sus semejantes y de la comunidad» (1975: 164).

La pobreza general de los derechos sociales e individuales

Los derechos sociales, además de atención médica de calidad, incluyen trabajo bien remunerado, no vivir en la pobreza, tener una vivienda adecuada, alimentación y agua potable, acceso a educación de calidad, entre otros. A pesar de la abundancia material que el imperio estadounidense ha acumulado mediante su saqueo y superexplotación del Sur global, estas esferas de derechos sociales se encuentran en una profunda crisis. El mito del sueño americano, donde todas las familias trabajadoras tendrían la oportunidad de disfrutar vidas florecientes, de «clase media», con casas de vallas blancas, y dos automóviles, hoy no es más que una ilusión lejana. Lo que confronta la gran mayoría del pueblo norteamericano es lo que el comediante Georg Carlin llamó la «pesadilla estadounidense»: vidas plagadas de exceso de trabajo, deudas e inseguridades económicas.

El Instituto de Política Económica informa que desde finales de la década de los 70, los salarios de 70% de la población más pobre han estado estancados, y, entre 2009 y 2013, los reales (es decir, ajustados a la inflación) han caído para 90% de ella (Mishel, 2015). Frente a la crisis de los 70, como explica Radhika Desai (2023), el mundo capitalista —especialmente los Estados Unidos y Gran Bretaña— tenía dos caminos que seguir: 1) hacia «un capitalismo reformado con tinte "socialista" [que] lo pondría de nuevo en la rampa hacia el socialismo» (15); y 2) a través del giro hacia una mayor financialización, austeridad, liberalización, privatización y desregulación, lo que ha llegado a marcar la era neoliberal. El resultado de esta extensión de la vida decadente del capital ha sido el colapso del Estado de bienestar, la destrucción de los sindicatos y los órganos de poder de los trabajadores y, en última instancia, la espiral descendente de muchos de los derechos sociales. El fruto de esta era se puede ver en la generación *millennial*, que se predice será la primera en la historia de los Estados Unidos en estar económicamente peor que sus padres (Roos, 2013).

Mientras que el artículo 7 (a-ii) del ICESCR dice que el trabajo de las personas debe darles derecho a «condiciones de existencia dignas para ellos y sus familias», en ningún estado norteamericano el salario mínimo (7,25 dólares/hora) es suficiente para sobrevivir; incluso si se elevara a 15 —como han pedido los socialistas democráticos y otras agrupaciones progresistas— no sería suficiente, en cualquier parte del país, para que una familia de clase trabajadora sobreviva (Drexel University, 2021). En cuarenta años, la combinación de salarios estancados e inflación en su nivel más alto ha llevado a casi 60% de los estadounidenses a vivir de cheque en cheque (Parsons, 2022). Muchas de estas personas están a un paso de unirse a las seiscientas mil sin techo, que deambulan en un país con más de diecisiete millones de viviendas vacías (*USA Facts*, 2022). No es sorprendente que donde hay treinta y tres veces más hogares vacíos que personas sin hogar, que treinta y cuatro millones, incluidos uno de cada ocho niños, pasen hambre, mientras 30% o 40% del suministro de alimentos (cuarenta millones de toneladas) se desperdicia cada año (Feeding America, 2022; RTS, 2023).

Si más de la mitad del gasto federal se destina a mantener el ejército más caro del mundo, muchas ciudades, habitadas por millones de estadounidenses, carecen de acceso a agua potable (Lindorff, 2013; Lloyd, 2022). Dado que varias estimaciones sostienen que los Estados Unidos han gastado más de noventa mil millones de dólares en la guerra de Ucrania desde que comenzaron las operaciones especiales rusas, han surgido preocupaciones sobre cuáles son las prioridades del gobierno, y por qué no se ha actuado con tanta rapidez para resolver problemas domésticos como la crisis del agua en ciudades como Flint, Michigan (sin agua potable desde 2014), la escasez de alimentos para bebés y el incontenible aumento de precios (Zuesse, 2022; Warfield, 2022). Por otra parte, el país ha visto una disminución histórica en la esperanza de vida; tanto que el cubano promedio, a pesar de seis décadas de bloqueo ilegal y guerras híbridas contra su proyecto socialista, vive alrededor de tres años más que el estadounidense promedio (Garrido, 2023).

Estas condiciones presentan otra violación directa del artículo 11 del ICESCR, el cual establece que las personas tienen derecho «a un nivel de vida adecuado para [ellas] y [su] familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados, y la mejora continua de las condiciones de vida». En los Estados Unidos, este derecho básico es inexistente para millones.

No obstante, sería un error trazar líneas claras entre los derechos sociales e individuales y suponer que, si bien los Estados Unidos no cumplen con los primeros, sí lo hacen con los segundos, a los que dan primacía. Se supone que la Primera enmienda, por ejemplo, garantiza la libertad de expresión, prensa y reunión; sin embargo, ¿dónde están estos derechos en el tratamiento de Chelsea Manning, Julian Assange y Edward Snowden, quienes han sido perseguidos bajo la Ley de Espionaje por exponer al mundo los crímenes del imperio estadounidense? ¿Dónde están estos «derechos» para los periodistas de medios de comunicación socialistas como *Mintpress News*, que tienen prohibidas sus cuentas de PayPal, porque

exponen las mentiras del Departamento de Estado y de los medios norteamericanos? ¿Y la libertad de expresión y prensa del Instituto Midwestern Marx —el cual ha sido bloqueado— en las redes sociales más prominentes, y donde sus investigadores han sido acosados y despedidos de su trabajo por mostrar las narrativas usadas para legitimar la guerra?

Los Estados Unidos no solo no cumplen con los derechos sociales de su pueblo, sino que, cuando las cosas se ponen difíciles, quita *libremente* los individuales que dice defender. Estos están garantizados en la medida en que no se critiquen los intereses del capitalismo y el imperialismo. Esos son sus límites. Cuando individuos y organizaciones prominentes los violan, el martillo de la censura cae sobre ellos, tanto de forma abierta como encubierta.

¿Qué moral tiene este país donde los derechos sociales son inexistentes y los individuales están limitados dentro de los intereses del capital, para ser policía global y condenar los supuestos abusos a los derechos humanos en todo el mundo?

Conclusión

Las mentes más prominentes de la historia de los Estados Unidos, desde W. E. B. DuBois hasta John Dewey, Martin Luther King, Jr. y muchos más, se dieron cuenta de que, para alcanzar los derechos individuales a la vida, libertad y búsqueda de la felicidad, que prometen los ideales de la Declaración de Independencia, también deben garantizarse los derechos sociales al trabajo adecuado, salud, educación, una vida libre de pobreza, etc. Sin embargo, también entendieron que el contexto sistémico en el que se ganan estos es importante; pues con mucha facilidad el capital ha podido revocar los pocos derechos sociales que han ganado las clases populares en sus luchas. Las victorias que obtenga el movimiento obrero —dentro de los límites del modo de vida capitalista, donde el capital todavía está al mando económico, político y social— siempre están sujetas a ser revocadas, en especial en aquellos momentos en que el movimiento se ha debilitado. Martin Luther King Jr. (2015) —quien comenzó su lucha con una profunda esperanza en el potencial de las reformas— finalmente lo llegó a ver: «He descubierto que todo lo que he estado haciendo para tratar de corregir el sistema en los Estados Unidos ha sido en vano. Estoy tratando de llegar a la raíz de esto para ver qué se debe hacer. Habrá que acabar con todo el sistema» (xi).

Lo que sugiere la historia de la lucha por los derechos sociales en los Estados Unidos es que, tanto estos como los individuales, pueden ser genuinamente garantizados como *derechos* solo en la medida en que las masas trabajadoras puedan llegar al poder y aplastar las presiones contrarrevolucionarias del viejo orden. Cuando *all men* signifique «todas las personas», y no la minoría propietaria que funciona como personificación del capital, entonces los Estados Unidos podrían comenzar a concretar los ideales bajo los cuales se fundó hace dos siglos y medio. La condición previa para ello, como han expresado sus más grandes pensadores, es una transición hacia una sociedad socialista.

Referencias

Burgos Matamoros, M. (2012) «Herramientas teóricas para la investigación de los derechos económicos, sociales y culturales». En *Programa de capacitación y formación profesional en derechos humanos,* Axotla: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Castro, F. (2007) *Fidel Castro Reader*. Nueva York: Ocean Press.

CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) (2022) *Drug Overdose Deaths Remain High*, 2 de junio. Disponible en <https://bit.ly/41EzuQk> [consulta: 26 marzo 2023].

Desai, R. (2023) *Capitalism, Coronavirus and War.* Abingdon: Routledge.

Drexel University Center for Hunger-Free Communities (2021) *Minimum Wage is not Enough: A True Living Wage is Necessary to Reduce Poverty and Improve Health*. Disponible en <https://goo.su/sxwD> [consulta: 26 marzo 2023].

Endocrinology Advisor (2018) *Examining Hospital Cost-to-Charge Ratios to Insurers and Patients*, 25 de septiembre. Disponible en <https://bit.ly/3n4rm87> [consulta: 26 marzo 2023].

Estados Unidos de América. *Declaración de Independencia* (1776). Disponible en <https://bit.ly/3THujvV> [consulta: 23 marzo 2023].

Feeding America (2022) *Facts About Hunger in America*. Disponible en <https://bit.ly/3LbkSkr> [consulta: 26 marzo 2023].

Fundación Peter G. Peterson (2022) *Healthcare Spending Reaches a Record High*, 28 de enero. Disponible en <https://bit.ly/3nbaUrp> [consulta: 26 marzo 2023].

Garrido, C. L. (2023) «The US Blockade and Its Effects on Cuban Medicine». *Science for the People*, 6 de marzo. Disponible en <https://bit.ly/422uZPu> [consulta: 26 marzo 2023].

Guevara, E. (2019) «Blood money: How big pharma created the opioid crisis». *Liberation News*, 8 de agosto. Disponible en <https://bit.ly/41llftN> [consulta: 26 marzo 2023].

Hadland, S. E. *et al.* (2019) «Association of Pharmaceutical Industry Marketing of Opioid Products With Mortality From Opioid-Related Overdoses». *JAMA Netw Open,* v. 2, n. 1. Disponible en <https://bit.ly/2FClXBe> [consulta: 26 marzo 2023].

Higham, S., Horwitz, S. y Rich, S. (2019) «76 billion opioid pills: Newly released federal data unmasks the epidemic». *The Washington Post,* 16 de julio. Disponible en <https://goo.su/3Pe18> [consulta: 26 marzo 2023].

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (2019) *U.S. Health Care Spending Highest Among Developed Countries*, 7 de enero. Disponible en <https://bit.ly/3NhvaSJ> [consulta: 26 marzo 2023].

Jones, M. K. (2021) «American Socialism Travels». *Midwestern Marx*, 4 de junio. Disponible en <https://bit.ly/40GadE7> [consulta: 26 marzo 2023].

King, M. L. (2015) *The Radical King*. Boston: Beacon Press.

Kurani, N. y Wagner, E. (2021) «How does the quality of the U.S. health system compare to other countries?» *Peterson-KFF,* 30 de septiembre. Disponible en <https://bit.ly/2Q7DRyk> [consulta: 26 marzo 2023].

Lindorff, D. (2013) «Your Tax Dollars at War: More Than 53% of Your Tax Payment Goes to the Military». *Common Dreams*, 13 de marzo. Disponible en <https://bit.ly/2mlgiTD> [consulta: 26 marzo 2023].

Lloyd, R. (2022) «A Growing Drinking Water Crisis Threatens American Cities and Towns». *Scientific American,* 9 de septiembre. Disponible en <https://bit.ly/3Hiegpw> [consulta: 26 marzo 2023].

Locke, J. (1980) *Second Treatise of Government*. Indianapolis: Hackett Publishing Company.

Losurdo, D. (2014) *Liberalism: A Counter-History.* Londres: Verso.

Lynd, S. (1982) *Intellectual Origins of American Radicalism*. Cambridge: Harvard University Press.

Marks, J. H. (2020) «Lessons from Corporate Influence in the Opioid Epidemic: Toward a Norm of Separation». *Journal of Bioethical Inquiries,* v. 17, n. 2, 173-89. Disponible en <https://bit.ly/3LyjaLf> [consulta: 26 marzo 2023].

Markowitz, N. (2019) «The Communist Party in the '30s: The Depression and the great upsurge». *People's World*, 14 de mayo. Disponible en <https://bit.ly/3n536aF> [consulta: 26 marzo 2023].

Marx, C. (1982) *El Capital.* Nueva York: Penguin Publishers, t. I.

Marx, C. y Engels, F. (1975) *Marx-Engels Collected Works*. Moscú: Progress Publishers, t. III.

_____ (1976a) Ibídem, t. V.

_____ (1976b) Ibídem, t. VI.

Minh, H. C. (1967) *Ho Chi Minh on Revolution: Selected Writings,* v. 3. Nueva York: New American Library.

Mishel, L. (2015) «Causes of Wage Stagnation». *Economic Policy Institute,* 6 de enero. Disponible en <https://bit.ly/3Hi6GVU> [consulta: 26 marzo 2023].

National Nurses United (2014) *New Data - Some Hospitals Set Charges at 10 Times their Costs*, 6 de enero. Disponible en <https://bit.ly/3n51LAH> [consulta: 26 marzo 2023].

OMS (1946) Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 22 de julio. Disponible en <https://bit.ly/3LzqtCH> [consulta: 26 marzo 2023].

ONU (1966) *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, de 16 de diciembre. Disponible en <https://bit.ly/423lwre> [consulta: 26 marzo 2023].

Parsons, M. (2022) «Report: 58% of Americans Living Paycheck to Paycheck». *Spectrum News*, 17 de septiembre. Disponible en <https://bit.ly/3HeqCsw> [consulta: 26 marzo 2023].

Pellegrino, E. D. (1999) «The Commodification of Medical and Health Care: The Moral Consequences of a Paradigm Shift from a Professional to a Market Ethic». *Journal of Medicine and Philosophy*, v. 24, n. 3, 243-66.

Platón (1997) «La República». En: *Obras completas*. Indianapolis: Hackett Publishing Company.

Roos, D. (2013) «Are millennials really the first generation to do worse than their parents?». *How Stuff Works*, 11 de octubre. Disponible en <https://bit.ly/41JdTq7> [consulta: 26 marzo 2023].

RTS (Recycle Track Systems) (2022) *Food Waste in America in 2022*. Disponible en <https://bit.ly/420dleZ> [consulta: 26 marzo 2023].

Scholl, S. (2022) «$65,000 a Minute: Big Pharma Profits Soar from Vaccine Monopolies». *Socialist Alternative,* 24 de marzo. Disponible en <https://bit.ly/3oE0NeW> [consulta: 26 marzo 2023].

Smith, E. (2022a) «The American Healthcare System is Failing Rural America: What's Causing it and how do we fix it?». *Midwestern Marx Institute*, 26 de marzo. Disponible en <https://bit.ly/3Ly7WGN> [consulta: 26 marzo 2023].

_____ (2022b) «The State of American Healthcare: A Product and Reflection of American Capitalism». *Journal of American Socialist Studies*, n. 2, diciembre.

Tillow, K. (2022) «Hey, Bernie, Make It a Real Single Payer Bill-No Profits». *Counterpunch,* 22 de marzo. Disponible en <https://bit.ly/3n18qvL> [consulta: 26 marzo 2023].

USA Facts (2022) «Homeless Population». Disponible en <https://bit.ly/3NcGJux> [consulta: 26 marzo 2023].

Warfield, K. (2022) «People Are Price Gouging Baby Formula Amid Shortage». *Eat This, Not That,* 14 de mayo. Disponible en <https://bit.ly/40MOv1g> [consulta: 26 marzo 2023].

Warshaw, R. (2017) «Health Disparities Affect Millions in Rural U.S. Communities». *Association of American Medical Colleges,* 31 de octubre. Disponible en <https://bit.ly/3HdClYr> [consulta: 26 marzo 2023].

Wheelwright, P. (1975) *The Presocratics.* Indianapolis: The Odyssey Press.

Whitman, J. (2018) *Hitler's American Model: The United States and the Making of Nazi Race Law*. Nueva York: Princeton University Press.

Wilper, A. *et al.* (2009) «Health Insurance and Mortality in US Adults». *American Journal of Public Health,* v. 99, n. 2, diciembre, 2289-95.

Winters, M. (2022) «Over half of Americans have medical debt, even those with health insurance—here's why». *CNBC,* 11 de marzo. Disponible en <https://bit.ly/3V76zSJ> [consulta: 26 marzo 2023].

Yabroff, K., Zhao, J., Han, X., y Zheng, Z. (2019) «Prevalence and Correlates of Medical Financial Hardship in the USA». *Journal of General Internal Medicine,* n. 34, 1494-502. Disponible en <https://bit.ly/4OdCbaK> [consulta: 23 marzo 2023].

Zambito, A. (2020) «The FBI's War on the Left: A Short History of COINTELPRO». *Midwestern Marx Institute,* 4 de octubre.

Zuesse, E. (2022) «U.S. Will Have Spent $100B on Ukraine This Year». *Katehon,* 18 de noviembre. Disponible en <https://bit.ly/40GlPak> [consulta: 26 marzo 2023].

©TEMAS, 2023

Derechos civiles: una mirada desde el profundo Sur
Una entrevista a Stanley Murphy

Por Rafael Hernández
Politólogo. Revista *Temas*.

Mi visión de la historia y del estado del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos está forjada por las inusuales y, quizás, únicas circunstancias de mi infancia y adolescencia en Alabama, durante las décadas de los 50 y 60. Mis padres eran abogados que trabajaron mucho en apoyo a la lucha por la justicia racial. Aunque ninguno de los dos nació allí, llegaron tras graduarse de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, en los años 40. Mi padre comenzó su carrera como profesor de Derecho en la Universidad de Alabama, y mi madre abrió un bufete privado y enseñó Ciencias Políticas en esa institución. Desde sus primeros años en este estado, ambos se involucraron profundamente en las luchas contra las fuerzas del racismo que infectaban casi todos los aspectos de la vida política, social e institucional. Su compromiso activo con los derechos civiles era fuera de lo común entre los blancos alabamienses, y más aún entre abogados blancos. En dependencia del nivel de volatilidad y violencia en el movimiento por estos derechos a escala nacional y local, mi familia recibía avisos y amenazas debido a sus acciones, y de vez en cuando el Ku Klux Klan (KKK) quemaba cruces en nuestro jardín. Sin embargo, nada de eso hizo que mis padres desistieran de su labor; si acaso, fortaleció su compromiso.

Mi hogar de la infancia se convirtió en un punto de encuentros y centro estratégico para abogados, líderes comunitarios y activistas. También era frecuentado por

Stanley J. Murphy es profesor adjunto de la Escuela de Derecho, en la Universidad de Alabama, Estados Unidos.

periodistas de todo el país que cubrían el movimiento por los derechos civiles en el Sur. Más adelante, cuando me hice abogado, representaba a personas e instituciones perjudicadas por el historial de racismo de Alabama. Haberme relacionado directamente con algunas de las personas y con los acontecimientos que tuvieron influencia en el movimiento por estos derechos determinó mi interés en el Derecho como carrera y tuvo un profundo impacto en mi opinión sobre estos problemas y su evolución. Todavía es así. Por esa razón, puede que mi perspectiva en cuanto al estado de los problemas actuales que atañen a los derechos civiles resulte tan inusual como la trayectoria personal que influye en ella.

Rafael Hernández (R. H.): *¿Cómo usted valora los logros de los movimientos por los derechos civiles en la década de los 60?*

A partir de la década de los 40, y durante las dos siguientes, los Estados Unidos comenzaron a utilizar el poder de las leyes federales contra los principios mayoritariamente atrofiados de la equidad racial, que se formalizaron por primera vez después de la Guerra Civil. Debido a que la mayoría de los estados que formaron parte de la rebelión de los años 60 del siglo XIX se negaron a aceptar la derrota, así como a la reticencia o incapacidad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes que garantizaban derechos civiles, muchos de esos estados sureños siguieron sujetos a leyes que encarnaban explícitamente y perpetuaban el racismo que precedió a la Guerra Civil. Excepto la esclavitud propiamente dicha, en la práctica ninguna de las formas institucionalizadas de desigualdad racial cambió. A decir verdad, la combinación de un poder policial desenfrenado, con fuerzas económicas y políticas actuando en complicidad o con deliberada indiferencia significó que, incluso hasta bien entrado el siglo XX, existieran formas de trabajo forzado similares a la esclavitud.

Los ciudadanos negros estaban sujetos a leyes y costumbres sustancialmente diferentes (e invariablemente peores) que las que regulaban todas las actividades cotidianas y privilegios conferidos a las personas blancas. Con el uso tanto de prohibiciones legales explícitas como de normas arraigadas, se les excluyó de programas educacionales, servicios públicos, y oportunidades de expresión política y participación en la administración pública. Aunque el legado de la desigualdad racial no se limitaba a los estados sureños, fue en esta región donde se formalizó como ley estatal. Solo gracias a decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, estatutos aprobados por el Congreso, y la acción —más cada vez— de los presidentes, se pudo comenzar a eliminar las barreras legalizadas a la igualdad racial.

Esa labor de desmantelamiento de las estructuras legales y culturales de la discriminación requirió abogados y jueces que estuvieran dispuestos a poner en riesgo sus carreras y seguridad personal para hacer cumplir las leyes de los Estados Unidos. La mayoría de ellos permanecieron al margen o no mostraron ningún interés. A los pocos que dieron el paso se les debe muchos de los logros de las décadas de los 50 y 60 que invalidaron los vestigios explícitamente racistas de las campañas posteriores a la Guerra Civil en el Sur, que perpetuaron la arraigada desigualdad racial que debió terminar con la rendición en Appomattox.[1]

Entre los acontecimientos más significativos de los años 70 estuvo la creciente toma de conciencia de que las leyes y mecanismos que sustentaban el maltrato infligido a los ciudadanos negros también impedían a otras personas vulnerables tener pleno acceso a muchas de las oportunidades que fueran denegadas durante tanto tiempo por motivos raciales. Los precedentes y las estrategias legales desarrollados en casos raciales durante el movimiento por los derechos civiles comenzaron a aplicarse a leyes y costumbres que excluían a las mujeres, los discapacitados y personas de la tercera edad de muchas posibilidades similares. Por ejemplo, en Alabama —al igual que en otros estados sureños— solamente los hombres blancos eran miembros de un jurado. Aun cuando las mujeres abogadas como mi madre podían representar a clientes ante un jurado, no podían ser miembros de uno. Solo los hombres blancos podían ser miembros. Se contaron por miles las personas con discapacidades mentales reales o percibidas que eran separadas de sus hogares y sus familias, y quedaban bajo la custodia del Estado, sin ninguna protección constitucional. A menudo vivían en peores condiciones que las de los reclusos en las prisiones.

Un gran paso de avance de la legislación fue reconocer que el abuso de poder, fuera gubernamental, económico, o de criminalidad privada como en el caso del KKK, o de desprotección del gobierno a los ciudadanos, tenía un motivo común cuando se aplicaba a otros grupos vulnerables, y podía ser contrarrestado mediante los mismos principios legales desarrollados en la lucha por la equidad racial. Por tanto, pensar en el movimiento por los derechos civiles como algo vinculado solo a la raza equivalía a limitarlo demasiado.

R.H.: *¿Cuánto han avanzado esos movimientos desde entonces?*

Si bien son necesarias las decisiones de las cortes federales, la promulgación de leyes sobre derechos civiles por parte del Congreso, y las regulaciones y medidas de ejecución de la ley por el poder ejecutivo

del presidente no bastan para crear una nueva realidad de equidad integral. No minimizamos el inmenso valor de la decisión de la Corte Suprema en el caso Brown *vs.* la Junta de Educación, o la aprobación del Congreso de las leyes de los derechos civiles de 1964 y 1965, cuando decimos que, por sí mismas, casi nunca ejercen influencia real en la calidad de la vida cotidiana de las personas que estaban destinadas a proteger. Cada protección legal que las cortes o el Congreso esperaban que se derivara de sus decisiones y estatutos ha dado lugar, en décadas subsiguientes, a miles de disputas, pleitos legales y peleas políticas. El proceso de aplicación de los principios legales de tratamiento equitativo ha sido lento, acrecentante y, en ocasiones, amargo. Y la cosa continúa. *Pero*, en mi opinión, se han logrado grandes avances y, por difíciles que las cosas puedan ser incluso años después de los sucesos de los 50 y 60, las perspectivas son mejores y los resultados más duraderos.

R.H.: *¿Cómo describiría la condición actual de los derechos civiles en los Estados Unidos?*

Creo que existe casi un consenso nacional sobre algunas cuestiones, como la eliminación de las prohibiciones abiertamente discriminatorias del acceso a servicios públicos, escuelas, empleos, etc. Las cosas están mejores que cuando yo crecía. Sin embargo, hay mucho menos consenso en cuanto a si continúan existiendo prácticas discriminatorias menos evidentes o vestigios de la discriminación del pasado, o si resultan apropiadas las medidas correctivas de conductas o exclusiones pretéritas por motivos de raza. La ignorancia generalizada de la historia de los Estados Unidos —incluso la contemporánea— y de los acontecimientos trascendentales del movimiento por los derechos civiles puede constituir un problema fundamental. Parece haber incluso menos intención de aprender algo de la historia o sobre esta, o hasta de permitir que en las escuelas los alumnos aprendan mucho sobre el tema. Me temo que, sin ese conocimiento básico, la progresión del «arco de la justicia» será más lenta.

R.H.: *¿Qué instituciones están desempeñando la función más crucial en la implementación de la legislación sobre derechos civiles?*

Desde mi punto de vista como abogado, las cortes han tenido y continúan teniendo una función esencial. El Congreso está básicamente inmovilizado sobre el tema, y la Corte Suprema está limitando el poder del presidente para tomar medidas ejecutivas dirigidas a la observancia de los derechos fundamentales. Con sus investigaciones y reportajes, los medios noticiosos siguen siendo tan indispensables como siempre; pero hay profundas tensiones económicas que reducen la eficacia del periodismo, cuyo valor también resulta perjudicado por el impulso reflexivo de muchas personas a aislarse de todo periodismo que represente un reto a su visión particular del mundo, muy a menudo alejada de la realidad objetiva. Le siguen las escuelas, aunque cada vez se ven más limitadas por su propia timidez y por los manifiestos esfuerzos políticos de excluir de las aulas tópicos «incómodos» como la raza y el racismo. Debido a que numerosos aspectos de la historia racial de los Estados Unidos resultan (cuanto menos) embarazosos, no se enseñará ni se aprenderá mucho sobre perspectiva histórica.

R.H.: *¿Cuáles son los principales problemas de la lucha por los derechos civiles?*

Pienso que una de las principales dificultades ha sido la ingenuidad de las cortes al interpretar la realidad práctica de la vida en los centros de trabajo, las cabinas de votación, las escuelas, o incluso en las tribunas de los jurados. Con demasiada frecuencia, las decisiones judiciales en casos relacionados con demandas por discriminación racial o de género revelan su desconocimiento de las realidades pragmáticas que dieron lugar a la disputa, así como una preocupante reticencia a aprender. Aproximadamente en los últimos veinte años, las cortes han creado toda una serie de obstáculos procesales que interfieren con numerosas reclamaciones sobre derechos civiles y, a menudo, impiden que las demandas por violaciones sustantivas lleguen a los tribunales de justicia. Ellas desestiman muchas demandas serias antes de que los abogados y sus clientes pudieran presentar evidencia suficiente para aplicar racionalmente los principios legales establecidos y otorgar una compensación apropiada. Estos obstáculos pueden convertirse en barreras fatales a la justicia para muchas personas perjudicadas, y a menudo logran que los abogados y las víctimas desistan, incluso, de entablar una demanda. Me temo que todo progreso será lento, mientras los tribunales no se abran completamente a los juicios por reclamaciones sobre derechos civiles.

Nota

1. Condado del estado de Virginia, donde el 9 de abril de 1865 el general en jefe de la Confederación, Robert E. Lee, se rindió ante Ulysses S. Grant, comandante general del Ejército de la Unión del Potomac, concluyendo así una guerra que había comenzado casi cuatro años antes. (N. del T.)

©TEMAS, 2023

Virajes del constitucionalismo social mexicano: las reformas de la Constitución de 1917

Aleida Hernández Cervantes
Investigadora. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM.

Un derecho social se identifica como una expectativa, como una posibilidad de satisfacer necesidades básicas. Trabajo, salud, vivienda, seguridad social y educación son ámbitos o bienes jurídicos que los derechos sociales están llamados a proteger. Cuando estos son reconocidos por constituciones o tratados internacionales, ello implica obligaciones por parte del Estado e, incluso, por los particulares. Tradicionalmente, habían sido catalogados como derechos con estructura de cláusulas programáticas o como principios rectores que un Estado se compromete a llevar a cabo, pero la teoría jurídica progresista desarrolló argumentos sólidos que los consideran derechos fundamentales plenos (Ferrajoli, 2002; Pisarello, 2007). Los Estados que los elevaron a rango constitucional o que les dieron preeminencia en sus leyes y políticas públicas se les reconoce el carácter de Estado social de derecho.

La Constitución Política de los Estados Mexicanos (CPEUM) de 1917 consagró, por primera vez en la historia de las constituciones, los derechos sociales. Este hecho representó un hito jurídico que, con el paso del tiempo, fue emulado por otras cartas magnas del mundo. Durante casi siete décadas, el constitucionalismo social mexicano reconoció y amplió el andamiaje jurídico-institucional, que protegió y garantizó derechos sociales como el acceso al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, a la tierra, entre otros. Sin embargo, con el arribo del neoliberalismo a la política económica y política, alrededor de los años 80, la Constitución de 1917 fue sufriendo cambios estructurales en su espíritu social, desarticulando la protección a diversos derechos

y la centralidad de lo público, lo que dio paso a la intervención de lo privado en esferas y áreas que antes eran exclusivas del Estado. Esto debilitó seriamente la fuerza normativa de los derechos sociales y sus garantías.

Lo que se presenta aquí es una breve historia de las reformas estructurales a la Constitución que afectaron la calidad de los derechos sociales. Por otra parte, revisamos las reformas de los últimos años, que consideramos como un tímido intento de renovar el espíritu social de la Constitución.

Constitución Política mexicana de 1917, pionera de los derechos sociales

Promulgada por la Constituyente de Querétaro, en febrero de 1917, la Constitución emanó de una revolución social derivada de las graves condiciones sociales en que se encontraban el campesinado, la clase trabajadora y la población en general. A ello se sumaba la hipercentralización del poder ejercido por el presidente Porfirio Díaz, quien llevaba casi treinta años en la presidencia de la República. Las condiciones de esclavitud en que vivían las mujeres y hombres del campo en las haciendas henequeneras (entre otras), así como las jornadas laborales extremas y extenuantes que padecían los obreros, fueron sembrando, en diversas partes del país, protestas y manifestaciones armadas desde 1907, las que más tarde dieron lugar a lo que conocemos como la Revolución mexicana de 1910.

En el ya clásico libro *México bárbaro*, del periodista estadounidense John Kenneth Turner (1999), se narra la esclavitud en la que vivían los campesinos en el sur de México, los malos tratos que recibían de los hacendados y sus capataces; las grandes huelgas que fueron reprimidas por el gobierno de Díaz y que dejaron cientos de muertos, así como del contubernio de la prensa norteamericana y sus socios con el gobierno mexicano, para protegerlo. Después de infiltrarse como un supuesto inversionista de los Estados Unidos, Kenneth recorre la región y conoce de primera mano las condiciones del campesinado; ello le permite afirmar que México era un país «donde el peonaje es común para las grandes masas y donde existe esclavitud efectiva para cientos de miles de hombres» (4). Desde el norte del país, con el exterminio del pueblo yaqui, pasando por las deplorables condiciones de trabajo en las minas de Coahuila, hasta las haciendas esclavistas henequeneras de Yucatán, junto a la persecución de los opositores al gobierno, todas las condiciones sociales de injusticia mostraban una revolución a la puerta. El propio Kenneth afirmaba en su prefacio que en México estaba a punto de iniciarse una revolución por la democracia, y que no podía ser más que a través de protestas armadas, por la situación política de represión gubernamental. En el mismo texto llama al gobierno de los Estados Unidos a que dejara de intervenir en los asuntos internos del país (2).

El estallido revolucionario tiene como referentes importantes a Francisco I. Madero, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, Emiliano Zapata y Francisco Villa, quienes, con variados planteamientos, condensaron en idearios y mediante las armas las demandas sociales que el Congreso Constituyente de 1916-1917 debatió acaloradamente y plasmó finalmente en la Constitución mexicana. El documento que más destaca como su antecedente sustantivo y base de su contenido social fue el Programa del Partido Liberal Mexicano (Junta Organizadora…, 1906) que analizaba las problemáticas profundas del país y planteaba una serie de propuestas concretas como: a) nulificar las deudas de los jornaleros con sus amos; b) eliminación de las tiendas de raya; c) enseñanza pública laica y establecimiento de numerosas escuelas primarias públicas; d) restitución de los ejidos a los pueblos que fueron despojados; e) jornada máxima de ocho horas al día; f) salario mínimo suficiente para llevar una vida digna; g) prohibición de trabajo a los menores de catorce años; h) medidas de higiene en los centros de trabajo; i) la no reelección, entre otras propuestas de carácter político .

El jurista y laboralista Mario de la Cueva (1969) diría en su momento que

> la grandeza de la acción del Congreso Constituyente de 1917 radica en la circunstancia de que la solución adoptada en la Carta de Querétaro creando los nuevos derechos sociales del hombre es una doctrina propia, que no deriva de ningún pensamiento o modelo extranjero. (10)

Se trataba, para ese momento, de un nuevo paradigma del Derecho y, en especial, de un Derecho constitucional basado en la justicia social. De esa manera, se dio un paso importante en la evolución de los derechos: a los individuales, basados en la doctrina ilustrada del individualismo, se sumaban los sociales, considerados en su momento de carácter programático, que hacía alusión a que el nivel de cumplimiento dependería de la existencia de recursos. Más adelante, teóricos del Derecho como el italiano Luigi Ferrajoli (2002) establecería, con argumentos sólidos, que los derechos sociales son fundamentales plenos, explicando que también los individuales, como el derecho al voto, necesitaban de la erogación de recursos para realizarse y que los sociales no implican solo un «no hacer» o no intervención del Estado, como solía decirse. Tanto unos como otros necesitan de mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad, y si alguno de ellos no cuenta con garantías para ejercerse,

es una falta del orden jurídico, que debe ser llenada (Ferrajoli, 2002).[1]

Regresando al congreso constituyente mexicano de 1917, después de interesantes debates jurídico-políticos, Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del poder ejecutivo del país, promulga, el 5 de febrero de 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que reforma la de 5 de febrero de 1857. En ella, tres grandes demandas sociales se convirtieron en derechos constitucionalizados: el derecho a la educación, en el Artículo 3; a la tierra, es decir, un régimen de tierra más justo para el campesinado, en el 27; y los laborales para la clase trabajadora, en el 123.

En el Artículo 3 se estableció una educación laica y gratuita, y se prohibió que las corporaciones religiosas o ministros de culto establecieran o dirigieran escuelas primarias.

En el Artículo 27, en un resumen apretado, se estableció: a) la propiedad de las tierras y aguas del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual tiene el derecho de constituir la propiedad privada; b) el régimen de expropiación; c) la propiedad privada subordinada al interés social; d) el régimen de concesiones administrativas; e) prohibición de latifundios; f) autorización de monopolios en determinados servicios públicos; g) capacidades e incapacidades para adquirir el dominio de tierras y aguas; h) el régimen comunal en la explotación de tierras, bosques y aguas; i) el régimen ejidal; j) el régimen de la pequeña propiedad agrícola y ganadera (Carpizo, 1982: 30).

Los artículos 5 y 123 regularon sobre el trabajo. El primero en torno al derecho a este y el segundo desarrolló, de manera prolífica, las relaciones laborales, los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los patronos desde una concepción protectora de la clase obrera. Los aspectos destacables son: a) jornada de ocho horas; b) prohibición del trabajo de menores de doce años; c) prohibidas las laborales insalubres y peligrosas para «mujeres y menores de dieciséis años»; d) descanso semanal; e) protección a la mujer durante la gravidez y lactancia materna; f) salario mínimo digno e inembargable y reparto de utilidades a los trabajadores; g) salario igual a trabajo igual, sin distinción de sexo o nacionalidad; h) obligaciones para los patronos sobre higiene y salubridad en los centros de trabajo; i) derecho a la sindicalización y la huelga; j) Juntas de Conciliación y Arbitraje de naturaleza tripartita (representación del Estado, los empleadores y los trabajadores), para dirimir los conflictos entre el trabajo y capital . Este es uno de los artículos que simbolizó el mayor logro de la clase obrera en México al llevar hasta la Constitución su reconocimiento por primera vez en la historia de las constituciones en el mundo. Más tarde, la famosa Constitución de Weimar en 1919, haría lo propio.

La Constitución de 1917 en México, con reformas sustanciales a la de 1857 —según la discusión que se dio después entre constitucionalistas—, se convirtió en un referente de que las luchas sociales se pueden condensar en derechos de grandes grupos sociales como el del campesinado y la clase trabajadora. A partir de este momento, empezó un largo proceso que llevó casi siete décadas de consolidación del Estado de derecho social en México, en el que siguieron incorporándose derechos sociales, como el derecho a la salud, a la seguridad social laboral, a la vivienda, entre otros. Todo ello implicó un desarrollo robusto de instituciones y políticas públicas sociales que hicieran posible el ejercicio de estos derechos.[2] Quedaron, sin duda, muchas deudas con la sociedad mexicana; hubo problemas de corporativismo, desigualdad, falta de distribución equitativa de la riqueza, pero las bases estaban dadas para continuar profundizando el proyecto social de la CPEUM. Aun así, el problema más serio para el ejercicio de los derechos sociales se presentó con el giro que dio el país hacia el neoliberalismo.

Más de dos décadas de reformas constitucionales de carácter neoliberal (1988-2013)

El giro en la dirección opuesta al Estado social de derecho ocurrió a partir de finales de los años 80. En el período presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988) comenzó el impulso de las políticas neoliberales que tenían correlato jurídico o constitucional. Recordemos que hablar de neoliberalismo es referirse a una corriente económica, política e ideológica que pone en el centro la actuación de los entes privados, propugna el adelgazamiento del Estado en sus funciones sociales, impulsa la privatización de las empresas estatales, liberaliza el comercio internacional; y, sobre todo en los últimos años, lleva hasta sus últimas consecuencias la idea de que las empresas, capitales nacionales y transnacionales participen, a través del control, explotación y administración de áreas estratégicas de un país, entre ellos el petróleo y demás hidrocarburos, o los minerales y la electricidad, por mencionar los más importantes.

Las políticas neoliberales se tradujeron en reorientación de las sociales hacia la privatización de empresas estatales y desregulación para la participación de los privados en sectores que antes eran exclusivos al Estado (como la seguridad social y los hidrocarburos). Además, se realizaron reformas estructurales a la Constitución y a leyes secundarias importantes. Siguiendo a la socióloga Saskia Sassen (2010)

De los procesos sociales y jurídicos neoliberales, que tan profundamente tocaron las bases del Estado de derecho social mexicano, ha sido difícil regresar. Muchas de las legislaciones del período intensivo neoliberal mexicano son denominadas estructuras jurídicas del despojo: mediaciones institucionales para la desposesión, que encubren con legalidad la ilegitimidad de sus intereses.

afirmamos que un nuevo orden privado institucional asociado a la economía global empezó a operar en México cuyas características principales consistían en: a) su capacidad para privatizar lo que antes era público; y b) desnacionalizar los que antes fueron instituciones, políticas y programas de interés público.

Referiremos reformas constitucionales en esas dos grandes direcciones caracterizadas por Sassen, con la finalidad de concentrarnos en la consolidación del proyecto neoliberal realizado a través del ámbito constitucional y legal, sin desconocer que la CPEUM también ha sido objeto de reformas que reconocen y desarrollan derechos humanos y sus garantías, respectivamente. Por una parte, el Estado mexicano realiza modificaciones para reconocer derechos de los pueblos (Artículo 2) y un cambio profundo de derechos humanos (Artículo 1), mientras que, por otro lado, profundiza las reformas estructurales cuyo carácter es expoliador de los recursos naturales y los bienes comunes de la nación y de desregulación para la entrada de los privados en su explotación (artículos 27 y 28).

Una de las primeras enmiendas constitucionales que reorientaron instituciones nacionales hacia el incipiente orden económico global fue la que otorgó autonomía al Banco de México, en febrero de 1983. En ese momento, derivado del Consenso de Washington, se impulsaba en América Latina una serie de reformas estructurales en las que se incluían las autonomías de los bancos centrales frente a los gobiernos nacionales. El objetivo consistía en que las decisiones de política monetaria y financiera estuvieran articuladas con las directrices de los organismos económicos internacionales como el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Entonces, la autonomía de los bancos centrales sería ante el gobierno de turno, pero en dependencia de una política económica global cuyo epicentro estaba representado en esos organismos. En el mismo paquete de reformas al Banco de México también se incluyó la privatización de los ferrocarriles, y se insertó en la Constitución el concepto de concesión para otorgarla a comunicaciones vía satelital (DRC, de 3 de febrero de 1983).

Más adelante se llevaron a cabo dos grandes reformas para seguir en la ruta del proyecto neoliberal, las cuales tuvieron como destinatarios a los trabajadores y a los campesinos. Esta elección no fue fortuita: ambos sectores representaban el carácter social del Estado posrevolucionario. En 1992-1995/1997 se modificó estructuralmente el Seguro Social en México, regulado en el Artículo 123 de la CPEUM referente a las relaciones laborales; en ese sentido, para seguro de salud, de vivienda y de retiro, con un esquema solidario. Con su reforma estructural, los ahorros pasaron a ser administrados por la banca privada, con el respectivo cobro de comisiones; se aumentó la edad de jubilación y se individualizaron las cuentas; con ello se extirpó a la seguridad social lo que tenía de social y solidaria (Hernández Cervantes, 2008). De ahí que se dijera que con esa enmienda se socializarían las pérdidas y se privatizarían las ganancias. Con estas reformas comenzó el desmantelamiento del Estado social en México, pues implicó una forma de retirada del Estado en la protección social a los trabajadores, dejando en la banca privada la administración de las pensiones.

A la par, en 1992, se emprendía otra reforma de gran magnitud, que implicó modificar el emblemático Artículo 27 antes referido. Ello implicó un cambio radical en el campo, en tanto se abría a las asociaciones mercantiles, enajenaba y rentaba los derechos agrarios y la posibilidad de modificar el estatus del régimen de propiedad. Con ello, el Estado empezaba una apertura casi total a la entrada de inversionistas nacionales y extranjeros en el campo, fragilizando los derechos del campesinado sobre la tierra y sus productos.

Con las reformas mencionadas y las privatizaciones de empresas paraestatales, el Estado intervenía para desmantelar una gran parte de sus funciones sociales. Es decir, lo hacía con todo su aparato gubernamental a través de intensos procesos de desregulación jurídica, para desarticular su intervención en ámbitos considerados de interés público a fin de que entes económicos del ámbito privado tuvieran mayor protagonismo y certeza jurídicas (Hernández Cervantes, 2014).

De 2006 a 2012 la ruta jurídica privatizadora volvió a centrarse en los trabajadores. En 2006-2007 se discutió y aprobó la modificación de la Ley del Instituto de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), a fin de pasar a la banca privada la administración de las cuentas de ahorro para el retiro de los empleados en las estructuras del Estado. El modelo de privatización

de la seguridad social, empezada en 1992 con los trabajadores del sector privado, se trasladaba a los de la burocracia.

A pesar de los múltiples intentos del gobierno y de sectores empresariales, en el curso de al menos dos décadas, por variar la Ley Federal del Trabajo, la agenda neoliberal no pudo concretarse sino hasta 2012, cuando el terreno estaba más allanado: la clase trabajadora ya estaba suficientemente debilitada, atomizada e infiltrada por la proliferación de sindicatos de papel, no existentes en términos de organización sindical real, que tenían la función de proteger los intereses empresariales (denominados comúnmente como «sindicatos blancos»), así como la actuación inescrupulosa de los corporativos, surgidos del período posrevolucionario mexicano (Bouzas Ortiz, 2010). La reforma legalizó modos de contratación que dan lugar a relaciones laborales encubiertas como la subcontratación de mano de obra o *outsourcing*. Avanzó en las contrataciones flexibles (contratos a prueba y de capacitación inicial), que permiten un menor compromiso del empleador hacia sus trabajadores, pues generan menos vínculos y obligaciones de largo plazo con ellos; al mismo tiempo, estableció el incentivo de despedir injustificadamente a los trabajadores, pues de comprobarse el hecho, el empleador está obligado a pagar solo un año de salarios vencidos, sin importar lo que durara el juicio. En el debate de esta reforma se dijo que los principales destinatarios eran los jóvenes, que verían más lejana la estabilidad en el empleo, y los colocaba en una zona de incertidumbre permanente. Con estos cambios se dejó sin sustancia, en gran medida los derechos laborales, pues se disminuyó el potencial emancipador que el principio de protección al trabajador confería a todo el derecho laboral (Hernández Cervantes, 2018).

La ruta jurídica neoliberal siguió su camino rumbo a los recursos naturales y las áreas estratégicas. La reforma energética estructural se concretó en diciembre de 2013, mediante los artículos 25, 27 y 28; con ella, los hidrocarburos y la electricidad podrían, aun en parte, ser explotados y controlados por empresas nacionales o extranjeras.

Mientras se debilitaban los derechos sociales al trabajo, a la tierra y a la seguridad social, se fortalecía la apertura para que los privados participaran en las áreas estratégicas del Estado, según lo estipulado en la CPEUM. En ese marco, se intensificaron los procesos de desnacionalización de instituciones estatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las dos grandes empresas paraestatales de producción y distribución de hidrocarburos y de electricidad para todo el país. A través de distintas decisiones gubernamentales, se profundizaron procesos de desarticulación y pérdida de centralidad en su gestión y administración, para dar paso a la intervención de los privados en esas áreas estratégicas.

La ruta jurídica para privatizar lo público en materia energética fue de 1992 a 2013, es decir, desde el período presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), el de Ernesto Zedillo (1994-2000), pasando por los de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), hasta llevarla a su máxima expresión en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El contenido de lo que se modificó cambió sustancialmente la naturaleza de las disposiciones constitucionales y sus objetivos. Fueron dos las características de esas reformas: desregular y privatizar. La primera supone que los controles por parte del Estado a los privados se volvieron más flexibles; se permitió que estos intervinieran y participaran en la administración y gestión de las pensiones, en el campo, y en áreas estratégicas de la nación, antes exclusivas del Estado. Cada una de estas reformas incluyó leyes secundarias de las materias relacionadas.

De esos procesos sociales y jurídicos neoliberales, que tan profundamente tocaron las bases del Estado de derecho social mexicano, ha sido difícil regresar. Muchas de estas legislaciones del período intensivo neoliberal las denominamos *estructuras jurídicas del despojo*: mediaciones institucionales para la desposesión, que encubren con legalidad la ilegitimidad de sus intereses.[3]

Sin embargo, recientemente se han planteado algunos cambios político-jurídicos que intentan desmontar, en parte, las reformas estructurales del período intensivo neoliberal mexicano.

Dos reformas *des-estructurales*: nuevo viraje a lo social (2019-2021)

Al llegar a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 1 de diciembre de 2018, con un proyecto político denominado por él Cuarta Transformación,[4] en el campo de la regulación se dio un giro de timón en materia de trabajo e intervención del Estado en áreas estratégicas como los hidrocarburos, la electricidad y el litio; además, se elevó a rango constitucional el derecho de las personas mayores a percibir una pensión no contributiva, y el de las personas que tienen algún tipo de discapacidad a recibir apoyo económico por parte del Estado, especialmente si son menores de edad, originarias de pueblos indígenas, y afrodescendientes, y las que se encuentran en condición de pobreza.[5]

Por su parte, dos reformas legales han sido de carácter *des-estructural*, impactando, incluso, en la interpretación que se pueda hacer de la propia Constitución. Se denominan así aquellas que tienen

como propósito devolverles al Estado y a lo público su centralidad, así como el restablecimiento de los límites a la participación de los privados en áreas estratégicas de la nación y en la regulación de derechos sociales, como el trabajo. En ese sentido, se revisitarán brevemente las dos grandes reformas legales aprobadas en lo que va del sexenio de López Obrador: a) las laborales de 2019 y 2021; y b) la eléctrica, que incluyó el litio, en 2021. La primera no tuvo una propuesta de modificación constitucional inicial: se concentró en reformas a las leyes del trabajo y la seguridad social; mientras que para la segunda sí se propuso una reforma de la Constitución, pero no fue aprobada por la mayoría calificada que se requería, por lo que solo se reformaron leyes en materia de hidrocarburos y relacionadas.

Si bien en 2017 se realizó una reforma constitucional[6] a los artículos 107 y 123, relativos a las relaciones laborales para el sector privado, la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019 fue de mayor alcance en términos de democratización de tales relaciones y la reestructuración de la justicia laboral. El 1 de mayo de ese año se publicó el Decreto por el que se modifican, adicionan o derogan diversas disposiciones de esa Ley. La reforma avanzó en aspectos de libertad sindical, negociación colectiva, transparencia, rendición de cuentas, justicia laboral, así como en políticas de igualdad de género y atención a los casos de violencia contra las mujeres en los centros de trabajo.

A decir del laboralista Alfonso Bouzas Ortiz (2021: 274), esta reforma laboral es la más importante desde 1917, debido a que se reconoce, en interpretación del texto constitucional, el derecho a la contratación colectiva, haciendo efectivos, a su vez, la democracia y libertad sindical de la clase trabajadora. Se centró en fortalecer la libertad y la democracia sindical, a través de garantizar el derecho a la libre afiliación; a la autonomía de los sindicatos, estableciéndose procedimientos democráticos de representatividad sindical y negociación auténtica; en la justicia laboral expedita, creando una etapa de conciliación obligatoria y estableciendo juicios laborales más ágiles, en presencia de un juez, y privilegiando los principios procesales de oralidad, inmediación, continuidad, concentración y publicidad; en la transparencia sindical, generando mecanismos para que los trabajadores conozcan el uso de sus cuotas sindicales y su destino; y en la inclusión con perspectiva de género. Los sindicatos tendrán un nuevo enfoque en la participación, representación, diálogo y negociación entre sus miembros (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2019).

Uno de los elementos más importantes de esta reforma es que ataja frontalmente la proliferación que ha habido en México de los Contratos de Protección Patronal (CPP), los cuales viciaron el mundo del trabajo, pues sindicatos blancos o de protección (la mayoría de ellos inexistentes en tanto organizaciones reales de trabajadores) ofrecían a las empresas y empleadores una forma de fraude a la ley laboral, al firmar un supuesto contrato colectivo entre empresa y trabajadores (Bouzas Ortiz y Hernández Cervantes, 2007), requisito que exige la Ley Federal del Trabajo al instalarse una empresa con un número grande de trabajadores. Con la Reforma Laboral se establecen procedimientos que democratizan la representatividad sindical e impulsan la negociación colectiva. Este cambio viene a exigirles a los empleadores y al sindicalismo mexicano una transformación en sus relaciones y negociaciones que se considera que debe beneficiar directamente a las condiciones reales de la clase trabajadora.

Si la Reforma Laboral planteó una transformación profunda de las relaciones, las instituciones y la justicia laborales, la siguiente, sobre a la figura del *outsourcing*, aprobada en 2021, revierte la flexibilización que se había instalado con la reforma estructural laboral de 2012.

Con la enmienda al Artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo (Decreto por el que se reforman…, de 23 de abril de 2021) se estableció la prohibición de subcontratar personal, que únicamente se puede hacer por servicios o ejecución de obras especializados que, además, no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de su beneficiaria; además de que se podrá considerar como especializados aquellos servicios u obras complementarias o compartidas entre empresas de un mismo grupo empresarial, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba.

Esas dos grandes reformas le han dado el giro a la laboral de 2012, por ello es *des-estructural* en tanto revierte la desregulación y la flexibilización intensiva, que había colocado a las y los trabajadores en condiciones de mayor desprotección laboral y social.

Por su parte, la reforma energética que propuso AMLO incluía cambios a la Constitución y a las leyes secundarias, sin embargo, no alcanzó las dos terceras partes que se requiere de los integrantes de la Cámara de Diputados. Recordemos que para reformar la Constitución se necesita, además de las dos terceras partes de sus integrantes, la aprobación de la mitad más uno de los 32 congresos locales.

La propuesta de AMLO para reformar los artículos 27 y 28, según el propio documento resumen del Gobierno de la República (2021), pretendía: a) reafirmar la propiedad inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo y la prohibición expresa de otorgar concesiones para exploración y extracción; b) establecer la posibilidad de que la nación otorgue asignaciones o contratos a Pemex,

e incorpora también la posibilidad de otorgar contratos a empresas privadas; c) establecer que la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo deberá afirmarse en las asignaciones o contratos; d) establecer que la exploración y extracción de petróleo y gas son actividades estratégicas; e) establecer que la ley regulará las modalidades de contraprestación por las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas natural, incluyendo contratos de utilidad o de producción compartida, de licencia o de servicios; f) establecer que todas las actividades de exploración y extracción de petróleo y de gas natural son de interés social y de orden público; g) fortalecer las instituciones del Estado en materia de exploración y explotación de petróleo y gas natural.

Con ese proyecto de reforma constitucional en materia energética se proponía, fundamentalmente, revertir la reforma estructural de 2013, recuperando la rectoría del Estado en la exploración y la extracción de hidrocarburos, así como establecer regulaciones más fuertes en torno a la participación de los privados nacionales y transnacionales. Uno de los objetivos pasaba por fortalecer lo público frente a la participación privada en el sector de los hidrocarburos. Pero no se logró.

Así, las reformas *des-estructurales* que se lograron concretar fueron la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (Decreto por el que se reforman y adicionan…, de 9 de marzo de 2021) y la Reforma a la Ley Minera (RIAM, de 4 de mayo de 2023).

Con la primera se recuperó el principio de que el Estado tiene la rectoría en esta área estratégica a través de su planeación, conducción y coordinación; que los permisos para que intervengan los privados se encontrarán sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional, emitidos por la Secretaría de Energía, poniendo así el énfasis en que sea el Estado el que determine la necesidad o no de la participación de los privados en el sector eléctrico; obliga también a que la Comisión Reguladora de Energía pueda revocar los permisos de autoabastecimiento, así como sus modificaciones, en los casos en que hayan sido obtenidos mediante actos constitutivos de fraude a la ley; revisa la legalidad y rentabilidad para el Gobierno Federal de los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica (Cámara de Diputados, 2021).

En cuanto a la Reforma a la Ley Minera, en ella se declara de utilidad pública el litio, estableciéndose que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia; además, se dispuso que donde haya yacimientos de litio será considerada zona de reserva minera. Además, se estableció que las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por el Estado, a través del organismo público correspondiente. Otro elemento importante de la reforma establece que

> en la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio y de sus cadenas de valor será deber del Estado mexicano proteger y garantizar la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas. (Artículo 5)

Estas últimas reformas en el período de AMLO hacen énfasis en regresarle al Estado su rectoría y exclusividad en áreas estratégicas como los hidrocarburos y minerales y, al mismo tiempo, fortalecen el carácter protector a los derechos de los trabajadores en el que se inspiró la Constituyente de Querétaro, en 1917.

El presente artículo se ha propuesto vincular los derechos sociales con áreas estratégicas del Estado (como hidrocarburos y minerales), pues en el período intensivo neoliberal que vivió México hubo una correlación visible: mientras se vaciaba el contenido protector de los derechos sociales, como al trabajo y a la tierra, por ejemplo; por otro lado se privatizaba y desregulaba la participación de los privados en áreas económicas estratégicas, operando así el adelgazamiento del Estado social de derecho. Es esto lo que el gobierno de AMLO está tratando de revertir, si no intensamente desde la Constitución, sí desde reformas legales y de políticas de gobierno orientadas a recuperar el sentido de los derechos sociales.

Reflexión final

Como se pudo observar, el constitucionalismo social mexicano, durante más de un siglo, vivió cambios sustanciales, fundamentalmente en el período intensivo de reformas neoliberales que fue de 1982 a 2018. Una mayoría relevante de reformas, tanto a la Constitución como a las leyes secundarias, se concentraron en modificar el perfil social del Estado y, por lo tanto, al derecho. Dichos cambios tuvieron repercusiones en la vida cotidiana de los grupos sociales y de las comunidades en el país, sobre todo en lo que concierne a derechos sociales y a la explotación de áreas estratégicas como los hidrocarburos. Las reformas neoliberales a la Constitución de 1917 fueron también un paraguas para que se impulsaran megaproyectos de desarrollo con los cuales han operado diversas formas de despojo a las comunidades y pueblos indígenas, cuyos territorios cuentan con recursos naturales que el capital financiero asedia constantemente.

En los últimos cuatro años dentro del sexenio de AMLO, algunas reformas constitucionales y legales, aunque tímidas aún, han propiciado nuevamente el viraje al constitucionalismo social que no solo

es verificable en la propia Constitución sino en la interpretación y el espíritu de las leyes secundarias a la luz de las propias disposiciones constitucionales, como son los casos del Artículo 4 sobre pensiones no contributivas y apoyos económicos, así como del 123 sobre el trabajo, y las referentes a la rectoría económica del Estado en las áreas estratégicas que le son exclusivas. Fortalecer todo lo público parece ser el perfil de las últimas reformas, sin embargo, aún existe mucho por hacer si deseamos un regreso representativo del constitucionalismo social.

Notas

1. Recordemos que las garantías de los derechos fundamentales pueden entenderse como los mecanismos o técnicas predispuestos para su protección (Pisarello, 2007: 11).

2. En *Las políticas sociales de México. Derechos constitucionales, arquitectura institucional, 2000-2008* (Cordera y Ziccardi, 2022) aparecen una revisión y una evaluación exhaustivas de lo que fueron y han sido las políticas sociales en México. En este libro se responde una pregunta fundamental para el período indicado: ¿las políticas sociales respondieron a lineamientos de las económicas neoliberales, en lugar de la perspectiva de derechos reconocidos constitucionalmente? (19).

3. En otros trabajos se ha desarrollado a profundidad el concepto, que pretende explicar y caracterizar las normatividades que tienden a legalizar los procesos que emanan de la acumulación por desposesión (Harvey, 2005). Véase Hernández Cervantes y Burgos Matamoros (2018) y Hernández Cervantes (2019).

4. En referencia a que en México anteriormente se han vivido tres grandes transformaciones: la independencia, en 1810, la reforma, iniciada en 1857 con el presidente Benito Juárez, y la Revolución mexicana, en 1910 (López Obrador, 2021). Una explicación detallada de cada una de las transformaciones referidas puede encontrarse en Sáez (2019).

5. Véase la reforma al Artículo 4 (Decreto por el que se reforma…, de 8 de mayo de 2020)

6. Esta se aprobó en febrero de 2017. Se reformaron los artículos 107 y 123 de la CPEUM, a fin de sentar las bases para modernizar el sistema de justicia laboral del país, y para transformar el régimen sindical y de negociación colectiva. Con ello se buscó cumplir con los compromisos adquiridos por México tanto en el marco de la negociación del CPTPP, como ante el Comité de Libertad Sindical, de la OIT (Banco de México, 2019).

Referencias

Banco de México (2019) «Consideraciones sobre la Reforma Laboral de 2019». Extracto del *Informe Trimestral Enero-Marzo 2019*, mayo. Disponible en <https://acortar.link/rqGE5E> [consulta: 28 mayo 2023].

Bouzas Ortiz, A. (coord.) (2010) *Perspectivas del trabajo en México*. Ciudad de México: UNAM-IIEc.

_____ (2021) «Abandono de la política neoliberal y marco normativo del trabajo». En: *Bienestar y políticas públicas*. Sánchez Vargas, A. *et al*. (coords.), Ciudad de México: UNAM-IIEc.

Bouzas Ortiz, A. y Hernández Cervantes, A. (2007) «Introducción» y «Conclusiones». En: *Contratación Colectiva de Protección en México. Informe a la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT)*. Ciudad de México: UNAM-ORIT.

Cámara de Diputados (2021) «Aprobó la Comisión de Energía dictamen de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica». *Boletín*, n. 5922. Disponible en <https://acortar.link/WTuX0G> [consulta: 28 mayo 2023].

Carpizo, J. (1982) *La Constitución Mexicana de 1917*. UNAM.

Cordera, R. y Ziccardi, A. (2022) *Las políticas sociales de México. Derechos constitucionales, arquitectura institucional, 2000-2008*. Ciudad de México: Siglo XXI Editores.

De la Cueva, M. (1969) «Lo social en la Constitución Mexicana de 1917». *Revista Mexicana del Trabajo*, sexta época, t. XVI, n. 1, enero-marzo.

Ferrajoli, L. (2002) *Derechos y garantías. La ley del más débil*. Madrid: Trotta.

Gobierno de la República de México (2021) *Reforma energética. Resumen ejecutivo*. Disponible en <https://acortar.link/11iXTd> [consulta: 28 mayo 2023].

Harvey, D. (2005) «El "nuevo" imperialismo: acumulación por desposesión». *Socialist Register 2004,* 100-29. Disponible en <https://bit.ly/3ozphGy> [consulta: 28 mayo 2023].

Hernández Cervantes, A. (2008) *La seguridad social en crisis. El caso del seguro social en México*. Ciudad de México: Editorial Porrúa.

_____ (2014) *La producción jurídica de la globalización económica. Notas de una pluralidad jurídica transnacional*. Ciudad de México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí-CEIICH-UNAM.

_____ (2018) *Entre la globalización y el trabajo: los derechos en entredicho*. Aguascalientes-San Luis Potosí: Universidad Autónoma de San Luis Potosí-Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Mispat.

_____ (2019) «Estructuras jurídicas del despojo: un caso de reforma estructural en México». En: *Derecho, conflicto social y emancipación: Entre la depresión y la esperanza*. Benente, M. y Navas, M. (coords.), Buenos Aires: CLACSO. Disponible en <https://acortar.link/Bqd3JS> [consulta: 28 mayo 2023].

Hernández Cervantes, A. y Burgos Matamoros, M. (coords.) (2018) *La disputa por el derecho: la globalización hegemónica vs la defensa de los pueblos y grupos sociales*. Ciudad de México: CEIICH-Bonilla Artigas Editores.

Junta Organizadora del Partido Liberal mexicano (1906) *Programa del Partido Liberal Mexicano y Manifiesto de la Nación*, 1 de junio. Saint Louis.

Kenneth Turner, J. (1999) *México bárbaro*. Ciudad de México: Porrúa.

López Obrador, A. M. (2021) *A la mitad del camino*. Ciudad de México: Editorial Planeta Mexicana.

México. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) *Diario Oficial de la Federación*, 5 de febrero de 1917. Disponible en <https://acortar.link/zXxubq> [consulta: 28 mayo 2023].

_____ Decreto de reforma constitucional a los artículos 16, 25, 26, 27, 28 y 73. *Diario Oficial de la Federación*, 3 de febrero de 1983.

_____ Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 4 de la CPEUM. Ibídem, 8 de mayo de 2020. Disponible en <https://acortar.link/PaqRuS> [consulta: 28 mayo 2023].

_____ Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan… Ibídem, 23 de abril de 2021. Disponible en <https://acortar.link/AKMLBV> [consulta: 28 mayo 2023].

_____ Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Ibídem, 9 de marzo de 2021. Disponible en <https://acortar.link/adVxj5> [consulta: 28 mayo 2023].

_____ Ley Federal del Trabajo, de 12 de junio de 2015. Disponible en <https://acortar.link/HSugBu> [consulta: 28 mayo 2023].

_____ Ley Minera, de 2022. *Diario Oficial de la Federación*, 20 de abril. Disponible en <https://acortar.link/xmTvfK> [consulta: 28 mayo 2023].

_____ Reforma integral de la actividad minera, de 4 de mayo de 2023. Disponible en <https://acortar.link/cAM9Sn> [consulta: 28 mayo 2023].

Pisarello, G. (2007) *Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción*. Madrid: Trotta.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2019) *Hacia un nuevo modelo laboral 2019. Reforma a la Ley Federal del Trabajo*. Dirección General de Concertación y Capacitación Laboral. Disponible en <https://acortar.link/Vk7r9Z> [consulta: 28 mayo 2023].

Sáez, H. E. (2019) «Cuarta Transformación: antecedentes y perspectivas». *Revista Argumento*, a. 32, n. 89, enero-abril, 83-102. Disponible en <https://acortar.link/Hu9Nhf> [consulta: 28 mayo 2023].

Sassen, S. (2010) «Desnacionalización de las políticas estatales y privatización de la producción de normas». En: *Estado, Soberanía y Globalización*. Gunther, T., Sassen, S. y Krasner, S., Bogotá: Siglo del Hombre Editores-Universidad de los Andes-Instituto Pensar, Pontificia Universidad Javeriana.

©TEMAS, 2023

Constitución y derechos sociales en España: crisis y reestructuración económico-social

Albert Noguera
Profesor y jurista.
Universidad de Valencia.

El Artículo 1 de la Constitución Española (CE) de 1978 define al Estado como «*social* y democrático de derecho», expresión con la que se delimita su naturaleza y que lo coloca en una relación intrínseca con la noción de «social». Generalmente, la definición de un Estado como social ha implicado que el fin social impregne todo el articulado constitucional, el cual debe interpretarse en armonía con este fin. Y, de conformidad con esto, en el caso del texto constitucional español, la naturaleza social del Estado se expresa en varios de sus puntos.[1]

Sin embargo, estas previsiones sociales presentan en España un problema en la práctica, la contradicción entre la definición del Estado como social, por un lado, y el tratamiento constitucional degradado de los derechos sociales, por otro. De ahí que podamos hablar de una tensión entre la cláusula de Estado social y el tratamiento constitucional degradado de los derechos sociales. ¿Pero a qué se debe esta tensión?

La tesis que se defiende aquí es que el actual diseño constitucional del sistema de derechos sociales, y sus garantías, en la CE es fruto de lo que llamaremos la acumulación de dos momentos de «solución antidemocrática de las crisis». El hecho de que el modelo constitucional español de derechos sociales y sus garantías sea el resultado de dos momentos de recomposición estructural de las relaciones de clase en favor del capital hace que su introducción en el texto constitucional vigente haya sido meramente nominal, pero no garantista.

La solución antidemocrática de las crisis

Los momentos de crisis son frecuentes en el capitalismo. La teoría de las ondas largas u ondas de Kondrátiev (Brenner, 2003; 2009), la teoría regulacionista (Aglietta, 1982; Lipietz, 1986; Boyer, 1992) o las teorías de los estadios capitalistas y las estructuras sociales de acumulación (ESA) (McDonough, 1995; 1999) han estudiado, desde distintas perspectivas, cómo un determinado modelo de crecimiento entra en crisis y es sustituido por otro. A la vez, las soluciones o formas de huir de las crisis son también diversas en función de la ideología de quien las implementa.

La vía principal que el capital ha utilizado desde los años 70 en adelante, para intentar escapar de las crisis es la que llamaremos «solución antidemocrática de las crisis». Se trata de una solución parasitaria que compensa la imposibilidad de generar nueva riqueza y restablecer las tasas de acumulación mediante la desposesión de derechos a los ciudadanos y la apropiación de la riqueza social.

Esto consta de dos pasos: la construcción de un relato de la crisis capaz de crear en el imaginario colectivo el marco subjetivo adecuado para justificar y legitimar las medidas posteriores; y la adopción de un programa político de reestructuración económica y social.

Todo discurso de la crisis ejerce una doble función de creación y reproducción de nuevas realidades sociales con nuevas lógicas de actuar y pensar. Primero, los ciudadanos lo aceptan y obedecen, puesto que es un relato que proviene de la autoridad legítima (el Poder o el Estado) y, a la vez, genera miedo o es temido por su propia violencia, oculta en el entramado del discurso, en tanto amenaza con lo que puede pasarle al ciudadano (desempleo, pobreza, etc.) si no acepta las medidas propuestas para superar la crisis. Reconocimiento y miedo son siempre causas de obediencia. Y, segundo, los ciudadanos lo reproducen y convierten en lógica de pensamiento y actuación. Una vez aceptado e interiorizado, el discurso de la crisis crea una determinada composición subjetiva de la realidad que se reafirma cada vez que se habla o actúa de conformidad con ella, convirtiéndola en sentido común. Las conversaciones u otros tipos de interrelación personal no son meros códigos inertes de comunicación, sino objetivaciones de sentido que crean y reproducen toda una lógica mental de la organización socioeconómica y una actuación conforme a ella.

En consecuencia, el relato de la crisis permite al Poder construir las creencias, sentidos comunes y comportamientos sobre los que justificar y legitimar una transformación del modelo de Estado. Esto es construir un *discurso Boy Scout de los recortes*: el sufrimiento es inherentemente valioso porque gracias a él se fortalecen nuestras sociedades, igual que una operación dental es un paso desagradable, pero inevitable para la salud oral.

Universalizado el relato de la crisis, el segundo paso de su solución antidemocrática es la adopción de un programa político de reestructuración económica y social consistente en la desposesión de derechos y la apropiación de la riqueza social.

Principales momentos del diseño de los derechos sociales en España

El diseño del sistema de derechos sociales y sus garantías en la CE se configura en dos grandes etapas: una, durante el período de la transición, especialmente 1977-1978, que culmina con la aprobación mediante referéndum del texto constitucional el 6 de diciembre de 1978; y otra que inicia con el período de institucionalización política y jurídica de la Unión Europea (UE) a través del Tratado de Maastricht en 1993, aunque con su período constitucional decisivo a partir de la crisis de 2007-2008 con la reforma del Artículo 135 de la CE en 2011.

Los dos son momentos de huida de la crisis a través de una solución antidemocrática, esto es, de recomposición estructural de las relaciones de clase en favor del capital, lo que ha determinado una configuración meramente nominal, pero no garantista, de los derechos sociales en la CE.

Primera solución antidemocrática. Los Pactos de la Moncloa y la Constitución de 1978

Cuando las Cortes constituyentes se conforman, el 13 de julio de 1977, con el objetivo de redactar el proyecto de Constitución, no partían de cero. La Carta magna de 1978 no es más que la concreción jurídico-formal de un proceso constituyente material, controlado por el régimen, que venía produciéndose desde inicios de los años 70. La muerte de Francisco Franco en 1975 fue precedida por unos años de incertidumbre, inestabilidad y cierto repliegue del régimen sobre sí mismo. Como señala P. Preston (1986: 46), el estado de excepción, la designación de sucesor y las continuas tentativas asociacionistas en 1969 muestran como ya desde entonces existe plena consciencia en el régimen de que se avecina una crisis, confirmada por el atentado a Carrero Blanco en 1973. En un artículo de 1972, R. Fernández-Carvajal planteaba ya la necesidad de conformar un «Derecho Constitucional de anticipación» capaz de establecer las bases sobre las que deberá desarrollarse la evolución *post mortem* del régimen, para evitar su total desfiguración.

En materia económica y social, este derecho constitucional de anticipación tuvo su documento base en el Programa de saneamiento y reforma económica presentado por el vicepresidente para Asuntos Económicos y ministro de Economía, E. Fuentes Quintana, y aprobado en los llamados Pactos de la Moncloa de octubre de 1977.

Los principales problemas con los que se encontraba la burguesía española en los años 70 fueron una situación de fuerte crisis económica, en el contexto de crisis del petróleo en 1973, caracterizada por: baja producción, alto nivel de desempleo, baja inversión, alto nivel de inflación y una balanza comercial deficitaria; y la existencia de una estructura estatal disfuncional a las necesidades de desarrollo del capitalismo en el país.

El plan de estabilidad convertido en los Pactos de la Moncloa es el documento con el que se pretenden solventar ambos problemas. Para ello, recoge un conjunto de medidas a corto plazo que permitan salir de la crisis a través de una estrategia de solución antidemocrática. Y un conjunto de reformas estructurales que permitan adecuar la estructura estatal a las necesidades de desarrollo del capitalismo español en el nuevo escenario *post mortem*.

Las medidas a corto plazo se adecuan claramente al proceso de dos pasos propios de lo que antes hemos llamado una solución antidemocrática a la crisis: la construcción de un relato de la crisis capaz de crear el imaginario colectivo adecuado para justificar y legitimar las posteriores medidas antisociales; y la adopción de un programa político de reestructuración económica y social que cargue el peso de la crisis sobre trabajadores y pequeños y medianos empresarios.

Respecto a la construcción del relato de la crisis, resulta interesante ver la comparecencia televisiva en *prime time*, la noche del 8 de julio de 1977, de Fuentes Quintana, titulada «Ha llegado la hora de la economía», donde en unos quince minutos describe, aportando algunas cifras, un escenario económico catastrófico para, a continuación, pedir «el esfuerzo y colaboración de todos los ciudadanos». Asimismo, en la Resolución aprobada por el Congreso de diputados, el 27 de octubre de 1977, en relación a los Pactos de la Moncloa, resuelve cuatro puntos, el cuarto de los cuales dice: «Llamar a las fuerzas sociales a prestar su apoyo solidario para la superación de la crisis económica que atraviesa nuestro país».

El segundo paso fue la implementación de las medidas a corto plazo que cargan el coste de la crisis, no sobre el capital, sino sobre el trabajo y pequeños empresarios. Entre ellas, una de las medidas antiinflacionistas destinadas a lograr una menor cantidad de dinero en circulación, puesto que su exceso comportaba un aumento de la demanda y, por tanto, de los precios y la inflación, fue la limitación salarial de los trabajadores. El pacto establece topes salariales que son de obligado cumplimiento para la administración y empresas públicas. Para las empresas privadas solo podían ser referenciales, pero las que osaran superarlos perderían toda una serie de beneficios: reducción de impuestos, desgravación fiscal a la exportación, posibilidad de acceso a crédito oficial, etc. Y, además, a la empresa que no los superara se le concedería la posibilidad de reducir la plantilla en 5% de sus efectivos. Así pues, se amarran los cabos para que las limitaciones salariales se aplicaran en la totalidad de empresas españolas (Ferraro, 1978: 39), suponiendo un duro golpe para los trabajadores. Por otro lado, también con un objetivo antiinflacionario de reducir la cantidad de dinero circulante, se limitó el crédito privado mediante la reducción de los recursos del sector público al sistema crediticio y la limitación de las dotaciones al Crédito Oficial. Estas reducciones crediticias afectaron, principalmente, al sector empresarial con menor capacidad de autofinanciación, pequeñas y medianas empresas. Como señala C. Ferraro (1978: 35), aunque los pactos hacen alusión a este problema, se trata de una mera declaración formal, puesto que, al fin y al cabo, la banca asigna sus créditos a «sus» empresas y a las de probada rentabilidad, que no son las de menor volumen de capital. De esta manera, la reducción del crédito implicó, en la práctica, una aceleración del proceso de concentración del capital en pocas manos.

Todas estas medidas antiinflación permitieron una desaceleración de los precios, reduciendo la inflación, pero tuvieron consecuencias desastrosas para trabajadores y pequeños y medianos empresarios.

A la vez, con el supuesto objetivo de reducir el desempleo, se adoptan otras medidas a corto plazo que precarizan el mercado laboral y reducen costes empresariales. Los pactos establecen las bases para la adopción del Real Decreto 3280/1977, por el que se dictan normas sobre derecho de bonificación de hasta 50% en las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que contraten, con carácter temporal y con duración determinada, trabajadores en situación de desempleo. Así como el Real Decreto 3281/1977, sobre empleo juvenil, según el cual las empresas que contraten temporalmente a jóvenes, además de la posibilidad de despedirlos fácilmente, se beneficiarán con una bonificación de 50% en las cuotas de la Seguridad Social y con beneficios de asistencia técnica y material para acciones de formación, reconversión o adaptación profesional.

Al conocer que estas medidas no iban a solventar el desempleo, luego se adoptan otras destinadas a apaciguar la posible conflictividad social que las primeras podían suponer. Así el Real Decreto-Ley 44/1977, trata sobre la ampliación del plazo de percepción de las prestaciones por desempleo, aunque

solo en «supuestos excepcionales», por un período de seis meses más en 1978. No cabe duda que, en consecuencia, estas medidas conforman una clara solución antidemocrática a la crisis.

En paralelo a las medidas a corto plazo, los Pactos de la Moncloa incluyen también reformas estructurales que pretendían consolidar el sistema capitalista al adecuar factores y sectores que en aquel momento resultaban disfuncionales. Algunas de las medidas adoptadas fueron una reforma del sector público o educacional.

La burguesía española era consciente de que las instituciones del primero debían jugar un papel fundamental en el establecimiento de las condiciones políticas y económicas necesarias para que pudiera darse el desarrollo y consolidación de una nueva forma de capitalismo avanzado en España. Ya fuera mediante una labor inversora en sectores poco rentables, animando a la inversión privada u ocupándose de los servicios sociales que el mercado desatendía y que eran necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo. Es con este objetivo que se adopta una reforma del sistema fiscal y el establecimiento de mecanismos de control del gasto público destinados a mejorar la financiación del Estado.

Otro ámbito de especial trascendencia para la capacitación técnica de la fuerza de trabajo era la educación. Durante el franquismo, esta no cumplía esa función, ya que no educaba a la totalidad de la población, por su mala calidad, por la escasez de grados medios, licenciados universitarios que no se adaptaban por su formación a los nuevos puestos de trabajo, etc. La adopción, en agosto de 1970, de la Ley General de Educación y las medidas concretas dentro del Plan Extraordinario de Escolarización previsto en los Pactos de la Moncloa, fueron las encargadas de llevar a cabo las transformaciones que la educación requería para adaptarse a las necesidades del sistema.

En resumen, tal como hemos dicho antes, la positivización, en 1978, del sistema de derechos sociales en el texto constitucional no es más que la concreción jurídico-formal de un proceso constituyente material de reestructuración de las relaciones de clase a favor del capital que, controlado por el régimen, venía produciéndose desde inicio de los años 70.

Segunda solución antidemocrática. Gobernabilidad europea y reformas jurídicas en España

La fusión y expansión global de las llamadas empresas transnacionales durante la década de los 80 y 90, y el cada vez mayor agotamiento de los recursos naturales, llevó, a inicios de 2000, a una nueva crisis económica mundial causada, entre otros aspectos, por la incapacidad del capital de encontrar nuevos espacios de reinversión rentable para el excedente producido.

Esto se va haciendo cada vez más difícil según aumenta, exponencialmente, el excedente, y a la vez se agota el espacio de expansión y los recursos. Así, si en 1950 esa expansión suponía reinvertir con esperanza de rentabilidad unos 150 mil millones de dólares, y en 1973 unos 420 mil millones, en 2009 era necesario encontrar oportunidades rentables de inversión global para 1,6 millones de millones (Piqueras, 2014: 142). El problema con el que se encuentra el Capital es que ya no hay espacios en la economía global para nuevas reubicaciones espaciales que permitan absorber esta cantidad de capital excedente, ni líneas de producción ni recursos para protagonizar una expansión de ese tamaño.

La solución a esta crisis fue la reinversión de todo el excedente sobre-acumulado fuera de la producción en el sector financiero-especulativo, dando lugar al paso de un modelo de economía productiva a uno de economía financiarizada. El sector financiero deja de tener como función principal dar vida a la economía productiva, para hacerse objeto de inversión, ganancia y acumulación por sí mismo a través de la especulación. Junto con el crédito privado, en países como Alemania o Francia, la especulación financiera se concentró, principalmente, en la concesión de créditos a la banca de los países de la periferia europea. Los bancos alemanes y franceses son los máximos acreedores del sistema financiero español. En el sur de Europa se concentró la especulación inmobiliaria.

El estallido de la llamada crisis financiera en 2007-2008 y la imposibilidad desde 2009 de varios Estados (Grecia, Portugal) de sostener la deuda pública, disparó todas las alarmas de los grandes capitales financieros que vieron peligrar sus beneficios y llevó, ante el peligro de expansión de la crisis hacia nuevos países como España o Italia, a la necesidad de adoptar medidas urgentes para hacer frente a esta situación y garantizar que los Estados pudieran y estuvieran obligados a pagar la deuda que asegurara mantener los ingresos de las grandes entidades financieras. Se produce aquí otro momento de solución antidemocrática de la crisis basado en el mantenimiento de las tasas de beneficio del capital mediante el saqueo de lo público.

Las reformas adoptadas con el objetivo de garantizar la existencia de estados o administraciones públicas con economías saneadas —elemento, como se ha dicho, fundamental e indispensable para la reproducción ampliada del capital financiero (bancos y entidades de inversión)— fueron de dos tipos. Por un lado, se adoptaron reformas del gobierno económico de la UE utilizando sus propios mecanismos internos del derecho, básicamente nos referimos a la modificación del Artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de

Que en España la constitucionalización del Estado social ocurra a finales de los 70, en el marco de una crisis y de su solución antidemocrática, hace que la integración del conflicto capital-trabajo en el interior de la CE se produzca a favor del libre mercado y en perjuicio del trabajo.

la UE (TFUE), a la adopción del Protocolo 12 sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, al semestre europeo y al *Six-Pack*. Estas últimas seis medidas fueron complementadas, en febrero de 2013, con el llamado *Two-Pack*. Y, por otro lado, se han ido aprobando nuevos mecanismos de gestión de la crisis en el seno de los países de la zona euro, mediante normas ajenas al derecho de la UE, aunque estrechamente vinculadas con ella (LO 3/2012). Estos son, principalmente, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TECG) y al Tratado constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

Es en el marco de este conjunto de reformas que se produce en agosto de 2011 la reforma del Artículo 135 de la CE y la aprobación, en 2012, de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El 26 de agosto de 2011, los portavoces de los partidos popular y socialista entraron por registro del Congreso la proposición de reforma constitucional del Artículo 135 de la CE, conforme a lo dispuesto en los artículos 167 de aquella y 146 del Reglamento del Congreso de Diputados (RCD) (R, de 24 de febrero de 1982). Además, se solicitó la tramitación en lectura única (Artículo 150 del RCD) y por urgencia (artículos 93 y 94). La reforma constitucional, calificada por algunos como *express*, se aprobó sin haber aceptado ninguna enmienda, sin consultar al Consejo de Estado y sin referéndum[2] y, finalmente, se publicó el 27 de septiembre de 2011.

Con el objetivo de garantizar el traspaso directo de dinero del Estado al capital financiero, el Artículo 135 de CE introduce la constitucionalización de la prioridad del pago de la deuda pública y de la cláusula de estabilidad presupuestaria y límite del déficit público.

En cuanto al pago de la deuda, el nuevo apartado tercero del modificado Artículo 135 introduce un elemento sin precedentes en la historia del constitucionalismo. La constitucionalización de la obligación de las administraciones públicas de dar «prioridad absoluta» en sus presupuestos al pago de los intereses y del capital de la deuda pública sobre otras inversiones, aunque con ello se sacrifiquen otros objetivos o derechos constitucionales como la protección social.

Y en cuanto a la estabilidad presupuestaria o límite del déficit público, se establece que «todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria» (135.1) y que «el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea» (135.2). Las entidades locales deberán presentar, también, equilibrio presupuestario. Hay que tener en cuenta que, a estos efectos, el tenor literal del artículo se refería solo al Estado, mientras que era el 14 de la CE, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LO 8/1980), el que preveía la autorización del Estado y la coordinación con él, y el Real Decreto Legislativo 2/2007, de estabilidad presupuestaria, el que contemplaba el grado de cumplimiento de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de la Administración local (Ripollés, 2013: 81).

El límite concreto de déficit permitido no se fija en la Constitución, que se limita a prohibir que este supere el valor de referencia establecido en el TFUE, esto es 3% del PIB (Artículo 135.3). La disposición adicional única de la ley de reforma reenvía su concreción a una ley orgánica que debía ser aprobada antes del 30 de junio de 2013. En este sentido, es la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LEPSF), aprobada meses más tarde, que fija el déficit estructural de las administraciones públicas en no superior a 0,4% del PIB (Artículo 11.2), y fija el límite de deuda de las administraciones públicas, que no podrá superar el valor de referencia de 60% del PIB expresado en términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea (Artículo 13.1).

La constitucionalización de la cláusula de estabilidad presupuestaria no es más que otra salida antidemocrática a la crisis.[3] La imposibilidad de endeudarse del Estado provoca, como consecuencia, menos inversión en gasto público social. Es evidente que la reducción del presupuesto a causa de no poder pedir créditos implica una reducción de la actividad prestacional por parte de la administración.

Los recortes en sanidad, educación, seguridad social, etc. han estado durante años a la orden del día. Ello conlleva, a la vez, que los riesgos sociales quedan cada vez menos cubiertos por el Estado en forma de salario diferido o indirecto como ocurría en el Estado social, ya que ahora han de cubrirse personalmente por cada uno en el mercado, teniendo que contratar fondos de pensiones y seguros médicos privados, etc. El incremento de estos proporciona flujos abundantes

de recursos financieros al capital privado para negociar y obtener grandes beneficios con ellos. Las razones verdaderas de la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria es el mantenimiento de las tasas de beneficios del capital financiero, en tiempos de crisis, mediante la desposesión de derechos y la apropiación de la riqueza social.

Es en este otro momento de solución antidemocrática a la crisis que se completa el actual diseño constitucional del sistema de derechos sociales en la CE.

El sistema de derechos sociales y sus garantías en la Constitución de 1978

Tal como hemos afirmado, el hecho de que el sistema de derechos sociales y sus garantías en la CE sea el resultado de dos momentos de solución antidemocrática a la crisis o dos momentos de recomposición estructural de las relaciones de clase en favor del Capital, hace que su introducción en el texto constitucional vigente haya sido de carácter meramente nominal, pero no garantista.

Ello se hace patente con un simple y rápido análisis del estatus jurídico de los derechos sociales en el interior de la Constitución del 78.

Desnaturalización del Estado social y el desequilibrio constitucional a favor del mercado

El Artículo 1.1 de la CE establece la cláusula del Estado social. La diferencia entre el liberal y el social se encuentra en el binomio inclusión-exclusión. Mientras en el siglo XIX, el liberal era monoclase, del que estaba excluido el trabajo; el Estado social surge, en el siglo XX, como fruto de un pacto capital-trabajo caracterizado por la integración del segundo a la Constitución, de manera que pasamos a un Estado pluriclase en cuyo interior se da un equilibrio constitucional redistributivo de poder e instrumentos de autodefensa de intereses entre las organizaciones empresariales y los sindicatos. Se da una paridad constitucional entre mercado y Estado. El Estado social en los países europeos, durante las décadas de los 40 a los 70, supone, en consecuencia, la integración, en condiciones de equilibrio, de la contradicción capital-trabajo en el texto constitucional (De Cabo, 2010: 81).

No obstante, el hecho de que en España la constitucionalización del Estado social ocurra a finales de los 70, en el marco de una crisis y de una solución antidemocrática de la misma, hace que la integración del conflicto capital-trabajo en el interior de la CE de 1978 no se produzca en términos de equilibrio constitucional redistributivo entre clases sociales, sino de clara asimetría de los dos sectores, a favor del libre mercado y en perjuicio del trabajo (Maestro, 2002: 153).

Existe en el sistema económico de la CE una centralidad de los poderes privados y la economía de mercado, que constituyen el eje central del modelo, y una subordinación de los poderes sociales y la intervención pública, constitucionalmente normativizados, a la acumulación privada. Se otorga a estos últimos la función de ordenar y proteger el normal funcionamiento del libre mercado (Ariño, 1985). Con lo cual, no puede hablarse de una paridad constitucional redistributiva, sino de una subordinación de lo público-social a lo privado.

Tal desequilibrio que favorece al libre mercado se garantiza mediante la restricción de los instrumentos correctores a favor del trabajo en la redistribución de poder entre aquel y capital. Limitación que se plasma en la constitucionalización de una concepción individualista del derecho al trabajo, una constitucionalización débil de los sindicatos, una regulación restrictiva de los instrumentos de autotutela del trabajo (Maestro, 2002: 157-8), o el carácter presupuestario subsidiario de los derechos sociales frente al pago de los intereses de la deuda al capital.

Para poner un ejemplo de ello, podemos centrarnos en la manera cómo se produce la constitucionalización de los derechos sociales de libertad sindical y huelga.

En la tradición del Estado social, aquella significa reconocer el sindicato como sujeto político. En la tradición iusprivatista, significa reconocerlo como agente contractual, que son cuestiones totalmente distintas.

Como señala J. García Abellán (1984), el reconocimiento del sindicato como sujeto político significa «el reconocimiento normativo de la existencia de una o varias clases subalternas frente a otras dominantes y de su objetiva posición subordinada en las relaciones sociales, delimitándose el reconocimiento normativo de un interés colectivo y contrapuesto» (114-5). El reconocimiento de la libertad sindical en este sentido explicita el carácter conflictual y clasista de este derecho, al que se dota expresamente de una potencialidad en torno a su incidencia global en el sistema. De acuerdo con esto, la libertad sindical lleva implícita la defensa de intereses globales de clase que afectan a la totalidad del sistema y adquiere una potencialidad transformadora (Maestro, 2002: 175) y de disputa de poder al mercado. Entendido así, el reconocimiento constitucional de la libertad sindical constituye un instrumento claro de equilibrio redistributivo de poder entre capital y trabajo.

Por el contrario, en el reconocimiento del sindicato como agente contractual priman los aspectos subjetivos e individuales sobre los objetivos y colectivos. La visión contractualista del sindicato lo entiende como un

instrumento apolítico de agrupación de trabajadores, limitado al ámbito económico-profesional, para negociar, dentro del mercado, las condiciones de trabajo y su precio con criterios mercantiles. Por ello, el reconocimiento constitucional de la libertad sindical no supone un modelo en cuyo interior existe una paridad redistributiva de poder entre capital y trabajo, sino uno donde el paradigma preferente es el libre mercado, en el seno del cual el sindicato actúa como portavoz de intereses parciales de vendedores de fuerza de trabajo.

Como afirma G. Maestro (2002: 180), la constitucionalización de la libertad sindical en la CE se hizo en clave privatista-contractualista. El Artículo 7 CE establece que los sindicatos contribuyen a la defensa y promoción de los «intereses económicos y sociales *que les son propios*». El abordaje que el TC ha hecho, en varias de sus sentencias, sobre el alcance de la expresión «que les son propios», parece someterlos a límites que impiden trascender a los sindicatos de funciones económico-profesionales de naturaleza meramente contractual.

Además, el desarrollo que el TC hizo del derecho a la huelga viene a confirmar esta interpretación contractualista del sindicato en la CE. En la Sentencia 11/1981, el TC declara lícitos los distintos tipos de huelga conectados a la noción de sindicato como agente privatista-contractualista. Estos son la huelga contractual (conectada a la negociación colectiva en el marco de la relación trabajadores-empresarios), la profesional (conectada con la reivindicación frente a instancias que no son la contraparte de un contrato de trabajo, de intereses colectivos que no pueden apartarse del ámbito profesional) y la de solidaridad (conectada a una reclamación económico-profesional que afecta a colectivos de trabajadores distintos a los que protagonizan la huelga). Pero, sin embargo, declara como ilícita y abusiva la huelga política que es la que se relaciona directamente con la consideración del sindicato como sujeto político, en tanto que es aquella relacionada con motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores y que permite a estos intervenir y poder transformar el sistema de relaciones políticas, económicas y sociales del país.

En consecuencia, la regulación restrictiva del trabajo y sus mecanismos de lucha hace que la CE no constitucionalice un equilibrio de poder entre capital y trabajo, lo que constituía un elemento definitorio del Estado social de posguerra, sino un modelo de desequilibrio constitucional donde los elementos privatistas conforman la centralidad del modelo, y la intervención pública y los poderes sociales se integran de manera subordinada a aquel con la misión de ordenar y proteger su natural funcionamiento.

Desnaturalización de los derechos sociales y sus garantías en la CE de 1978

La CE no solo instituye un modelo caracterizado por la desnaturalización del Estado social de posguerra y el desequilibrio constitucional en favor del mercado, sino que otorga, además, un estatus jurídico totalmente degradado a los derechos sociales.

Uno de los principales debates en materia de derechos ha sido, tradicionalmente, el de su desigual trato en relación con los derechos civiles y políticos. En la CE, con excepción de la educación, la libertad sindical y la huelga (artículos 27 y 28) considerados como un derecho fundamental, y el trabajo, la negociación colectiva y las medidas de conflicto colectivo que considera como derechos no fundamentales, se ubica al resto de los derechos sociales (seguridad social, salud, vivienda, pensiones, etc.) fuera de las Secciones 1 y 2 del Capítulo II y dentro del III (Principios rectores de la política social y económica, artículos 39-52), con la categoría no de derechos, sino de principios.

De esta diferente categorización entre derechos fundamentales, derechos y principios se desprenden grados distintos de protección para cada grupo. El Artículo 53 otorga a los principios del Capítulo III un grado de protección muy inferior que a los derechos ubicados en las Secciones 1 y 2 del II. Mientras que los derechos fundamentales (Sección 1) podrán alegarse, por el simple hecho de estar reconocidos en la CE, ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el TC; los derechos (Sección 2) y los principios del Capítulo III solo podrán alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con el contenido de las leyes que los desarrollen, con la diferencia que mientras en los primeros la CE establece que el legislador está obligado a respetar el contenido esencial de los derechos, en el caso de los principios no se establece explícitamente.

Ello ha convertido, en la práctica, a estos últimos (seguridad social, salud, vivienda, pensiones, etc.) en derechos de libre configuración legislativa; esto es que su realización y regulación depende exclusivamente de la voluntad de la mayoría parlamentaria de turno, sin que existan ningún límite proteccionista de su contenido esencial ni mecanismos de defensa jurisdiccional frente a una legislación regresiva en esta materia.[4]

La inexistencia de una obligación de aplicabilidad directa y de garantías jurisdiccionales de los derechos sociales hace que su justiciabilidad dependa, exclusivamente, de la voluntad política del gobierno de turno y del Presupuesto General del Estado. Sin embargo, la inclusión mediante reforma del Artículo 135 CE del principio de estabilidad presupuestaria y la obligación de «pago prioritario» de la deuda pública,

así como la aprobación de la LO 2/2012, restringe constitucionalmente el margen de maniobra de los gobernantes, cerrando la posibilidad de garantía de los derechos sociales también por vía de políticas públicas. La estrecha vinculación entre derechos sociales y presupuesto hace que la limitación de déficit público acentúe la regresividad de derechos sociales y el desplazamiento de la protección de riesgos desde el Estado a los particulares, creciendo los fenómenos de pobreza y exclusión.

Notas

1. De acuerdo con el Artículo 40.1, los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa; el 50 afirma que los poderes públicos promoverán el bienestar de los ciudadanos mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. El 39.1 establece que los poderes públicos asegurarán la protección social de la familia.

2. El Artículo 167 de CE otorga la posibilidad de que, una vez aprobada la reforma constitucional por las Cortes, esta pueda ser sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

3. Antes de la reforma, el Estado ya tenía competencias, según los artículos 149.1.13 y 14 de CE, para dictar medidas de obligatorio cumplimiento que limitaran global o parcialmente la capacidad presupuestaria. Además, existía también la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, cuyo texto refundido se aprobó por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, que exigía el compromiso de estabilidad presupuestaria de los entes públicos. Sin embargo, la reforma del Artículo 135 blinda esta obligación, implicando que lo que antes el Estado «podía» hacer, ahora lo «tiene» que hacer.

4. El carácter de libre disponibilidad del contenido material de los derechos sociales, e incluso de su posible regresividad, ha sido avalado por el propio TC, que ha subrayado el carácter no vinculante de los medios necesarios para cumplir los fines o las prestaciones constitucionales (S 222/1992; S 189/1987). A ello se debe añadir que el TC tampoco ha acogido el criterio de irreversibilidad de los derechos, sino que desde sus inicios ha consagrado la posibilidad de regresividad como principio que permite la disponibilidad del contenido material de los derechos sociales (S 134/1987).

Referencias

Aglietta, M. (1982) *Regulación y crisis del capitalismo*. Madrid: Siglo XXI.

Ariño, G. (1985) «La Constitución económica». En: *Constitución Española de 1978*, t. X. Madrid: EDR.

Brenner, R. (2003) *La expansión económica y la burbuja bursátil*. Madrid: Akal.

_____ (2009) *La economía de la turbulencia global.* Madrid: Akal.

Boyer, R. (1992) *La teoría de la regulación. Un análisis crítico*. Valencia: Edicions Alfons el Magnànim-IVEI.

Constitución Española. *BOE*, n. 311, 29 de diciembre de 1978.

De Cabo, C. (2010) *Dialéctica del sujeto, dialéctica de la Constitución*. Madrid: Trotta.

España. Acuerdos de cortes sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y sobre el programa de actuación jurídica y política. Resolución del Congreso de diputados, de 27 de octubre de 1977. [*B. O. de las Cortes*, n. 26, de 3 de noviembre]. En: *Los Pactos de la Moncloa*. Madrid: Servicio Central de Publicaciones/Secretaría General Técnica Presidencia del Gobierno, 35-6. Disponible en <https://bit.ly/3olHG9P> [consulta: 21 mayo 2023].

_____ Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. *BOE*, n. 187, 6 de agosto. Disponible en <https://bit.ly/2L8JICx> [consulta: 21 mayo 2023].

_____ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. *BOE*, n. 103, de 30 de abril de 2012. Disponible en <https://bit.ly/2K50dRt> [consulta: 21 mayo 2023].

_____ 3/2012, de 25 de julio. *BOE*, n. 178, de 26 de julio de 2012. Disponible en <https://bit.ly/42ThjqI> [consulta: 21 mayo 2023].

_____ 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. *BOE*, n. 236, 1 de octubre de 1980. Disponible en <https://bit.ly/42Z65kA> [consulta: 21 mayo 2023].

España. Protocolo 12, sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo. *DOUE,* n. 306, 17 de diciembre de 2007.

_____ Real Decreto 3280/1977, de 9 de diciembre, por el que se dictan normas sobre derecho de bonificación en las cuotas a la Seguridad Social. *BOE*, n. 308, 26 de diciembre. Disponible en <https://bit.ly/3OxU0OS> [consulta: 21 mayo 2023].

_____ 3281/1977, de 16 de diciembre, para desarrollo de la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 43/1977, de 25 de noviembre, sobre política salarial y empleo. (Sobre empleo juvenil). Ibídem.

España. Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. *BOE*, n. 313, 31 de diciembre. Disponible en <https://acortar.link/XAQZUp> [consulta: 19 mayo 2023].

_____ Real Decreto-Ley 44/1977, de 21 de diciembre, sobre ampliación del plazo de percepción de las prestaciones por desempleo de la Seguridad Social en supuestos excepcionales. *BOE*, n. 308, 26 de diciembre de 1977. Disponible en <https://bit.ly/3BJeUDh> [consulta: 21 mayo 2023].

_____ Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011. *BOE*, n. 233. Disponible en <https://bit.ly/3MLbLsC> [consulta: 21 mayo 2023].

_____ Resolución, de 24 de febrero de 1982, por la que se ordena la publicación en el *Boletín Oficial del Estado* del nuevo Reglamento del Congreso de los Diputados. *BOE*, n. 55, 5 de marzo. Disponible en <https://bit.ly/3Woiufk> [consulta: 21 mayo 2023].

_____ Sentencia 11/1981, de 8 de abril. *BOE*, n. 99, 25 de abril. Disponible en <https://bit.ly/42R2Vzr> [consulta: 19 mayo 2023].

_____ 222/1992, de 11 de diciembre. *BOE*, n. 16, 19 de enero de 1993. Disponible en <https://bit.ly/3q2GmZK> [consulta: 19 mayo 2023].

_____ 134/1987, de 21 de julio. *BOE*, n. 191, de 11 de agosto. Disponible en <https://bit.ly/3lpURxj> [consulta: 19 mayo 2023].

_____ 189/1987, de 10 de noviembre. *BOE,* n. 297, de 12 de diciembre de 1997. Disponible en <https://bit.ly/3lrrNWb> [consulta: 19 mayo 2023].

España. Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria. *BOE,* n. 178, 26 de julio de 2012.

Fernández-Carvajal, R. (1972) «El Gobierno, entre el Jefe del Estado y las Cortes (I)». *Revista de Estudios Políticos*, n. 6, 183-4.

Ferraro, C. (1978) *Economía y explotación en la democracia española. Análisis de los pactos de la Moncloa*. Madrid: Zero.

García Abellán, J. (1984) *Curso de derecho sindical*. Universidad de Murcia.

Lipietz, A. (1986) «Behind the crisis: The exhaustion of a regime of accumulation. A regulation school perspective on some French empirical works». *Review of Radical Political Economics*, v. 18, n. 1-2.

Maestro, G. (2002) *La Constitución del trabajo en el Estado social*. Granada: Comares.

McDonough, T. (1995) «Lenin, imperialism and the stages of capitalist development». *Science & Society*, v. 59, n. 3, 339-67.

_____ (1999) «Gordons accumulation theory: The highest stage of stadial theory». *Review of Radical Political Economics*, n. 31, 153-73.

Piqueras, A. (2014) *La opción reformista: entre el despotismo y la Revolución.* Barcelona: Anthropos.

Preston, P. (1986) *El triunfo de la democracia en España: 1969-1982*. Barcelona: Plaza & Janés.

Ripollés, M. R. (2013) «La reforma constitucional española de 2011: antecedentes, tramitación y el epígono de la LO 2/2012». *Corts. Anuario de Derecho Parlamentario,* n. 27, 73-93.

©TEMAS, 2023

La vivienda y los derechos sociales en la gestión pública venezolana actual

Luz Marina Toro Vegas
Abogada, docente e investigadora.
Universidad Central de Venezuela.
Fernando Giuliani Nacheli
Psicólogo social y docente.
Universidad Central de Venezuela.

La vivienda ha sido y es una necesidad de primer orden para la vida humana, por lo que ocupa un lugar de atención en todas las sociedades. De ahí que se hayan desarrollado, para el abordaje de esta problemática, diversas perspectivas y modelos que varían según el contexto.

Como ha sucedido en gran parte de la región latinoamericana y caribeña, en Venezuela este asunto muestra un panorama sumamente complejo, en el cual convergen múltiples factores: técnicos, económicos, políticos, jurídicos, sociales y culturales.

Para el presente análisis, tomaremos como punto de partida el inicio de la explotación petrolera, a partir de la segunda década del siglo xx. Esta actividad dio lugar a aceleradas transformaciones de la sociedad venezolana, entre las que destaca la migración del campo a la ciudad; proceso que fue generando un crecimiento sostenido de los centros urbanos y convirtió a la vivienda en un serio problema para los planificadores y la población. Las más afectadas fueron las mayorías más pobres, que ocuparon las zonas marginales de las grandes ciudades y originaron el desarrollo de los barrios.[1]

A medida que la Venezuela petrolera y urbana fue sustituyendo a la rural y se consolidaron los grandes núcleos urbanos, fue creciendo la presión sobre la demanda de la vivienda. Si bien hubo diferentes iniciativas para su solución, el problema se tornó más grave, y en las últimas décadas del siglo xx, aumentó críticamente cuando se intentó aplicar, como en casi todos los países de la región, el modelo neoliberal impuesto por los grandes centros de poder político y económico.

Los programas de gobierno de los presidentes Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y Rafael Caldera (1994-1999) —conocidos, respectivamente, como «El gran viraje» y «Agenda Venezuela»— trataron de implementar esa política, por lo que fueron diseñados y aplicados siguiendo las recetas del neoliberalismo de la época (CORDIPLAN, 1989; 1995). Su ejecución enfrentó serios obstáculos y una fuerte resistencia popular, que se venía gestando desde años anteriores, y dejaron un saldo altamente negativo para el país. En ese sentido, a finales del siglo xx, el panorama era muy crítico: altos niveles de pobreza, desigualdad y exclusión; vaciamiento y reducción del Estado en la atención de los derechos fundamentales de la población; atraso científico, tecnológico e industrial, con elevada dependencia; y crisis generalizada de liderazgo político, social y económico (Cova, 1996; Kornblith, 1996; España, 1997).

Dentro de este contexto, la vivienda mostraba un déficit estructural crónico, donde confluían mecanismos de especulación sobre el valor de los terrenos, baja industrialización en la construcción y producción de insumos, escasos niveles constructivos, entre otros. Se convirtió en un producto regido por el mercado, cuyos principales actores fueron el sector privado de la construcción y la banca hipotecaria, muy lejos de las necesidades de las mayorías populares, excluidas de toda posibilidad de acceso, por lo que estas siguieron apelando a la autoconstrucción en los barrios (Baldó y Villanueva, 1994; Grohmann, 1996; Rosas, 2004). Por su parte, los sectores medios solo podían alcanzar una vivienda bajo condiciones extremas de crédito que expoliaban sus recursos y esfuerzos, y los obligaban a concentrarse, casi exclusivamente, en ese fin (Cilento, 1999; Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, 2022).

La vivienda como un derecho social

En 1999, con la llegada de Hugo Chávez al gobierno, se inicia el programa revolucionario bolivariano, que propone refundar la Patria mediante un conjunto de transformaciones estructurales en la sociedad. El punto de partida de este nuevo tiempo político fue el proceso constituyente que el propio mandatario convocó al asumir la presidencia, tal como había ofrecido en su campaña. Así se definieron las bases constitucionales que servirían de brújula y sustento jurídico para poder avanzar en las grandes transformaciones que requería el país.

La nueva Constitución (1999) contiene varias novedades en relación con las anteriores; de las cuales, debido a los objetivos de este artículo, solo nos interesa destacar algunas, como la adopción del modelo de democracia participativa y protagónica, que apunta a una novedosa concepción del poder y de la democracia.[2] Asimismo, la declaración como prioritarios de los derechos humanos y sociales, asumidos y ejercidos de forma corresponsable entre el Estado y la ciudadanía. Entre ellos se incluye, en el artículo 82, el derecho a la vivienda.

La gestión en materia de vivienda —ahora concebida como un derecho social—, que integra el hábitat, la familia y la comunidad, así como la participación, requirió de grandes esfuerzos para diseñar e implementar planes y programas que respondieran a esta nueva visión, e implicó reconfigurar el Estado, a fin de que sus instituciones contaran con los equipos y recursos necesarios para asumir un nuevo rol. También se debió enfrentar el grave déficit histórico de la sociedad en esta materia y en el resto de los derechos sociales, de los cuales estaban excluidas las mayorías pobres. Todo sería asumido como una deuda social, y debía hacerse desde una gestión pública participativa (Romero, 2001; Giuliani, 2011).

Progresivamente, se fueron conformando los equipos y las instituciones que, junto con organizaciones comunitarias y movimientos sociales, se encargarían de llevar a cabo esta reforma de manera integral, considerando, por un lado, el mejoramiento de lo ya existente —barrios y urbanizaciones populares creadas antes de 1999— y, por otro, la construcción de nuevas viviendas. También se abordó el problema de la población damnificada por catástrofes y eventos naturales, como inundaciones y deslizamientos de tierra. Cabe destacar que la construcción y ejecución de esas políticas públicas implicaba un permanente desarrollo conceptual y metodológico que les diera sustento técnico, ético y político, al tiempo que aparejaba el desarrollo y adecuación de la normativa jurídica requerida para su implementación.

El Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat

Para el año 2005, junto con la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, de 9 de mayo, se avanzó hacia la integración, en un sistema nacional de las políticas de vivienda y hábitat. Aunque esta normativa ha contado con algunas reformas en años recientes, sus contenidos muestran las concepciones ideológicas y jurídicas planteadas en la Constitución venezolana, que se fueron amalgamando y consolidando a lo largo del tiempo. Sus artículos 1 y 2 muestran claramente la concepción de la vivienda y el hábitat como un derecho, de cuya satisfacción se hacen corresponsables el Estado y la ciudadanía, y reafirman su carácter no lucrativo, al igual que el de los servicios, entre otros aspectos.

El artículo 6 plantea las bases para la conformación del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, lo que responde a la necesaria visión integral de esta materia. De igual manera, reafirma la perspectiva participativa y protagónica de la gestión pública, y define sus principios rectores. El Sistema representa la institucionalización, de forma integrada y sistémica, de todos los aspectos relacionados con este tema: elaboración y ejecución de los planes, el financiamiento, producción de materiales e insumos, funciones de las instituciones públicas —nacional, estadual y municipal—, así como los del Poder Popular y el sistema de asignación.

Ahora bien, en él se integraron los planes y programas existentes en la época, los cuales continuaron avanzando, aunque no con la eficacia y rapidez que se requería (Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, 2013). En 2010, en el marco de un nuevo evento natural, ocasionado por las lluvias, que afectó seriamente a una numerosa población, aumentó la demanda de viviendas, y esto, a su vez, aceleró la exigencia de fortalecimiento y mejoramiento de las políticas en este sector. De ahí que, en marzo de 2011, nació la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y, en noviembre de 2013, la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor (GMBNBT), las cuales se convertirían en las mayores políticas públicas que gestionarán la vivienda y el hábitat.

De forma general, destacaremos algunos aspectos de ambas misiones, que son de máximo interés. En el caso de la GMVV los principales fundamentos que la sustentan, de acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (2013), son considerar la vivienda como un derecho humano y social, y ratificar el papel del Estado en su gestión. También se continúa profundizando en el alcance —mucho más allá de los aspectos técnicos y constructivos—, manteniendo una visión integral, asociada al sentido de dignidad humana, elemento indispensable que, al hacerlo explícito, se le rinde tributo. Asimismo, la vivienda se sigue asumiendo como un factor fundamental para el desarrollo integral de la familia y la comunidad.

Por su parte, la GMBNBT responde al reconocimiento de los barrios como parte de la ciudad y resultado de la autoproducción popular de un hábitat en el que se han constituido y formado millones de familias a lo largo de muchos años. Sin embargo, la gestión hacia estos asentamientos debe responder a una política capaz de asumir la complejidad que ello representa, pues son grandes zonas que requieren diversidad de proyectos y trabajos urbanísticos y sociales. Así lo ha planteado, desde el comienzo, el Gobierno revolucionario, el primero en reconocerlos y emprender las políticas necesarias. (CONAVI, 2000a; 2000b; 2000c; Vallmitjana, 2004; Antillano, 2005).

En ese orden de ideas, esta Misión propone, en realidad, la articulación del barrio con la ciudad asumiendo una transformación integral del hábitat popular. Se desatacan elementos vinculados con la defensa nacional, teniendo en cuenta que estos territorios, abandonados por el Estado durante muchas décadas, se prestaron para el asentamiento de grupos delincuenciales que, en no pocos casos, ejercen control sobre ellos y representan un verdadero problema para los pobladores y la seguridad nacional. También asume la necesidad de abordar la vivienda y los servicios públicos en los barrios, ya que, si bien algunas zonas cuentan con buenos niveles de consolidación, no es lo común, y se requieren grandes trabajos para regularizar y rehabilitar a la gran mayoría de ellas. Todo esto implica la promoción y fortalecimiento de la organización comunitaria, al ser la base para la participación protagónica de la ciudadanía.

Breve mención de las «misiones sociales»

La designación de estas políticas como «Grandes misiones» se debe a su integración en las denominadas «Misiones sociales», las cuales conforman una serie de planes y programas en materia social que venía evolucionando desde 2003 y se constituyeron en un sistema de políticas públicas. El Decreto 1394, de 13 de noviembre de 2014, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones, dio nacimiento jurídico a este sistema, que ya venía funcionando en la práctica. Su objeto hace mención a la responsabilidad compartida entre el Estado y el Poder Popular para promover el desarrollo y protección social integral y el ejercicio de los derechos sociales.

Estas políticas se clasifican en «misiones», «grandes misiones» y «micro-misiones», dependiendo del alcance e impacto que se requiera. En el caso de la segunda, implica actuar sobre problemas estructurales que afectan el ejercicio de los derechos y, a su vez, precisa de una gestión intersectorial. Así que la designación de GMVV y GMBNBT, bajo la clasificación de «gran misión», responde a la visión integral y compleja mencionada, pero también denota la intencionalidad política e ideológica de realizar cambios estructurales, sin los cuales no sería posible materializar los propósitos y metas de cada una.

Es importante destacar que las misiones sociales nacieron en el contexto histórico de 2002, cuando la oposición venezolana, en articulación con el gobierno de los Estados Unidos, ejecutó el golpe de Estado del mes abril e implementó un sabotaje petrolero en diciembre de ese año, que paralizó esta industria durante algunos meses. Ambas acciones, que atentaron

La gestión en materia de vivienda —ahora concebida como un derecho social—, que integra el hábitat, la familia y la comunidad, así como la participación, requirió de grandes esfuerzos para diseñar e implementar planes y programas que respondieran a esta nueva visión, e implicó reconfigurar el Estado.

contra el orden democrático y promovieron acciones seriamente desestabilizadoras, fueron derrotadas por las fuerzas políticas que apoyaban la Revolución bolivariana. Por otra parte, mostraron la necesidad de radicalizar las políticas revolucionarias que apenas comenzaban a implementarse y encontraban serias trabas burocráticas e institucionales para lograr agilizar los planes y programas. De esta forma, se establecieron las misiones como instrumentos institucionales, amparados y sustentados jurídica y administrativamente por el Estado venezolano, pero que no respondían a la vieja burocracia (Carosio, 2016).

Esta nueva forma, que comienzan a adoptar las políticas públicas en las áreas sociales, también se constituye bajo las principales premisas de la Constitución, y en los principios ideológicos que alientan la Revolución bolivariana, cuyo sentido de corresponsabilidad estatal y ciudadano para la protección de los derechos sociales, es destacable. Desde 2003 hasta la fecha se han diseñado y puesto en marcha más de setenta misiones, destinadas especialmente a salud, educación, alimentación, vivienda, cultura, economía, entre otras.

Estas misiones han evolucionado progresivamente; y aunque varias de ellas, que ya cumplieron su cometido, no están vigentes, otras se han sumado a sistemas más complejos e integrales, como es el caso de la vivienda.

Balance actual

De manera general, la evolución de las políticas públicas en materia de vivienda y hábitat ha sido fecunda y exitosa. Hasta 2022 se han construido y entregado más de cuatro millones de nuevas casas, y se han producido miles de intervenciones y proyectos para adecuar y rehabilitar el hábitat de grandes zonas de barrio (Ministerio del Poder Popular para la Planificación, 2022). Además, se han reubicado miles de personas que vivían en condiciones de alto riesgo, incluidas muchas familias damnificadas por catástrofes naturales ocurridas años atrás. También se encuentran conformadas y activas 1 502 Asambleas de Vivienda,[3] integradas por 172 000 familias con sus respectivos terrenos para el desarrollo de sus casas, y se registran alrededor de 21 000 organizaciones sociales[4] vinculadas a esta gestión (Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, 2022).

Consideramos que uno de los grandes logros de este trabajo sostenido en materia de vivienda y hábitat es la construcción de un nuevo paradigma de gestión, sin el cual no hubiera sido posible avanzar. Este se sintetiza a partir de tres factores principales que interactúan en forma conjunta y conforman una unidad dinámica y compleja. A continuación, nos referiremos brevemente a cada uno de ellos.

La visión integral y sistémica de la vivienda

El paradigma que predominó durante las gestiones anteriores a la Revolución bolivariana se enfocaba, casi exclusivamente, en la vivienda reducida a sus aspectos técnicos-constructivos. Esto trajo como consecuencia que, en muchos casos, se construían desarrollos urbanísticos que, en realidad, eran una suerte de «agregados de vivienda», ubicados en sitios aislados y sin contar con los equipamientos y servicios necesarios para un adecuado desarrollo de la vida de la gente.

La nueva visión apuntó, desde el principio, a un sentido integral y sistémico que incluye el significado del hábitat como el entorno estructural y social que requiere la vida familiar y comunitaria; así como el sentido de la dignidad, en tanto que cada persona merece y tiene derecho a condiciones adecuadas para su pleno desarrollo familiar y comunitario. De esta manera, se integran aspectos técnico-constructivos con factores éticos, ideológicos, jurídicos, culturales, económicos y sociales, que deben generar tales condiciones, para la convivencia en la construcción comunal.[5]

La vivienda como un derecho

El tema de los derechos sociales ha sido largamente tratado desde el punto de vista jurídico, político y social, y ha suscitado diversos debates que pueden llegar a ser polémicos y hasta antagónicos. No es nuestro objetivo ahondar en tales discusiones; no obstante, queremos aportar algunas consideraciones a partir de la experiencia que sobre derechos sociales representa la gestión pública venezolana en materia de vivienda y hábitat.

La concepción de estos derechos en nuestro texto constitucional está en sintonía con el *Pacto*

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966) —vigente desde el 3 de enero de 1976— suscrito por el Estado venezolano. Para el caso que nos atañe, el documento señala, en su artículo 11, a la vivienda como un «derecho de toda persona» para desarrollar «un nivel de vida adecuada».

Esta base constitucional fue largamente desarrollada en nuestras políticas: la vivienda pasó de una perspectiva de «necesidad» y «mercancía» a una integral, bajo la concepción de un derecho social. También se desarrolló la potestad de participación, que se ha integrado a este nuevo paradigma. Al aplicarlo a la gestión de vivienda y hábitat, cobra vigor la corresponsabilidad entre Estado y ciudadanía. Si a ello agregamos la integración del Sistema Nacional de Vivienda con el de Misiones, podremos observar cómo esta concepción integral y la de los derechos sociales se plasman en un ejercicio ciudadano que no se remite solo a «demandar» un beneficio o servicio, sino a ejercer las potestades asumiendo las responsabilidades de la participación protagónica.

El derecho social a la vivienda no supone que el Estado esté obligado a otorgarle una a cada quien. Su obligación, así como la de la ciudadanía consiste en asumir un papel rector y ejecutor, que promueva y genere, a través de las políticas públicas, condiciones idóneas para que aquel se cumpla. Esta concepción indica que se crearán los medios para que la población, ejerciendo sus facultades y actuando corresponsablemente con el Estado, satisfaga, poco a poco, su necesidad de vivienda y hábitat, y todo lo referente a su desarrollo pleno e integral.

Esta visión va más allá de lo estrictamente jurídico, y requiere tomar partido por los aspectos éticos e ideológicos que subyacen en ella y en el resto de las políticas públicas. En la sociedad venezolana, cuyas estructuras hunden sus raíces en factores generadores de exclusión y pobreza, los derechos sociales deben enmarcarse en la lucha por la justicia y la igualdad, y no remitirse solo a la satisfacción individual de las necesidades. Por eso se asumió la «deuda social» y se prioriza la atención a los excluidos, vulnerables y necesitados.

El enfoque participativo y protagónico

Este tema ha sido ampliamente reiterado a lo largo del trabajo, por lo que solo queremos, en este momento, dejar sentada su importancia capital dentro del nuevo paradigma que nos ocupa, y destacar que la organización y participación de la población en los asuntos públicos se ha desarrollado y fortalecido durante los años, evolucionando hacia el concepto de Poder Popular. Esto implica promover y promocionar las condiciones que hagan posible una distribución cada vez más efectiva del poder directo de la población, para hacer realidad la democracia participativa y protagónica.[6]

Por otra parte, implementar la gestión pública bajo este enfoque requiere de profundas transformaciones de las estructuras institucionales del Estado, que responden aún a la democracia representativa heredada del modelo anterior. Un ejemplo es el Sistema de Misiones, aunque no se trata solo de producir reformas en las instituciones, ya que, en la medida que la gestión participativa implica la corresponsabilidad con la ciudadanía, también se generan importantes cambios en las comunidades. Al respecto, es destacable la gran inversión que se realiza en procesos de formación y concientización para que los ciudadanos fortalezcan sus capacidades y puedan asumir la compleja función que exige esta visión participativa en la gestión pública.

Algunas reflexiones finales

Resulta imposible poder abarcar todas las perspectivas que sugieren estos temas, pues son, en sí mismos, altamente complejos y dinámicos. Aunque en forma modesta hemos participado en muchos de los recorridos y esfuerzos que están detrás de todos los procesos, propuestas e iniciativas abordadas, nos acicatea profundizar en cada tópico con un nivel de detalle que jamás podríamos alcanzar en este trabajo y tal vez en ningún otro. Por eso intentaremos dejar planteadas algunas reflexiones que, sin ser conclusivas, dejen abiertas las posibilidades para profundizar en el debate y el análisis.

Lo más sustantivo de resaltar es el carácter procesual y de permanente elaboración que caracteriza este proceso de gestión. De ningún modo debemos asumirlo como una suerte de «evolución» o «recetario» como si se tratara de fórmulas técnicas. Lo importante es que la marcha de la gestión pública, en particular en el caso de la vivienda y el hábitat, ha sido esencialmente dinámica, tanto por las características del objeto de aplicación como por el carácter transformador que ha sustentado y marcado el diseño y ejecución de las políticas.

Esto ha implicado que el camino no haya sido rectilíneo, sino sinuoso, pleno de obstáculos y contradicciones, de avances y retrocesos. Por ejemplo, se debió enfrentar, y aún se afronta, una serie de resistencias burocráticas institucionales, una cultura asistencialista y una profunda despolitización que caracterizó la gestión pública predominante hasta finales del siglo xx. Además, como este paradigma trasciende los aspectos constructivos y apunta hacia el desarrollo integral de la organización, participación

y convivencia comunitaria, encuentra una altísima complejidad que se traduce en serias barreras que vencer: la apatía, el individualismo, y todos los problemas derivados de los contextos de pobreza.

También enfrenta una férrea oposición de intereses económicos —presentes en el ámbito de la vivienda—, políticos y sindicales anclados en el viejo modelo, igualmente difíciles de derrotar. En ese orden de ideas, ha resultado complejo integrar la extensa y novedosa normativa jurídica en temas de participación y derechos sociales, donde se incluye el de la vivienda y el hábitat, con la que regulaba estas materias antes de 1999. Al respecto, se suele presentar notables dificultades en el reconocimiento de las figuras del Poder Popular en los registros y notarías, pues, aunque son parte del Estado, sus funcionarios no manejan de forma adecuada la nueva legislación y, en muchos casos, se resisten a hacerlo. De igual manera, se dificulta compatibilizar la regulación de la propiedad de las viviendas construidas bajo las normativas vigentes con otros mecanismos legales y administrativos que se aplican; por ejemplo, sucesiones y herencias. A esto se suman los problemas para regular las transacciones de alquiler y compra-venta de las nuevas casas, ya que el Estado no cuenta con suficiente capacidad.

Estos son algunos ejemplos de esta complejidad, que plantean desafíos para seguir avanzando en forma congruente y eficaz. Creemos que es necesario continuar fortaleciendo la gestión pública, a través de un diálogo que se nutra del concurso de múltiples disciplinas académicas y profesionales, y de la experiencia y saberes de los movimientos sociales y el Poder Popular. La producción y la sistematización abierta y participativa del conocimiento debe ser prioridad en todas las políticas públicas; al igual que persistir en que los procesos de formación respondan a las necesidades y nuevos retos que enfrentamos. Esta perspectiva cobra particular importancia en virtud de la necesidad de producir transformaciones en el plano psicosocial y cultural, sin las cuales no será viable avanzar.

Por último, los efectos del asedio y el bloqueo de los Estados Unidos y sus aliados (al igual que con la hermana Cuba durante más de sesenta años) han provocado grandes dificultades a la sociedad venezolana y, en particular, a las políticas públicas. Desde 2013, nuestro país ha sido víctima de más de novecientas medidas coercitivas unilaterales, en abierta violación del derecho internacional, cuyo impacto en la economía ha sido altísimo. Ello se ha combinado con operaciones psicológicas, sabotajes permanentes, e intentos de derrocamiento del gobierno constitucional, que apuntan a promover la inestabilidad y frenar el desarrollo del país.[7]

Por ende, hemos asistido a una merma importante de la capacidad de gestión del país, pues se han retrasado y dificultado sus avances. Aun así, hemos resistido, y vamos aprendiendo a gestionar, a pesar de los ataques y la escasez de recursos, que hoy es uno de nuestros grandes y tal vez, mayores desafíos. La soberanía e independencia venezolanas se defienden en medio de este panorama, al igual que la materialización de los derechos sociales de nuestro pueblo. Estamos convencidos de que seguiremos resistiendo y avanzando, y que el horizonte de la justicia social y la igualdad será una realidad en Venezuela y en la Patria Grande.

Notas

1. En Venezuela, se les denomina así a los asentamientos urbanos autoproducidos por sus pobladores.

2. Véase artículos 62, 70, 184 y 185 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).

3. Las Asambleas de Vivienda son el primer paso organizativo para integrarse al Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.

4. Organizaciones propias del Poder Popular, como Consejos Comunales, Comités de Tierra Urbana, Comité Multifamiliar de Gestión, entre otras.

5. La propuesta de la Revolución bolivariana, referida a la construcción del Estado comunal, remite a la de la Comuna como núcleo fundamental de la organización de la vida y el ejercicio del gobierno en el territorio, bajo las premisas del «buen vivir», el «vivir bien» o el «vivir viviendo». Esto apunta, en forma muy amplia, al autogobierno a través del Poder Popular y a una forma de convivencia basada en el bien común, la diversidad y la corresponsabilidad. Todo ello conforma una base ideológica fundamental del socialismo bolivariano del siglo XXI.

6. Véase la página web *Leyes del Poder Popular*, disponible en <https://bit.ly/42kWGUB>, las cuales muestran el desarrollo doctrinario y jurídico de este asunto, que permea todas las políticas públicas desarrolladas por el Estado venezolano.

7. Acerca del bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra la República Bolivariana de Venezuela, véase Boueiri (2020), Curcio (2018), Serafino y Vielma (2018), Sangronis y Angiolillo (2020) y la página del Observatorio Antibloqueo de Venezuela, disponible en <https://bit.ly/3TrtPdc>.

Referencias

Antillano, A. (2005) «La lucha por el reconocimiento y la inclusión en los barrios populares: la experiencia de los Comité de Tierras Urbanas». *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales,* n. 3, 205-18.

Baldó, J. y Villanueva, F. (1994) «Sobre la cuestión de la urbanización de los barrios». *Revista SIC,* n. 568, 340-6.

Boueiri, S. (2020) «Venezuela: entre la pandemia, sanciones e incursiones militares». *Pandemia, crisis y derecho. Boletín del Grupo de Trabajo Crítica jurídica y conflictos sociopolíticos*, n. 1, 19-36.

CLACSO. Disponible en <https://bit.ly/42nWhRq> [consulta: 16 marzo 2023].

Carosio, A. (2016) «Política social en Venezuela. Las misiones sociales». *Entornos*, v. 29, n. 2, noviembre de 2016. Disponible en <https://goo.su/IpeMc> [consulta: 16 marzo 2023].

Cilento, A. (1999) *Cambio de paradigma del hábitat*. Caracas: Universidad Central de Venezuela (UCV).

CONAVI (Consejo Nacional de la Vivienda) (2000a) *Taller de inducción sobre el componente social del Programa de Habilitación Física de Zonas de Barrios*. Caracas.

_____ (2000b) *Términos de referencia para la preparación de planteamientos iniciales y de continuación orientados a la ejecución de proyectos del Programa II Habilitación Física de Zonas de Barrios*. Caracas.

_____ (2000c) *Términos de referencia para el Programa III Mejoramiento y ampliación de casas en barrios y urbanizaciones populares*. Caracas.

CORDIPLAN (Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República) (1989) *VIII Plan de la Nación*. Caracas.

_____ (1995) *XIX Plan de la Nación*. Caracas.

Cova, C. (1996) *Realidad social de Venezuela*. Curso de Formación Sociopolítica, n. 6. Caracas: Ediciones de la Fundación Centro Gumilla.

Curcio, P. (2018) *Hiperinflación. Arma imperial*. Caracas: Editorial Nosotros Mismos.

España, L. (1997) «Dos décadas de empobrecimiento en Venezuela». *Revista SIC*, n. 600, 480-3.

Giuliani, F. (2011) «La gestión pública: del modelo "técnico-burocrático-asistencialista" al modelo de "gestión pública participativa"». En: *Buenos gobiernos locales. Caminos para promover una gestión pública corresponsable*. Mora, L. (comp.), Caracas: Fundación Centro Gumilla, 7-22.

Grohmann, P. (1996) *Macarao y su gente. Movimiento popular y autogestión en los barrios de Caracas.* Caracas: Nueva Sociedad.

Kornblith, M. (1996) «Crisis y transformación del sistema político venezolano. Nuevas y viejas reglas del juego». En: *El sistema político venezolano: crisis y transformaciones*. Álvarez, A. (comp.), Caracas: Instituto de Estudios Políticos-UCV, 1-31.

Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (2013) *Gran Misión Vivienda Venezuela: años 201–2012*. Caracas: Ideograf.

_____ (2022) *Gran Misión Vivienda Venezuela*, t. 2. Disponible en <https://bit.ly/2MM1Gu7> [consulta: 16 marzo 2023].

Ministerio del Poder Popular para la Planificación (2022) *Venezuela en cifras. Nuestra transición hacia el socialismo.* Disponible en <https://bit.ly/3mwmME4> [consulta: 13 abril 2023].

ONU (1966) *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, 16 de diciembre. Disponible en <https://bit.ly/3JNJi3X> [consulta: 16 marzo 2023].

Romero, J. (2001) *El proceso político en Venezuela a finales del siglo xx: la construcción de un nuevo orden*. Maracaibo: Universidad de Zulia.

Rosas, I. (2004) *La cultura constructiva de la vivienda en los barrios del área metropolitana de Caracas*. Tesis de doctorado. UCV, Caracas.

Sangronis, A. y Angiolillo, P. (2020) *Intervencionismo y guerra integral. (Primera aproximación teórica)*. Caracas: Acercándonos Ediciones.

Serafino, W. y Vielma, F. (2018) *Radiografía de un país bajo asedio*. Caracas: Instituto Municipal de Publicaciones.

Vallmitjana, M. (2004) «Las políticas de vivienda y desarrollo urbano frente al desafío urbanístico de las "zonas de barrios"». *Revista Urbana,* n. 35, julio-diciembre, 23-35.

Venezuela. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), de 15 de diciembre. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, n. 36.860, extraordinaria, 24 de marzo de 2000. Disponible en <https://goo.su/geLIf> [consulta: 16 marzo 2023].

_____ Decreto 1.394/2014, de 13 de noviembre, con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micro-misiones. Ibídem, n. 6154, extraordinaria, 19 de noviembre. Disponible en <https://bit.ly/3ArFu3a> [consulta: 16 marzo 2023].

_____ Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat/ 2005, de 9 de mayo. Ibídem, n. 38.182. Disponible en <https://bit.ly/H75SCP> [consulta: 16 marzo 2023].

©TEMAS, 2023

La realización de los derechos humanos sociales: una mirada a Cuba y Alemania

Eberhard Shultz
Jurista. Fundación Eberhard Schultz para los Derechos Humanos Sociales y la Participación.

Como abogado de derechos humanos, en las últimas décadas he llegado repetidamente a los límites de mi esfuerzo con mis clientes, en procesos penales con trasfondo político —por acusaciones de organización criminal o terrorista. Estos procesos se han llevado a cabo ante tribunales laborales —donde han estado involucrados trabajadores y representantes del sindicato—, y para refugiados y solicitantes de asilo. La causa de mi dilema ha estado motivada no solo porque los derechos y libertades fundamentales (individuales) se han restringido cada vez más con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, sino también porque en las organizaciones de derechos humanos nos hemos percatado de que la materialización, por sí sola, de los individuales es insuficiente cuando las personas no pueden permitirse costosos y extensos procedimientos judiciales. Aunque existe la posibilidad de recibir asistencia jurídica financiera, esta solo se concede si el tribunal considera que las solicitudes tienen posibilidades de éxito, e incluso en esos casos los costos de estos procesos legales pueden durar años y costar miles de euros. Con independencia de que muchos de los afectados son marginados y prejuzgados públicamente, una buena parte posee condiciones de vida paupérrimas, carece de formación educacional y de participación en la vida cultural, aun en los países ricos de Europa occidental.

Una primera consecuencia de este dilema personal fue la creación de la Fundación Eberhard Schultz para los Derechos Humanos Sociales y la Participación. Se trata de una organización sin ánimo de lucro, con sede en Berlín, desde finales de 2011. Es la única Fundación

sobre este tema en la región germanófona. Con ella queremos contribuir a lograr una sociedad más justa, donde se cumplan plenamente los derechos humanos económicos, sociales y culturales.

Observaciones preliminares sobre la realidad social en Alemania

La crítica a la realidad antisocial de nuestras sociedades capitalistas occidentales está cada vez más extendida: es abordada por el partido La Izquierda y el Partido Socialista Democrático (SPD, por sus siglas en alemán) en sus programas básicos, pero desgraciadamente no aplicada por este como partido participante en el gobierno federal.

Hasta el mismo gobierno alemán argumenta una doble división de nuestra sociedad en su cuarto Informe oficial sobre pobreza y riqueza, de 2013. Este documento refiere que la pobreza y la riqueza crecen en igual medida, y que el creciente enriquecimiento privado va acompañado de un empobrecimiento público. «El 10% más rico de la población posee casi 53% de la riqueza neta» (Butterwegge, 2013: 221).

En el libro *Divisiones sociales en Berlín* (Bochum, 2016), auspiciado por nuestra Fundación, se documenta lo anterior para el Estado federado y la ciudad de Berlín. Esta aterradora realidad de desigualdad social ha sido ampliamente descrita y puesta al día por el conocido politólogo Christoph Butterwegge (2020) en su libro *La República desgarrada: desigualdad económica, política y social en Alemania*. En el último capítulo, bajo el título «Populismo de la derecha o cómo la ira desgarra la República», escribe sobre la reestructuración y el desmantelamiento del Estado de bienestar, que afecta especialmente a la clase media:

> Aquellos que sienten pánico ante una quiebra social, que ya no saben cómo ayudarse a sí mismos y desconfían del sistema parlamentario de representación por no tener una solución prevista, son más propensos a caer en las redes de los demagogos de derecha que prometen sanearlo desde la base o incluso eliminarlo radicalmente.

Butterwegge coincide, a su vez, con Waibel, redactor del diario liberal de izquierdas *TAZ*, quien advirtió sobre «la subestimación de la violencia destructiva del capitalismo de mercado financiero» (385). En una situación tan excepcional, el redactor considera posibles «redistribuciones violentas» mediante el saqueo de tiendas de comestibles, que serían respondidas con detenciones preventivas por un aparato estatal equipado para la «contrainsurgencia». Con razón arremete contra el neoliberalismo en los países más representativos de este sistema, que domina no solo la economía, sino también al resto de la sociedad; y expresa que «una mayor igualdad socioeconómica es económicamente sensata, medioambientalmente necesaria, moralmente imperativa, distributivamente justa y políticamente posible» (393). Los medios recomendados por Butterwegge, por otra parte, como el establecimiento del salario mínimo hasta convertirlo en uno vitalicio, el seguro ciudadano solidario y la seguridad social mínima para un Estado de bienestar solidario e inclusivo, son tan necesarios como importantes. Desgraciadamente falta un elemento esencial en el desarrollo de esa perspectiva, para que sea merecedor de ese nombre: los derechos humanos sociales.

Norman Paech (2019), catedrático emérito de la Universidad de Hamburgo, político y reputado jurista internacional de izquierda, lo resume muy acertadamente en su libro *Derechos humanos — reivin-dicación y realidad, historia y presente*: «Todo se queda en una declaración que suena bien, pero carece de posibilidades de aplicación y realización» (183).

Las consecuencias de la desigualdad social son dramáticas, incluso para un país tan rico como Alemania, que hasta ahora ha exportado con éxito hacia los países más débiles, especialmente los del sur de Europa, las consecuencias de la profunda crisis económica y financiera:

- Aumento del desempleo, sobre todo entre los jóvenes.
- Endeudamiento cada vez mayor de la población, que provoca la quiebra individual.
- Hundimiento de la clase media, que en Alemania solía ser especialmente fuerte.
- Crecimiento del número de personas sin hogar y aumento de los desahucios.
- Tendencia hacia un sistema de dos niveles de atención médica y una mayor tasa de mortalidad entre los pobres.
- Destrucción de la idea de que el esfuerzo y el trabajo conducen a la prosperidad, porque los ricos se hacen cada vez más ricos.

Tan claro es el análisis de los problemas sociales como controvertida es la cuestión de si el Derecho y los derechos humanos pueden contribuir a su solución. Para los progresistas, izquierdistas y marxistas en particular, se plantea la siguiente interrogante: ¿Pueden los movimientos y fuerzas emancipadoras referirse hoy al Derecho y a los derechos humanos como componentes del sistema jurídico imperante con la existencia de una discriminación estructural a los menos privilegiados y un sistema de disposiciones legales, y su aplicación, que se supone estabilicen el orden establecido?

Derechos humanos sociales

Por este concepto entendemos los sociales, económicos y culturales (DESC) en el sentido que los define la ONU (2015): el derecho a la autodeterminación, a la igualdad entre hombres y mujeres y, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 22-27),

- a la seguridad social;
- al trabajo, la igualdad salarial y la libertad de asociación;
- al ocio y tiempo libre;
- a la atención social, a un nivel de vida adecuado en cuanto a vestimenta, vivienda, etcétera;
- a la educación, atención y libertad de la vida cultural.

Estos derechos se han concretado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966 (Pacto Social de la ONU), y regulado de forma internacionalmente vinculante. Reivindican, en principio, una validez universal e indivisible. Hoy en día, los derechos humanos individuales se han incluido en numerosas constituciones en el mundo, mientras que los sociales solo se encuentran en unas pocas.

El debate sobre la justiciabilidad de los derechos humanos sociales

A pesar de que son vinculantes en virtud del derecho internacional, existe una mayor discrepancia entre la aspiración constitucional y la realidad social, en los derechos sociales que los derechos individuales. Mientras que estos están consagrados en muchas constituciones y pueden ser reclamados jurídicamente, los sociales, en Alemania, como en muchos otros países, han sido degradados a meros programas políticos.[1]

Con nuestra fundación, nos hemos propuesto contribuir a superar este punto de vista. El debate internacional sobre la «justiciabilidad de los derechos humanos sociales»; es decir, su formulación jurídica y su aplicación han seguido un curso contradictorio en las últimas décadas. El estudio de Jakob Schneider (2004), publicado por el «semioficial» Instituto de Derechos Humanos, afirma:

> Un avance importante lo marcó la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, de 1993, que reafirmó la indivisibilidad de todos los derechos humanos y revisó así la perspectiva holística de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en una forma actualizada. (6)

Schneider examina el problema de la justiciabilidad a escala internacional y nacional. Llega a la conclusión de que «los DESC son bastante aptos para ser evaluados por los organismos internacionales de supervisión» (244).

De hecho, tras la aparición de su ensayo, en 2012, el gobierno alemán abandonó finalmente su reserva respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño. Su llamamiento a los tribunales alemanes consiste en «avanzar hacia la revisión individual de cada norma de derechos humanos para determinar su aplicabilidad».

Los derechos humanos son indivisibles, como se reafirmó en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (ACNUDH, 1993). Esto significa que los DESC no deben ser considerados como inferiores, sino que contienen deberes concretos de protección y cumplimiento por parte del Estado y son exigibles. Significa que los individuos o grupos que consideren que se han violado sus derechos humanos sociales pueden acudir al comité competente de la ONU, tras agotar los recursos legales internos de cada país. Esto presupone que los artículos individuales del Pacto Social están bien desarrollados. Para ello, el Comité competente ha identificado áreas centrales concretas, jurídicamente manejables, de los respectivos artículos de la citada Conferencia de Viena, de modo que estos sean aptos, de manera directa, para hacerse valer ante los tribunales y ante un órgano de supervisión internacional.

El Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU-Pacto Social), introdujo un procedimiento de denuncia individual para estos DESC. En su Acuerdo de coalición, del 12 de marzo de 2018, el gobierno federal se comprometió a considerar su ratificación. El 20 de julio de 2023 entró en vigor para Alemania. A partir de ahora, personas naturales/individuales y otros actores de la sociedad civil pueden denunciar oficialmente los abusos o el no cumplimiento de estos derechos delante de la Comisión de las Naciones Unidas y exigir una rectificación e indemnización del Estado federal alemán.

Hay que tener en cuenta, además, que el derecho de huelga ha sido restringido por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), en nombre de la libre prestación de servicios y de la libertad de establecimiento; es decir, ha sido sometido a una especie de «reserva de proporcionalidad» que protege los intereses de los empresarios. Esto significa que incluso la jurisprudencia del TJCE, creado específicamente para defender los derechos humanos, va por detrás de la de los tribunales nacionales de varios Estados miembros y ha provocado protestas justificadas de sindicatos, asociaciones sociales, etcétera.

La ambivalencia de los derechos humanos y una mirada de reojo a América Latina

La realización de los derechos humanos se ve constantemente amenazada a nivel internacional y

¿Pueden los movimientos y fuerzas emancipadoras referirse hoy al Derecho y a los derechos humanos como componentes del sistema jurídico imperante con la existencia de una discriminación estructural a los menos privilegiados y un sistema de disposiciones legales, y su aplicación, que se supone estabilicen el orden establecido?

nacional por reivindicaciones de poder e intereses opuestos. Debido a esta ambivalencia, destacados autores de izquierda como Wolf-Dieter Narr y Alex Demirovic, politólogos de, respectivamente, la Universidad Libre y de la Universidad Técnica, de Berlín, critican «la ambivalencia de los derechos humanos» (Narr, 2008: 188) y la «creciente marginación, a nivel global e incluso a nivel nacional, de los derechos humanos antes de llegar a legalizarlos o de incluirlos en los derechos fundamentales o parcialmente válidos», debido a su escasa aplicación.

En mi opinión, se trata de un malentendido o de una interpretación estrecha de la lucha por los derechos. La amenaza a estos, por los que se ha luchado tradicionalmente, no es exclusiva de los derechos humanos de la población. Así lo expresa Wolfgang Abendroth (1970) sobre el *Grundgesetz* (Ley Fundamental); la Constitución provisional de la RFA de 1949 tras el final de la Segunda Guerra Mundial, cuyo carácter antifascista debe entenderse como un compromiso después de la capitulación de Alemania ante la coalición antihitleriana y los conflictos sociales y democráticos internos: «El derecho constitucional debe considerarse como una tregua de hostilidades en la confrontación de las clases, pero en el marco de la continuación de la lucha de clases y nunca como paz de las clases» (188).

Tras el fracaso del Socialismo Real europeo, no contamos con una tradición crítica desarrollada internamente en la sociedad con la cual podemos conectar. Esto es diferente en América Latina, donde el desarrollo de Cuba es revelador: los dos historiadores latinoamericanistas, Michael Zeuske y Rainer Schultz, describieron así la historia de los derechos humanos sociales en la Isla:

> La Revolución cubana permitió el establecimiento del primer Estado social en América Latina, que continuó desarrollándose incluso después del colapso del socialismo de Estado del siglo xx y a pesar de los recortes más severos y de las contradicciones creadas por las reformas de mercado. Si el proceso de reformas iniciado en 2008 tiene éxito, puede considerarse el proceso cubano como un puente hacia el socialismo del siglo xxi en América Latina.[2]
>
> Las constituciones de Venezuela, Bolivia, y en parte Brasil, han consagrado los derechos humanos sociales, pero aún no los han realizado plenamente.[3] Por ejemplo, el Artículo 6 de la Constitución brasileña, en su formulación de 4 de febrero de 2010, dice: «Son derechos sociales de esta constitución los derechos a la educación, la salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda, la libertad, la seguridad, la asistencia social, la protección de la maternidad, la infancia y la asistencia a las personas sin hogar».

América Latina también está a la cabeza en la aplicación mundial de los derechos humanos sociales: la mencionada entrada en vigor del Protocolo Facultativo del Pacto Social de la ONU solo fue posible después de que Uruguay lo firmara, cuarto país latinoamericano de los diez Estados exigidos como mínimo en todo el mundo. Sin embargo, deberíamos discutir de conjunto la situación desastrosa que presenta su desarrollo en varios Estados de América Latina.

Cuba en muy buena forma

Quisiera señalar, como hecho muy positivo, la Constitución de la República de Cuba, de 2019, de trascendencia histórica y universal. No solo porque el proyecto de Constitución haya sido discutido y enmendado mediante miles de consultas a nivel popular, y aprobado por referéndum constitucional el 24 de febrero y puesto en vigor en abril de 2019. Me pregunto: ¿En cuál de nuestras democracias occidentales ha participado el pueblo de esta manera? Y no nos referimos solo a la participación, sino también a la trascendencia del contenido constitucional.

Aquí me limito a los derechos humanos:

- Artículo 40: El proyecto se ha completado con la normalización expresa de «la dignidad humana como valor supremo».
- Artículo 41: El Estado cubano garantiza explícitamente los derechos humanos irrevocables, indivisibles, universales e independientes.
- Artículo 42: Establece que todas las personas son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades «sin discriminación alguna por motivos de sexo, edad, orientación sexual, identidad, origen étnico, color de la piel, creencias religiosas, discapacidad u origen nacional o territorial».
- Artículo 43: Establece que los derechos sociales también son ejercidos por todos por igual.
- Artículo 46 y siguientes: Se consagran explícitamente, con rango constitucional, importantes derechos humanos sociales, como a la seguridad, la paz,

la salud y la educación. Sus garantías tienen una concreción asombrosa.

Una primera conclusión: por primera vez desde el fin de la comunidad de estados socialistas, que había insistido en que los derechos humanos sociales del Pacto Social de la ONU, de 1966, se trataran por igual y se aplicaran en todo el mundo, todos los derechos humanos se recogen en la Constitución cubana de forma exhaustiva, universal y vinculante.

Aunque el gobierno cubano aún no ha ratificado el Protocolo Adicional al Pacto Social de la ONU, está en condiciones de hacerlo cuando se lo proponga.

La mayoría de las democracias occidentales podrían tomar el ejemplo de una Constitución como la de Cuba. Válido también para la República Federal de Alemania donde los derechos humanos sociales no figuran en su Carta Magna ni son reconocidos por los tribunales como derechos subjetivos con rango constitucional. Siguen teniendo una existencia sombría en comparación con libertades civiles como la libertad de prensa y la de opinión.

La Constitución cubana podría considerarse históricamente como un importante intento de establecer las libertades civiles y los derechos humanos sociales en un catálogo exhaustivo, y convertirse quizás en el modelo para una Constitución del siglo xxi.

Informe paralelo de la Fundación Eberhard Schultz

Para el examen del Sexto Informe de Estado del Gobierno Federal, en la 64ª Sesión, del 24 de septiembre al 12 de octubre de 2018, del Comité Social competente de la ONU (CESCR), la Fundación Eberhard Schultz y varios socios de cooperación elaboramos un informe paralelo sobre la situación actual de la aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (UN-Sozialpakt), en Alemania.

Los puntos centrales fueron la ratificación y aplicación del Protocolo Adicional, el derecho a la seguridad social, a la familia, a la educación, a la vivienda y a la salud. Su amplio reconocimiento y aplicación como derechos subjetivos, exigibles ante los tribunales y el Comité de la ONU, si fuera necesario, es una exigencia urgente del Derecho internacional, que el gobierno federal debería cumplir de una vez.

En su respuesta a una pregunta oficial de Azize Tank, diputada del Bundestag, sobre los obstáculos a la ratificación inmediata, el gobierno federal argumentó que la práctica decisoria del Comité de la ONU sobre el Pacto Social «solo puede evaluarse de forma limitada» y que «faltan aclaraciones generales sobre algunos artículos del Pacto Social de la ONU» (Parlamento Federal Alemán, 2014: 1740).

Todo lo contario con respecto a la ratificación del tratado vinculante de derecho internacional se plantea en una Declaración del Instituto Alemán de Derechos Humanos:

> Las consecuencias de la ratificación pueden evaluarse adecuadamente a través de la concreción de los derechos garantizados en el Pacto Social de la ONU, en las Observaciones Finales y los Comentarios Generales del Comité Social de la ONU. (Mahler, 2015: 3)

Dado que debe agotarse la vía judicial interna antes de poder presentar una queja individual ante el Comité Social de la ONU, no puede esperarse una avalancha de quejas ni un gran número de condenas a la República Federal de Alemania. Solo a título estimativo: a finales de 2015, solo tres quejas individuales habían sido aceptadas para decisión por este Comité. Por eso habíamos exigido: «Alemania debe firmar y ratificar el Protocolo Facultativo sin demora, o al menos presentar un calendario concreto para su ratificación» (ACNUDH-Comité de Asuntos Sociales…).

Además, el informe paralelo reclama, en general, el anclaje de los derechos humanos sociales en la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania (1949):

> No solo en lo que respecta al amplio catálogo de derechos fundamentales de los ciudadanos y libertades individuales, es evidente que los derechos humanos sociales en Alemania deben ser normados en detalle con rango constitucional más allá del principio social estatal.

Recomendaciones del Comité de la ONU sobre el Informe de Estado del Gobierno Federal

Junto con varias docenas de otras ONG, participamos en la reunión del Comité de la ONU para el Trabajo y los Asuntos Sociales, en Ginebra, en octubre de 2018, y continuamos la crítica a la delegación del gobierno alemán. Este ni siquiera envió al ministro de Trabajo y Seguridad Social, responsable de responder las preguntas ante el Comité de la ONU. Sobre la base de los informes y declaraciones y del debate de dos días en aquella ciudad, el Comité de la ONU publicó sus *Observaciones finales*. Estas, como de costumbre, están redactadas de forma diplomática, pero contienen críticas muy claras. He aquí los puntos más importantes:

> El Comité acoge con satisfacción la afirmación de la delegación del Estado firmante sobre la disposición de las autoridades alemanas de ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y lo exhorta a que acelere el proceso de ratificación.
>
> El Comité recomienda al Estado firmante que aumente las prestaciones básicas de seguridad mejorando el

método de cálculo del mínimo de subsistencia, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de 23 de julio de 2014. También insta al Estado firmante a que revise los mecanismos de sanción para garantizar que se mantenga siempre el mínimo de subsistencia. También recomienda al Estado firmante que defina explícitamente los criterios para evaluar el carácter razonable del empleo, teniendo en cuenta el párrafo 2 del Artículo 21 del Convenio 168 de la OIT sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo (1988). A este respecto, el Comité remite al Estado firmante a su Observación general 19 (2008) sobre el derecho a la seguridad social.

El Comité recomienda que el Estado firmante, con el fin de erradicar la pobreza infantil, evalúe continuamente la adecuación de las prestaciones para los niños, incluidas las prestaciones por hijos a cargo, el suplemento por hijos a cargo y el paquete de educación y participación. También recomienda que el Estado firmante recopile datos sobre las prestaciones para los niños y su aplicación. También la toma de medidas necesarias para facilitar que familias con dificultades puedan recibir los servicios correspondientes.

El Comité recomienda que el Estado firmante adopte las siguientes medidas:

- Aumentar la oferta de viviendas asequibles, especialmente para las personas y grupos más desfavorecidos y marginados.
- Nuevos aumentos del gasto público en vivienda.
- Aumentar los límites de incorporación de los gastos de vivienda en la seguridad social básica teniendo en cuenta la fluctuación de los precios de mercado.
- Reducir el número de personas sin hogar y proporcionar un número suficiente de refugios, incluyendo salas de emergencia y albergues, así como centros de rehabilitación social.
- Recopilar datos desglosados por sexo, etnia y otros criterios pertinentes sobre la divulgación y dimensión de personas sin techo en el Estado firmante y establecer medios eficaces para vigilar la situación referente a ese grupo.
- Adoptar medidas adecuadas contra el impacto de la especulación en el mercado de la vivienda y a favor de una vivienda asequible.

De conformidad con el procedimiento adoptado por el Comité para el seguimiento de las observaciones finales aprobadas por este, se pide al Estado firmante que presente información sobre la aplicación de las recomendaciones que figuran en los párrafos 49 (servicios de atención a las personas de edad), 51 (pobreza infantil) y 55 b) y c) (derecho a la vivienda), en un plazo de 24 meses a partir de la aprobación de las presentes observaciones finales.

La campaña por el derecho a la vivienda como derecho humano social

Para referirnos a la difícil situación de la implementación de los derechos humanos sociales contamos con la voz competente de Azize Tank, quien desde su posición como miembro del Bundestag, en el partido La Izquierda (Die Linke), trabajó en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, en la legislatura de 2013-2017 e introdujo, con su grupo político parlamentario, un proyecto de ley histórico para la implementación de los derechos humanos sociales.

En nuestro evento anual de octubre de 2019, entregamos el Premio de los Derechos Humanos Sociales a personas e instituciones que han realizado contribuciones destacadas en el tema del Derecho Humano Social a la Vivienda. En esa ocasión, recibimos un mensaje de video de la relatora especial de la ONU, Leilani Farha, que decía:

> El acceso a una vivienda adecuada y asequible es el problema más acuciante en muchas ciudades del planeta. Para ponerlo en práctica, necesitamos organizaciones que se comprometan a nivel local y exijan responsabilidades a los gobiernos para garantizar el respeto de los derechos humanos. La Fundación Eberhard Schultz para los Derechos Humanos Sociales es una organización que ha hecho importantes aportes en este campo. Resaltamos el seguimiento que le ha dado la opinión pública mundial a los acontecimientos de Berlín. Celebramos las iniciativas del movimiento de inquilinos, de las que hemos extraído inspiración y grandes esperanzas. La crisis del sector de la vivienda solo puede superarse exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos sociales.

El distinguido crítico de la globalización y antiguo relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, pronunció un discurso de bienvenida en el que dijo, entre otras cuestiones: «Es una pena que a estas alturas tengamos que luchar por el cumplimiento del derecho a una vivienda digna con precios asequibles para todos».

Por último, me gustaría mencionar brevemente una campaña que nuestra Fundación lleva a cabo desde hace más de cuatro años, junto con numerosas ONG. Se trata de uno de los problemas más candentes del debate sociopolítico en Alemania desde hace tiempo. Con el telón de fondo de la creciente división social, la crisis en el sector de la vivienda se ha agudizado tanto que la campaña para expropiar a una gran empresa inmobiliaria ha obtenido gran apoyo. Otra iniciativa en el barrio Kosmos, del sureste de Berlín, que también apoyamos como Fundación, consiguió que se comunalizara este asentamiento; esto significa que la empresa inmobiliaria, que había obtenido altos dividendos, tuviera que volver a ser propiedad pública.

También lanzamos una campaña para la realización conjunta del derecho humano social a la vivienda con un acto público donde expertos y un grupo de mujeres afectadas debatieron el tema con representantes políticos.

En Berlín hubo una acalorada discusión, en 2020, sobre la ley del llamado tope de los precios de alquiler, que al menos debía restringir las posibilidades casi ilimitadas de aumentar la renta. La campaña para la expropiación de un importante consorcio despertó grandes alarmas. El sector inmobiliario gastó millones de euros para contrarrestarla en los medios de comunicación. Finalmente, en abril de 2021, el Tribunal Constitucional alemán rechazó dicha ley.

Como pueden ver, los derechos humanos sociales siguen sin hacerse realidad en Alemania. Hay un gran debate social en diferentes frentes, que debe avanzar políticamente y que cuenta con apoyo científico.

Nosotros, la Fundación Eberhard Schultz para los Derechos Humanos Sociales y la Participación, podemos hacer una modesta, pero importante contribución en este empeño.

Notas

1. Véanse los estatutos de la Fundación en <https://acortar.link/AAvkTA>.

2. Argumento 276.

3. Véase Paech (2019).

Referencias

Abendroth, W. *et al*. (1970) *Der Kampf um das Grundgesetz*. Frankfurt del Meno: Syndikat.

ACNUDH (Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos) (1993) *Conferencia Mundial de los Derechos Humanos*, 14-25 de junio. Viena. Disponible en <https://acortar.link/u14qwj> [consulta: 3 julio 2023].

ACNUDH -Comité de Asuntos Sociales, Económicos y Culturales. *Table of Pending Cases before The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Considered under the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (OP-CESCR)*. Disponible en <https://acortar.link/p7OorT> [consulta: 3 julio 2023].

Bochum, U. (2016) *Soziale Spaltungen in Berlin*. Berlín: VSA Verlag.

Butterwegge, C. (2013) «Die Spaltung des Landes verfestigt sich». *Ossietzky*, n. 7.

_____ (2020) *Die zerrissene Republik*. Berlín: Beltz Juventa.

Constitución de la República de Cuba (2019) *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, extraordinaria, n. 5, 10 de abril. Disponible en <https://bit.ly/3ZBdRj0> [consulta: 9 enero 2023].

Gobierno Federal (2018) *Acuerdo de coalición*, 12 de marzo. Berlín: Oficina de Prensa e Información del Gobierno Federal. Disponible en <https://acortar.link/zidXza> [consulta: 29 julio 2023].

Ley Fundamental de la República Federal Alemana (1949) Disponible en <https://acortar.link/rhbHvs> [consulta: 3 julio 2023].

Mahler, C. (2015) *Das Fakultativprotokoll zum UN —Sozialpakt endlich annehmen*, 20 de mayo. Instituto Alemán de Derechos Humanos.

Narr, W. D. (2008) «Auf der Suche nach maßgeblicher Orientierung — Menschenrechtliche Ambivalenzen». En: *Globale soziale Rechte*. Klaute, R. (ed.), Hamburgo: Brigitte Oehrlein.

ONU (1966) *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. Disponible en <https://acortar.link/VoqvrR> [consulta: 3 julio 2023].

_____ (2015) *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Disponible en <https://acortar.link/TjkTf> [consulta: 3 julio 2023].

Paech, N. (2019) *Menschenrechte Geschichte und Gegenwart —Anspruch und Realität*. Editorial Hamburgo.

Parlamento Federal Alemán (2014) Respuesta parlamentaria de la secretaria de Estado Gabriele Lösekrug-Möller sobre la pregunta 47 de la diputada Azize Tank, Acta del Pleno 18/Sesión 22, 19 de marzo.

Schneider, J. (2004) *Die Justiziabilität wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Menschenrechte*: Berlín: Instituto Alemán de Derechos Humanos.

Traducción del alemán: Jesús Írsula.

©TEMAS, 2023

El enfoque de derechos en la política social. El caso cubano

Edmundo del Pozo Martínez
Jurista. Cuba-México.

En América Latina ha cobrado relevancia, en las últimas décadas, el denominado *enfoque de derechos humanos en políticas públicas*. Se trata de un marco metodológico y programático que busca hacer efectivos el goce de los derechos e involucrar activamente a los sectores sociales más excluidos en las políticas que los afectan. Esta nueva comprensión emergió ante la necesidad de atender, mediante respuestas institucionales de fondo, las enormes brechas de desigualdad social y pobreza extrema presentes en el contexto latinoamericano, que se profundizaron como consecuencia de las recetas económicas de corte neoliberal aplicadas en los países del hemisferio sur en los años 90 del siglo pasado.

El avance de este enfoque en la región no podría explicarse sin el empuje de los movimientos y organizaciones sociales por alcanzar niveles dignos de justicia social para poblaciones y grupos históricamente discriminados: pueblos originarios, campesinos, personas afrodescendientes, clases trabajadoras, mujeres, población infantil, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, población en reclusión, grupos LGBTIQ+, entre otros.

Este contexto de desigualdad estructural y de exigencia social influyó en agencias internacionales y especialistas vinculados con las agendas de desarrollo, derechos humanos y políticas sociales, quienes comenzaron a definir las bases fundamentales del enfoque de derechos. Según el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNSDG, 2012):

> [aquel] es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que se basa normativamente en

> estándares internacionales de derechos humanos y está operacionalmente dirigido a promover[los] y proteger[los]. Su objetivo es analizar las desigualdades que se encuentran en el corazón de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y las distribuciones injustas de poder que impiden el progreso del desarrollo y que a menudo resultan en grupos de personas que se quedan atrás.

El enfoque basado en derechos parte de dos argumentos principales que inclinan la balanza a su favor como opción de política pública (OACNUDH, 2006:16): a) es lo correcto desde el punto de vista moral o jurídico; b) conduce a mejores y más sostenibles resultados en materia de desarrollo humano. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), busca impulsar un nuevo mecanismo de intervención estatal que contempla tres dimensiones (Pautassi, 2007: 15):

- Dimensión ética basada en los principios plasmados en los derechos humanos de carácter vinculante;
- dimensión procesal, que consiste en mecanismos instituidos que facilitan el diálogo entre actores sociales y políticos y que permiten traducir los acuerdos logrados en instrumentos normativos y, a su vez, traducirlos en políticas; y
- una dimensión de contenidos relativos a la protección social, que oriente acciones concretas en los campos donde la población se sienta más desprotegida, como la salud, la educación, la seguridad social, entre otros.

Desde esta última dimensión, las políticas públicas no deben quedarse solo a nivel de «lenguaje de derechos» o de reconocimiento formal, sino que su formulación debe integrar los contenidos normativos básicos, según el derecho o los derechos en juego.

Para darse a esta tarea resulta necesario que los actores estatales y sociales involucrados en la construcción de las políticas dispongan del cuerpo de estándares internacionales desarrollados por los distintos mecanismos y órganos especializados de seguimiento a convenios y tratados en materia de derechos humanos.

El cuerpo de estándares establecidos para ello en el Derecho internacional no busca imponer a los gobiernos una camisa de fuerza que paralice el ejercicio de su capacidad discrecional y operativa en cuanto a diseñar y materializar sus políticas sociales. Por el contrario, se trata de una guía que les orienta de manera precisa para un mejor cumplimiento de sus obligaciones internacionales y les posibilita atender de forma más adecuada las desigualdades estructurales y las situaciones de pobreza extrema, bajo la mirada del enfoque.

Principios y elementos del enfoque aplicables a las políticas sociales

Como señalara Magdalena Sepúlveda (2014), ex relatora de la ONU sobre pobreza y derechos humanos,

> la incorporación de un enfoque de derechos en las políticas sociales no es una opción de política pública más, [o] que los países pueden optar por dar cumplimiento, sino que es una obligación jurídica asumida a través de las propias constituciones, los tratados internacionales y las leyes nacionales. (10)

Bajo esta perspectiva, la política social deja de ser vista bajo una mirada asistencialista, desde la cual el Estado es solo un proveedor de prestaciones sociales, para ser entendida como el principal instrumento para la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Con este cambio de concepción, el Estado se convierte en sujeto obligado y la población beneficiaria en sujeto de derecho, con capacidad de intervenir en el curso de la política y de exigir su cumplimiento.

Entre los principios fundamentales que deben ser tomados en cuenta para concebir las políticas sociales desde un enfoque basado en derechos, se han recogido los siguientes:

Igualdad y no discriminación

Una primera consideración a la hora de establecer este principio es partir de la prohibición legal de toda forma de discriminación por motivos de color de la piel, género, origen étnico, edad, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, discapacidad, propiedades, nacimiento u otra condición. Lo cual ha quedado consagrado en los pactos internacionales de derechos humanos y también establecida, por lo general, en los marcos constitucionales de los Estados.

Sin embargo, la sola prohibición jurídica no basta, por lo que resulta necesario acompañarla de acciones de gobierno encaminadas a lograr una igualdad sustantiva y erradicar o reducir todo lo posible las condiciones estructurales que fomentan la discriminación.

En este sentido, la primera estrategia sería orientar las políticas sociales a la satisfacción universal de todos los derechos económicos, sociales y culturales de la población en su conjunto. Los estados no deben renunciar nunca a la universalidad de la política social, y avanzar progresivamente en este objetivo hasta el máximo de recursos disponibles (23-4).

La segunda estrategia, en aquellos casos donde se presenten limitaciones justificadas de recursos por parte de los gobiernos, es la de optar por

> programas focalizados, estos también han de respetar los principios de igualdad y no discriminación, lo que significa, por ejemplo, que los criterios de elegibilidad deben ser justos, razonables, objetivos y transparentes y

> las personas deben tener acceso a recursos para subsanar posibles errores de exclusión. (24)

Con la puesta en marcha de medidas focalizadas y afirmativas se busca acortar las brechas de facto que impiden a los grupos en situación de vulnerabilidad social el ejercicio de derechos en comparación con el resto de la sociedad. Con ello se busca brindar un trato diferenciado en busca de una equidad real.

Dentro del campo de las acciones afirmativas cabe mencionar desde la provisión de servicios sociales de salud, educación, alimentación, vivienda y cuidados a las poblaciones que no tengan acceso material a ellos, hasta programas de transferencia monetaria que dotan de recursos económicos a los grupos y familias más empobrecidas. Se espera que este tipo de medidas tenga un carácter temporal, hasta erradicar las circunstancias que le dan origen: sin embargo, los altos niveles de desigualdad y exclusión social predominantes en nuestro continente han provocado la permanencia de las políticas afirmativas.

Poner en el centro a los sectores históricamente discriminados supone acciones puntuales de los estados, como: fortalecer capacidades institucionales para el acopio y análisis de datos desagregados por criterios de color de la piel, género, situación geográfica, etc.; generar mecanismos de participación de esos sectores, para involucrarlos en las acciones públicas que los afectan. Asimismo, debe procurarse que la información relacionada con los programas se encuentre en formatos accesibles e incluso hacerlos llegar de forma proactiva a través de reuniones y talleres con los grupos en situación de desventaja. Por otra parte, los gobiernos deberán promover campañas de comunicación, medidas legislativas, acciones de fortalecimiento institucional para desterrar actitudes discriminatorias de diversa índole, tanto a nivel de la sociedad como en las instancias públicas (OACNUDH, 2006: 23).

Este conjunto de acciones y medidas no deben fomentarse de manera aislada, sino como parte de una política integral que incorpore aquellos instrumentos y estándares internacionales concebidos para grupos particulares de población, como son los convenios y tratados sobre derechos de la infancia, de la mujer, de la población adulta mayor, de personas con discapacidad, de grupos en situación de reclusión, de migrantes, de grupos LGBTIQ+, de personas con VIH-SIDA, entre otros.

De igual manera, es fundamental retomar aquellos estándares en materia de *accesibilidad*, *asequibilidad*, *calidad* y *adecuación cultural*, establecidos en las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC, s.f.), de la ONU, sobre derecho a la salud, vivienda, educación, agua y saneamiento, alimentación, etc. Por medio de estos elementos, la acción de gobierno se orienta bajo una guía precisa de los contenidos e indicadores que dan plena satisfacción a los derechos sociales, así como las medidas más adecuadas para garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones que corresponden a cada uno de ellos.

Perspectiva de género

Estrechamente vinculado al principio de igualdad y no discriminación debe considerarse la *perspectiva de género* como otro parámetro que debe guiar el curso de la acción pública. En sus conclusiones convenidas, el Consejo Económico y Social definió la incorporación de esta como:

> el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros. (OACNUDH, 2006: 18)

Se trata de un enfoque crítico que busca comprender las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, para orientar el actuar público hacia la eliminación paulatina de las brechas de desigualdad, la discriminación y la violencia por género. Desde esta plataforma se impulsa el reconocimiento, respeto, garantía, defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, establecidos en diversos instrumentos internacionales (PDHDF, 2008: 64).

Sin embargo, para asegurar que ellas gocen de una igualdad efectiva de derechos en relación con los hombres, resulta necesario, primeramente, que el diseño de programas públicos aborde sus necesidades concretas a lo largo de toda su vida: niñez, adolescencia, edad adulta y vejez. Aunado a ello, en múltiples circunstancias las políticas sociales deben establecer medidas diferenciadas, entre las cuales cabe considerar (Sepúlveda, 2014: 25-6):

- La existencia de datos desagregados, tanto por género como por edad, no solo para establecer programas de protección social eficaces, sino también para develar las dinámicas de género que subyacen en cada contexto.
- Abordar los desequilibrios, los riesgos y las barreras que enfrentan las mujeres, en particular respecto del acceso a los recursos productivos, la educación, la salud y el trabajo; teniendo en cuenta su función reproductiva y productiva.

Si bien el enfoque de derechos en las políticas públicas se concibió bajo contextos y referentes distintos a los que dieron fundamentos al modelo socialista cubano, sus aportes pueden ser de valía en la actual coyuntura de reformas económicas y sociales en el país.

- Respetar y reconocer el papel que desempeña la mujer como cuidadora, sin reforzar los patrones de discriminación ni los estereotipos negativos.
- Promover el valor del trabajo de cuidados y distribuir las responsabilidades relativas a esta labor, desde las familias y comunidades al Estado, alentando a los hombres a que participen más activamente en esas tareas familiares.
- Mitigar las asimetrías de poder basadas en el género y abordarlas en los procesos de toma de decisiones, tanto en el hogar como en la comunidad. Los estados deberían garantizar, por ejemplo, la participación efectiva de las mujeres en los programas sociales, estableciendo cupos en sus estructuras de gobernanza.
- Movilizar a las mujeres a fin de que se organicen para abordar temas esenciales como las limitaciones de su tiempo y la violencia de género.
- Integrar indicadores de género en el seguimiento y evaluación de los programas de protección social.
- Garantizar el acceso (tanto económico como físico), sin discriminación, a los servicios públicos, los que también deben tener en cuenta cuestiones de género.
- Asegurar a las mujeres el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, desde el acceso a los servicios de salud correspondientes hasta la existencia de un marco legal y social que les garantice la adopción de decisiones libres y exentas de restricciones, por ejemplo, respecto al número y al espaciamiento de los embarazos.

Es primordial acompañar estas medidas de otras de carácter legislativo y de política pública —no solo de tipo social— tendientes a garantizar, entre otros aspectos, «el acceso de la mujer a la tierra, los recursos productivos y el crédito; la protección contra violencia de género; el acceso a la justicia y una mayor participación política» (26).

Participación social

Participar en los asuntos públicos es un derecho humano reconocido en diversos instrumentos internacionales, que no se limita al derecho al voto, sino que supone el involucramiento ciudadano en el ámbito público. Este derecho está entrelazado con los principios democráticos fundamentales e implica que las políticas públicas deben ser elaboradas e implementadas sobre la base de una amplia consulta y participación de la población, en tanto la política misma debe convertirse en un escenario de creación de redes sociales autosostenibles y de fomento de organizaciones sociales y civiles (PDHDF, 2008: 65).

En el ámbito de las políticas sociales hay que tomar en cuenta, principalmente, el punto de vista y las demandas de las poblaciones y grupos afectados; ello posibilita no solo dotar de mayor legitimidad al diseño de los programas públicos, sino también permite contar con diagnósticos y programas más certeros de combate a la pobreza y atención a las desigualdades, al tomarse en cuenta las necesidades reales de los sectores con mayor vulnerabilidad.

Para asegurar que una participación sea real, es necesario cumplir con algunos principios. En primer lugar, los actores sociales que intervengan deben tener capacidad de decisión y no solo de opinión. Desde esta óptica, la participación busca romper con las asimetrías de poder históricamente existentes, donde el foco de este suele concentrarse en los actores de gobierno y en otros poderes fácticos, como los empresariales.

Otro aspecto para una participación efectiva es contar con un adecuado acceso a la información, que les permita tomar decisiones pertinentes a los sectores sociales. Deberá ser «suficiente», «de calidad», «oportuna», «accesible» y «asequible» al público, tanto en términos económicos, físicos, y de plataformas que faciliten un mejor acceso.

Transparencia y rendición de cuentas

Muy entrelazado con los derechos a la participación y a la información se cruza el principio de transparentar y rendir cuentas, el cual tiene como finalidad evitar la corrupción, el abuso de poder y la mala gestión. La *transparencia*, además de que exige abrir la información pública a la ciudadanía, es una forma, al rendir cuentas, de limitar la opacidad y discrecionalidad de los gobiernos en el ejercicio público. En lo relacionado con los programas sociales, debe haber transparencia en los responsables de llevarlos a cabo; en la población beneficiaria; en el criterio de selección; en las prestaciones o beneficios; en los mecanismos de participación, seguimiento y evaluación; así como en las vías de impugnación ante posibles quejas y reclamos ciudadanos sobre los programas (Sepúlveda, 2014: 33).

La rendición de cuentas a la población objeto de programas sociales debe efectuarse de manera periódica, por medio de mecanismos formalmente establecidos y durante todo el ciclo de vida de cada programa. Se debe evitar ser usada como forma de propaganda e injerencia política hacia los sectores beneficiarios, sino instrumento efectivo para brindarles información relevante, atender necesidades que vayan surgiendo durante su puesta en marcha y hacer los ajustes necesarios para su mejor solución (34).

En lo referente al proceso presupuestario, a lo largo de sus diferentes etapas (formulación, aprobación, ejecución, evaluación y fiscalización) debe existir información disponible sobre la asignación y gestión de los recursos, la cual deberá ser

> clara, asequible, oportuna, consistente, detallada y en formatos que permitan su análisis por parte de una diversidad de usuarios. El Estado debe ofrecer también explicaciones detalladas y fundamentadas para justificar sus decisiones sobre asignaciones presupuestales. (PDHDF, 2008: 67)

Máximo uso de recursos disponibles

Bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) se estableció el principio de *máximo uso de recursos disponibles*, el cual considera que los estados deben realizar los esfuerzos necesarios y demostrar que los están llevando a cabo, para cumplir y garantizar las metas prioritarias de derechos humanos mediante la utilización de todos los recursos que tengan a su alcance. De hecho, para el caso de los económicos, sociales y culturales, la no utilización al máximo de los recursos disponibles constituye, en sí misma, una vulneración de los derechos por parte del Estado. La insuficiencia de recursos públicos no exime al gobierno de su obligación de asegurar el disfrute más amplio posible de esos derechos, ya que este principio contempla su priorización para atender a los grupos con mayores desventajas (66).

Realización progresiva

El principio de progresividad en el cumplimiento de los derechos también fue recogido por el PIDESC, acorde con el principio de máxima utilización de recursos disponibles. Asimismo, el Estado está obligado a satisfacer, a través de sus políticas públicas, al menos niveles mínimos esenciales de estos derechos, y una vez que se han conseguido, mantenerlos o elevarlos (67).

Coordinación y articulación

Hacerse cargo del principio de interdependencia de los derechos humanos implica la permanente concertación entre autoridades públicas de los distintos poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y órdenes de gobierno (nacional y local) «en condiciones de respeto a la autonomía y bajo criterios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad de la acción pública […] con altos niveles de corresponsabilidad social y política» (66).

Territorialidad

En la elaboración de las políticas públicas es fundamental tomar en consideración los diferentes espacios geográficos y culturales. En el caso de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) es muy relevante este componente, «en función de los procesos de urbanización, ordenamiento territorial, provisión de servicios fundamentales como el agua y la infraestructura, la disposición de vivienda y el manejo de los recursos ambientales, entre otros» (66).

Efectividad

Las autoridades deben velar por el cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los programas sociales «con los recursos humanos, económicos, administrativos, técnicos y materiales destinados», cuidando de prevenir «errores, desvíos y fracasos». En el caso del enfoque de derechos humanos no es suficiente con la simple efectividad instrumental, sino que las políticas deben estar dotadas de una base importante de legitimidad social (66).

Exigibilidad y justiciabilidad

Este parámetro hace alusión a la necesidad de establecer mecanismos, de defensa de los derechos humanos, en particular, frente a su posible vulneración, que puede afectar a la ciudadanía como consecuencia del mal diseño o implementación de políticas públicas por instancias de gobierno. Dichos mecanismos deben incluir la vía judicial y otros no jurisdiccionales como pueden ser las defensorías del pueblo o las comisiones de derechos humanos.

Posibilidades del enfoque de derechos en las políticas sociales en Cuba

Si bien el enfoque de derechos en las políticas públicas se concibió bajo contextos y referentes distintos a los que dieron fundamentos al modelo socialista cubano, sus aportes pueden ser de valía en la actual coyuntura de reformas económicas y sociales ensayadas en el país en la última década. La nueva Carta Magna, aprobada en 2019, y el programa legislativo en curso para darle viabilidad ofrecen condiciones

propicias para actualizar el quehacer y las políticas gubernamentales, a partir de nuevos enfoques donde la perspectiva de derechos puede encontrar cabida.

A partir del análisis del texto constitucional se aprecia una mayor centralidad de la agenda de derechos (Fundación Heinrich Boll, 2020). Desde el primer artículo, se define el Estado como «socialista, de derecho y de justicia social», y entre sus fines establece «garantizar la igualdad efectiva en el disfrute y ejercicio de los derechos» (Artículo13). De igual forma, se recoge la observancia irrestricta de «los principios y normas del derecho internacional», se «defiende y protege el disfrute de los derechos humanos», y se repudia «cualquier manifestación de racismo o discriminación» (Artículo 16). Asimismo, se «promueve la participación ciudadana en la realización de su política educacional, científica y cultural» (Artículo 32).

Por su parte, dentro del título «Derechos, deberes y garantías» se establece que

> el Estado cubano reconoce y garantiza a la persona el goce y el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación (Artículo 41) [y se proscribe cualquier exclusión] por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana.

Se sanciona por ley la violación a este principio (Artículo 42).

De igual forma, se reconoce el principio de *igualdad de género* en los ámbitos «económico, político, cultural, laboral, social, familiar y cualquier otro»; el Estado propicia «el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social», y les asegura «el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, las protege de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios» creando los «mecanismos institucionales y legales» para enfrentarla (Artículo 43).

Es de destacar lo contemplado en el Artículo 44, bajo el cual el Estado se obliga a «crear las condiciones para garantizar la igualdad» y hacer «efectivo este derecho con la implementación de políticas públicas y leyes para potenciar la inclusión social y la salvaguarda de los derechos de las personas cuya condición la requiera». En este supuesto es notorio el reconocimiento expreso del término de «política pública», estrechamente ligado a la garantía de derechos, no empleado antes dentro del glosario estatal cubano.

El cuerpo constitucional reconoce, además, una gama amplia de derechos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales, culturales y ambientales. Entre estos se incorporan por vez primera, el de *transparencia y acceso a la información* (Artículo 53), el de «participar en la conformación, ejercicio y control del poder del Estado» (Artículo 80), y otros derechos sociales como al *agua y al saneamiento* (Artículo 76), a una *vivienda adecuada* (Artículo 71), a un *medio ambiente sano* (Artículo 75), a la *alimentación* (Artículo 77); así como los *derechos del consumidor* (Artículo 78), entre otros.

Para el goce efectivo y la defensa de los derechos, se establece un conjunto de garantías materiales (de política pública), así como de tutela judicial, ante su posible violación por parte de autoridades y actores no estatales (artículos 92, 98 y 99). Gracias a este último mecanismo jurídico, de extraordinaria importancia, hoy resulta posible invocar la Constitución como norma de aplicación directa ante los tribunales del país. Para su adecuada implementación entró en vigor la Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales (L 153/2022), que regula el procedimiento de amparo, así como las funciones y competencias de los órganos jurisdiccionales encargados de su aplicación.

Del conjunto de disposiciones analizadas se puede concluir que el marco constitucional cubano favorece ampliamente la incorporación del enfoque de derechos en las políticas públicas. Entre otros aspectos que así lo evidencian, cabe resaltar el paralelismo de varios principios y elementos recogidos en el texto constitucional con los establecidos por el enfoque, tales como el *reconocimiento del derecho internacional*, *igualdad y no discriminación*, *igualdad de género*, *participación*, *transparencia, acceso a la información* y *rendición de cuentas*, así como la *exigibilidad y justiciabilidad*. Asimismo, es clara la voluntad de la Ley de Leyes de avanzar hacia políticas públicas para las salvaguardas de los derechos como profesa el citado Artículo 44.

Desde luego, hay temas aún pendientes y mejorables, entre ellos, la ratificación por el Estado cubano de los pactos internacionales de derechos humanos, en particular, DESCA y su sujeción a la supervisión del Comité DESC. Sobre todo, tratándose de una materia en la que el modelo socialista cubano puede aportar sus logros y experiencias, en el campo social, al desarrollo de los estándares internacionales y recibir, al mismo tiempo, un seguimiento altamente especializado de sus políticas sociales, desde una óptica de derechos.

Por otro lado, se dejó pasar la oportunidad de establecer en la Carta Magna un órgano de control constitucional jurisdiccional, encargado de velar por la correspondencia de las normas reglamentarias y las políticas públicas con la Constitución y declarar, en los casos que corresponda, su inconstitucionalidad, corrigiendo así los defectos y excesos en que pudieran incurrir tanto los órganos legislativos como ejecutivos.

También se encuentran, en espera de aprobación como parte del cronograma legislativo comprometido, las leyes de transparencia y acceso a la información, de

comunicación social, y una nueva ley de asociaciones; materias indispensables para fortalecer la participación social, el control popular y la rendición de cuentas en las políticas públicas.

No obstante, como ya se ha expresado, los avances del marco constitucional y legal vigente ofrecen excelentes posibilidades para avanzar hacia la incorporación del enfoque de derechos en las políticas nacionales. Ello tendría vital importancia por varias razones.

Una primera consideración sería la de fortalecer las políticas sociales bajo estándares internacionales de derechos humanos, lo que aseguraría su progresividad y no regresión. Es reconocido que el modelo cubano siempre tuvo la justicia social entre sus principales banderas, base de su legitimidad y su consenso histórico. Lo cual se ha patentado en sus políticas universales de salud, educación, cultura y deporte. Sin embargo, las circunstancias adversas impuestas por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense, los efectos devastadores de la pandemia de la COVID-19 —tanto en términos de salud pública como a nivel económico—; más un conjunto de medidas internas con impactos drásticos en el encarecimiento de la vida, han agudizado la crisis social, y profundizado la desigualdad y el empobrecimiento, en especial de los sectores más vulnerabilizados. La calidad de servicios básicos, como salud y educación, ha mermado notoriamente; y en los rubros de alimentación, vivienda y transporte la situación se ha vuelto aún más crítica.

En este complejo contexto, impulsar medidas de política pública que aseguren un piso mínimo de derechos para toda la población y protejan a los grupos en mayor desventaja resulta indispensable. Con este propósito, partir del enfoque de derechos, además de ser lo acertado desde un punto de vista ético y normativo, sería de gran utilidad a la hora de diseñar y ejecutar medidas de política económica y social que hagan frente a la actual crisis.

En segundo lugar, el enfoque de derechos favorecerá el empoderamiento ciudadano, la profundización de la democracia participativa, y el control popular; dejando atrás la lógica verticalista, muy entronizada en la administración pública cubana, para comenzar a concebir a la autoridad como sujeto obligado y a la ciudadanía como sujeto de derechos, con la capacidad de intervenir en los espacios de construcción de las políticas y vigilar su cumplimiento.

En línea con lo anterior, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez (2022) expresó:

> El socialismo requiere de una ciudadanía activa y del involucramiento popular en todas las esferas […] La participación popular es esencia de la democracia y sin ella no es posible el socialismo. Debemos privilegiar las diferentes formas del control popular, sin que implique ir en detrimento del control administrativo.

Finalmente, asumir el enfoque de derechos desde un punto de vista político posibilitaría trascender el eterno círculo vicioso en el que ha quedado entrampado el tema de los derechos humanos en Cuba; ya sea porque esta agenda ha sido rehén de la Guerra fría y del diferendo histórico con los Estados Unidos, o porque pareciera ser monopolio exclusivo de los grupos de oposición interna para, , sobre todo, emplearlo como un instrumento de subversión interna que dé al traste con el sistema socialista cubano. A contracorriente, el enfoque contribuiría a transitar hacia un terreno menos discursivo y disputado, pero más eficaz, de la Política (en mayúscula), con un impacto real en el bienestar social y el florecimiento de una cultura de derechos en la vida pública cubana.

Referencias

Comité DESC (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) (S. f) «Observaciones generales aprobadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales». Disponible en <https://bit.ly/2EfcsHO> [consulta: 27 marzo 2023].

Constitución de la República de Cuba (2019) *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, edición extraordinaria, n. 5, 10 de abril. Disponible en <https://bit.ly/3ZBdRj0> [consulta: 9 enero 2023].

Cuba. Ley 153/2022 del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales. *Gaceta oficial de la República de Cuba*, n. 74, ordinaria, de 15 de julio. Disponible en <https://acortar.link/FteR8g> [consulta: 16 abril 2023].

Díaz-Canel Bermúdez, M. (2022) «Discurso pronunciado en las conclusiones del décimo período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX legislatura», 14 de diciembre. Disponible en <https://bit.ly/3ZDmZTz> [consulta: 28 marzo 2023].

Fundación Heinrich Böll (2020) *Constitución de la República de Cuba 2019. Sistema político, derechos, género y medio ambiente.* Ciudad de México. Disponible en <https://acortar.link/62fVgp> [consulta: 28 marzo 2023]

OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) (2006) «Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo». Disponible en <https://bit.ly/2A7EMs4> [consulta: 28 marzo 2023].

Pautassi, L. (2007) «La articulación entre políticas públicas y derechos, vínculos difusos». En: *Políticas públicas para un estado social de derechos*, v. 2. Erazo, X. (ed.), Madrid: LOM editores. Disponible en <https://bit.ly/3Lfm9a7> [consulta: 28 marzo 2023].

PDHDF (Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal) (2008) Ciudad de México. Disponible en <https://tinyurl.com/2r38qvlu> [consulta: 28 marzo 2023].

Sepúlveda, M. (2014) *De la retórica a la práctica: el enfoque de derechos en la protección social en América Latina*. Santiago de Chile: CEPAL/ Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega. Disponible en <https://bit.ly/41NKHOI> [consulta: 28 marzo 2023].

UNSDG (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible) (2012) *Enfoque para la programación basado en los Derechos Humanos*. Disponible en <https://bit.ly/425tHTU> [consulta: 28 marzo 2023].

©TEMAS, 2023

Impacto de las reformas constitucionales sobre derecho laboral en Cuba

Guillermo Ferriol Molina
Jurista y profesor.
Facultad de Derecho, Universidad de La Habana.

Cuando se hace una reforma constitucional en nuestros países latinoamericanos, dada la primacía de la Ley Suprema sobre el resto de las normas jurídicas, se producen modificaciones legislativas ulteriores y necesarias, como un modo de adecuar los escenarios y la vida jurídica a los nuevos postulados contenidos en ella.

En no pocas naciones de Latinoamérica y de otras regiones del mundo, las políticas llegadas de la mano de la globalización —entendida como fenómeno objetivo, que existe desde tiempos inmemoriales, surgida por la necesidad que tienen las naciones de relacionarse— neoliberal y el neoliberalismo —ideología que en los últimos tiempos capitalizó el intercambio entre los Estados— introdujeron modificaciones constitucionales y legislativas que impactaron negativamente las relaciones laborales, a tal punto que parecía que las disciplinas Derecho del Trabajo, y su rama afín, Derecho de la Seguridad Social, desaparecerían al ser negados por algunos teóricos su objeto de estudio y principios esenciales..

Aunque se trató de negar su existencia, el trabajo, los trabajadores, los empleadores, los riesgos laborales y la necesidad de protección social permanecen. También se desdeñó las clases, los grupos sociales y su carácter antagónico, pero estos existen. Estas nuevas condiciones indican la necesidad de retomar los principios fundacionales de ambas disciplinas, y establecer nuevas formas para abordarlos. No hay sociedad ni desarrollo sin trabajo y sin los vínculos que este fomenta. Se requiere, por tanto, una reformulación de la definición de derecho laboral y su objeto de

estudio, de persona trabajadora —para evitar la distinción de género—, de empleo, de trabajo digno en su relación con la noción de decente, enunciada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reformulación necesaria para adecuarla a los nuevos tiempos y a las actuales formas laborales, algunas de las cuales no están incluidas en las definiciones tradicionales, o provienen del rápido proceso de introducción de las nuevas tecnologías informáticas y de las comunicaciones.

Si bien estos temas no son propios para este artículo, cuando citemos la realidad laboral cubana se brindarán algunas consideraciones sobre ellos, y se podrá observar si tales modificaciones impactan positiva o negativamente sobre el trabajo y los derechos laborales en el país. Para tratarlos, se debe tener en cuenta que la Constitución de la República de Cuba, proclamada el 9 de abril de 2019 —de la cual, por razones de espacio, solo se abordarán algunas disposiciones—, constituye un punto de inflexión.

Impacto de la Constitución de 2019 en el Derecho del Trabajo

La Constitución de la República de Cuba provocó modificaciones en la legislación laboral y en la de seguridad social anteriores, esencialmente en el Código de Trabajo (LCT 116/2013, 20 de diciembre) y en su Reglamento (D 326/2014, de 12 de junio); en la Ley 105, de Seguridad Social, de 27 de diciembre de 2008 y en su Reglamento (D 283/2009, de 6 de abril); en la legislación de maternidad y de los procedimientos de solución de conflictos existentes (unos regulados en la mencionada Ley 116 y en el Decreto 326, y otros, en la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico).

Estas transformaciones en el orden constitucional y legislativo, se originaron a partir de los cambios producidos en los escenarios económicos y laborales del país, y como resultado de un amplio proceso de consultas entre especialistas, juristas y la población.

Desde inicios de la segunda década del siglo xxi, a diferencia de períodos anteriores, se transitó de una economía esencialmente estatal a una donde se mezclan sujetos de este tipo de propiedad con otros que ejercen o sustentan otras formas. Así la actual Constitución reconoce los siguientes modos de propiedad (Art. 22):

a) socialista de todo el pueblo: el Estado actúa en representación y beneficio de aquel como propietario.
b) cooperativa: sustentada en el trabajo colectivo de los socios y en el ejercicio efectivo de los principios del cooperativismo.
c) de las organizaciones políticas, de masas y sociales: la que ejecutan los sujetos sobre los bienes destinados al cumplimiento de sus fines.
d) privada: la que se realiza sobre determinados medios de producción por personas naturales o jurídicas cubanas o extranjeras, con un papel complementario en la economía.
e) mixta: combinación de dos o más modos de propiedad.
f) de instituciones y formas asociativas: la que ejercen los sujetos sobre sus bienes para el cumplimiento de fines de carácter no lucrativo.
g) personal: la que se ejerce sobre los bienes que, sin constituir medios de producción, contribuyen a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de su titular.

En reconocimiento de estas formas, se aprobaron nuevos tipos de sujetos y actores, tanto en lo económico como en el sistema de trabajo, y se modificaron los modos de actuación existentes, como ha ocurrido en la empresa estatal. Todo ello ha reformado los escenarios laborales.

Caracterización de los escenarios económicos y de trabajo

Actualmente, en el sector estatal cubano están constituidas más de 1 900 empresas, focalizadas en zonas estratégicas para el desarrollo del país. También existe una importante cantidad de unidades presupuestadas que despliegan funciones sociales en educación, salud, cultura y deporte. Asimismo, se aprobaron más de seis mil novecientos micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) (ONEI, 2022b) —la mayoría de propiedad privada—, bajo la forma de sociedades de responsabilidad limitada. Según el Decreto Ley 46, de 6 de agosto de 2021, se reconocen como unidades económicas con personalidad jurídica y dimensiones y características propias, cuyo objeto es desarrollar la producción de bienes y la prestación de servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. Además, existen más de cinco mil tipos de cooperativas, agropecuarias o no (ONEI, 2022b), y una importante cantidad de personas que ejercen el trabajo por cuenta propia, reconocido en el Decreto Ley 44, de 6 de agosto de 2021. Por otra parte, funcionan otros actores en modalidades de la inversión extranjera. Cada una de estas formas económicas desarrolla modos de trabajo, se fundamenta en él y su ejercicio, y establece vínculos jurídicos amparados en el derecho laboral y en el de la seguridad social, teniendo como presupuestos esenciales los postulados de la Constitución: perfeccionamiento de la sociedad socialista en construcción, mejor ejercicio

de los derechos del trabajo y mayor protección de la seguridad social.

Antes de esta Ley Suprema, ya se reconocían derechos como la estabilidad en el empleo, igualdad laboral y salarial, prohibición del trabajo infantil, protección especial a los menores (hasta dieciocho años de edad), desarrollo de una seguridad social con alcance universal para el trabajador, su familia y toda la población, y protección a la maternidad y paternidad. La actual Carta Magna reafirma, desde su rango superior, todos estos derechos; pero también introduce otros fundamentos, y con ellos nuevos desafíos, esencialmente cuando distintos actores se inician en la realidad económica y en los procesos laborales del país, y otros, preexistentes, han de modificar sus modos de actuación. Podría decirse que se transita hacia un desarrollo de los derechos de trabajo de segunda generación, un estadio superior, como se reconoce en otros países latinoamericanos.

Impacto de los cambios constitucionales en el mundo laboral

Para adentrarnos en algunas de las principales modificaciones que se introducen en el ámbito laboral, nos remitiremos al artículo 1 de la Constitución, que reconoce el papel del trabajo en el desarrollo de la sociedad:

> Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva.

Por otra parte, en el artículo 64 se expresa un nuevo elemento: que toda persona en condición de trabajar tiene derecho a obtener un empleo digno, en correspondencia con su elección, calificación, aptitud y exigencias de la economía y la sociedad. Al respecto, cabe preguntarse: ¿qué es empleo digno? ¿Es el trabajo decente que formula OIT o el de la concepción más integral, vinculado con el principio de dignidad reconocido en el mencionado artículo 1?

La OIT (2019a) ratificó, en un comunicado de prensa, en mayo de 2019, su concepción de trabajo decente, que se sustenta en la afirmación de la Declaración de Filadelfia, de 1944, de que todos los seres humanos tienen derecho a desarrollarse en condiciones de libertad y dignidad, seguridad económica e igualdad de oportunidades, acentuando la importancia de los derechos humanos en las políticas sociales; es decir, el reconocimiento de los laborales como fundamentales y, en consecuencia, como constitucionales. A partir de estas consideraciones, ¿solo han de cumplirse estos principios y derechos en los escenarios laborales, o el trabajo debe propiciar una vida digna al trabajador y su familia, más allá de los límites del lugar donde se labora?, ¿se debe entender y extender sus efectos a todos los aspectos de la existencia del trabajador como ser social?, ¿esta consideración comprende el respeto a la libertad y dignidad de la persona trabajadora?, ¿la ausencia de cualquier tipo de discriminación o inequidad?, ¿las condiciones óptimas de salud y de seguridad social y el acceso a esta?, ¿el derecho a recibir un salario decoroso?, ¿la práctica de la negociación colectiva y libertad de asociación?

Podría hablarse de empleo, o mejor de trabajo digno —pues hay formas donde no hay relaciones de empleo—, si este permite que la persona trabajadora desarrolle su vida en sociedad con seguridad, respeto, consideración, de modo pleno, más allá de los límites del lugar, y que actúe en el medio social, en su comunidad, en toda la sociedad, sin limitación de sus derechos. En esencia, significa permitirle desarrollar su vida en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica e igualdad de oportunidades.

En el artículo 66, se prohíbe el trabajo de niñas, niños y adolescentes. Este principio ya era reconocido en el texto constitucional anterior, y en la Ley 116, cuyo artículo 2 dispone la prohibición del trabajo infantil y la protección especial a los jóvenes entre quince y dieciséis años que se incorporen a laborar, a fin de garantizar su desarrollo integral. Es importante recordar que en Cuba la edad laboral es a partir de diecisiete años, y que los empleadores pueden, excepcionalmente, concertar contratos con menores, con consentimiento de los padres o tutores y bajo previa aprobación del director municipal de Trabajo. Estas disposiciones han de cumplirse también en el sector no estatal, como lo establece el artículo 9 del Decreto Ley 46, mas, como la vida es más completa que la letra, esta regulación podría no resultar suficiente para su cumplimiento, considerando que parte importante de los nuevos empresarios no han sido antes empleadores. En este sentido, la capacitación es esencial.

El artículo 20 de la Constitución incluye un precepto de alta repercusión que dispone que los trabajadores participen en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía. Se modifica, por tanto, lo estipulado en la Ley 116, que contemplaba la participación mayoritariamente indirecta, de los/las trabajadores/as en sus entidades, a través de las organizaciones sindicales, o en asambleas. Ahora se amplía su alcance, por lo que se debe observar cómo se desarrolla en cada uno de los procesos mencionados actualmente. Creemos que debe perfeccionarse, pues el modo en que se lleva a cabo no impacta de manera eficaz en el progreso de los recursos humanos, en la

eficiencia empresarial y del trabajo, en la productividad y mejora continua, en la ampliación del sentido de pertenencia del colectivo como propietario de los medios de producción. Es necesario modificar esta realidad para atemperarla a la nueva disposición constitucional.

Según Carlos Marx (1975), la participación popular constituye la herramienta fundamental para lograr la instauración del estado proletario, el cual, una vez en el poder, resulta imprescindible para la construcción de la sociedad comunista. Para Marx, no se puede concebir la democracia reducida al *ius honorum* (derecho a ocupar cargos) y al *ius sufragii* (derecho al voto); estos son apenas momentos del pueblo en el poder, pero no los únicos. Describe un nuevo paradigma de correspondencia entre obreros y política, donde esta no se concentra en un artilugio de fuerza de unos contra otros, sino que se centraliza en una metamorfosis donde las masas trabajadoras se colocarán como sujetos de gobierno.

Federico Engels apunta, al final de *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado* (1884):

> La disolución de la sociedad se yergue amenazadora ante nosotros, como el término de una carrera histórica cuya única meta es la riqueza, porque semejante carrera encierra los elementos de su propia ruina. La democracia en la administración, la fraternidad en la sociedad, la igualdad de derechos y la instrucción general, inaugurarán la próxima etapa superior de la sociedad […] Será un renacimiento de la libertad, la igualdad y la fraternidad de las antiguas *gens*, pero bajo una forma superior. (108)

Para Vladimir Ilich Lenin (1961), la democracia proletaria depende de un conjunto de espacios de participación efectiva, de irrevocabilidad permanente, de constante consulta popular, de eficaz cumplimiento de tareas de quienes representan. Requiere de una política que respalde a la mayoría organizada porque es esta quien la promulga. Afirma que realizada la igualdad de todos los miembros de la sociedad con respecto a la posesión de los medios de producción, surgirá inevitablemente ante la humanidad la cuestión de seguir adelante, de pasar de la igualdad formal a la de hecho, a la aplicación de la regla: «de cada uno, según su capacidad; a cada uno, según sus necesidades» (52).

Ernesto Guevara (1963) considera que la participación de los obreros en la dirección de la fábrica es una palanca necesaria en la construcción de la nueva sociedad, y constituye un factor educativo. Advierte que la clase obrera tiene que prepararse para alcanzar su función de dirección, en el menor plazo posible.

Fidel Castro Ruz (1986) afirmaba:

> El método burocrático de trabajo es un mal contra el cual todos los revolucionarios debemos estar alertas. Es un mal en el que puede caer fácilmente, incluso, un buen revolucionario. El método burocrático significa gobernar desde arriba. El método burocrático significa decidir desde arriba. Significa la ausencia de contacto entre el que administra —entre el que dirige, entre el que gobierna— y las masas. El método burocrático implica el riesgo, incluso, de sacrificar una serie de principios que son fundamentales para la Revolución. Y sobre todo, hacerle perder, renunciar a lo que es tan fundamental en la Revolución: la iniciativa, el espíritu creador y el entusiasmo de las masas.

Aunque estas consideraciones fueron expresadas en diferentes épocas, reflejan la importancia de la participación en todos los segmentos de una sociedad, cuyo rasgo esencial es el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de sus miembros. El artículo 42 prescribe que todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana.

Por su parte, en la Ley 116, al definir el principio fundamental de igualdad en el trabajo, no se incluyen las condiciones o circunstancias de identidad de género, edad, origen étnico y nacional, por lo que deben introducirse en próximas modificaciones. No obstante, en la práctica, estas nuevas condiciones son tomadas en consideración; por ejemplo, en el acceso al empleo y en la solución de conflictos laborales. Pero aunque estos elementos suponen la eliminación de cualquier forma de discriminación, también constituyen un reto para todos los actores económicos y laborales, pues pudieran existir modalidades de acoso o de violencia en el trabajo, o de limitación en el acceso al empleo, que no siempre son posibles de acreditar, y deben divulgarse permanentemente para evitarlas. Quizás sería adecuado, desde el punto de vista normativo, que en un futuro cercano el Estado cubano ratifique el Convenio 190 de la OIT (2019b), sobre la eliminación de la violencia y el acoso laboral, y su posterior desarrollo en la legislación nacional.

En otro orden, el artículo 68 precisa que la persona trabajadora tiene derecho a la seguridad social. El Estado le garantiza la protección adecuada cuando se encuentre impedida de laborar por su avanzada edad, maternidad, paternidad, invalidez o enfermedad. En Cuba, este derecho es universal; comprende a trabajadores/as y sus familiares, y a toda la población.

Los retos más importantes en esta materia surgen del acelerado proceso de envejecimiento poblacional en el país. Un estudio revela que este fenómeno constituye uno de los temas que acaparan la atención sobre la sociedad cubana en la actualidad, y se ha convertido en el principal desafío demográfico, porque incide

El surgimiento de nuevos actores económicos y la modificación de prácticas de otros preexistentes ameritan la necesidad de una permanente capacitación en materia de derechos laborales, para contribuir en modo proactivo al debido cumplimiento de la legislación.

en la economía, la familia, los servicios, el reemplazo del capital humano, la seguridad social, y eleva los costos de atención médica y epidemiológica. Cuba fue uno de los países de América Latina y el Caribe que inició su transición demográfica más temprano, debido al intenso descenso de la fecundidad. En ello incide el alto nivel educacional de su población; las condiciones económicas recrudecidas por el bloqueo comercial, económico y financiero del gobierno de los Estados Unidos; el aumento gradual de la expectativa de vida; y el persistente saldo migratorio negativo. A partir de 2010, la Isla se convirtió en la primera economía envejecida de la región, y al finalizar 2021, las personas de sesenta años y más representaron 21,6% del total de la población (ONEI, 2022a: 6). Si bien se han adoptado medidas para incrementar la fecundidad y la natalidad, aún no parece que tengan suficiente impacto. Cada uno de estos factores, considerados individualmente, ha repercutido sobre la situación demográfica en el país, y todos, en su relación, la profundizan, lo que no solo influye sobre la seguridad social, sino también en la fuerza de trabajo, en tanto, como se puede colegir y la práctica lo ha demostrado, no hay un reemplazo efectivo de la población laboralmente activa.

Relacionado con lo anterior, el Decreto Ley 56, de 13 de octubre de 2021, aplicado a todos los miembros de la familia, ya sean trabajadores del sector estatal como no estatal, propicia la responsabilidad compartida en el cuidado y atención de los menores de edad. También define que la licencia por maternidad es de carácter obligatorio, en el período pre y posnatal, para garantizar el descanso de la gestante ante la proximidad del parto, así como su recuperación posterior.

Si bien las disposiciones sobre la maternidad permiten que el padre u otros familiares puedan solicitar una licencia, se mantiene, por diversos factores, que la madre cuide del o la menor durante todo ese periodo. Se debe continuar laborando en este punto, para evitar los patrones patriarcales en esta práctica. También el Código de las Familias, puesto en vigor mediante la Ley 156, de 22 de julio de 2022, introdujo posibles modificaciones o adiciones a este Decreto Ley.

Como otra novedad, el Artículo 92 de la Constitución dispone que el Estado garantiza, de conformidad con la ley, que las personas puedan acceder a los órganos judiciales, a fin de obtener una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Este postulado tuvo leyes de desarrollo; por ellas, y en unión de los procedimientos de solución de conflictos individuales y colectivos de trabajo, establecidos en el Código Laboral, se regularon otros. Así, en el sector estatal se mantienen los Órganos de Justicia Laboral, los cuales están integrados por una persona designada por el empleador, otra que propone la organización sindical, y tres trabajadores electos en asamblea. Todas conocen tanto de reclamaciones disciplinarias como de derechos, y una vez resuelta la demanda, la parte inconforme puede establecer reclamación ante la justicia. Hay una parte de las organizaciones no estatales que se acogen a estos órganos, pero, por lo general, en estas entidades las personas pueden reclamar mediante procedimientos de solución estructurados en ellas, y de no existir, van directamente al tribunal.

En este orden, la Ley 141, de 28 de octubre de 2021, que puso en vigor el Código de Procesos, introdujo, para ambos sectores, garantías y prácticas nuevas, y amplió las instancias de solución de conflictos. Por su parte, el Decreto Ley 69, de 19 de enero de 2023 que, entre otras disciplinas, introduce la mediación para la materia laboral, extiende las vías de resolución de problemas a un escenario no ejercitado antes en el país. La necesidad de incorporar, a esta práctica jurídica, los nuevos elementos regulados en ambas disposiciones normativas constituye un desafío.

También es importante añadir la influencia en este sector de la Cuarta Revolución Industrial (Revolución 4.0) y de tres modalidades laborales posteriores a la Constitución: el teletrabajo, el trabajo a distancia, y el a domicilio, que producen las siguientes ventajas:

- Las organizaciones reportan menores costos y gastos, mayor productividad y control del cumplimiento de los objetivos, menor necesidad de determinados equipos, eliminación del control de asistencia diaria y el ausentismo.
- Los trabajadores disponen de mayor autonomía y más especialización, controlan su horario, tienen menos desplazamientos y estrés, y eligen su entorno laboral.

Entre sus mayores desventajas se encuentran: ausencia de ambiente y comunidad de trabajo; no establecimiento de relaciones directas entre trabajadores (puede provocar la pérdida de colaboración); surgimiento de horarios ilimitados (puede afectar la salud de la persona trabajadora).

De practicarse con mayor amplitud estas modalidades, implicaría la introducción de nuevos retos para trabajadores y empleadores. Por regla general, todo puesto de trabajo tributa a otro, al que se vincula por sus resultados; entonces habría que valorar qué funciones pueden desempeñarse a distancia que no necesite la presencia diaria de la persona en el centro. Una vez determinado esto, debe modificarse el instrumento jurídico (contrato) que formalizó la relación laboral entre el trabajador y el empleador, mediante un suplemento o escrito de designación o nombramiento, donde cambian varios de los elementos. En este sentido, el artículo 24 de la Ley 116 dispone, entre otros aspectos, que en el contrato debe incluirse el lugar de trabajo acordado entre las partes, horario, duración de la jornada, tipo de régimen laboral y descanso; así como las condiciones de seguridad y salud, en correspondencia con el cargo o función. Además, debe reformularse los procedimientos de control, por ejemplo: ya no se observaría el registro o tarjeta de asistencia para saber si el/la trabajador/a asistió con puntualidad al centro, y la jornada laboral se sitúa en segundo plano, pues no se controla el cumplimiento de determinada cantidad de horas, sino el de objetivos y tareas. También el cumplimiento de normas de seguridad y salud se traslada del centro u oficina del empleador al lugar donde se realiza la labor a distancia.

Como dijimos antes, la actual legislación laboral no reconoce como modalidades específicas de contrato el trabajo a domicilio, a distancia y el teletrabajo. Estas modalidades debieran incluirse para precisar sus particularidades, pues hoy se consideran insertas en cualquiera de los dos tipos de contratos reconocidos en este Código: si la labor a distancia se concierta para trabajar permanentemente, se ha de entender como por tiempo indeterminado, y si se pacta para la ejecución de un trabajo u obra, se recoge como temporal. No obstante, estas modalidades han tenido una regulación específica en la Resolución 71, de 12 de agosto de 2021, del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, que aprobó el Reglamento sobre la labor a distancia y el teletrabajo.

Conclusiones

Los comentados son algunos de los aspectos más importantes relacionados con el mundo del trabajo y la seguridad social de que dispone la presente Constitución de la República de Cuba. Se ha tratado de brindar su contexto, repercusión y los retos que de ellos surgen. Ratificamos así la necesidad de continuar el diálogo inter y transdisciplinario para, desde el derecho, contribuir a un mejor ejercicio de las relaciones de trabajo en una sociedad diferente, cada vez más inclusiva, con mayor justicia social y, donde el culto a la dignidad de la persona sea —al decir de José Martí— la ley primera, tal como reza en el Artículo 1 de la actual Carta Magna.

Los derechos de trabajo y sobre la seguridad social explicados, cumplidos en la práctica unos y otros en desarrollo, tienden a cumplir estos principios martianos. Sin dudas esta nueva Constitución plantea diversos retos a la práctica laboral en el país. El surgimiento de nuevos actores económicos y la modificación de prácticas de otros preexistentes ameritan la necesidad de una permanente capacitación en materia de derechos laborales, para contribuir en modo proactivo al debido cumplimiento de la legislación. Por otra parte, el trabajo a distancia adquiere en los actuales escenarios una importancia significativa y debe extenderse a los lugares donde sea posible por las ventajas que ofrece tanto a trabajadores como a empleadores.

Referencias

Castro Ruz, F. (1986) «Intervenciones durante los debates y sus conclusiones en el II Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 17-19 de julio». *Cuba Socialista,* v. 6, n. 5, septiembre-octubre.

Cuba. *Constitución de la República de Cuba* (2019), de 9 de abril. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, extraordinaria, n. 5, 10 de abril. Disponible en <https://bit.ly/3ZBdRj0> [consulta: 12 marzo 2023].

_____ Decreto 283/2009, de 6 de abril, «Reglamento de la Ley de seguridad social». Ibídem, n. 13, 24 de abril. Disponible en <https://bit.ly/3KCrLLe> [consulta: 12 marzo 2023].

_____ 326/2014, de 12 de junio, «Reglamento del Código de trabajo». Ibídem, n. 29, 17 de junio. Disponible en <https://bit.ly/3GVliKr> [consulta: 12 marzo 2023].

_____ 44/2021, de 6 de agosto, «Sobre el ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia». Ibídem, ordinaria, n. 94, 19 de agosto. Disponible en <https://bit.ly/3mHvhw1> [consulta: 12 marzo 2023].

_____ 46/2021, de 6 de agosto, «Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas». Ibídem.

_____ 56/2021, de 13 de octubre, «De la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias». Ibídem, n. 145, 14 de diciembre. Disponible en <https://bit.ly/41nuiQY> [consulta: 12 marzo 2023].

_____ 69/2023, de 19 de enero, «Sobre la mediación de conflictos». Ibídem, n. 19, 22 de febrero. Disponible en <https://bit.ly/41rTRQm> [consulta: 12 marzo 2023].

_____ Ley 105/2008, de 27 de diciembre, «De la seguridad social». Ibídem, extraordinaria, n. 4, 22 de enero de 2009. Disponible en <https://goo.su/s8bvP> [consulta: 12 marzo 2023].

_____ 116/2013, de 20 de diciembre, «Código de trabajo». Ibídem, n. 29, 17 de junio de 2014. Disponible en <https://goo.su/6JzMd0e> [consulta: 12 marzo 2023].

_____ 141/2021, de 28 de octubre, «Código de procesos». Ibídem, ordinaria, n. 138, 7 de diciembre. Disponible en <https://goo.su/oorz> [consulta: 12 marzo 2023].

_____ 156/2022, de 22 de julio, «Código de las familias». Ibídem, n. 156, 17 de agosto. Disponible en <https://bit.ly/3KHMxcB> [consulta: 12 marzo 2023].

_____ Resolución 71/2021, de 12 de agosto, «Reglamento sobre trabajo a distancia y el teletrabajo». Ibídem, extraordinaria, n. 72, 18 de agosto. Disponible en <https://bit.ly/3Adw37a> [consulta: 12 marzo 2023].

Engels, F. (1884) *Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*. Archivo Marx-Engels. Disponible en <https://bit.ly/2wMMR46> [consulta: 12 marzo 2023].

Guevara, E. (1963) *El gran debate sobre la economía cubana 1963-1964*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.

Lenin, V. I. (1961) «Estado y Revolución». En: *Obras escogidas.* Moscú: Editorial Progreso, t. III, 52.

Marx, C. (1975) *Crítica al Programa de Gotha*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2019a) *La declaración de Filadelfia. 75 años*. Comunicado de prensa, 10 de mayo. Disponible en <https://bit.ly/2VTopfx> [consulta: 12 marzo 2022].

_____ (2019b) *Convenio 190. Sobre la violencia y el acoso*, 10 de junio. Disponible en <https://bit.ly/41bBxeu> [consulta: 12 marzo 2022].

ONEI (2022a) *El envejecimiento de la población. Cuba y sus territorios. 2021*. Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE). Disponible en <https://bit.ly/3LfSTkK> [consulta: 12 marzo 2022].

_____ (2022b) *Informe Organización institucional. Principales entidades*, junio. La Habana.

©Temas, 2023

Feminismos, instituciones y organización social en Cuba

Alina Herrera Fuentes
Abogada e investigadora. Instituto Nacional de Formación Política de Morena, México.

Desde la desaparición del campo socialista en Europa del este, en Cuba ha habido circunstancias cada vez más difíciles para satisfacer necesidades y demandas sociales básicas. La crisis desatada en los años 90 fue erosionando el tejido social cubano y sus componentes de cohesión y consenso. No solo se manifestó en lo económico, sino que las desigualdades sociales fueron destapando una herida histórica —asociada a siglos de opresión colonial y a un pasado prerrevolucionario con profunda pobreza— contenida, hasta ese momento, por políticas universalistas y un bienestar social generalizado.

En los 80, se estimó que 56% del consumo total de bienes y servicios se podía cubrir con el salario; el resto —44%—, el Estado los transfería a la población por medio de subsidios, gratuidades y seguridad social (Pérez Villanueva, 2019). También se realizaron estudios para calcular el coeficiente Gini, método más utilizado para computar desigualdad en los ingresos, por vía salarial o cualquier otra forma de distribución. En 1986, Cuba tenía un coeficiente entre 0,22% y 0,25%, y un índice de pobreza de 6,6% del total de la población; o sea una de las sociedades más equitativas a nivel global (Pérez Villanueva, 2019; Torres Santana, 2021).

Las políticas garantistas y protectoras del Estado permitieron conservar una homogeneización de la población en aquellos años; por lo que a la llegada del Período Especial, a inicios de los 90, esta contaba con reservas económicas, políticas, ideológicas y espirituales para afrontar la crisis en condiciones de relativa igualdad. Sin embargo, ante la urgente necesidad de rescatar la economía y buscar nuevos

socios comerciales, las medidas tomadas fueron estratificando la sociedad, con un nuevo orden socioclasista, cuyas primeras grietas se expresaron en las históricas desigualdades sociales que, por políticas universales redistributivas, no se agudizaron; pero estructuralmente no sufrieron grandes cambios, ni fueron focalizadas para su reversión, como son las del género, el territorio y la raza. Mientras la crisis golpeaba y afectaba más a unos grupos que a otros, la cohesión entre instituciones estatales y ciudadanía también se iba erosionando (Martínez Heredia, 2001); y a pesar de haber logrado una recuperación de la crisis en los años subsiguientes, el período entre 2010 y 2011 constituyó un parteaguas en la promulgación de cambios socioeconómicos sustanciales, que profundizaron, aún más, las desigualdades ya evidenciadas tras una larga etapa de precarización.

Durante ese tiempo, Cuba comenzó un proceso de reajuste económico que perseguía la eficiencia del sector estatal y encontrar un modelo de desarrollo sostenible para el socialismo. Se activaron políticas para desinflar plantillas de centros estatales sobregiradas, declarando a los trabajadores interruptos y disponibles, con el objetivo de disminuir costos salariales y aumentar la productividad de las empresas (despidos de empleados con algunas garantías laborales de remuneración). La ampliación del nuevo sector privado y cooperativo suponía la absorción de esta fuerza de trabajo liberada, al aumentar la oferta de bienes y servicios (Hansing y Optenhögel, 2015).

Tal decisión provocó un éxodo a gran escala de personas hacia el sector no estatal, específicamente el «cuentapropista». Se calcula que en 2011 quedaron liberados cinco mil empleados y se pronosticaba que para 2015 la cifra ascendería a 1,8 millones (Mesa-Lago, 2011). Aún no se ha podido verificar quiénes fueron los más afectados: si, en su mayoría, hombres o mujeres, personas racializadas o no. No obstante, existe la hipótesis de que, ciertamente, fueron las mujeres y las personas racializadas las que menos han podido beneficiarse de los cambios articulados (Romay, 2014; Torres Santana, 2020).

A la par, a partir de 2010, comenzaron a eliminarse, «de manera ordenada y gradual», «gratuidades indebidas» en la distribución racionada de productos básicos (Mesa-Lago, 2011). Varios alimentos y artículos de primera necesidad fueron suprimidos de la libreta de abastecimiento: papas, jabón, pasta de dientes, detergente y cigarrillos; mientras, se incrementaba el precio de algunos bienes y servicios, como electricidad, gas, agua y gasolina (2021).

Lo suministrado por el sistema de racionamiento, a precios subsidiados, solo cubriría hasta diez días del consumo promedio mensual, mientras que lo suprimido pasaría a comprarse a precios altos en mercados agropecuarios y tiendas en divisas. Esto tendría mayor impacto en los estratos más empobrecidos. La asistencia social, que debía asegurar la reproducción de la vida para estos sectores, no resultó; a pesar del acuerdo del Sexto Congreso del Partido que prometía garantizarla para «las personas que la necesiten», y de lo manifestado por Raúl Castro Ruz —presidente de Cuba en esos momentos— de que el subsidio no se eliminaría «sin crear las condiciones previas para ello» (Castro, 2011). Luego de más de cuatro décadas de incremento del gasto social, este sufrió, a partir de 2010, una drástica disminución: de representar 7,6% del PIB en ese año, bajó hasta 0,9% en 2017 (Mesa-Lago, 2021). A la llegada de la pandemia por la COVID-19, en 2020, ya la sociedad cubana padecía los efectos de estas crisis, agudizados, en gran medida, por el bloqueo estadounidense y las más de 200 medidas aplicadas por el gobierno de Donald Trump contra Cuba. Sin embargo, no hay que descartar que las transformaciones socioeconómicas descritas fueron contrayendo el papel garantista del Estado cada vez más.

A partir de julio de 2020 —a raíz de la crisis profundizada por la COVID-19, y teniendo en cuenta los efectos de las preexistentes— el gobierno y el buró político del Partido Comunista de Cuba (PCC) aprobaron una nueva estrategia económica y social, en dos etapas básicas: la primera relacionada con la recuperación inmediata de la actividad económica mediante la desescalada de las medidas asociadas a la pandemia, y la segunda vinculada al fortalecimiento de la economía nacional. En consecuencia, en diciembre de 2020, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció el inicio de la Tarea Ordenamiento (TO) y el arranque de la unificación monetaria, y reconoció que «para beneficiar a todos hay que aplicar medidas que, entre comillas, parecen favorecer a pocos. Sin embargo, a la larga ayudarán a todos» (Alonso *et al*., 2020). Es decir, no beneficiarán a corto ni a mediano plazo a los segmentos más desfavorecidos de la población.

La nueva estrategia contemplaba igualmente la eliminación de «gratuidades y subsidios indebidos», la ampliación del trabajo por cuenta propia, de las cooperativas y del sector empresarial privado (mipymes), dolarización parcial de la economía, venta de productos de gama media y alta en moneda libremente convertible (MLC), descentralización económica, vinculación entre los diferentes actores económicos (estatales y no estatales) y unificación monetaria.

A pesar del aumento salarial y de las pensiones, la TO trajo como consecuencia una subida exorbitante de los precios (incluyendo la canasta básica racionada, la electricidad y el gas) (ACN, 2020; Figueredo e Izquierdo, 2020), un crecimiento significativo del

mercado irregular, y una inflación estimada entre 500% y 900% (Mesa-Lago, 2021).

Es importante recordar que el ordenamiento económico no solo impactó desfavorablemente la capacidad salarial —ya depauperada por varias décadas—, y la posibilidad de consumo, en el acceso a los bienes y servicios (*Escambray*, 2021) —incluso en las posibilidades económicas reales del sector privado (incluida la falta de regulación y garantías de derechos laborales para este)—, sino que también afectó el acceso a la cultura y la recreación; por ejemplo, los precios de las entradas a cines, teatros y otros eventos artísticos, subieron considerablemente (MINCULT, 2021).

También la vivienda, con un déficit de 929 695 inmuebles y con 39% del total en regular y mal estado técnico, resulta cada vez más afectada en su satisfacción como derecho social (Figueredo *et al.*, 2018). Por otra parte, el desabastecimiento de medicamentos, que venía golpeando al país desde hacía varios años, como consecuencia del bloqueo económico, impago a los proveedores y mercado irregular (EFE, 2017), se agudizó con la llegada del coronavirus. La salud sexual y reproductiva igual se deterioró. La crisis de preservativos (Ávila Guerra *et al.*, 2020) y de elementos de recolección menstrual (Boza Ibarra, 2021) dan cuenta de ello. Las aulas cerradas por más de un año debido a las medidas de aislamiento, el éxodo de maestros del sector educacional y los programas preexistentes de formación de profesores emergentes con graves irregularidades en su implementación, indican también una crisis en la calidad de la educación en el país.

La atención médica y hospitalaria se une a la lista de dificultades. Por ejemplo, en 2018, la tasa de mortalidad infantil fue de 3,9 por cada mil nacidos vivos (*Infomed*, 2018), mientras que en 2022 ascendió a 7,5 (*Cubadebate*, 2023); una cifra preocupante para los estándares mantenidos por los programas sanitarios y de atención materno-infantil cubanos. El Ministerio de Salud Pública (MINSAP, 2023) ha mostrado alta preocupación por las muertes recurrentes de recién nacidos, sobre todo por bajo peso al nacer o prematuridad. Estos resultados denotan una serie de falencias estructurales en el sistema que van desde una alimentación deplorable, falta de recursos e inversiones en la salud, hasta acompañamiento médico deficitario, más allá de la ausencia de políticas o programas transversales que lo atenúen.

Otro dato que refleja un debilitamiento de las políticas estatales para garantizar derechos sociales fundamentales es que en 2010 existían en el país diez hospitales materno-infantiles y 336 hogares maternos. Para 2011, los primeros descendieron a cuatro y los segundos a 143 (ONEI, 2015), cifras que se mantienen en la actualidad.

En cuanto a la alimentación, las tiendas en MLC pasaron a vender productos de primera necesidad incluyendo la comida; por tanto, es necesario obtener divisas para adquirir artículos de sobrevivencia. Este acontecimiento señala, por sí solo, que son muchas las familias y sectores que, ya empobrecidos desde los 90, están siendo afectados por la dolarización parcial de la economía, al depender de la obtención de divisas para alimentarse.

Situación de las mujeres ante las crisis acumuladas

En el recorrido por estas tres etapas, encontramos que, indirectamente, uno de los grupos sociales más afectados por estas crisis acumuladas son las mujeres. Debido a los roles tradicionales de género, somos nosotras quienes nos encargamos de elaborar los alimentos; cuidar personas enfermas, discapacitadas y menores de edad; del trabajo doméstico; de gestionar la precaria economía familiar; incluso la higiene menstrual, la planificación familiar y reproducción de la vida en general. Y no solo como sujetos homogéneos y uniformes, pues si cruzamos otras variables como color de la piel, edad, territorio y estado civil, hallamos desigualdades más severas y preocupantes.

Ante una ampliación cada vez mayor del sector privado, donde se dirimen y resuelven muchas cuestiones básicas de la vida (por ejemplo, venta de medicamentos y alimentos en el mercado irregular), y una contracción más profunda del amparo estatal, y un debilitamiento en la calidad de pilares básicos de la Revolución y el socialismo, como salud y educación, las demandas, sin duda, también se ensanchan, se complejizan y se multiplican. Las necesidades que surgen de estas grietas impactan especialmente a las mujeres, sobre todo a las más precarizadas, por lo que sus derechos sociales resultan particularmente afectados. Según el Informe Nacional Voluntario de Cuba, frente a la CEPAL (ONU, 2021), ellas representan 39% del total de ocupados en la economía. También 45,7% de los que laboran en el sector estatal, 29,1% en el privado y 35,5% de los trabajadores por cuenta propia (98). Las brechas son notorias, fundamentalmente para el privado, donde destaca el cuentapropista, que ha absorbido la fuerza de trabajo liberada/despedida durante los últimos años. En el ámbito rural, existen 44 027 usufructuarias de la tierra (16% del total) y 30 955 dueñas de tierra (32% de los propietarios); y 20% de los miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) son mujeres. A la agricultura urbana, suburbana y familiar están vinculadas 378 580, 40% de las personas relacionadas con estas actividades (99).

A Cuba le es urgente atender, como parte de la gran crisis, la de derechos de las mujeres. El rediseño institucional es vital para la implementación de políticas públicas efectivas que tributen a cerrar brechas o, al menos, a que estas no se sigan ampliando con las últimas transformaciones económicas y sociales.

Aunque el Informe indique una alta esperanza de vida —de 80,45 años para las mujeres, en general, por encima de los hombres—, otros marcadores sociales de discriminación expresan que ni los números, ni el fenómeno de la desigualdad, se pueden explicar solo desde el género. Las mujeres racializadas cubanas tienen una esperanza de vida al nacer de 76,78 años (hombres blancos de 77,07). La situación empeora si se trata de las residentes rurales (Díaz, 2020).

La fecundidad adolescente muestra sus niveles más elevados en la región oriental del país —la zona rural por encima de la urbana—, y son las jóvenes negras y mestizas las más afectadas por este fenómeno, especialmente las primeras, sobre quienes las brechas y desigualdades de género se acentúan por la deserción y bajo nivel escolar (hasta séptimo grado), ocupación como «amas de casa», vivir en zonas rurales y en las provincias orientales (Molina Cintra, 2019). En consecuencia, las muchachas racializadas suelen presentar mayores tasas de mortalidad materna.

Estos datos reflejan, además de las desigualdades basadas en el género, cómo han incidido las crisis en los grupos de mujeres, sobre todo rurales, racializadas y empobrecidas; y a la vez, expresa un debilitamiento de los derechos sociales, económicos y culturales de las cubanas.

El papel institucional cubano ante la crisis de los derechos de las mujeres

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) fue creada en 1960, con el objetivo de agrupar todas las vertientes del movimiento de mujeres y feministas de la etapa prerrevolucionaria. Hasta la actualidad, es la única organización de masas, reconocida por el Estado, que agrupa a todas las mujeres cubanas. A inicios del período revolucionario, su labor alcanzó una connotación disruptiva en el orden de género del entramado social e institucional, y fue inspiradora para muchos movimientos de mujeres en la región. Tuvo un papel progresista y de vanguardia para la época, al satisfacer las necesidades y demandas de las mujeres cubanas; sin embargo, con el paso del tiempo, tanto esta función como su capacidad de representación se han visto deterioradas. Nada más hay que comparar las campañas que ha protagonizado —es decir, las que propone como organización, que rectora o usa su facultad constitucional de iniciativa legislativa— en diferentes etapas, para percibir que cada vez menos han estado dirigidas a los problemas de desigualdad que presentamos las mujeres.

Las primeras décadas del período revolucionario se caracterizaron por iniciativas o programas para la integración masiva de las mujeres a las fuerzas productivas, la ocupación paulatina de cargos de dirección, igual salario por igual trabajo que los hombres, institucionalización del aborto, programas de planificación familiar, creación nacional de guarderías públicas infantiles, legislaciones en favor de las trabajadoras, entre otros.

En los 90, las campañas estuvieron marcadas prioritariamente por las necesidades del país, lo que no escapó a las polémicas generadas desde la crítica feminista. Por ejemplo, se «combatió» el trabajo sexual y la prostitución hasta llegar a criminalizarlos; en esta «afrenta», la FMC participó al considerarlos como posicionamientos ideológicos contrarios al socialismo, y no como resultado de desigualdades estructurales de género, raza y pobreza; máxime cuando estos fenómenos proliferaron, como consecuencia de la crisis económica nacional, a partir de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética.

La campaña más reciente liderada por la FMC apoyó la vacunación contra la COVID-19. Otras, como «Eres más» (2014) —acerca de la violencia psicológica de género— y «Evoluciona» (2018-2022) —contra el acoso callejero— no fueron rectoradas por esa institución, aunque se señala su colaboración, sino por el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), con fondos de ONG internacionales como Oxfam.

En 2021 se aprobó, mediante decreto presidencial, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, como agenda del Estado en pos de eliminar las desigualdades. Sin embargo, apenas se han visto anunciadas políticas públicas concretas —diferentes a una campaña— en su respuesta y ejecución, salvo la Estrategia Integral contra la Violencia de Género, de la que se tiene pocas noticias. En tal sentido, entre las amplias dificultades que enfrenta la mujer cubana, en franco escenario de crisis y disparidad, la institucionalidad y el gobierno han tenido un alcance muy limitado para gestionar y solucionar brechas que atiendan al género. Además, la gestión pública respecto a demandas específicas ha sido muy deficitaria. Ante tal fragmentación del tejido social, diferentes iniciativas,

grupos y voces de corte feminista han puesto de relieve las contradicciones entre las mujeres, como grupo social de amplia diversidad, que forma parte de la sociedad civil cubana y de las instituciones del gobierno y el Estado.

Al aflorar este abanico de peticiones y malestares, impulsado por la crisis, la desigualdad existente, la contracción del Estado en su misión garantista, la incapacidad de las instituciones de canalizarlas o solucionarlas, y la escasa organización de las mujeres, el campo del feminismo cubano ha reemergido, y logrado mayor visibilidad y diversificación.

El término *feminismo de Estado*, o *estatal*, hace referencia a la defensa de las demandas de las mujeres dentro del Estado, a las acciones políticas y programas que despliegan los Mecanismos de Adelanto de las Mujeres (MAM) en su favor y contra la desigualdad de género; en resumen, a los procesos de institucionalización del feminismo/género (Matos y Paradis, 2013).

A pesar de que estos mecanismos deben incluir demandas y actoras hacia el gobierno, para desarrollar procesos políticos de impacto social con un perfil feminista, no siempre tiene lugar este diálogo colaborador entre las fuerzas «desde arriba» y «desde abajo». El caso cubano es uno de ellos.

Marlise Matos y Clarisse Paradis consideran que el feminismo estatal es también «el proceso de institucionalización y legitimación de las desigualdades de género como una nueva agenda de la sociedad y el Estado» (100). Para ello, los MAM son un vehículo imprescindible para lograr avances hacia la igualdad. Sin embargo, en países de América Latina y el Caribe se enfrentan a las limitaciones presupuestales, que impiden el alcance de sus objetivos, y a la falta de poder e influencia sobre el resto de las instituciones del Estado.

La FMC es el MAM en Cuba. Tiene respaldo y garantías constitucionales, propulsa desde el gobierno la agenda para las mujeres, y cuenta con una posición jerarquizada dentro del mapa de feminismos cubanos. No es un instituto, ni un ministerio, aunque su dirección general presenta iniciativa legislativa con respaldo constitucional. Su secretaria general (la Presidencia se encuentra vacante desde 2007 cuando falleció su fundadora, Vilma Espín) asume la máxima dirección de la organización, forma parte del Consejo de Estado, es diputada en la Asamblea Nacional del Poder Popular (órgano legislativo unicameral), dirige su Comisión Permanente de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer, y pertenece al Buró Político del PCC.

La estructura territorial de la FMC se despliega en las bases y comunidades, municipios, provincias y nivel nacional. Sin embargo, a pesar de estar vinculada al presupuesto del Estado, en la Ley 144, de 21 de diciembre de 2021, referente al de 2022 se contempla como un objetivo principal «reducir, de manera importante» la asignación de la reserva del financiamiento central destinado a organizaciones. De ahí que su falta de jerarquía institucional (ya que no es Ministerio) la relega al sector de las organizaciones que sufrirán reducciones.

Asimismo, la FMC se presenta como una ONG con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU, desde 1997. Los últimos datos publicados acerca de su conformación numérica dan cuenta de más de cuatro millones de afiliadas a la organización —lo que representaba, en 2018, 91% de las mujeres mayores de 14 años (FMC, 2018)—, 14 387 bloques y 81 027 delegaciones, en 2014, referentes a las instancias barriales y zonales inferiores al municipio (Gala León, 2014).

Es una organización institucionalizada con poderes estatales, que funciona a la vez como organización social, de cara al Estado. Esta relevancia constitucional, de coordinación con otros órganos e instancias estatales, pasa por los principios de unidad nacional e integración intersectorial. Sin embargo, su categoría institucional no es consistente con su rol de MAM, desde el punto de vista financiero, ni jurídico, político e interinstitucional, frente a otros poderes del Estado, en tanto se encarga de impulsar e implementar las políticas de género de manera transversal. Estas limitaciones, además, se ven afectadas por la ambigüedad de sus funciones: ser «juez y parte».

Existe un conflicto de interés evidente entre la representación estatal y la social, específicamente de mujeres y personas de géneros diversos. Esta simbiosis da al traste con esbozar, con claridad, cómo se institucionaliza el género y el feminismo en Cuba: ¿qué sujetos/entes corporizan estos procesos, si la FMC es la única organización social, reconocida por el Estado, que representa a las mujeres y, a su vez, se articula desde los poderes estatales como MAM? ¿Cómo se dan esas interacciones? ¿Ocurren?

Institucionalizar el género desde un feminismo estatal, según Virginia Guzmán y Sonia Montaño (2012), «es la materialización de relaciones políticas, prácticas sociales y visiones del mundo que se legitiman como cosas públicas por medio de procesos precedidos por luchas políticas» (7). Implica elaborar agendas, producir nuevos conocimientos, crear institucionalidades en el Estado, nuevas formas de gestión, políticas públicas enfocadas en la igualdad de género, y renovar las normativas jurídicas necesarias como consecuencia de los procesos de movilización de nuevos actores y marcos cognitivos resultantes de las disputas en las relaciones de poder «desde arriba» y «desde abajo», que manifiestan el debilitamiento de

un orden de género vetusto y verifican la emergencia de paradigmas sociales y de comportamiento de género diferentes.

Cuba no está exenta de estos procesos; sin embargo, las transformaciones institucionales se caracterizan por la ralentización, negación de otros actores periestatales, y falta de correspondencia/representatividad de los problemas más acuciantes que les asisten a las mujeres cubanas; en gran medida, a causa de la ambigüedad de funciones y ausencia de jerarquía institucional, principalmente afectada en lo presupuestal y en la propia gestión política.

La inexistencia de presupuestos propios (aunque sean asignados), jerarquía institucional homologada al resto de los organismos del Estado y autonomía de gestión propicia que una parte del financiamiento para varios programas o campañas dependa de las ONG y de organismos internacionales, como Oxfam, UNFPA, PNUD, los cuales tienen agendas propias y están insertados en el orden del feminismo hegemónico. Conceptos como «adelanto», «empoderamiento», «emprendimiento», «emprendedurismo», entre otros, se inscriben en las acciones propulsadas por la FMC y refuerzan algunos de los rasgos de modernidad descritos por Peter Wagner (2013) como fuertes contradicciones: 1) situación asimétrica entre sociedades dominantes y dominadas en la que las primeras impactan de manera adversa sobre las segundas y en esto «las más avanzadas provocan el "desarrollo del subdesarrollo" de las menos desarrolladas»; y 2) ruptura con el pasado en escenarios no europeos que implica el reconocimiento de las matrices coloniales y un desplazamiento de los saberes, epistemes e incluso voces locales (20-1).

Esto no significa que se prescinda de estas fuentes de financiamiento, sino que la balanza debe encontrar un equilibrio justo e inclinado a las agendas y necesidades propias; sobre todo desde los pilares de un proyecto socialista. Como han señalado varias feministas, las ONG globales terminan diseñando nuestros programas universalistas y atemperados al norte global, «gobernando» indirectamente a los MAM.

Teniendo en cuenta las condiciones materiales e inmateriales que viven las cubanas en la actualidad, es evidente que la gestión institucional —pensada desde un feminismo de Estado—, implica el reconocimiento y la solución urgentes a esas condiciones de vida y demandas. La FMC desemboca en una falta de representatividad y consenso con el universo plural de mujeres. Esta falta de cohesión, erosionada y dañada por las crisis y los malestares sociales, apuntan a una necesaria actualización en el diseño de la institucionalidad.

Paliar las crisis requiere políticas públicas concretas y la participación popular. Tratándose de inestabilidad en los derechos sociales de las cubanas y sus desigualdades de género e interseccional, entonces es urgente actualizar el modelo que las representa, y rediseñar las políticas y diálogos que se establecen con el universo de mujeres y las organizaciones que emergen de su interior.

Crisis, derechos sociales y la organización de las mujeres cubanas

Los movimientos de mujeres en la región, desde la diversidad de sus grupos (negros, indígenas, comunitarios, populares, socialistas, etc.), y en articulación con los colectivos LGBTIQ+, son consideradas ofensivas modernizadoras y globalizadoras (Guzmán y Bonan, 2006). No obstante, es importante atender «la inevitable dialéctica entre las posibilidades y las limitaciones derivadas de las instituciones modernas», a partir de las tensiones que las sociedades actuales provocan entre «un polo de liberación y otro de "sometimiento"» (Guzmán, 2002: 13-4). Asimismo, los movimientos neoconservadores-desdemocratizadores, como «contraofensivas» de estas fuerzas modernizadoras, pugnan por el retroceso de la institucionalización del género y el feminismo en los distintos países, a lo que Cuba no es ajena.

Si bien las fuerzas modernizadoras desde abajo, y la articulación y trasnacionalización de los feminismos han ampliado derechos y profundizado la democratización de las instituciones en relación con el género, estos avances se dan en un marco de dominación hegemónica capitalista y neoliberal, donde los Estados se ausentan y ocupan su lugar otras entidades como las ONG (Guzmán y Montaño, 2012).

Si el origen de la modernidad no puede ser entendido sin el análisis de la dominación europea (Wagner, 2013: 13), la «modernidad reflexiva» —entendida como ampliación de la ciudadanía, mayor participación en política de los grupos excluidos, resultado de las presiones introducidas por nuevas subjetividades conceptualizadas como ofensiva modernizadora desde abajo— y el «feminismo contemporáneo» (Guzmán y Bonan, 2006: 7) tampoco se pueden comprender sin la globalización neoliberal, el dominio mundial de los Estados Unidos y los peligros de la «oenegeización», y el financiamiento de filántropos y entes como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

A partir de todo lo anterior, las agendas de género han sufrido un corrimiento hacia el «desarrollismo» de feminismos (neo)liberales que alimentan al capital (Álvarez, 1997), donde la profundización de los «procesos de individuación» (Guzmán y Bonan, 2006) pueden desplazar a los grupos de mujeres más excluidos (trabajadoras, migrantes, racializadas, otras identidades de género, etc.) (Álvarez, 1997: 161-2).

En Cuba, la transnacionalización de los feminismos se explica a partir de noviembre de 2018, cuando se amplió el acceso a Internet a todo el territorio nacional, lo cual, junto a las llamadas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), posibilitó una interconexión para los movimientos de resistencia social en relación con lo nacional-internacional, un reconocimiento interno de las desigualdades como parte de un contexto global y regional, y que, además, tenían respuestas políticas a través del activismo feminista, antirracista y LGBTIQ+. Cuba se dio cuenta de que ni estaba tan aislada, ni era excepcional en sus circunstancias de pobreza y desigualdad de género.

La cuarta ola feminista, denominada para América Latina y el Caribe como Violeta, por el sello de la lucha contra la violencia de género, llegó al territorio nacional. Aunque con limitaciones y particularidades, los movimientos Me Too y Yo sí te creo y, en general, las demandas contra la violencia basada en género, de orden mundial y regional, fueron caracterizando el activismo feminista no-institucional intramuros, y conformando agendas desde la sociedad civil.

Los efectos de la globalización y su relación con las TIC fueron favorables para la movilización de los activismos en el país, aunque no todos compartieron los mismos intereses de búsqueda de justicia social. También la Isla experimentó un incremento de movimientos neoconservadores, de fundamentalismos religiosos, y de feminismos de corte liberal y neoliberal. Este fenómeno es nombrado por Esteban Ierardo (citado en Jaimovich, 2019) como un capitalismo algorítmico de la globalización tecnológica, que también responde a los intereses de las derechas: desde las ultraconservadoras hasta las (neo) liberales, lo que explica su expansión.

En esta correlación de fuerzas, llega noviembre de 2019 cuando cuarenta mujeres de la sociedad civil solicitaron al Parlamento cubano la inclusión y aprobación de una ley integral contra la violencia de género, en el amplísimo cronograma legislativo que se aprobaría en abril del siguiente año. La base organizativa para esta acción política corrió por parte de la plataforma de acompañamiento a víctimas de violencia de género *Yo sí te creo en Cuba*. Este nombre indica la correlación existente entre la realidad nacional y la internacional, y asimismo la violencia de género como uno de los ejes más importantes para el feminismo periestatal en el país.

Meses más tarde, representantes del Parlamento se reunieron con algunas firmantes para explicar el rechazo a la solicitud y la posibilidad de integrarla en un futuro. Esta ha sido, en los últimos años, la acción política más importante proveniente desde los feminismos no estatales. A su vez, otras iniciativas se fueron articulando «por fuera» del Estado: peticiones legales contra el matrimonio infantil, por la creación de refugios para víctimas de violencia de género, una ley de identidad de género y proyectos en el espacio digital (revistas feministas, grupos de difusión, etc.). También existen algunas iniciativas comunitarias y barriales dedicadas a la concientización del fenómeno de la violencia de género.

Paralelamente, emergen grupos y voces feministas con liderazgos de opinión que han derechizado las agendas mediante un profundo carácter neoliberal. En la mayoría de los casos, se pliegan a la articulación opositora y esta, a su vez, no escatima seleccionar alianzas con la derecha internacional. Feministas alineadas a las agendas de Vox, a los grupos de derecha y ultraderecha del eje Washington-Miami, que están de acuerdo con la severidad del bloqueo estadounidense contra Cuba, activan campañas para desalentar el turismo internacional hacia el país o los convenios de servicios médicos entre Cuba y otros países, y promueven boicots mediáticos contra las pocas empresas radicadas en los Estados Unidos que mantienen negocios con la Isla.

Estas líneas de acción feministas están lejos de subvertir las causas de la desigualdad de género en el país. Mientras denuncian la violencia de género, propulsan paralelamente iniciativas que reproducen la precarización y la desigualdad. Pugnan por la restauración capitalista bajo los eslóganes del feminismo neoliberal, que se concentran en la igualdad de oportunidades, la libertad basada en la propiedad privada y el libre mercado, en la focalización de los derechos políticos y civiles y el discurso del empoderamiento de la mujer y el emprendedurismo.

Según Nancy Fraser (2014), si bien el feminismo (sobre todo de segunda ola) se había planteado la necesidad de transformar la sociedad desde sus cimientos estructurales, lo que implicaba revertir el capitalismo, hoy la emancipación de las mujeres y su «empoderamiento» mediante la meritocracia, ha garantizado una nueva forma de liberalismo que favorece la acumulación de capitales y el neoliberalismo.

Mientras ese feminismo hegemónico liberal se ocupa más de impulsar políticas de identidad de género que permitan el «avance» de las mujeres (e incluso de las diversidades de género, sexuales, raciales, territoriales, etc.) y se olvida de la lucha de clases, el favorecido siempre será el capitalismo neoliberal y la derecha como su ideología. Fraser expresa:

> En un cruel giro del destino, me temo que el movimiento para la liberación de las mujeres se haya terminado enredado en una «amistad peligrosa» con los esfuerzos neoliberales para construir una sociedad de libre mercado. (131)

El feminismo neoliberal fagocita las causas de los movimientos de mujeres de la región y de manera

global. Se apropia de discursos, epistemes, narrativas y de hechos fehacientes, para reproducirlos en la arena del capitalismo colonial y racista.

No obstante, coexisten en este mapa de organizaciones y respuestas ante la crisis, mujeres, voces y feministas que apuntan a las estructuras que hacen posibles las desigualdades y violencias basadas en género, desde la escasa organización atomizada del feminismo cubano. La feminización de la pobreza, las migraciones (internas y hacia el exterior), la crisis en los cuidados, las dificultades en el acceso a anticonceptivos y productos de higiene menstrual, y las brechas laborales, en la salud y la educación, forman parte también de las demandas de este sector.

Conclusión

A Cuba le es urgente atender, como parte de la gran crisis, la de derechos de las mujeres. El rediseño institucional es vital para la implementación de políticas públicas efectivas que tributen a cerrar brechas o, al menos, a que estas no se sigan ampliando con las últimas transformaciones económicas y sociales.

El diálogo entre las instituciones y el universo de mujeres (organizado o no) requiere mayor sistematicidad, acercamiento y porosidad. Sin la participación de las más desventajadas y empobrecidas, las respuestas que el Estado pretenda desplegar a tal efecto seguirán siendo limitadas y para beneficio de un grupo de mujeres con determinadas ventajas históricas.

La política feminista debe ser entendida no como una forma de política diseñada para la persecución de los intereses de las mujeres como tales, sino como la persecución de las metas y aspiraciones feministas dentro del contexto de una más amplia articulación de demandas (Mouffe, 2001: 11). En consecuencia, garantizar los derechos sociales de las mujeres es, a su vez, asegurar altas dosis de justicia social para la ciudadanía toda.

Referencias

ACN (2020) «Establecen nuevos precios y tarifas de servicios básicos en Cuba», 11 de diciembre. Disponible en <https://bit.ly/3LY0mWl> [consulta: 28 marzo 2023].

Alonso, R. *et al.* (2020) «Gobierno cubano informa sobre nuevas medidas económicas». *Cubadebate*, 16 de julio. Disponible en <https://bit.ly/3LNT9b5> [consulta: 28 marzo 2023].

Álvarez, S. (1997) «Articulación y transnacionalización de los feminismos latinoamericanos». *Debate Feminista*, n. 15, 146-70.

Ávila Guerra, Y. *et al.* (2020) «La saga de los condones en Cuba». *Cubadebate,* 28 de febrero. Disponible en <https://bit.ly/42jETfQ> [consulta: 28 marzo 2023].

Boza Ibarra, G. (2021) «Copas menstruales en Cuba, ¿para chicas *cool*?». *El Toque*, 13 de febrero. Disponible en <https://bit.ly/3NoNV6S> [consulta: 28 marzo 2023].

Castro Ruz, R. (2011) «Texto íntegro del discurso de Raúl en las conclusiones del Congreso del PCC». *Cubadebate*, 19 de abril. Disponible en <https://bit.ly/3ouGUar> [consulta: 22 mayo 2023]

Cuba. Ley 144/2021, de 21 de diciembre, «Del Presupuesto del Estado para el año 2022». *Gaceta Oficial de la República de Cuba,* n. 1, extraordinaria, 4 de enero de 2022. Disponible en <https://bit.ly/41OBk11> [consulta: 28 marzo 2023].

Cubadebate (2023) «Cuba registra una tasa de mortalidad infantil de 7,5 por mil nacidos vivos en 2022», 2 de enero. Disponible en <https://bit.ly/3nqvJz2> [consulta: 28 marzo 2023].

Díaz, Z. (2020) «El color de la piel importa en Cuba y el género también». *Revista Cubana de Salud Pública*, v. 46, n. 2. Disponible en <https://bit.ly/3BMJbRy> [consulta: 28 marzo 2023].

EFE (2017) «Cuba reconoce desabastecimiento de medicinas debido a impagos y mercado negro». *Listín Diario,* 1 de diciembre. Disponible en <https://bit.ly/3ofPzxF> [consulta: 28 marzo 2023].

Escambray (2021) «Precios que aumentan más rápido que el salario, principal insatisfacción con la Tarea Ordenamiento», 15 de febrero. Disponible en <https://bit.ly/3ANPQuo> [consulta: 28 marzo 2023].

Figueredo, O. e Izquierdo, L. (2020) «Ordenamiento monetario: Tarifas, consumos y el nuevo cálculo de la electricidad». *Cubadebate*, 13 de diciembre. Disponible en <https://bit.ly/3nkZSQk> [consulta: 28 marzo 2023].

Figueredo, O. *et al.* (2018) «Viviendas en Cuba: Carencias, prioridades y perspectivas». *Cubadebate*, 18 de diciembre. Disponible en <https://bit.ly/3NCyx7b> [consulta: 28 marzo 2023].

FMC (Federación de Mujeres Cubanas) (2018) *Contribución de la Federación de Mujeres Cubanas al Examen Periódico Universal de Cuba*. La Habana. Disponible en <https://bit.ly/40ZLaw3> [consulta: 28 marzo 2023].

Fraser, N. (2014) «De cómo cierto feminismo se convirtió en criada del capitalismo. Y la manera de rectificarlo». *Debate Feminista,* v. 50, enero, 131-4. Disponible en <https://bit.ly/3LNuG5A> [consulta: 28 marzo 2023].

Gala León, M. (2014) «Concluye hoy IX Congreso de la FMC». *Trabajadores*, 8 de marzo. Disponible en <https://bit.ly/44auip4> [consulta: 28 marzo 2023].

Guzmán, V. (2002) *Las relaciones de género en un mundo global*. Santiago de Chile: CEPAL. Disponible en <https://goo.su/kr7AX> [consulta: 18 mayo 2023].

Guzmán, V. y Bonan, C. (2006) «Feminismos latinoamericanos y sus aportes a la experiencia moderna». En: *Saber de ellas: entre lo público y lo privado.* Errázuriz, M. (ed.), Santiago de Chile: El Mercurio-Aguilar.

Guzmán, V. y Montaño, S. (2012) *Políticas públicas e institucionalidad de género en América Latina (1985-2010)*. Santiago de Chile: CEPAL.

Hansing, K. y Optenhögel, U. (2015) «Cuba: las desigualdades se tornan visibles. Consecuencias de la economía de escasez y reformas». *Nueva Sociedad*, n. 255, enero-febrero, 4-18. Disponible en <https://bit.ly/3AKDbs3> [consulta: 28 marzo 2023].

Infomed (2018) «Cuba concluirá 2018 con la tasa más baja de mortalidad infantil». Centro Provincial de Información de Ciencias

Médicas de Matanzas, 17 de diciembre. Disponible en <https://bit.ly/42chBZf> [consulta: 28 marzo 2023].

Jaimovich, D. (2019) «Mundo virtual y cibervigilancia: lo que Black Mirror anticipó y ya es realidad». *Infobae*, 20 de enero. Disponible en <https://bit.ly/42dYYE8> [consulta: 28 abril 2023].

Martínez Heredia, F. (2001) «En el horno de los noventa. Identidad y sociedad en la Cuba actual». En: *El corrimiento hacia el rojo.* La Habana: Letras Cubanas, 68-73. Disponible en <https://bit.ly/42maxt3> [consulta: 28 abril 2023].

Matos, M. y Paradis, C. (2013) «Los feminismos latinoamericanos y su compleja relación con el Estado: debates actuales». *Íconos,* n. 45, septiembre-diciembre, 91-107. Disponible en <https://bit.ly/3LO6RuN> [consulta: 28 marzo 2023].

Mesa-Lago, C. (2011) *Las reformas de Raúl Castro y el Congreso del Partido Comunista de Cuba: Avances, obstáculos y resultados*. Barcelona: CIDOB Documentos América Latina.

_____ (2021) «El futuro de las pensiones de seguridad social en Cuba». *Foro Cubano,* v. 4, n. 38, noviembre. Disponible en <https://bit.ly/3oRk7Wb> [consulta: 28 marzo 2023].

MINCULT (Ministerio de Cultura) (2021) «Ordenamiento en la Cultura: Nuevas tarifas en los teatros del país», 13 de enero. Disponible en <https://bit.ly/3Hzozzk> [consulta: 28 marzo 2023].

MINSAP (Ministerio de Salud Pública) (2023) «Nota informativa», 16 de enero. Disponible en <https://bit.ly/3ngugeV> [consulta: 28 marzo 2023].

Molina Cintra, M. (2019) «La fecundidad adolescente desde una perspectiva de género, cerrar la brecha». *Novedades en Población*, v. 15, n. 30, 130-6. Disponible en <https://bit.ly/40YFtyp> [consulta: 28 marzo 2023].

Mouffe, C. (2001) «Feminismo, ciudadanía y política democrática radical». En: *Ciudadanía y feminismo.* Lamas, M. (comp.), Ciudad de México: Instituto Federal Electoral, 2-13. Disponible en <https://bit.ly/42hlFax> [consulta: 28 marzo 2023].

ONEI (Oficina Nacional de Estadísticas e Información) (2015) *Anuario estadístico de salud 2014*. Disponible en <https://bit.ly/428zXdy> [consulta: 28 marzo 2023].

ONU (2021) *Informe Nacional Voluntario. Cuba 2021*. Disponible en <https://bit.ly/3Nwpu7q> [consulta: 28 marzo 2023].

Pérez Villanueva, O. E. (2019) «Desigualdad y población en riesgo de pobreza en Cuba». *OnCuba News*, 15 de agosto. Disponible en <https://bit.ly/3L9elGQ> [consulta: 28 marzo 2023].

Romay, Z. (2014) *Elogio de la altea o las paradojas de la racialidad*. La Habana: Editorial Casa de las Américas.

Torres Santana, A. (2020) «Regímenes de bienestar en Cuba: Mujeres y desigualdades». *Cuban Studies*, n. 49, 6-31. Disponible en <https://bit.ly/41Mbzi3> [consulta: 28 marzo 2023].

_____ (2021) «Hacer cuentas y vivir del cuento: de la "actualización" al "ordenamiento"». *OnCuba News*, 8 de febrero. Disponible en <https://bit.ly/3LsSLgF> [consulta: 28 marzo 2023].

Wagner, P. (2013) «Redefiniciones de la modernidad». *Revista de Sociología*, n. 28, 9-27. Disponible en <https://bit.ly/3VspZSf> [consulta: 28 marzo 2023].

©TEMAS, 2023

Políticas públicas de género y el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres en Cuba

Tania Gómez Barrios
Profesora. Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades,
Universidad de Matanzas.

Las políticas públicas son un campo de análisis fundamental para las ciencias sociales, toda vez que su estudio permite observar el despliegue de las funciones públicas frente a disímiles problemas sociales. El reconocimiento de derechos a las mujeres y personas sexodiversas tiene sus raíces en las luchas históricas del movimiento feminista y otros afines. Sin embargo, la preocupación de varios Estados por la inclusión de políticas orientadas al avance de la mujer está estrechamente relacionada con la realización, desde 1975, de conferencias mundiales sobre la mujer por la ONU. Ello ha permitido pensar y actualizar periódicamente una agenda internacional en materia de género, con mecanismos institucionales de seguimiento en los países que la suscriben.

Cuba se inserta en dicho marco normativo internacional con la aprobación, en 2021, del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) (DP 198/2021), actualización de la anterior agenda de género del gobierno contenida en el Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing (PAN, 1999), de 1997.

En el último quinquenio, la situación política de la región latinoamericana se ha complejizado. La crisis humanitaria causada por la pandemia de la COVID-19, con la consiguiente conservadurización de nuestras sociedades y la ruptura del tejido social, impacta con singular fuerza en los países periféricos. Ello ha propiciado retrocesos en conquistas sociales y derechos humanos, así como el incremento de las condiciones de exclusión de los grupos oprimidos, tanto por el sistema capitalista internacional como por el patriarcado.

La socialización virtual, reforzada en tiempos de pandemia, presenta un nuevo escenario de reproducción

de valores conservadores y patriarcales, y configura formas de violencia de género y vulnerabilidades antes inimaginables; a la vez que favorece la consolidación del sentido común liberal que mercantiliza los cuerpos de las niñas y mujeres.

Cuba asiste a este contexto en medio de un cambio generacional de gobierno, profundas reformas a su estructura económico-financiera, y nuevos retos para la reconstrucción de la gobernabilidad y el pacto social. Esto ocurre, además, en un escenario marcado por las regresiones en la normalización de las relaciones Estados Unidos-Cuba y el recrudecimiento de sanciones económicas por la nación norteña.

Las medidas de ajuste económico impulsadas por el gobierno cubano, la crisis de abastecimiento y de los sistemas de reproducción social simple han impactado negativamente en las vidas de las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad social. A la sazón, se ha alertado sobre problemas como el aumento de la carga de cuidados en mujeres, las desigualdades en cuanto al acceso al empleo, la feminización de la pobreza y el incremento de la violencia de género, por solo citar algunos ejemplos.

Con la ampliación del acceso a internet en Cuba, se ha dado un proceso de reconfiguración de la sociedad civil sobre la base del consumo de productos culturales en las redes sociales. El desplazamiento del monopolio del Estado sobre los medios de comunicación masiva ha visibilizado una diversidad de actores tanto ultraderechistas como progresistas. Estos últimos, han posicionado demandas para las mujeres y otras minorías, con la emergencia de varios feminismos.[1] Lo antes expuesto confirma la necesidad de dirigir la atención al estudio de las proyecciones públicas y las dinámicas de nuestro sistema político, a fin de contrarrestar las desigualdades que tienen como base exclusiones de género.

El presente artículo propone un análisis del PAM que permita señalar sus aciertos y desafíos, para una mejor implementación y posibles rediseños. Así, se sistematizan algunos aspectos teórico-metodológicos sobre el estudio y evaluación de políticas públicas de género; se adopta un marco referencial sobre la relación del socialismo con el feminismo y sus implicaciones en el diseño de políticas públicas de género en un país socialista; finalmente, se hace un análisis crítico de la agenda de género del gobierno cubano y su implementación.

El género y las políticas públicas

Por política pública puede entenderse al

> conjunto de opciones colectivas interdependientes que se asocian a decisiones que adoptan los gobiernos y sus representantes y que se formulan en [diversas áreas donde] existen distintas posibilidades de acciones de política que se vinculan a iniciativas gubernamentales en curso o potencialmente implementables. (Espinoza, 2009)

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017), las *políticas para la igualdad de género* son aquellas orientadas, en forma explícita, a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos (16). A dicha concepción resulta útil acotarle algunas consideraciones que permitan abordar de manera integral, desde los poderes públicos, los problemas sociales relacionados con las brechas de género y equidad.

Para comenzar, es preciso reconocer la transición de la lucha por el derecho a un estatus jurídico igualitario al reclamo por la inserción social, cultural y política, como un campo fundamental de evolución de los derechos humanos (Escobar Lobos, 2004). Por tanto, más allá de la igualdad formal, lo deseable es el acceso de grupos excluidos a recursos y oportunidades. Este «derecho de acceso» ha suscitado varios debates sobre la pertinencia del uso del término «igualdad» en el campo de las políticas de género, el cual se ha ido sustituyendo por «equidad».

Otro punto de conflicto que subrayar es la posición asumida ante el alcance de los problemas sociales vinculados al género y la naturaleza de los objetos de la opresión patriarcal.

En el Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030, aprobado en Cuba en el año 2017, se definió al *género* como «el proceso de construcción social e histórica a través del cual se configuran las relaciones entre hombres y mujeres [que] encierra lo legitimado como masculino y femenino en una cultura, espacio y tiempo histórico determinados» (PCC, 2017).

La teoría crítica feminista, por su parte, reconoce el carácter sistémico, histórico concreto y complejo de los problemas de género, en cuya base se encuentra el sistema de dominación patriarcal. Este último no solo coloca a las mujeres en situación de desigualdad, sino que margina cualquier otra construcción del género y las sexualidades distinta a la normada en determinados contextos sociohistóricos para los cuerpos sexuados masculinos y femeninos; lo que encierra al género en una concepción binaria y excluyente de otras identidades (Butler, 2007). Siendo así, las políticas de género y equidad deben orientarse a afirmar como válidas las diversas identidades marginadas por el patriarcado (donde se incluyen las no binarias y todas las construcciones periféricas de masculinidad y feminidad), para así gestionar sus posibilidades de acceso a la cosa pública y el bienestar.

Por otra parte, asumir que las brechas de género son sistémicas y estructurales implica entender su

intersección con otras formas de exclusión en un sistema de múltiples dominaciones (Valdés, 2010). Por tanto, las políticas de género y equidad deben ser orgánicas a otras agendas emancipadoras; como las que se articulan en contra de la exclusión económica, racial, étnica, etaria, territorial, etcétera.

La politóloga y experta en políticas públicas de género Julia Espinosa-Fajardo y María Bustelo (2019) ofrecen, desde la metodología de «evaluación feminista», algunos criterios que complementan lo anteriormente expuesto. Entre estos, vale mencionar: la *interseccionalidad*; el *empoderamiento* de los grupos en situación de vulnerabilidad social, a partir de la *participación política*; la comprensión de la complejidad de los problemas de género que implica proponerse como finalidad *cambios de paradigmas*; la *contextualización* de las manifestaciones de exclusión en base al género y sus soluciones, y la *transformación incremental* dada por los cambios en materia de equidad de género en relación con los legados prevalecientes en el contexto.

Políticas de género en un país socialista

En la filosofía clásica marxista existen referencias a la explotación de la mujer y a la necesidad de superación de las condiciones de opresión de esta dentro de la familia (Engels, 2002).[2] Sin embargo, los problemas relacionados con la división sexual del trabajo y con la contribución del trabajo reproductivo a la acumulación del capital, fueron relegados a un segundo plano en relación con la centralidad que le concedieron los autores clásicos a la formulación de una teoría económica y política capaz de explicar el vínculo de la división social del trabajo y la apropiación de la plusvalía con la dominación de clase.

Es por esto que la base del feminismo socialista es ampliar la perspectiva crítica marxista al sistema de dominación múltiple del capital, considerando que el patriarcado fortalece la lógica de dominación capitalista,[3] a la vez que se entrelaza con otras formas de opresión (racial, étnica, religiosa, etcétera). Por tanto, como praxis revolucionaria, ambas (feminismo y socialismo) hacen causa común por la construcción de un orden internacional emancipador, sin que pueda fragmentarse una de la otra.

Ahora bien, ¿qué significado adquiere esto en la construcción de un Estado socialista en el siglo XXI? En las últimas décadas, el socialismo como teoría y práctica política en América Latina se ha propuesto la superación dialéctica del paradigma soviético del siglo XX y sus deformaciones. Asimismo, frente a los desafíos de la globalización neoliberal, la construcción contrahegemónica de paradigmas culturales emancipadores mediante el «desarrollo consciente de una sociedad civil socialista» (Lebowitz, 2007: 30) ha recuperado la centralidad de antaño.

En este sentido, la construcción de poder popular, mediante mecanismos de democracia de base y de conformación de tejido social, se ha erguido como una de las estrategias fundamentales de profundización democrática del socialismo. Ello plantea el reto de revalorizar los acumulados de resistencia anticolonial y antimperialista en la región; donde la lucha feminista ha tenido gran peso.

En el plano de las políticas públicas, la estrategia de consolidación del poder popular pone a la dimensión local-comunitaria como el espacio por excelencia para la democracia de bases; a la vez que afirma la necesidad de reconocimiento de las formas de autorganización de masas con arreglo a intereses sectoriales (no territoriales) fundadas en paradigmas emancipadores; entre estas, las de organizaciones feministas.

El feminismo socialista hace parte de la consolidación del poder popular como una de las teorías revolucionarias más radicales dentro de las sociales contemporáneas, al penetrar los fenómenos con una propuesta integral (económica, política y ética) transformadora de las lógicas de vivir y pensar el mundo (GALFISA, 2018). Tiene un papel crucial en la construcción de contrahegemonía emancipadora. Entiende que la destrucción de las relaciones de dominación patriarcales es un proceso gradual, donde es central la necesidad de transformación consciente y constante de los sujetos (tanto opresores como oprimidos) mediante la praxis revolucionaria feminista. Además, reconoce que no todas las identidades son emancipadoras; por tanto, las agendas de equidad no deben contribuir al acceso a privilegios de explotación; en otras palabras, no deben tender a convertir al sujeto oprimido del patriarcado en opresor (40-1).

En el plano económico, el feminismo socialista lucha en contra de la feminización de la pobreza, condena la división sexual del trabajo y promueve el reconocimiento del no remunerado; además, milita contra la mercantilización de los cuerpos y la promoción de la competencia entre mujeres. Asimismo, contempla, desde el reconocimiento a las diversas culturas e identidades, la promoción de modelos sostenibles y solidarios de producir y reproducir la vida, que faciliten la autonomía económica de las mujeres y otras minorías. En ese aspecto, existen acumulados de la praxis y la teoría feministas en el Sur político, en campos como la soberanía alimentaria, la ecología política y la economía solidaria.

Por tanto, las agendas de género en un sistema socialista deben comprender mecanismos orientados a la promoción del trabajo de bases; la conformación de tejido social feminista para la praxis revolucionaria antipatriarcal y anticapitalista; la participación de los/

Las agendas de género en un sistema socialista deben comprender mecanismos orientados a la promoción del trabajo de bases; la conformación de tejido social feminista para la praxis revolucionaria antipatriarcal y anticapitalista; la participación de los ciudadanos en la conformación, gestión, control y evaluación de las políticas de equidad.

as ciudadanos/as en la conformación, gestión, control y evaluación de las políticas de equidad. Además, deben institucionalizar la perspectiva de género como mecanismo regulador de las relaciones sociales en la comunidad, para así profundizar en los factores específicos que pueden estar determinando las brechas de género, y trabajar por su erradicación mediante la democracia directa en los territorios.

Política integral contra las brechas de género y equidad en Cuba. El PAM

Antecedentes de la cuestión del género en las políticas públicas en Cuba

No es posible entender la cuestión de género en las políticas públicas cubanas sin hacer referencia a la mujer como sujeto político en las luchas femeninas y feministas, y su protagonismo en la resistencia anticolonial y anticapitalista a lo largo de la historia patria. Ello les ganó conquistas como el divorcio civil para los territorios liberados por los mambises en 1869,[4] y el sufragio femenino en 1934.

En las décadas de los 60 y 70 del siglo xx, logros asociados al triunfo de la Revolución cubana, como la educación y la salud universal, la eliminación de la pobreza extrema, el acceso al empleo y la disminución de la prostitución, impactaron positivamente en las vidas de las mujeres. La voluntad política de construir un proyecto emancipador para todas las personas y el protagonismo de las mujeres en las transformaciones revolucionarias les permitió un mayor acceso al espacio público y a la toma de decisiones políticas (GALFISA, 2018: 45).

Vale mencionar políticas como la regulación, desde 1965, del aborto legal y seguro (Álvarez Lajonchere, 1994), y la creación de los círculos infantiles para el cuidado de niños y niñas en edad no escolar. Muchos de estos avances fueron impulsados por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), organización fundada en 1960, que devino un importante movimiento de mujeres en las primeras décadas de Revolución (Macías Amores, 2016). Posteriormente, la creación del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), en 1989, sentó pautas para superar algunas políticas y prejuicios machistas y homofóbicos, característicos de las primeras décadas del gobierno revolucionario, al encausar demandas de la comunidad LGBTQIA+ en el país (308-10). Ambas instituciones han sido históricamente promotoras y gestoras de políticas de género y equidad en Cuba.[5]

Tras el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), en 2011, el gobierno cubano comenzó un proceso de cambios en su estructura económica, orientado a la sostenibilidad y supervivencia del proyecto-nación mediante la inserción de la economía patria en el mercado internacional. La discusión de los llamados «Lineamientos» suscitó un intenso debate sobre la necesidad de incluir determinadas variables sociales en los diseños de las políticas que los acompañaron. Ello trajo consigo la incorporación del enfoque de género y del de diversidades sexuales en el Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2030 (PCC, 2017).

Sin embargo, en 2018, un estudio de GALFISA identificó varios problemas que manifestaban debilidades en el tratamiento institucional de estas cuestiones.[6]

El 10 de abril de 2019 se aprobó una nueva Constitución de la República, precedida por un proceso de consultas que animó debates pendientes en materia de igualdad de género, lucha contra la violencia hacia la mujer y la discriminación hacia las personas sexo-género diversas. Durante la consulta popular, se evidenció la existencia de fundamentalismos religiosos y de otros tipos que constituyen síntomas del conservadurismo de la sociedad cubana, así como de la reproducción de múltiples dominaciones arraigadas en una cultura patriarcal. No obstante, la reformulación de la Carta Magna creó un marco jurídico propicio para la reafirmación y ampliación de derechos para la mujer y otros grupos excluidos por el sistema cis-hetero-patriarcal.

El Artículo 42 del texto constitucional amplía el diapasón del principio de igualdad, añadiendo a la fórmula de «no discriminación» cuestiones como el género, la identidad de género y la orientación sexual. El Artículo 43 establece como responsabilidad del Estado lograr la participación social de las mujeres, y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, así como la lucha contra la violencia de género.

La Constitución, además, introduce criterios dogmáticos valiosos para potenciar la equidad cuando norma, en el Artículo 13 (inciso d), que garantizar la «igualdad efectiva» es uno de los fines del Estado. Ello

pone en la mira el acceso real de todas las personas a los derechos sustantivos mediante políticas de inclusión social, con lo que se reconoce la voluntad de trascender la dimensión formal de los constitucionalmente reconocidos. En correspondencia, el Artículo 44 expresa que el Estado hace efectivo el principio de igualdad con la implementación de políticas públicas y leyes para potenciar la inclusión social y la salvaguarda de los derechos.

Las normas antes mencionadas sientan las bases constitucionales para la aprobación de políticas de género y equidad.

Agenda gubernamental de género

En febrero del 2021 se aprueba el PAM, llamado a ser la piedra angular de las políticas de género en Cuba. Su principal objetivo es

> promover el avance de las mujeres y la igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades, refrendados en la Constitución de la República de Cuba, así como profundizar en los factores objetivos y subjetivos que, como expresiones de discriminación, persisten en la sociedad cubana y obstaculizan un mayor resultado en lo económico, político, social y familiar, con el fin de eliminarlos. (DP 198/2021)

Con esta meta se definen varias áreas de trabajo como son el empoderamiento económico de la mujer, la educación con enfoque de género, el trabajo social, la comunicación, la investigación, la salud sexual y reproductiva, las transformaciones legislativas y la participación política.

El PAM actualiza, a la vez que supera cualitativamente, a la anterior agenda de género del gobierno cubano de 1999. Se observa una comprensión compleja y sistémica de las opresiones de género, al introducir políticas por la diversidad sexual y al visibilizar las masculinidades no hegemónicas. Existe también un tratamiento interseccional de las políticas de género, pues sanciona medidas orientadas a grupos racializados, infantes, mujeres campesinas, jóvenes y personas de la tercera edad. Resaltan temas como la atención al climaterio y al envejecimiento.

Sin embargo, en estrategias como el acceso al trabajo, a esferas públicas de decisión y a la salud sexual y reproductiva se invisibiliza a la comunidad LGBTQIA+. Existen pocas acciones dirigidas a las personas trans, cuya mayor reivindicación en el PAM es el fortalecimiento de los sistemas de salud de cambio anatómico de sexo.

La sensibilización y prevención desde la instrucción se evidencian en la preocupación por la implementación de una educación sexual integral con enfoque de género desde edades tempranas,[7] la capacitación a dirigentes, operadores del Derecho, docentes, trabajadores sociales y comunicadores; así como el trabajo social en las comunidades. Sin embargo, no se visibilizan estrategias para abordar problemas como el fundamentalismo religioso, ni se prevén acciones dirigidas al diseño de una política cultural con enfoque de género.

El programa contempla la aprobación de la legislación complementaria a la Constitución, a fin de ampliar el derecho a la equidad[8] y plantea una estrategia de género para el sistema jurídico. Además, prevé la introducción de la perspectiva de género en las regulaciones internas (reglamentos) de instituciones, organizaciones y universidades.

Para el tratamiento de la violencia de género se conciben acciones como la ampliación de los sistemas de protección contra todas las formas de discriminación y violencia; la atención a las víctimas, y el trabajo social con victimarios; así como la introducción de métodos alternos de solución de conflictos. Sin embargo, no prevé la aprobación de legislación especial contra la violencia de género.[9]

El PAM también focaliza la necesidad de perfeccionamiento de la legislación laboral, así como el estudio y visibilización de la violencia de género en el centro de trabajo. Sin embargo, a tres años de la aprobación de la política, todavía existen regulaciones laborales y de seguridad social deficientes en lo relativo a la protección en contra del acoso laboral y la valorización del trabajo doméstico no remunerado y las labores de cuidado.[10] Es menester también replantearse el funcionamiento de los sindicatos, donde no debieran confluir empleadores y empleados, la necesidad de sindicalización de los trabajadores de las emergentes empresas privadas. No debe subestimarse el papel reivindicatorio de estos para la comunidad LGBTQIA+ y las mujeres en el ámbito laboral.

La regulación de los derechos sexuales y reproductivos en el PAM es más amplia que en la agenda precedente. Se abordan temas como la reproducción humana asistida; el «parto seguro y amigable» (aludiendo a la violencia obstétrica), la «sexualidad plena y responsable», el derecho de la mujer a decidir el número de hijos y el momento de tenerlos. Aunque este último aspecto se asocia, lamentablemente, a variables de «fecundidad» y «crecimiento poblacional». También se incluyen acciones en el área de las estadísticas e investigaciones, con un tratamiento más exhaustivo que en el plan precedente.

En el área del programa dirigida a las políticas de comunicación social, se proyectan medidas orientadas a instaurar una práctica vigilante sobre la representación de las mujeres y la diversidad sexual en los medios; además, incluye como novedad el enfoque de género en la comunicación institucional. Sin embargo, la propia disposición normativa evidencia falta de familiaridad con los códigos discursivos en clave de género. Por otra parte, se omitió en la política la cuestión de las redes

sociales, en donde se precisan acciones dirigidas a la alfabetización mediática e informacional en contra del ciberacoso y los discursos misóginos y de odio hacia la comunidad LGBTQIA+.[11] Urgen también medidas que focalicen y reduzcan las exclusiones de grupos vulnerabilizados por la falta de acceso a las tecnologías de información y comunicación.

En el área de «empoderamiento económico» se prevén acciones como el fomento a la corresponsabilidad en los cuidados, la valoración económica del trabajo doméstico, y la incorporación de las mujeres al trabajo por cuenta propia. Sin embargo, hay que llamar la atención sobre los paradigmas de desarrollo económico y empoderamiento que el programa asume desde el género. Hay escasas referencias al fomento de valores como la colaboración, la sostenibilidad y la reproducción de la vida desde modelos de economía solidaria y sostenible; a excepción del enfoque de género en las políticas ambientales, que sí se contempla.

La autonomía económica y el empoderamiento de los grupos excluidos debe ser entendido como el resultado de su actuar colectivo y solidario, para lo cual se podrían prever medidas como el asociacionismo de trabajadores por cuenta propia o el fomento de cooperativas de mujeres y personas sexo-género diversas.

En cuanto a la participación política, el programa se centra en establecer mecanismos de discriminación positiva, como una mayor representación femenina en cargos de dirección empresarial, servicio exterior, militares y cargos públicos. No obstante, se debe seguir explorando mecanismos de búsquedas del consenso activo, e involucramiento de los sujetos oprimidos por el patriarcado en el diseño, gestión y control de las políticas; que los conviertan en protagonistas de los cambios y no en meros receptores. El propio diseño del programa no fue resultado de una discusión abierta con las bases sociales.

Resulta valiosa la participación que se les da, en cada una de las áreas de impacto del PAM, a las organizaciones políticas y de masas, entre estas, la FMC. Sin embargo, no se visibilizan nuevos actores progresistas de la sociedad civil comprometidos con la profundización del socialismo y su capacidad para incidir en un mejor diseño y gestión de dichas políticas, ante el desgaste que sufren las tradicionales organizaciones.

El PAM tiene deudas con la dimensión territorial comunitaria, pues se limita a mencionar el territorio y la comunidad como un ámbito de lo posible y a establecer la responsabilidad de los órganos locales del Poder Popular con su implementación. No se visibilizan variables que han sido de especial atención para el gobierno en el último quinquenio, como el ordenamiento territorial, la autonomía municipal, el diseño de los planes integrales de desarrollo local, los proyectos sociales y comunitarios, y el fortalecimiento del Poder Popular.

Notas finales

El PAM forma parte de las transformaciones llevadas a cabo por la Revolución cubana a favor de la emancipación. Es también el resultado de la participación de Cuba en las conferencias mundiales sobre la mujer, la ampliación de las bases del Estado socialista de derecho en el proceso constituyente de 2019, y de la movilidad de sectores progresistas de la sociedad civil cubana.

Como aspecto positivo, el PAM es cualitativamente superior a su predecesor, al tener una visión más amplia e interseccional del género y las diversidades sexuales. El tratamiento de cuestiones como la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos, la educación con enfoque de género y el trabajo social comunitario, apunta a cambios en materia de equidad en relación con lo prevaleciente antes en el contexto. Ello se constata en la ampliación de las garantías a derechos de los grupos excluidos debido al género, contenida en la legislación complementaria de la reforma constitucional, y que se ha modificado o aprobado con posterioridad al PAM.

Sin embargo, es necesario que la agenda de género del país siga avanzando respecto a la representación y el acceso a derechos de la comunidad LGBTQIA+. Además, es preciso que contextualice algunos elementos, teniendo en cuenta variables, como el ascenso del fundamentalismo religioso, la importancia de las redes sociales y las condiciones impuestas tras la pandemia.

Si se tiene como horizonte la profundización del socialismo, el PAM debiera revisar sus paradigmas de empoderamiento económico de los sujetos en situación de vulnerabilidad social, con visiones anticapitalistas y descolonizadoras. Además, se hace necesario ampliar los mecanismos de participación política para la implementación de sus estrategias, fomentar la conformación del tejido social feminista y dimensionar las áreas de incidencia de las políticas públicas de equidad de género en lo local. Todo ello, en función de profundizar el poder popular, teniendo como base que, en las complejas condiciones objetivas impuestas por la crisis humanitaria imperante, la implementación de las estrategias del PAM dependerá, en buena medida, del compromiso político de los sectores más progresistas del Estado y la sociedad civil, para llevarlo adelante.

Notas

1. Algunas agendas progresistas en materia de género en Cuba son: la necesidad de una ley integral contra la violencia de género

y una de identidad de género; la reafirmación del carácter laico del Estado y la regulación jurídica de la actividad religiosa; así como el reconocimiento del activismo afrofeminista y la inclusión del enfoque interseccional en las estadísticas y políticas públicas en función de visibilizar a las mujeres racializadas.

2. Para el marxismo, al igual que para el republicanismo democrático clásico, la familia era un objeto de análisis de la filosofía política (Domènech, 2017).

3. «En su versión contemporánea (neoliberal y globalizada) el patriarcado acentúa los significados clásicos burgueses: el individualismo, la fragmentación de lo público y lo privado y la desigualdad natural del género» (GALFISA, 2018: 20-1).

4. En 1869, fue aprobada la Ley del Matrimonio Civil, que rigió para los territorios de la República en Armas (Hernández y Arlen, 2007).

5. El PCC, al funcionar como órgano con encargos de gobierno y dirección política por mandato constitucional (Artículo 5, *Constitución de la República de Cuba,* 1976; 2019), se pone a la cabeza de la aprobación de la mayoría de las políticas públicas en el país. Por otra parte, en los últimos años se ha incrementado la incidencia del Consejo de ministros y el presidente de la República en dicha actividad, debido a la importancia que toman los órganos ejecutivo-administrativos supremos tras la reforma constitucional de 2019.

6. Algunas de las debilidades identificadas por el estudio son: la invisibilización de temas como la violencia de género, la prostitución y la desigualdad; la marginación, en los círculos académicos, del feminismo como teoría crítica, y de sus vínculos con el socialismo; la violencia simbólica contra la mujer y la comunidad LGBTQIA+ en los medios de comunicación (cuyo control mayoritario ostenta el Estado); distancias entre lo privado y lo público (con patrones machistas en el ámbito doméstico y familiar); la marginación institucional de un emergente activismo femenino sociocomunitario (46-50).

7. Para instrumentar el PAM se aprobó, mediante la Resolución 16/2021, del Ministerio de Educación, el Programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos, más conocido como Programa de Educación Integral de la Sexualidad (EIS), el cual ha tenido una lenta implementación debido a las resistencias ofrecidas por sectores conservadores de la sociedad cubana, especialmente fundamentalistas cristianos.

8. El Código de las Familias, por ejemplo, es una disposición normativa que amenaza de modo orgánico las bases del sistema de dominación patriarcal, en tanto ataca frontalmente la consanguinidad, el matrimonio heterosexual como única opción, y las relaciones de opresión sobre los menores y personas bajo cuidados, como principios de conformación y funcionamiento de las familias, para colocar en el centro las relaciones de afecto, respeto y corresponsabilidad. La recientemente aprobada Ley 153/2022 «Del proceso de amparo de los derechos constitucionales» amplía las garantías constitucionales para la protección contra todas las formas de discriminación.

9. En cumplimiento de este objetivo del PAM, se aprobó con posterioridad, mediante el Acuerdo 9231/2021 del Consejo de ministros, la «Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar». Además, se incluyó la perspectiva de género en la reforma sustantiva y procesal del sistema penal cubano, donde se reconocen, por ejemplo, sanciones agravadas para los delitos que se cometan teniendo como base la discriminación de género, y se fortalecen las garantías procesales para las víctimas y el acceso de éstas a la justicia, si bien no se reconoce al feminicidio como figura delictiva. El Código de las Familias (L 154/2022) también prevé medidas en contra de la violencia de género en el ámbito familiar.

10. El Código de las Familias, no obstante, contempla novedosas regulaciones en relación con el cuidado y el trabajo doméstico.

11. Posteriormente a la aprobación del PAM se aprobó el Decreto-Ley 35/2021 «De las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico» y otras normas para la regulación del ciberespacio publicadas en la *Gaceta Oficial de la República de Cuba,* n. 92.

Referencias

Álvarez Lajonchere, C. (1994) «El aborto en Cuba. Aspectos jurídicos y médico-sociales». *Sexología y Sociedad*, n. 1, noviembre. Disponible en <https://acortar.link/SpMw73> [consulta: 26 mayo 2023].

Butler, J. (2007) *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad.* Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2017) *Planes de igualdad de género en América Latina y el Caribe: mapas de ruta para el desarrollo*. Santiago de Chile. Disponible en <https://acortar.link/f0rr26> [consulta: 26 mayo 2023].

Constitución de la República de Cuba (1976) Disponible en <https://acortar.link/aDoupm> [consulta: 26 mayo 2023].

_____ (2019) *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, extraordinaria, n. 5, 10 de abril. Disponible en <https://bit.ly/3ZBdRj0> [consulta: 9 enero 2023].

Cuba. Acuerdo 9231/2021, «Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar». *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, n. 101, edición extraordinaria, 9 de diciembre. Disponible en <https://acortar.link/Gm8Bdu> [consulta: 26 mayo 2023].

_____ Decreto-Ley 35/2021, «De las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico». Ibídem, edición ordinaria, n. 92, 17 de agosto. Disponible en <https://acortar.link/Bsfxbr> [consulta: 26 mayo 2023].

_____ Decreto Presidencial 198/2021, «Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres». Ibídem, edición extraordinaria, n. 14, 8 de marzo. Disponible en <https://acortar.link/hXK65W> [consulta: 26 mayo 2023].

_____ Ley 153/2022 «Del proceso de amparo de los derechos constitucionales». Ibídem, n. 74, edición ordinaria, 15 de junio. Disponible en <https://acortar.link/FteR8g> [consulta: 26 mayo 2023].

_____ Ley 156/2022 «Código de las Familias». Ibídem, n. 99, ordinaria, de 27 de septiembre. Disponible en <https://acortar.link/EcNvOr> [consulta: 26 mayo 2023].

Domènech, A. (2017) *La democracia republicana fraternal y el socialismo con el gorro frigio*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

Engels, F. (2002) *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

Escobar Lobos, A. (2004) «Participación ciudadana y políticas públicas. Una problematización acerca de la relación Estado y Sociedad Civil en América Latina en la última década». *Revista Austral de Ciencias Sociales*, n. 8, 97-108.

Espinosa-Fajardo, J. y Bustelo, M. (2019) «¿Cómo evaluamos el éxito de las políticas de igualdad de género? Criterios y herramientas metodológicas» *Revista Española de Ciencia Política*, n. 49, 151-72.

Espinoza, O. (2009) «Reflexiones sobre los conceptos de política, políticas públicas y política educacional». *Archivos Analíticos de Políticas Educativas*, v.17, n. 8, 15 de abril. Disponible en <https://acortar.link/jGJJQb> [consulta: 26 mayo 2023].

Gaceta Oficial de la República de Cuba (2021) n. 92, ordinaria, 17 de agosto. Disponible en <https://acortar.link/fZFXC4> [consulta: 26 mayo 2023].

GALFISA (Grupo de Investigación «América Latina: Filosofía Social y Axiología») (2018) *¿Feminismo en Cuba?* La Habana: Editorial filosofi@.cu.

Hernández, F. y Arlen, L. (2007) *El divorcio en la sociedad cubana (1763- 1878)*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

Lebowitz, M. (2007) «Alas nuevas para el socialismo». *Laberinto*, n. 25, septiembre-diciembre, 29-34. Disponible en <https://acortar.link/MV71EI> [consulta: 26 mayo 2023].

Macías Amores, J. (2016) *La sociedad civil en la Revolución cubana (1959-2012)*. Universidad del País Vasco.

PAN (Plan Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing) (1999) La Habana: Editorial de la Mujer.

PCC (Partido Comunista de Cuba) (2017) *Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Visión de la nación, ejes y sectores estratégicos, Documentos del 7mo. Congreso del Partido Comunista de Cuba*, 18 de mayo. Disponible en <https://acortar.link/ByqqGk> [consulta: 26 mayo 2023].

Valdés, G. (2010) «El Sistema de dominación múltiple». En: *Ecología política. Selección de lecturas*, t. I. Valdés, G. *et al*., La Habana: Editorial Caminos, 49-54.

©TEMAS, 2023

La educación superior cubana: un paradigma en cambio

Danay Quintana Nedelcu
Profesora. FLACSO-México.

Este ensayo examina la política de educación superior (PES) impulsada por el Estado cubano en los últimos años, anunciada como un conjunto de acciones para el perfeccionamiento del proceso de formación continua de los profesionales del país. En su primera etapa, surgió al calor de las reformas nacionales que encabezaron el presidente Raúl Castro Ruz y el ministro de Educación Superior, Miguel Díaz-Canel. Hoy día, el segundo, actual presidente de la República de Cuba, continúa muchas de las rutas trazadas anteriormente, pero en un contexto renovado.

De entonces a la fecha, el país ha cambiado profundamente —pandemia de COVID-19 por medio. El sector escolar se mueve en virtud de complejas dinámicas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Pasada más de una década, se puede constatar que, en todos los espacios públicos del país, las transformaciones obedecen, en gran medida, a una lógica política cambiante que ha modificado las reglas del juego y a sus actores. Estado, mercado, sociedad y entorno interactúan bajo nuevas condiciones y pactos. Por ejemplo, el fin de la política estatal de pleno empleo, como el proceso de disponibilidad —entre otros temas— y luego regularizada en el Código de Trabajo (L 116/2014) —con subsecuentes actualizaciones—, modificó las bases contractuales Estado-mercado, así como las dinámicas laborales. Si antes las políticas estatales, y en especial la social, tenían un efecto de relativa estabilidad e igualdad en la estructura de la sociedad bajo un esquema de bienestar socialista, con tal giro, las reglas del mercado vinieron a perturbar las históricas garantías. Ni siquiera desde el poder político

se obvió la complejidad de tales modificaciones, como parte del proceso de renovación conceptual y funcional del modelo socialista (PCC, 2021).

Los cambios en la vida pública también han impactado la agenda científica, en cuanto a comprender y explicar sus alcances y desafíos; pero quedan numerosos pendientes. Por ejemplo, bajo un esquema integral de políticas públicas, urge profundizar en los efectos del nuevo modelo productivo en la estructura de la educación superior (ES) y las aspiraciones de los jóvenes de ser universitarios en un contexto de sobrados retos para los profesionales asalariados del Estado, sector que ha perdido atractivo frente a otros mejor valorados por la juventud (Pañellas, 2012).

Por la forma en que se desarrolló la PES, ha sido problemático establecer con exactitud su arranque formal. Más allá de la precisión cronológica, se articula con las reformas nacionales impulsadas por el Estado a partir de 2006, luego diseñadas en los Lineamientos (PCC, 2011) como base programática, con posteriores ediciones. De tal suerte, la PES representa uno de sus capítulos. Con ciertos ajustes, aquella se prolonga hasta 2020, corte analítico necesario por los efectos intervinientes de la pandemia.

En ese contexto, el proceso de transformación de la ES avanzó mediante resoluciones ministeriales que reglamentaron importantes decisiones —poco conocidas— en la materia. Su evolución distó del ordenamiento teórico que secuencia los pasos de propuesta, discusión y aprobación de las políticas. Primero se implementó; después se ajustó, como consecuencia de sus efectos inmediatos; y luego se dio a conocer masivamente (Curbelo González, 2016). Así, su argumentación sirvió más para legitimar decisiones, previamente tomadas, que impactaron en el mediano plazo, al punto de convertirse en una contrapolítica histórica, dada la magnitud y velocidad de sus efectos negativos en la trayectoria educativa (Quintana Nedelcu, 2015).

En nuestro período de estudio, un rasgo distintivo ha sido una estrategia discursiva política que connota a la PES como continuidad, patente en sus principales pronunciamientos. Simultáneamente, se han constatado notorios cambios en su trayectoria, tanto en las cifras de los indicadores más relevantes como en su ordenamiento jurídico. Por ejemplo, solo entre los cursos 2008-2009 y 2015-2016, la matrícula en ES se redujo de 658 134 a 165 926, como efecto del cierre paulatino de los Centros Universitarios Municipales (CUM). Otra novedad medular se introdujo en el Artículo 73 de la Carta Magna (2019), que abrió la puerta a ciertos servicios educativos remunerados. Terminó así el principio de gratuidad absoluta que ha caracterizado a la educación socialista cubana, en su condición de derecho social. Las implicaciones de este giro aún están por verse y abren más preguntas que respuestas. Otros servicios privados de apoyo a la educación general se han venido ejerciendo con anterioridad, como los repasadores y los «cuidos» (asistentes para la atención educativa y de cuidado de niños). Por lo tanto, hay elementos de contexto que sugieren que lo que hoy es letra respecto al cobro de servicios educativos de posgrado —entre otros—, mañana pudiera implementarse y con esto dar un nuevo paso promercantilización de la educación.

A la par de lo anterior, sigue siendo un lugar común el reconocimiento del sistema educativo como pilar de la política social socialista. Su inversión histórica ha hecho patente la voluntad política del Estado, con resultados reconocidos mundialmente (UNESCO, 2014); también en función de sus altos índices de escolaridad, cumpliendo principios de igualdad y equidad satisfactoriamente. Pero este halo positivo también ha sido un bumerán al profundizar en análisis balanceados. Quizá en parte por ello, el impacto de los cambios de la última década ha tardado en comprenderse en toda su magnitud, en comparación con otros temas de la política nacional. Otro obstáculo verificado en estudios anteriores apunta a una estrategia de comunicación de la política que dificultó y dilató la comprensión pública del alcance de las transformaciones, al punto de no apreciarse como política cambiante (Quintana Nedelcu, 2017).

Lo cierto es que, más allá de su narrativa continuista, los datos revelan llamativas transformaciones en esta política estatal. Dicho así, pareciera que la PES es a la vez cambio y continuidad: ¿es posible esto o representa una contradicción en sus términos? ¿Hasta qué punto su continuidad discursiva puede sostenerse frente a los actuales cambios? ¿Hasta dónde podemos hablar de estos en la ES, si el discurso prevalece conservador? Incluso aceptando que, en todo proceso, las transformaciones no ocurren en sincronía, admitiendo también su complejidad intrínseca en las políticas públicas, es necesario analizar la lógica que subyace en la aparente contradicción de la PES.

El eje continuista y la dimensión política de la trayectoria educativa

Como todo proceso de políticas públicas (PP), la actual PES es a la vez historia y presente. En su evolución, constituye una pieza fundamental del rompecabezas socialista isleño y es de máxima relevancia para los futuros cambios del Estado cubano.

Su trayectoria general se estructura alrededor de dos objetivos históricos, que otorgan identidad y funcionalidad al proceso de formación de profesionales: a) su dimensión política y explícito papel en la

reproducción de la ideología del Estado; b) la intención de convertir el conocimiento en el principal recurso económico bajo un modelo de desarrollo basado en el capital científico. Ambos ejes han nutrido históricamente el paradigma dominante de la política educativa (2015), y evolucionaron en el tiempo de manera diferente.

Si un rasgo ha dado singularidad a la educación cubana desde 1959 es su politización, y no solo en sentido narrativo, sino también estructural: contenido y forma. De tal suerte, ha sido una variable explicativa crucial en sus resultados positivos, según M. Carnoy (2010),[1] y también de sus propias contradicciones.

A nivel global, los lazos entre universidad y política representan una tradición crítica en las ciencias sociales (Brunner, 1990; McLaren y Huerta-Charles, 2010; De Soussa Santos, 2021), y es un tema académico y político de larga data, dinamizada en la región, sobre todo por la Reforma de Córdoba de 1918. Sin embargo, la forma explícita y radical en el modelo educativo cubano se ha convertido, con el tiempo, en uno de sus rasgos más estables y también polémicos. Desde una arista, se reconoce la necesidad de incentivar un pensamiento antihegemónico, sobre todo enmarcado en la relación histórica Cuba-Estados Unidos. En otro extremo, se plantea que su radicalización política y marcada ideología oficial deriva en un adoctrinamiento vía escuela. Lo cierto es que, dado el diseño del Estado cubano y su educación, las universidades han tenido un papel clave en la reproducción del capital político del *statu quo*. En consecuencia, estos espacios de formación profesional e intelectual han funcionado como un área de disputa ideológica constante y creciente, donde entran a jugar, cada vez más, actores nacionales e internacionales. Con razón, fueron la educación y la cultura los sectores privilegiados de la Batalla de Ideas, metáfora claramente guerrerista.

Específicamente, la función de la educación como aparato ideológico del Estado (Althusser, 1975) ha sido explícita a lo largo del tiempo, con expresiones sistemáticas en múltiples instrumentos de la política educativa cubana: posicionamientos y discurso, normatividad, currículo y diversas prácticas, que en su conjunto dan cuenta del reiterado uso político de la educación nacional.

Más allá de la narrativa, la dimensión político-ideológica da cuerpo a los procesos organizacionales sustantivos de la ES: en el ingreso a las instituciones de educación superior (IES) mediante principios de selección, en el proceso de formación en valores, así como en la ubicación laboral de los egresados a partir de una evaluación integral que incluye méritos políticos. Asimismo, influye en los criterios de selección y permanencia del personal docente. Por tanto, no es una arista inocua del sector universitario: se expresa concretamente en los procesos institucionales y ejerce gran impacto en la vida de las personas.

Con el triunfo de la Revolución cubana en 1959, se afincaron las bases estructurales y conceptuales del paradigma histórico de la educación cubana. Mediante sus radicales reformas, el campo educativo fue un espacio y mecanismo fundamental en la implementación del nuevo proyecto de nación. La Ley de la Reforma Integral de la Enseñanza (L 680/1959), la Campaña de Alfabetización (1961), y la Reforma Universitaria (1962) fueron las acciones de arrancada más relevantes en el trazado de la nueva ruta de la educación revolucionaria.

Pasada una década de inmensas transformaciones y logros, los años 70 significaron un nuevo paso cualitativo en la trayectoria educativa, tanto en su proceso de institucionalización como en su narrativa política. En 1975, En el contexto del I Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) se definieron los criterios ideológicos y organizativos fundamentales para el desarrollo de las ciencias sociales, la investigación y la formación (Núñez Jover, 1997).

Allí, la escuela se concibió como el eslabón principal de la educación comunista (PCC, 1975); idea que nutrió directamente la Constitución de 1976, donde la enseñanza se explicitó como función del Estado socialista, y la política educacional y cultural se basó en la concepción científica marxista-leninista del mundo. Con esta antesala, se creó el Ministerio de Educación Superior (MES) en ese mismo año, para consumar un punto de inflexión en la trayectoria que evolucionaría hacia un camino de mayor autonomía y complejidad institucional, en medio de crecientes demandas sociales, políticas y económicas.

Como efecto de la instauración formal del derecho a la educación en la Constitución del 76, sobrevino un crecimiento notorio de la matrícula universitaria. Pero el ascenso fue desigual, sobre todo entre algunos grupos sociales,[2] diferenciados por la profesión de los padres, territorio, color de la piel, entre otras variables. Dichas desigualdades se acentuaron aún más con el establecimiento, a finales de los 80, de los exámenes de ingreso, reforzando las desventajas de origen y creando para el futuro nuevas tensiones.

En la década de los 90, como efecto de la crisis, la ES entró por fuerza a un nuevo ciclo. En aquella difícil coyuntura se replanteó el modelo del profesional, y surgió otro punto de inflexión de la trayectoria educativa. En 1992, se aprobó una reforma constitucional que ratificó la gratuidad de la ya reconocida función educativa del Estado. La enseñanza se describió con nuevos adjetivos, calificando su ideario como martiano y patriótico. Así se singularizó discursivamente la experiencia educativa cubana, en un acto de reafirmación nacionalista frente a una diluida comunidad socialista internacional.

La tradición de especialización (planes anteriores A y B) se modificó, al calor de esta década, por un plan C que se inclinó hacia un modelo amplio de formación y en donde la politización del currículo transversalizó todas las carreras. De esa forma, el nuevo modelo educativo rejerarquizó su contenido integral (político) que luego cristalizaría como educación en valores.

Comenzando el siglo xxi, el país avanzó hacia una etapa de recuperación económica, en un contexto regional favorable. Se propició así un nuevo giro ideológico (Mesa-Lago, 2012) en el marco de la Batalla de Ideas, última huella de Fidel Castro Ruz en la política cubana, con prioridad en numerosos programas sociales y donde destacó la universalización de la enseñanza universitaria. Popularizada también como la *tercera revolución* de la ES, su objetivo esencial fue recuperar los ideales de equidad y justicia, fisurados por la crisis económica. De esta forma, en 2001 abrió el primer curso en la modalidad Continuidad de Estudio para los Programas de la Revolución (en las sedes universitarias municipales —SUM—, que luego pasarían a ser las CUM), ampliando las oportunidades para el acceso a la ES dado el amplio perfil de personas que admitía, sus mecanismos flexibles de ingreso, formación y egreso.

El discurso político-educativo transitó hacia una comprensión más incluyente de la educación, que amplificó su proyección. La adjetivación de revolucionaria, comunista, socialista, marxista, martiana y patriótica de los textos y discursos de las etapas anteriores, ahora se articulaba en lemas como «universidad para todos», sin distingos ideológicos explícitos en su narrativa más general. Ahora la educación política se expresaría más en el tenor de la integralidad y los valores, al amparo de un renovado lenguaje pedagógico, no despolitizado, pero sí más amplio, en un renovado entendido de la educación como derecho social.

El impacto de este viraje se hizo patente no solo en el discurso dominante, sino en las cifras de la época, que ascendieron hasta la cima de la trayectoria educativa. Esto fue posible por una inversión en educación que ubicó al país en el primer puesto en el mundo para el período 2009-2013, con cerca de 13% del PIB (Banco Mundial, 2015). Esto propició el mayor crecimiento registrado de los principales indicadores educativos a este nivel, que luego se precipitarían a una velocidad y magnitud sin precedentes.

Si hasta 1997 las asignaciones para la ES habían disminuido en 17,1%, a partir del siguiente año se registraron crecimientos sostenidos, llegando a duplicarse, en 2002, lo invertido en 1989, y mostrando un crecimiento promedio anual superior a 24% entre 2000 y 2004 (Alpízar, 2012). La tasa bruta de escolarización terciaria (proporción de la matrícula universitaria respecto a la población entre 18 y 24 años) creció vertiginosamente, en apenas cuatro años (2002-2006), de 16,3% a más de 60%, para alcanzar el mayor registro histórico de la matrícula universitaria en el curso 2007-2008. Alrededor de 80% de ella estudiaba en las SUM, mayoritariamente, carreras de humanidades. En esos años de la Batalla de Ideas, no solo se alcanzaría la cifra récord en la matrícula universitaria (más de setecientos mil estudiantes), sino también en la contratación de personal docente (a tiempo parcial), para cubrir las necesidades en las sedes municipales. El pico se produjo en el curso 2008-2009, con treinta y tres mil profesores, lo que significó 329,6 millones de pesos en salarios (Quintana Nedelcu, 2017).

Aunque esos resultados fueron posibles como efecto de una política social integradora, las críticas por su carga al erario público justificaron un cambio de giro en la PES, que domina hasta hoy. El discurso político retomó los análisis económicos que pusieron su foco en la ineficiencia del gasto en la formación universitaria. A pesar de contar con una alta dotación de capital humano, su contribución al crecimiento productivo siguió con una tendencia a la baja, explicada por la poca eficiencia del gasto educativo a cuenta de un menor retorno de la inversión en formación general y especializada (Pérez Villanueva y Torres, 2013). Desde una visión más sociológica, se interpretó este nudo como una reactivación de un patrón histórico de asincronía entre los procesos de conocimiento, producción y capacidad decisional (Nerey Obregón, 2014). Con estos señalamientos como ejemplo, se hizo notoria la tensión entre la misión social y la carga económica de la PES, base de las decisiones adoptadas.

La actual política de educación superior: continuidad en tensión

En el contexto de los Lineamientos de 2011, en septiembre de ese año el entonces titular del MES y actual presidente, anunció lo que definió como los retos de la ES: formar profesionales competentes y comprometidos con la Revolución, y la gestión más eficiente de la universidad[3] (*Mesa Redonda*, 2011). Así, la eficacia política y la eficiencia económica se convirtieron en las rutas principales de trabajo, en consonancia con los propósitos generales de las reformas: conseguir cambios económicos siguiendo el camino de la actualización del modelo productivo, perfeccionando el socialismo cubano.

Dicho esfuerzo ha agrupado en su diseño

> un conjunto de políticas para el perfeccionamiento del proceso de formación continua de los profesionales cubanos […] donde la prioridad es la labor político-ideológica con toda la comunidad universitaria […] la

Si un rasgo ha dado singularidad a la educación cubana desde 1959 es su politización, y no solo en sentido narrativo, sino también estructural: contenido y forma. De tal suerte, ha sido una variable explicativa crucial en sus resultados positivos, y también de sus propias contradicciones.

> prioridad es la formación que conduzca a los profesores e investigadores a ser activistas de la ideología y la política de la Revolución. (MES, 2022c)

A pesar de acumular décadas de labor ideológica en la educación, la necesidad de mejorar los resultados políticos no es del todo novedosa. Ya desde el Informe Central del III Congreso del PCC (1986) se expresó la insatisfacción con el desarrollo integral y cultural de los estudiantes universitarios. También algunas investigaciones dieron cuenta de la disminución de la relevancia de las aspiraciones de los jóvenes hacia el área sociopolítica (Domínguez, 2005).

Para el año 2009, las autoridades partidistas y ministeriales, junto con parte de la comunidad universitaria, reconocieron numerosas críticas respecto a la situación política en dicho espacio. Algunos de los problemas identificados fueron: el afán de un grupo importante de estudiantes y profesores por obtener beneficios personales por encima de los de la colectividad; confusión e incomprensión de los pilares que sustentan la ideología de la Revolución; apatía en estudiantes hacia actividades revolucionarias; tendencia al academicismo en los de años superiores y poca disposición a aceptar responsabilidades. Una parte de los profesores no se desempeña plenamente como educadora, otra no tiene la preparación necesaria y algunos llevan al aula criterios que no se corresponden con la política de la Revolución (Quiñones, 2010). Todo esto ocurre en un contexto de mayor penetración ideológica que requiere el combate político cotidiano. Algunos textos citados por M. Quiñones son: «Cinco pilares para el trabajo político- ideológico orientado por el secretario del Comité Central del PCC», «Programa Director Nacional para el reforzamiento de valores fundamentales en la sociedad cubana actual» y «Trabajo político-ideológico en función de la educación en valores en la educación».

En adición, existe otra serie de instrumentos normativos para diseñar y organizar el Sistema de Superación de Profesores e Investigadores de las universidades con el objetivo de «elevar continuamente la superación integral del claustro con énfasis en la preparación política, ideológica, pedagógica, científica y para la defensa» (R 75/2015). En este documento se hace referencia a otras fuentes similares, por ejemplo, la *Propuesta de políticas del MES para la superación política e ideológica de los profesores*.

Con este acumulado, la crítica a la formación política universitaria está en el corazón mismo del actual PES y refleja una tensión fundamental. De ahí que se pueda inferir que la estrategia histórica de politización educativa no ha dado los resultados esperados. Y es que la cultura política abarca un proceso que encierra una complejidad de tal magnitud que no puede comprenderse en un esquema lineal de causa-efecto. Tampoco responde a voluntarismos sin asidero en el orden de la estructura: los procesos culturales se articulan en función de la base material, que determina posiciones y relaciones que dan sentido a los sistemas de valores.

La política en acción: cambios y reconfiguraciones

Detrás de la narrativa continuista en el campo educativo, las cifras, como consecuencia de las decisiones adoptadas, han dibujado una realidad cambiante. Al mirar más allá del discurso, encontramos un cúmulo de disposiciones que, en su conjunto reflejan cambios relevantes. En ese camino, la Resolución 120/2010 fue un parteaguas que pautó la desaparición de la municipalización de la enseñanza universitaria (Curbelo González, 2016), al introducir nuevas restricciones en el proceso de ingreso y matriculación. Siguió la 231/2010, que explicitó la «cancelación paulatina» de la modalidad Continuidad de Estudios en los CUM. Dicho instrumento normativo puso fin a diez años del programa educativo que mejores resultados tuvo en cuanto al acceso a la ES en las últimas décadas, como expresión de una política social altamente inclusiva. La reinterpretación de la política social educativa con prioridad en la igualdad y la equidad había sido un factor propicio a la eliminación del embudo educativo de la primera década de los 2000. Sin embargo, al calor de las reformas, la inversión económica que dicha política implicaba se percibió como un gasto susceptible de ahorro, en nombre de la calidad educativa y la eficiencia económica.

Con la narrativa política por la eficiencia resonando en la nueva normatividad educativa, se aprobó la R 236/2010. En su letra, este instrumento se concibió como parte del proceso de perfeccionamiento general del sistema educacional para elevar la calidad de la educación del nivel superior, ajustándose a las necesidades

socioeconómicas del país. Específicamente, aprobó transformaciones en el proceso de ingreso a este nivel, a partir del curso 2011-2012, que impactaron directamente (y aún más) en la reducción significativa de la matrícula universitaria, mediante varios mecanismos modificados; por ejemplo, los exámenes de ingreso. Su justificación era, nuevamente, el incremento de la calidad del proceso de formación, concepto que se colocó en el centro del discurso de la PES en su condición de objetivo primordial. Sin embargo, es sabido que la calidad en el terreno de la literatura y la práctica educativa es posible que sea el más polisémico de todos los conceptos y, por tanto, susceptible de ser definido a la medida. En el contexto cubano se ha comprendido como una educación integral, y ha sido sujeto a múltiples controles y mediciones (R 146/2011).

Otros instrumentos se aprobaron en razón de seguir modificando las pautas del ingreso: resoluciones 142/2012, 134/2013, 97/2014 y 300/2015. En esta última se incluyó el asunto del fraude masivo en las pruebas de ingreso, a partir de un escandaloso suceso que involucró a funcionarios públicos.

En la tabla 1 aparecen los datos oficiales como efecto de esas medidas hasta el año 2015, es decir, los primeros cinco años de la política del perfeccionamiento, que en esta primera etapa se caracteriza por un descenso histórico general.

Tabla 1. *Tasas nacionales (2010-2015).*

Año	PIB general. Precios constantes	Tasa de educación. Precios constantes
2011	2,8	-5,3
2012	3,0	-3,8
2013	2,7	-2,2
2014	1,0	-3,0
2015	4,4	-2,1

Fuente: ONEI, 2017.

La estructura educativa en el PIB descendió sostenidamente a partir de 2011: 7,6% (ese año); 7,1% (2012); 6,7% (2013); 6,5% (2014); y 6,1% (2015) (ONEI, 2017). El peso de la reducción en educación es más dramático al compararse con otros rubros de la economía nacional: en 2011 ocupó el tercer lugar más negativo (la peor caída respecto a sí mismo —casi diez unidades); en 2012 fue el rubro que menos creció, y en 2013 se ubicó en el segundo peor lugar (2014). El impacto se observa con nitidez en la matrícula a este nivel, que en cinco años se redujo 3,5 veces (tabla 2). Esta tendencia contrasta de manera radical con el comportamiento de la década de los 2000, cuando la UNESCO (2014) reconoció que Cuba casi había quintuplicado, entre 2000 y 2010, la proporción de estudiantes universitarios, crecimiento superior al de la media latinoamericana, estimada en 40% para el mismo período.

Pasado un lustro de la adopción de la política de perfeccionamiento de la ES y como efecto de las primeras resoluciones que en su aplicación modificaron sustantivamente el ingreso a ella, se registró una significativa disminución de la matrícula universitaria, a cuenta de la reducción de este rubro en el presupuesto (ONEI, 2015).

Tabla 2. *Matrícula en la educación superior (2008-2015).*

Año	Matrícula
2008	658 134
2009	606 863
2010	473 309
2011	351 116
2012	261 468
2013	207 237
2014	173 298
2015	165 926

Fuente: ONEI, 2012; 2017.

En una serie comparada —recuperada del Resumen escolar de la ONEI (2015)—, se aprecia mejor el impacto negativo de esta etapa en la trayectoria general de la matrícula en la ES (gráfico 1).

La caída que prosigue a ambos picos del gráfico 1 refleja el impacto de las decisiones principales de regular el ingreso a la universidad. El primero corresponde al establecimiento a finales de los 80 de las pruebas de ingreso, y el segundo como efecto de las resoluciones antes mencionadas.

Frente a esta situación y como efecto rebote, de 2014 a 2016 la ES vivió un proceso de reconfiguración, en aras de recuperar alguna mejoría para poder enfrentar las tensiones que esa etapa había generado por las contracciones observadas. En este sentido se puede comprender el contexto de emergencia de la R 328/2015, al adoptar en su letra nuevas pautas para la flexibilización del proceso después de la fuerte caída de la matrícula terciaria.

Fue así que se realizaron cambios estructurales al sistema de la ES bajo el signo de lo que se definió como proceso de integración hacia adentro y con su entorno social y económico (Saborido y Alarcón, 2018). Entre varios resultados, que han reconocido sus dirigentes, resaltan dos logros: rediseño institucional en aras de la eficiencia de las funciones, y armonización de los procesos universitarios con su entorno (territorial, municipal, provincial y nacional). Esta política propició la fusión de las IES en un número significativo, de casi setenta bajaron a cincuenta (Silva, 2018). En consecuencia, se modificó el organigrama, lo que ocasionó una disminución de 40% de los cargos

de cuadros, y más de 60% en los CUM (Saborido y Alarcón, 2018).

Tal reingeniería institucional vino de la mano con transformaciones en la organización y pautas de la enseñanza. Se gestó un nuevo plan de estudios (E), que comenzó a aplicarse de manera formal en el curso 2016-2017, en treinta carreras (Silva, 2018). Las prioridades versaron sobre la capacitación continua de los profesionales (reforzando su perfil amplio, preparación para el empleo y estudios de posgrado), el regular incremento de la calidad de la enseñanza, y la formación integral («que debe dar como resultado graduados con un sólido desarrollo político, desde los fundamentos de la ideología de la Revolución cubana» —MES, 2022b).

En este marco, resultó de gran novedad la contracción del tiempo de estudios mediante la disminución de la duración de las carreras, que de cinco bajó a cuatro años. También se modificó la enseñanza del inglés y, entre otros aspectos, se plantearon cambios en el uso del tiempo de aprendizaje, la evaluación, y la articulación con *todas* las formas de empleo.

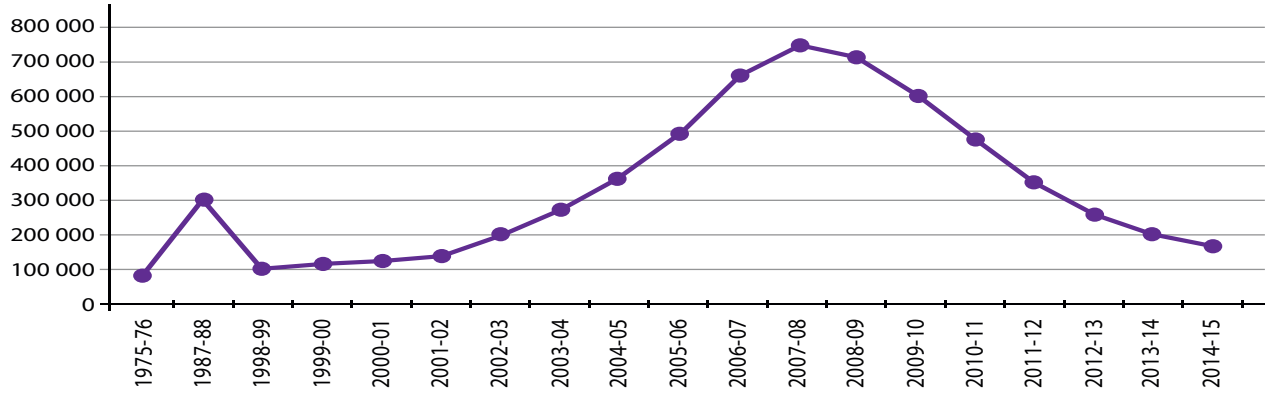
Muchas de estas transformaciones se encuentran plasmadas en la R 111/2017 que reajustó formalmente el reglamento de Organización Docente de la Educación Superior (desde el proceso de matrícula hasta el egreso). En paralelo, se retomó la necesidad de aumentar el ingreso a la ES. Para ello se incentivó el acceso a los cursos por encuentros, y de educación a distancia, además de la eliminación gradual de las pruebas de aptitud que se venían efectuando en numerosas carreras. Por ejemplo, en el año 2022 solo se solicitó este paso para las carreras de Periodismo, Relaciones Internacionales, y las seis especialidades de la Universidad de las Artes.

En el año 2018 se inauguró un nuevo nivel, de ciclo corto, como subsistema de la ES. Se estableció para ella una formación profesional de un perfil terminal, para satisfacer las necesidades de producción, con un enfoque teórico-práctico y una duración de entre dos y tres años. A diferencia de otras modalidades, no se prestablecieron exámenes de ingreso mientras existiera un equilibrio entre oferta y demanda (MES, 2022a). Por ejemplo, según datos oficiales, en el año 2022 se ofertaron 103 008 plazas, 3 000 más respecto a 2021. De ese total, 53 263 son del curso diurno, divididas en 40 905 carreras universitarias, y la diferencia las de ciclo corto. El mayor incremento fue en el curso por encuentros, con más de 1 000 plazas, y en los programas de ciclo corto.

En un nuevo paso para flexibilizar el ingreso, se determinó, además, la no obligatoriedad de aprobar con el mínimo de sesenta puntos para la obtención de una plaza. En un mismo sentido se han diversificado los estímulos especiales que permiten el ingreso directo (Barrios, 2022). A pesar de todos estos esfuerzos, se mantiene la tensión entre oferta y demanda, y queda sin cubrir el plan de plazas. La misma publicación refiere que, al menos para quienes terminan el duodécimo grado, hay numéricamente más de una plaza para su continuidad de estudios en el curso diurno, comportamiento que viene manifestándose como tendencia.

Las cifras demuestran una persistente tensión entre los objetivos de la PES y sus efectos, que si se agregan no hacen más que reforzar una tendencia de descenso de indicadores que, aunque con mejoras marginales, siguen en un comportamiento crítico. Después de la contracción sostenida de la matrícula en un lapso de siete años (2008-2015), sobrevino un efecto rebote que registró una leve pero sostenida recuperación a partir de 2016, con 218 643 matriculados. Aumentó a 224 944, en 2017; a 240 813, en 2018; a 257 347, en 2019; y a 288 219, en 2020.

Gráfico 1. *Serie histórica de matrícula inicial en la ES.*



Fuente: ONEI, 2015.

En cuanto a los graduados, la subida tardó más en hacerse visible y, a falta de datos más recientes, es difícil corroborar que sea un efecto coyuntural o una tendencia sostenida. El año 2019 no es comparable, pues el dato representa la suma síncrona de dos generaciones de graduados (última del plan D y primera del plan E) (tabla 3).

Tabla 3. *Graduados universitarios (2011-2019).*

Año	Graduados
2011	89 560
2012	70 341
2013	54 373
2014	36 261
2015	23 971
2016	23 478
2017	22 344
2018	22 803
2019	35 653

Fuente: ONEI, 2017; 2022.

Reflexiones finales

La educación superior cubana enfrenta numerosos desafíos; los que ha heredado de su propia trayectoria y los actuales, en un país y entornos muy cambiantes. En el imaginario social, estudiar en la universidad y ser profesional resulta cada vez más cuestionado. Varios factores se entrelazan en estos retos: la crisis económica sistémica y una deficiente estructura de ingresos en el país, que ha reducido el atractivo del empleo estatal profesional asalariado; las fuentes no estatales emergentes de trabajo, alternativas que, aunque distan de ser perfectas, representan nuevas oportunidades; la migración, sostenida por décadas, de la juventud con estudios superiores o en edad de realizarlos; entre otras situaciones propias o compartidas con otras naciones.

Otros retos globales (de los que Cuba no escapa) se añaden: el problema perenne del financiamiento de la ES pública en un contexto de creciente mercantilización; el cambio del modelo educativo en respuesta a la mayor tecnologización de la vida y la enseñanza; la siempre desafiante conexión entre educación, ciencia y producción; la necesidad de robustecer el derecho a la educación frente a los problemas sociales persistentes de pobreza, desigualdad, migraciones, violencia. Cada tema redunda en nuevas preguntas.

En medio de todo, la actual PES, en nombre del perfeccionamiento político y la actualización económica, ya acumula más de una década. Sus principales decisiones ocasionaron una reconfiguración de su paradigma histórico, lo que evidenció cambios, tensiones y reconfiguraciones, que dan cuenta de una persistente dificultad que las familias y el Estado enfrentan día a día.

En su paradigma se observa una recomposición entre sus componentes político-ideológico, social y económico que se articulan en una tensa dinámica, más allá de su aparente paradoja. Es que, aunque en la narrativa política persiste su orientación continuista, el componente social de la PES se ve desafiado ante un cambio constitucional medular, que modificó su principio histórico de gratuidad absoluta, introduciendo nuevas reglas del juego en el acceso y dando paso al mercado como actor de peso. Frente a este cambio, es difícil sostener la visión de que todo sigue igual. A su vez, las cifras registradas como consecuencia de las medidas por el perfeccionamiento educativo de esta política dibujaron una trayectoria en descenso, sin precedentes. Esto se explica por la rejerarquización del componente económico en el paradigma de la PES, justificada por la intención de hacer del educativo un sector más eficiente, aunque en la práctica no se ha logrado más que ahorrar, a fuerza de reducir su consumo.

La apuesta por hacer del educativo un sector clave para el desarrollo mediante la exportación de servicios profesionales quedó diferida, en medio de coyunturas geopolíticas volubles y nuevos rumbos de la política doméstica, que priorizó el turismo como medio de captación de divisas inmediatas. Un ejemplo virtuoso entre educación, ciencia, economía y desarrollo ha sido el polo de la biotecnología, que a pesar de haber mostrado su incidencia en el desarrollo del país y mundial, no se pudo replicar en otras ramas de la ciencia y la producción.

La tarea de contextualizar esta PES y contrastar narrativas y decisiones con sus consecuencias, demuestra que estamos frente a una dinámica que incluye, a la vez, cambios y continuidades, pero que más que un conflicto propio de cualquier proceso político, en este caso lo anuda su misma estructura. La disonancia entre el discurso continuista y los cambios verificados provoca más interrogantes que certezas, y se traduce empíricamente en resultados difíciles de interpretar por su aparente desarticulación.

¿Por qué desinflar la educación superior en tal magnitud —primer tramo de esta política— y después intentar recuperar parte de lo perdido —segundo tramo? ¿Los cambios se fueron de las manos y no se previó su alcance en extremo negativo? Aunque desde la práctica política resulta válido y hasta deseable diseñar acciones de ajuste y corrección de la trayectoria, al graficar las decisiones y sus impactos parecería más un avance en forma de zigzag con enormes implicaciones sobre la marcha. La contracción histórica de la ES que

hemos visto significa, en términos teóricos y prácticos, un despropósito bajo la intención, también explícita, de perfeccionar el socialismo cubano. En cualquiera de sus variantes, el socialismo implica procesos crecientes de colectivización de la vida pública, y la universidad no puede estrecharse frente a este ideal. La educación cubana se mueve en la política y en el imaginario colectivo, a merced de las múltiples contradicciones de la vida cotidiana. Es preciso un debate abierto y franco sobre qué educación queremos; profundizar en sus avatares; repensar, desde sus evidencias, el curso de las decisiones. La reconocida herencia de la educación cubana es una fortaleza en medio de las actuales incertidumbres, y desde ahí, el pasado nos puede dar lecciones para, al menos, no repetir algunos errores.

¿Era tan ineficiente la PES como para disminuir deliberadamente todos sus indicadores en nombre de la economía? ¿Cómo afecta la meta de la eficiencia el análisis de la PES desde una comprensión social de la política? Es cierto que, en medio de las restricciones económicas que enfrenta el país, garantizar la función social de la universidad es aún más complejo y urgente. Por eso, diferenciarnos de la deriva mundial mercantil es una tarea histórica que se logra frente a cada coyuntura, y en tal sentido es vital recuperar la comprensión y medición de la política educativa, ante todo, como social y no económica, aun con sus elevados costos. Rejerarquizar en el paradigma el componente social de la educación incluye un trabajo político-analítico transversal a todo el proceso de creación de la política educativa, desde su base constitucional hasta los procesos subjetivos. Para ello, es vital aminorar disonancias entre discurso y prácticas.

Se precisa debatir mucho más sobre la educación que queremos y la que tenemos. La agenda pública educativa desborda en temas: analizar las implicaciones de mercantilizar servicios educativos frente a la creciente desigualdad social; evaluar la desigualdad educativa en aumento; crear vínculos virtuosos entre universidad y trabajo; estudiar y aminorar los efectos de la emigración en la formación de profesionales; aprovechar mejor a nuestros propios universitarios formados con recursos públicos, entre muchos más.

Notas

1. Este autor ha demostrado cómo el Estado cubano y sus instituciones han sido un agente facilitador de la enseñanza de los estudiantes, relacionado directamente con su buen desempeño en términos comparados.

2. Véase Bourdieu y Passeron (2003).

3. Sobre el primero, hemos demostrado anteriormente que, como efecto de dicha política, se registró una contracción significativa en las asignaciones e indicadores de ES, que ahorró recursos del erario público, pero no necesariamente se tradujo en un sector más eficiente en un sentido económico (García-Chediak y Quintana Nedelcu, 2021). Sobre el segundo, también hemos evidenciado que detrás de una narrativa política continuista visible existe una estrategia discursiva altamente disputada, en una realidad disonante (Quintana Nedelcu, 2015).

Referencias

Alpízar, M. (2012) «La educación superior cubana y su financiamiento: situación actual y perspectivas de desarrollo futuro». *Pedagogía Universitaria*, v. 17, n. 5, 142-56.

Althusser, L. (1975) *Aparatos ideológicos del Estado*. Ciudad de México: Comité de Publicaciones de los alumnos de la ENAH.

Banco Mundial (2015) «Gasto público en educación, total (% del PIB)». Disponible en <https://bit.ly/3JMUjSa> [consulta: 23 marzo 2023].

Barrios, M. (2022) «Se abren nuevos caminos hacia la universidad». *Juventud Rebelde,* 19 de septiembre. Disponible en <https://acortar.link/B117k7> [consulta: 23 mayo 2023].

Bourdieu, P. y Passeron, J. C. (2003) *Los herederos. Los estudiantes y la cultura*. Buenos Aires: Siglo xxi Editores.

Brunner, J. J. (1990) *Educación superior en América Latina: cambios y desafíos*. Ciudad de México: FCE.

Carnoy, M. (2010) *La ventaja académica de Cuba*. Ciudad de México: FCE.

Constitución de la República de Cuba (1976) Disponible en <https://acortar.link/EZSsE9> [consulta: 28 mayo 2023].

_____ (2019) *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, extraordinaria, n. 5, 10 de abril. Disponible en <https://bit.ly/3ZBdRj0> [consulta: 9 enero 2023].

Cuba. Ley 116/2013, Código de Trabajo. Ibídem, n. 29, 17 de junio de 2014. Disponible en <https://acortar.link/RBfU9s> [consulta: 16 marzo 2023].

_____ 680/1959, de la Reforma integral de la enseñanza. Ibídem, 26 de diciembre. Disponible en <https://acortar.link/PnPtov> [consulta: 16 marzo 2023].

_____ Resolución 75/2015. Ibídem, ordinaria, n. 29, 3 de julio, 927-33. Disponible en <https://goo.su/X8usLp> [consulta: 16 marzo 2023].

_____ 97/2014. Ibídem, n. 47, 14 de octubre, 1271-302. Disponible en <https://bit.ly/3Lmy7Ae> [consulta: 16 marzo 2023].

_____ 111/2017, Reglamento de la organización docente de la Educación Superior. Ibídem, n. 13, 27 de abril de 2018. Disponible en <https://acortar.link/3kvxKy> [consulta: 16 marzo 2023].

_____ 120/2010. Reglamento de la organización docente de la Educación Superior. Ibídem, n. 31, 11 de agosto, 908-20. Disponible en <https://bit.ly/3L0AdEr> [consulta: 16 marzo 2023].

_____134/2013. Ibídem, n. 14, 20 de mayo. Disponible en <https://bit.ly/40yRV7C> [consulta: 16 marzo 2023].

_____ 142/2012. Regulaciones para el proceso de ingreso a la Educación Superior. Ibídem, n. 56, 28 de noviembre, 1893-6. Disponible en <https://bit.ly/3BfMiRO> [consulta: 10 marzo 2023].

_____ 146/2011. Ibídem, n. 26, 4 de agosto, 776-8. Disponible en <https://bit.ly/42NV9G9> [consulta: 16 marzo 2023].

_____231/2010. Ibídem, n. 54, 27 de diciembre, 1517-8. Disponible en <https://bit.ly/3N7nJ0g> [consulta: 16 marzo 2023].

_____ 236/2010. Ibídem, 1518-20.

_____ 300/2015. Ibídem, n. 50, 3 de noviembre. Disponible en <https://bit.ly/3N80vqZ> [consulta: 16 marzo 2023].

_____ 328/2015. Ibídem, n. 9, 17 de febrero de 2016, 308-12. Disponible en <https://bit.ly/NBZEPt> [consulta: 16 marzo 2023].

Curbelo González, L. (2016) *Decisiones sobre el ingreso a la educación superior en Cuba: ¿distintos actores, distintos problemas, distintas soluciones?* Tesis de maestría. Flacso-México, Ciudad de México.

De Soussa Santos, B. (2021) *Descolonizar la universidad. El desafío de la justicia cognitiva global.* Buenos Aires: CLACSO.

Domínguez, M. I. (2005) «La juventud cubana: aspiraciones, percepciones sociales e identidad». En: *Cambios en la sociedad cubana desde los noventa*. Tulchin, J. S. *et al.* (eds.), Washington, D. C.: Latin American Program, Woodrow Wilson International Center for Scholars.

García-Chediak, R. y Quintana Nedelcu, D. (2021) «The Hazards to Higher Education of Reformist Pragmatism in Cuba: Proposals for an Agenda». *Latin American Perspectives*, v. 49, n. 3, noviembre.

McLaren, P. y Huerta-Charles, L. M. (2010) «El cambio educativo, el capitalismo global y la pedagogía crítica revolucionaria». *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, n. 15, 124-1130.

Mesa-Lago, C. (2012) *Cuba en la era de Raúl Castro. Reformas económico-sociales y sus efectos*. Madrid: Editorial Colibrí.

Mesa Redonda (2011) «Cuba; por una mayor calidad en la educación superior». Disponible en <https://acortar.link/edO7LC> [consulta: 23 marzo 2023].

MES (Ministerio de Educación Superior) (2022a) «Nivel de educación superior de ciclo corto». Disponible en <https://acortar.link/R7fjNu> [consulta: 23 marzo 2023].

_____ (2022b) «Planes de estudio». Disponible en <https://goo.su/0QUFdQ> [consulta: 23 marzo 2023].

_____ (2022c) «Planificación estratégica y objetivos de trabajo». Disponible en <https://goo.su/QdaUlpm> [consulta: 23 marzo 2023].

Nerey Obregón, B. (2014) «Los comunismos del siglo xxi ante la herencia del socialismo real. Elementos para relanzar un debate desde la experiencia cubana". *Pacarina del Sur. Revista de Pensamiento Crítico Latinoamericano,* n. 16. Disponible en <https://acortar.link/x2Aa9z> [consulta: 23 marzo 2023].

Núñez Jover, J. (1997) «Aproximación a la sociología cubana». *Papers,* n. 52, 187-203.

ONEI (Oficina Nacional de Estadística e Información) (2012) *Anuario estadístico de Cuba 2011*. La Habana.

_____ (2014) *Anuario estadístico de Cuba 2013*. La Habana.

_____ (2015) *Educación. Resumen del curso escolar 2013-2014 e inicio del curso escolar 2014-2015*. La Habana. Disponible en <https://acortar.link/lf3dN9> [consulta: 23 mayo 2023].

_____ (2017) *Anuario estadístico de Cuba. Edición 2016*. La Habana.

_____ (2022) *Anuario estadístico de Cuba. Edición 2021*. La Habana. Disponible en <https://acortar.link/5wPFoJ> [consulta: 23 mayo 2023]

Pañellas, D. (2012) «Grupos e identidades en la estructura social cubana». *Temas*, n. 71, julio-septiembre. Disponible en <https://acortar.link/Rdy8nv> [consulta: 23 marzo 2023].

PCC (Partido Comunista de Cuba) (1975) *Tesis y resoluciones*. Disponible en <https://bit.ly/42uDML7> [consulta: 23 marzo 2023].

_____ (1986) *Informe Central presentado al III Congreso del Partido Comunista*. Disponible en <https://bit.ly/409I7Bz> [consulta: 23 marzo 2023].

_____ (2011) *Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución*. Disponible en <https://bit.ly/3z39S30> [consulta: 23 marzo 2023].

_____ (2021) *Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el período 2021-2026*. Disponible en <https://bit.ly/3FNGVMi> [consulta: 23 marzo 2023].

Pérez Villanueva, O. E. y Torres, R. (2013) *Miradas a la economía. Entre la eficiencia económica y la equidad social*. La Habana: Editorial Caminos.

Quintana Nedelcu, D. (2015) *Cuba entre revolución y reformas. La Política de la política educativa en los cambios actuales.* Tesis de doctorado. Flacso-México, Ciudad de México.

_____ (2017) «La política de educación superior en el mapa de las reformas actuales: cambios de política y La Política sin cambios». *Cuban Studies,* n. 45, 132-58.

Quiñones, M. (2010) *Talleres sobre el pensamiento martiano para la superación político-ideológica del docente de la SUM de Abreus*. Tesis de maestría. Universidad de Cienfuegos.

Saborido, J. R. y Alarcón, R. (2018) «La integración de la universidad: experiencias de Cuba». *Revista Cubana de Educación Superior*, v. 37, n. 3. Disponible en <https://bit.ly/3Ao8qJ6> [consulta: 16 marzo 2023].

Silva, Y. (2018) «La educación superior cubana en los últimos cinco años». *Granma,* 13 de septiembre. Disponible en <https://acortar.link/sfTMmj> [consulta: 23 mayo 2023].

UNESCO (2014) *América Latina y el Caribe. Revisión regional 2015 de la Educación para Todos*. Disponible en <https://bit.ly/2Zc47ft> [consulta: 23 marzo 2023].

©Temas, 2023

CONTROVERSIA

¿Cuàles relaciones laborales?

¿Cómo son en Cuba las relaciones laborales entre los emprendedores y sus empleados? ¿Cuáles son sus principales problemas? ¿En qué medida las relaciones de los emprendimientos con otras entidades e instancias las afectan? ¿Cómo influye el mercado de trabajo en el funcionamiento de los emprendimientos? ¿Qué garantías sociales y de protección laboral se ofrecen a los empleados en negocios privados? ¿Qué políticas, regulaciones y prácticas podrían contribuir al clima de relaciones laborales, en beneficio de empleadores y empleados? ¿Qué perspectivas, a corto o mediano plazos, existen en cuanto a la consolidación de ese marco legal y práctico?

Un panel constituido por dos dueños de negocios, una ex empleada de un emprendimiento, un sociólogo y un chef de cocina expone sus experiencias y criterios sobre las relaciones laborales en el sector privado en Cuba; y dialogan con el público, desde sus conocimientos e interrogantes.

Emprendedores y empleados: ¿cuáles relaciones laborales?

Oscar R. Brito
Ileana González Arteaga
Caridad L. Limonta
Ramón M. López Alarcón
José L. Martín Romero
Rafael Hernández (moderador)

Rafael Hernández: Estamos muy contentos de poder hacer, a pesar de las dificultades provocadas por la pandemia, nuestro Último Jueves el día que toca, y a la hora habitual. Muchísimas gracias por participar activamente, empezando por los panelistas. Las preguntas que les hemos hecho tienen su centro en la cuestión de las relaciones laborales. Quisiéramos hacer una discusión sobre esta problemática, que no es la del lugar del sector privado en la economía y el desarrollo cubanos, ni tampoco el asunto tan discutido de la política económica y de la vinculación con el sector estatal, sino cómo se desarrollan esas relaciones en el microcosmos del centro de trabajo privado y qué factores externos inciden en su contingencia, en su desarrollo, en su vida diaria; cuáles son los problemas que las caracterizan; por ejemplo, cómo el mercado de trabajo es un factor que contribuye de una manera fundamental a delinear esas relaciones laborales; y, naturalmente, cómo las instituciones estatales y las organizaciones inciden en la índole de ellas. También queremos preguntarles a los panelistas qué hacer para mejorar esas relaciones, donde emprendedores y empleados se beneficien y ambos estén protegidos y puedan desarrollar una labor justa, equitativa, que se corresponda con el trabajo de cada cual. Empecemos por la primera pregunta: ¿cómo son hoy las relaciones entre los emprendedores y sus empleados?

Caridad L. Limonta: Es oportuno presentar mi negocio familiar, con más de doce años de trabajo: se dedica a las confecciones textiles y, en particular, al servicio de arreglos y transformaciones de ropa. Radica en un inmueble rentado a la Empresa de Servicios del municipio Centro Habana. Actualmente somos cinco trabajadores y las relaciones laborales de nuestro equipo han sido siempre muy empáticas y equilibradas; se ha logrado un ambiente fraternal, sin perder el respeto y la autoridad cuando ha resultado necesario.

En mi caso, le doy gran participación al equipo en los compromisos, cumplimientos y retos del negocio. De modo que, con la absoluta transparencia en el proceso de gestión, se vean todos involucrados con un alto sentido de pertenencia, donde no solo estamos por ganar, sino porque nos sentimos bien y con gusto servimos a nuestros clientes.

De forma general, la apreciación que tengo de otros emprendimientos es que logran un clima laboral donde prima la lealtad, fidelidad y buena voluntad por hacer que el negocio fluya bien. Sienten gran compromiso y sentido de pertenencia. Determinantes en ello son las condiciones laborales y salariales.

Panel de Último Jueves, realizado vía WhatsApp, el 25 de junio de 2020.

Dos aspectos que, desde mi apreciación, están presentes en esas relaciones son: 1) los empleadores involucran a los empleados en todo el proceso; desde la adquisición de materiales, para qué cliente, con qué calidad y en qué fecha, y las utilidades distribuidas de manera que el negocio gane, el empleado quede satisfecho y el empleador igualmente se beneficie; 2) se presentan situaciones y dificultades cotidianas o eventuales pero *siempre* el empleador está a la orden, listo para escuchar a su empleado y colaborar de la manera más sensata y justa. Auténtica solidaridad.

Ileana González Arteaga: Según mi experiencia, en muchos casos las relaciones entre empleados y empleadores van más allá de lo laboral. A menudo se establecen a partir de lazos consanguíneos (negocios de origen familiar) o de amigos que recomiendan al futuro empleado. Esta característica responde a la inexistencia de un mercado formal de trabajo, que ofrezca una vía para asegurar un tipo de relación laboral favorable.

En el caso de los emprendedores, la ausencia de este mercado formal, así como la manera en que llegan muchos de los posibles empleados a su negocio, les permite disponer de un medio de control efectivo sobre esa fuerza de trabajo, lo que representa un nexo y un compromiso moral con el contratado.

Que estas relaciones sean buenas, por lo general depende mucho de los empleadores y empleados, y de sus intereses y sentido de pertenencia, en particular los de los empleados, porque, aunque el negocio no es suyo, se benefician según como se comporte la venta y el prestigio que tenga el negocio mismo, al incidir sobre sus ingresos personales.

Por lo tanto, el vínculo entre emprendedores y empleados debe estar marcado por su condición de profesionales con intereses comunes.

Oscar R. Brito: Las relaciones laborales se materializan mediante un contrato, cuyas prestaciones fundamentales son, por parte del empleado, la venta de su fuerza de trabajo y por parte del empleador, el pago pactado por ella; por lo que tenemos, como sector, la posibilidad de lograr un adecuado equilibrio entre estas prestaciones, incidiendo positivamente en la relación de las partes. Además, la facultad del emprendedor de establecer las formas de pago y el sistema de trabajo, pudiendo darle un tratamiento diferente al empleado eficiente que al negligente, contribuye también a que dichas relaciones sean sanas. En cuanto a la debida comunicación entre las partes, depende mucho de la capacidad de liderazgo del emprendedor, así como de las características del empleado contratado; pero considero que, por lo general, es buena y efectiva, basada en el respeto mutuo e intereses comunes, que son satisfacer al cliente y lograr con buenas prácticas maximizar ganancias. Muchos empleados tienen un alto sentido de pertenencia con el negocio, logran desarrollarse en el plano personal y profesional, además de mejorar sustancialmente su poder adquisitivo. La primera preocupación del desarrollo de nuestra responsabilidad social empresarial es para con nuestros empleados; sus inconformidades, inquietudes y problemas en su ámbito personal, son también de nuestra atención; ser empático es la mejor manera de lograr compromisos sinceros que beneficien a las partes. Rara vez los errores cometidos por los empleados en el negocio son responsabilidad exclusiva de ellos, casi siempre hay algo que se pudo hacer de nuestra parte; mejorar sistemas de trabajo, capacitarlos, darles tiempo de adaptación o simplemente saber de sus cualidades y limitaciones para asignarles responsabilidades. En última instancia, terminar una relación laboral que no es efectiva depende de nosotros. Entendiendo esto con cabalidad, permite alcanzar un clima correcto, mejorando y diversificando las herramientas de comunicación. Los negocios donde no se logra una adecuada relación laboral fracasan en el tiempo, pues tanto empleados como empleador dependen mutuamente, y con igual importancia.

Ramón M. López Alarcón: En mi experiencia personal, he tenido la suerte de trabajar en lugares donde los dueños han sido buenas personas, aunque no por esto menos exigentes, y las relaciones han sido excelentes. En los años que llevo ejerciendo la profesión he escuchado vivencias de muchos compañeros de trabajo, y no todos han tenido la misma suerte. Esto depende mucho del tipo de persona, tanto empleados como empleadores, por lo que no puedo generalizar que en todos los negocios las relaciones sean buenas. A mi entender, para que exista un clima favorable al entendimiento, debe existir profesionalidad en los centros

de trabajo, los trabajadores deben ser capaces de hacer bien lo que les toca, saber acatar órdenes y cumplirlas a cabalidad, ya que por eso se les paga, que es el interés básico de los empleados, aparte de su realización profesional. Para que exista un buen entendimiento debe haber una línea a seguir y todos deben ir en el mismo sentido. Para esto, los jefes (emprendedores) deben tener bien claro lo que quieren y saber guiar a sus empleados. Debe ser interés de ambos que el trabajo esté bien realizado, para que eso se refleje en sus servicios, sea cual sea y, por ende, los clientes estén satisfechos y con ganas de volver. A los empleados, les interesa que luego de cumplir lo que se les exige, su trabajo sea bien remunerado y se les reconozca el mérito de hacerlo bien. Creo que así ninguna de las dos partes queda insatisfecha.

José L. Martín Romero: No tenemos una buena investigación sobre los sistemas de relaciones sociales de trabajo (SRST) en el espacio privado; de todas formas, hay dos grandes grupos en él: los que subsisten y los que medran. Entre los primeros está la mayoría de los empleados, e incluso algunos propietarios —generalmente autoempleados—; dentro de los segundos está la mayoría de los propietarios y una parte no despreciable de empleados en actividades de alojamiento, restauración, construcción y transporte. El éxito económico define la salud de las relaciones en lo aparente, hasta ahora; porque ambos actores están todavía definiendo o consolidando sus identidades. Todavía los empleados no tienen conciencia de que lo serán para siempre por lo persistentemente excepcional de esas actividades en Cuba. Su extensión en el tiempo debe variar este cuadro.

Hoy empleadores y empleados son aliados, al margen de abusos, acosos, inseguridades, etc., allí donde las haya. Los une la lucha por demostrar que sus ingresos son legítimos y que ganan más porque trabajan más. La pretensión de evitar la concentración de la propiedad y de la riqueza opera como un igualamiento hacia abajo, como un límite. Sería interesante ver qué pasaría si se promoviera lo contrario: la elevación de los ingresos con participación colectiva y prácticas de responsabilidad social, como pretendiendo homogeneidad, pero hacia arriba.

Rafael Hernández: ¿Cómo influye el mercado de trabajo en el funcionamiento de los emprendimientos?

Caridad L. Limonta: Asumo que alrededor de 80%, tanto de empleados como empleadores, procede del sector estatal, o de eventuales movimientos de otros emprendimientos, pero igual los antecedían trabajos institucionales. Este grupo incluye jóvenes recién graduados que no cumplen el servicio social y determinan ser muy buenos emprendedores por cuenta propia.

Una tendencia no menos importante es la de 15% de personas de la tercera edad que, al jubilarse, se convierten en empleados o empleadores, por la incidencia de la alta esperanza de vida y los bajos ingresos a través de las chequeras de jubilación. El restante 5% puede ser de personas que no tenían vínculo laboral y se acogen a la modalidad de trabajo independiente.

En mi caso, por las características de la manufactura, muchas de las empleadas que he tenido han sido jubiladas que saben coser, por tradición, y otras desvinculadas del sector estatal por quedar disponibles o estar en búsqueda de mejor salario.

La mayoría, para no ser absoluta, de los emprendedores están calificados; tanto empleados como empleadores tienen, como mínimo, nivel medio superior, debido al resultado de la política educacional del país. Esto tiene gran incidencia en el engranaje y funcionamiento del negocio, pues no hay grandes barreras entre empleador y empleados y el objetivo es común: triunfar. En mi consideración, los negocios de emprendimiento relacionados con la tecnología de la informatización tienen equipos altamente calificados y con fuerza juvenil.

En el sector no estatal igualmente hay fluctuación de la fuerza de trabajo. En mi experiencia, muchas de mis empleadas han logrado hacer sus propios negocios y pasar a empleadoras. Ello tiene un efecto multiplicador, pues se convierten en aliadas y nos encadenamos cuando, por fortuna, debemos asumir algún compromiso y la capacidad instalada y productiva es insuficiente. Entonces todos ganamos.

Igualmente, la inestabilidad de logística material del país incide en el sistema emprendedor; solo que se buscan opciones, alternativas de reformulación de estrategias;

es más resiliente y dinámica la reacción y acción para resolver problemas y proponer nuevas soluciones a clientes, proveedores y trabajadores. Los empleados también participan del banco de soluciones. Todo lo cual influye a favor de la estabilidad de los emprendimientos.

Ileana González Arteaga: Los emprendedores, al igual que muchos de los demás trabajadores, provienen del sector estatal. Una minoría de ellos quedó excedente en su ocupación anterior, otros abandonaron su puesto de trabajo para incorporarse al sector no estatal, y una tercera parte se ha movido de un negocio privado a otro. Además, muchas de las personas empleadas en este sector no tenían vínculo laboral anterior, y encontraron en esta vía un modo de satisfacer y mejorar sus ingresos personales y los de su familia, independencia y realización personal, así como la búsqueda de nuevas oportunidades.

En los últimos años, aproximadamente la mitad de los estudiantes universitarios y los regulares de los institutos técnicos están inmersos en alguna de las actividades del trabajo por cuenta propia (TCP), por la cual reciben ingresos monetarios, con contrato o sin él. Esta situación determina que la fuerza laboral sea inestable, pues muchos entran a trabajar en determinados lugares para tener una fuente extra de ingresos, lo que no permite consolidar relaciones laborales estables en muchos de los casos.

Oscar R. Brito: El mercado de trabajo es deficiente, al igual que para el resto de los sectores de nuestra economía. En nuestro negocio, hemos logrado una adecuada retención laboral; no obstante, la mayoría de nuestras bajas son por salida definitiva del país. Encontrar personal calificado, formal y preparado en cualquier especialidad es bastante difícil, por lo que, en muchas ocasiones, hay que prepararlos para que den un servicio eficiente. La poca cultura de prestación de servicios, el éxodo de trabajadores con oficio hacia otros países, el excesivo paternalismo estatal y la ausencia de negocios privados por más de medio siglo, nos han dejado con un mercado laboral muy deprimido. La mayoría de nuestros empleados son graduados de las escuelas de oficios especializados en el país y no tuvieron vínculos previos con el sector estatal, por lo que es más viable formarlos para que presten un servicio eficiente; es más fácil aprender que desaprender para después aprender. Otros empleados provienen de negocios privados similares, en busca de mejoras salariales y de condiciones de trabajo. También hemos contratado a cubanos repatriados y extranjeros residentes permanentes en el país y, por supuesto, aunque en menor medida y en actividades complementarias al negocio, trabajadores del sector estatal. No obstante, muchas buenas personas desean trabajar en el sector privado, por las razones que conocemos, de ahí que, si alguien logra establecerse en el mercado y ser competitivo, no le deben faltar personas para contratar. En mi caso, fui primero emprendedor con 18 años, después al licenciarme en Derecho fui por siete años cuadro del Estado y el Gobierno, y hace más de nueve volví a ser emprendedor junto a mi esposa.

Ramón M. López Alarcón: En estos momentos, todos quieren trabajar en el sector privado. Yo mismo empecé trabajando para el Estado, donde ejercí por tres años y me formé como cocinero. Luego continué trabajando como cuentapropista, y realmente no hay comparación. Pienso que así ocurre con la mayoría de los trabajadores de mi generación. Ahora eso no pasa, los graduados tienen la oportunidad de empezar su vida laboral en los negocios particulares ya que hay bastantes, en mis tiempos eran bien pocos. Me parece que todos lo hacen por elección propia y no porque hayan sido desempleados del sector estatal. Esto, a su vez, favorece al sector privado, ya que tiene más opciones de crear mejores equipos de trabajo, personas más preparadas. El personal mejor calificado sale del sector estatal, debido a que el privado tiene menos años de existencia. También proviene del sector estatal la mayoría de los emprendedores porque, en estos casos, la experiencia es clave para lograr que funcionen sus negocios y el tiempo trabajado es clave para generar los ingresos que se necesitan para migrar al sector privado. Para mí, como mejor se puede ver esto es con los clientes; nos damos cuenta de que ellos prefieren acudir a lugares particulares ya que se sienten más satisfechos en todos los aspectos: calidad, atención, limpieza, etc. No quiero decir que no existan lugares estatales así, pero son bien pocos.

José L. Martín Romero: El mercado de trabajo casi existe solo para el sector no estatal de la economía. Hasta ahora, mueve algo menos de la tercera parte de la población ocupada en la economía (unos 4,5 millones) y no hay registro ni estudio de lo que hace con los no ocupados, que son algo más de 1,5 millones con edad laboral, de los cuales la mitad, descansadamente, pudiera incorporarse al trabajo. Parece que opera en dos planos, uno visible y otro no. En fin, es un mercado laboral con la mejor situación, deseable para cualquier otro: no es responsable del empleo, que sigue a cargo mayoritariamente de la planificación, tiene un enorme y magnífico ejército de reserva y compite muy ventajosamente en sus ofertas, incluso en las más precarias, para los más precarios, que solo reciben del Estado y de la planificación protección asistencial. Solo tiene que mantener una relación ventajosa con los ingresos medios, con eso vence.

Pero la pregunta alude a los orígenes de los llamados emprendedores. ¿De dónde vienen? ¿De dónde van a venir? De la formación y la economía socialista o, mejor dicho, estatal. Se formaron en nuestro sistema de educación, fueron o debieron ser empresarios, tienen la calificación y, sobre todo, algo que no se menciona del pueblo cubano y su riqueza subjetiva: una experiencia de vida del carajo (pido perdón, pero no hay otra forma sincera de decirlo). Estamos hablando de gente que le sabe un mundo a la vida (los de arriba) y de gente que ha hecho de todo lo humano y lo divino en esta vida (los de abajo). Observación importante: no se excluyen, se puede ser zurdo y de Matanzas. En cuanto a los empleados es otra cosa; pero igual he visto actores famosos de la TV y el cine como anfitriones, o incluso como camareros, en un restaurante. Claro que puede haber sido el espacio para alguien sin empleo. Puede haber pasado, porque ha pasado de todo; pero no ha sido el caso de haberse convertido en un refugio. Tal vez lo sea para algunos que, sin abandonar su vínculo estatal, se defienden en el espacio privado; pero pensar que es una opción de empleo para los desplazados del sector estatal es solo una verdad teórica, que apenas tiene referentes reales fuera de la subsistencia.

Falta aún para que estas formas de propiedad sean un espacio de confrontación social. Lo serán; pero eso depende del desarrollo de las relaciones socialistas de producción, de cuánto se impongan en el plano de la productividad y del bienestar personal de los que se desempeñen dentro de ellas.

Para terminar, pienso que el cubano es comunista culturalmente, como mismo se adscribe a la religiosidad popular. La injusticia no va, la discriminación no va, aunque haya cientos de anécdotas que lo nieguen. Yo sé, y todo el mundo sabe, que pasa de todo; pero Cuba siempre es otra cosa. Por ahí no va el problema, aunque, como dijo el que más supo: «el amor auxiliado de la vigilancia es la mejor forma de justicia y gobierno entre los hombres». La inspección y la regulación siguen siendo una necesidad pendiente de una buena respuesta.

Rafael Hernández: ¿Cuáles son los principales problemas que surgen en las relaciones laborales?

Caridad L. Limonta: Referente a las relaciones laborales considero que, si bien está todo dispuesto en la legislación vigente, no es un aspecto monitoreado, objetivo de control regular.

En mi caso, sí tenemos contratos de trabajo, actualizados cada año. Las empleadas pagan trimestralmente su seguridad social y cuando se enferman reciben al menos 70% del salario devengado en los últimos seis meses. Igualmente reciben protección por accidente de trabajo, o por fallecimiento de un familiar allegado. Aplicamos un período de prueba de uno a dos meses, suficiente para evaluar la habilidad y calidad humana y del trabajo. Esto lo dejamos claro en la primera entrevista.

Tenemos códigos y normas de conducta, relaciones interpersonales y atención al cliente que marcan la diferencia y establecen un referente del negocio. En este sentido, somos celosos y exigentes. El cliente viene y necesita ser atendido y comprendido, ello forma parte del carácter del emprendedor y es el clima que generalmente se percibe en los emprendimientos.

Cuando hay algún conflicto o indisciplina se canaliza de manera compartimentada con el involucrado, tratando siempre de que no se dañe la continuidad del trabajo y las relaciones del equipo. No hemos tenido conflictos laborales, pero considero que

estos, aunque estén regulados, se deben asumir y resolver en actitud negociadora entre empleador y empleados.

Se paga por resultados del trabajo y servicios con iguales condiciones de trabajo y exigencias de calidad. Se penaliza la mala calidad o las pérdidas. Tomamos vacaciones dos veces al año, a partir del 20 de julio y del 20 de diciembre, y estos períodos de vacaciones se premian con un plus monetario.

Nos ocupamos de la salud y de la atención estomatológica. Periódicamente nos reunimos —incluyendo a clientes fidelizados— con una psicoterapeuta, en aras de dotar al colectivo de herramientas para convivencia, tolerancia, trabajo en equipo, riesgos, conflictos, salud mental. Ello ayuda a canalizar situaciones que en el marco del diario laboral no percibimos y van en detrimento del equipo.

Actualmente, con la crisis de la pandemia de COVID-19, hemos aplicado la opción de trabajo en el domicilio, llevamos a sus casas los trabajos y se recogen coordinadamente. Esto propicia un consecuente nivel de ingresos.

Ileana González Arteaga: Los principales problemas en las relaciones laborales del sector privado son:

1. Conflictos profesionales entre empleadores y empleados. En ocasiones, el dueño contrata una persona por su experiencia laboral y luego no quiere respetar sus sugerencias.
2. Largas horas de trabajo sin remuneración.
3. No derecho a vacaciones ni al disfrute de estas con sueldo.
4. Uso del cobro de 10% del servicio como salario, en lugar de considerarlo parte de la propina del trabajador.
5. No existencia de un contrato o reglamento que defina tareas y obligaciones de cada puesto de trabajo.
6. No existe un mecanismo de reclamación por la suspensión del trabajador sin previo aviso y sin pago de alguna indemnización, por ninguna de las partes. Por lo general, son muy pocos los empleados que se atreven a resolver los conflictos cara a cara con el dueño del negocio. La mayoría mantiene una posición cautelosa y de baja negociación con él.

En mi experiencia, las relaciones laborales entre los empleados han sido muy buenas, salvo excepciones, no ha habido conflictos laborales; más bien fluyen en un ambiente de camaradería, incluso con los recién llegados.

Oscar R. Brito: Los de disciplina y la debida calidad del servicio prestado son los principales problemas que encontramos en lo concerniente a los empleados. Por nuestra parte, hemos cometido errores de dirección, como poca clarificación de las tareas y responsabilidades, enojo ante deficiencias encontradas que no siempre son competencia del empleado, críticas públicas cuando en ocasiones es mejor realizarlas de manera privada, entre otros; por lo que uno de nuestros objetivos fundamentales siempre ha sido incrementar la capacidad de liderazgo, entendiéndolo como un camino largo e imprescindible para el correcto funcionamiento del negocio. Una las cuestiones más difíciles e importantes que tratar en los emprendimientos es la adecuada relación laboral, por lo cual todas las cuestiones o conflictos son atendidos por mí directamente, tratando de generar un clima de confianza para que fluya la comunicación. Contamos con un Reglamento de Servicio —que se explica antes del comienzo de la relación laboral y forma parte, como anexo, del contrato— en el cual se detalla nuestra visión, misión, objetivos y valores, así como responsabilidades comunes y específicas en cada área de trabajo. En el contrato incluimos causales de terminación, por ejemplo: causar daños físicos o estéticos al cliente. Nuestra jornada laboral es de dos días de 8:40 am a 8:00 pm y se descansa otros dos días, por lo que se cumplen las 44 horas semanales, y se goza de los demás derechos laborales. Está pactado en el contrato que se puede terminar unilateralmente la relación laboral y, aunque se establece un término de quince días para que sea efectivo, rara vez se cumple por cualquiera de las partes, lo cual causa graves perjuicios. Esto es el reflejo de la carencia de seguridad jurídica del emprendimiento.

Ramón M. López Alarcón: Uno de los principales problemas en las relaciones laborales surge, por ejemplo, cuando un dueño contrata a un trabajador calificado para que todo marche como debe ser y luego quiere que las cosas se hagan como él demanda, sin tener ningún conocimiento de la tarea. Entre empleados puede suceder por la rivalidad para ser los mejores, o por no importarles nada, y que esto se vea reflejado en el trabajo de sus compañeros. Normalmente, esto se resuelve primero entre ellos mismos, hasta informar a los jefes, en caso de no haber algún entendimiento, para que a ese nivel se le dé una solución. En algunos lugares existen reglamentos de trabajo para cada puesto; pero, por lo general, uno no lo firma en un contrato, a no ser en la oficina de trabajo donde todo es muy general; en la entrevista, antes de la contratación, sí debe quedar claro lo de las obligaciones del puesto, cuánto será el salario, los horarios, pero no he visto que esto quede en ningún contrato. La oficina de trabajo establece un salario mínimo o promedio que ya tiene predestinado. En estos casos, los trabajadores que realicen una misma labor deberían cobrar lo mismo, pero esto puede variar con el nivel de exigencia, responsabilidad o carga laboral. En el sector privado existen salarios fijos, pero también se trabaja por porcientos de ventas y no por horas, para motivar al trabajador a trabajar más y mejor. En algunos lugares, las horas trabajadas se tienen en cuenta para calcular las vacaciones. El descanso varía; puede ser en días alternos, dos por dos, un día a la semana, los fines de semana, la mañana o la noche, según las necesidades de cada lugar. Respecto a la seguridad de salud en el trabajo, mensualmente se le paga a la ONAT, a elección del trabajador, la seguridad social. Hasta ahora, cuando he estado enfermo, los que se han preocupado son los dueños y compañeros de trabajo. Esto no sucede en todos lados. Nunca me he presentado a la ONAT por estos temas, ni siquiera sé cómo funciona. Todos los lugares tienen normas referidas a las relaciones laborales, las lógicas. Yo no he tenido que acudir a ninguna vía legal para atender ninguna reclamación de mi parte, ya que no he sido despedido de ningún lugar. Los despidos que he presenciado han sido justificados por incumplimiento de los reglamentos. En caso de que sea por disminución de plantilla o similar, sí se indemniza al trabajador, según la apreciación del dueño.

José L. Martín Romero: Insisto en que viene faltando una buena investigación de las relaciones de trabajo y el sistema que forman en el espacio privado. Me es difícil, porque tampoco tengo tantas vivencias, hablar de oídas y por impresiones externas e incompletas. Dada su heterogeneidad, tengo la impresión de que hay de todo y depende de la calidad mutua de empleadores y empleados. Eso es en cuanto a las relaciones de trabajo cotidianas. Quiero decir que, hasta donde sé, hay contrato y no, hay compromiso y no; hay consideraciones y no, al tiempo que se oye de todo en el anecdotario popular: acosos, discriminaciones, tratos abusivos y otras lindezas. Igualmente sé de tratamientos considerados y respetuosos. Insisto en que eso depende de la calidad humana de los involucrados y de sus historias y trayectorias laborales precedentes. Lo verdaderamente importante es que el privado es un espacio esencialmente desregulado. El control estatal ha estado más pendiente de evitar el surgimiento de una clase capitalista que pueda convertirse potencialmente en un actor político —que se traduce en evitar el enriquecimiento— que en las prácticas despóticas que acompañan la forma (que es contenido) de las relaciones capitalistas de producción. No hay mecanismo de reclamación, no hay seguros de despido, hay vacaciones de una semana al año que pueden o no cumplirse, la maternidad desemplea; en fin, este es un espacio solvente en términos relativos y precario en términos absolutos en cuanto a seguridad. Debe considerarse, adicionalmente, que muchos trabajadores de esos emprendimientos lo hacen «por la izquierda», o sea sin estar declarados en ninguna parte, lo que los hace aún más vulnerables.

Rafael Hernández: ¿En qué medida las relaciones de los emprendimientos con otras entidades e instancias afectan las relaciones laborales entre empleadores y empleados?

Caridad L. Limonta: Con respecto a las relaciones institucionales, considero que, en gran medida, estas dependen del carácter del emprendedor, capacidad de perseverancia, preparación, motivación e interés y seguridad de que el sector no estatal es parte del nuevo modelo económico.

En su mayoría, las instituciones contratan nuestros productos o servicios; pero no formamos parte del sistema logístico en cuanto al aseguramiento de las materias primas; es decir de las instituciones receptoras y las proveedoras. Como es obvio, este inconsistente aseguramiento influye tanto en el negocio, como en el empleador y sus empleados. De ahí la flexibilidad en hacer lo que se pueda con lo que se dispone, aunque potencialmente se pueda asumir más.

Considero que justamente es el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con su sistema de aprobación e inspección y control, el que mayor vínculo tiene con los trabajadores por cuenta propia. Aún falta establecer alianzas y vínculos de los organismos y sectores afines con el gran número de categorías del sector no estatal. De alguna manera, de cara al futuro, interactuando podemos contribuir mucho al mejoramiento de la economía. De hecho, en este duro período de crisis, grandes soluciones han sido aportes de emprendedores socialmente responsables. Estamos vinculados al Sindicato de Industria y hemos participado en eventos de carácter nacional e internacional con presentación de ponencias, pero, insisto, aún es insuficiente.

Tenemos contratos de consignación, compra-venta, encadenamiento productivo con la Cooperativa Model y otros clientes; esto nos satisface. Sin embargo, debo destacar que entre emprendedores hemos establecido redes de colaboración y alianzas que denotan de cuántas fortalezas disponemos, que aún no están utilizadas y miradas como parte de la cadena de valores. Son alianzas y servicios que van desde el asesoramiento contable y empresarial, hasta diseño, informática, producción, promoción, etc. Desafortunadamente aún se perciben reservas, en instituciones estatales, en contratar nuestros servicios, amén de que, por decretos y resoluciones, está autorizado. Confío en que en el período pospandemia se abrirán nuevos horizontes para algunos emprendimientos.

Si bien existen ilegalidades que deben ser enfrentadas, son muchos los que en su comunidad aportan y brindan servicios que dignifican al emprendimiento de nuestra patria; algo aprobado por decreto, que merece ser también reconocido por instituciones locales y sindicales. Existen muchos emprendimientos reconocidos en su territorio que podríamos nombrar, pero aún es insuficiente. Considero que los negocios responsables, de alcance social, donde muchos clientes arriban por la calidad del servicio, presencia, ambiente laboral, etc., dignifican al barrio y esto indudablemente tiene una repercusión indiscutible a favor del emprendimiento en nuestra sociedad.

Ileana González Arteaga: Las instituciones estatales de los ministerios de Trabajo, Salud Pública, etc., nunca han interactuado con los trabajadores de los centros privados, sino con el dueño o su representante. Los trabajadores sindicalizados no cuentan con el sindicato para nada, solo abonan la cuota y resuelven sus problemas ellos mismos con sus empleadores.

En cuanto a la ayuda a la comunidad, muchos negocios generan puestos de trabajo en la zona donde están enclavados, lo que les permite interactuar con las personas del área, relacionarse con sus familias y vecinos, y mejorar no solo su situación económica, sino también la del barrio.

Oscar R. Brito: La idea de que tanto el emprendedor como sus trabajadores contratados sean atendidos por las mismas estructuras del MTSS y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) es totalmente contraproducente y enrarece su desempeño en la protección al empleado, y hace nula la protección a la figura del empleador. No tengo ningún referente sobre la CTC, el gobierno local, ni de otro organismo de la Administración Central del Estado (OACE) con sus estructuras empresariales, que tengan incidencia en las relaciones laborales, aunque conozco que, últimamente, ha existido una mayor colaboración y acercamiento entre gobiernos locales y algunos emprendimientos; pero no es una práctica generalizada. Penosamente, las políticas públicas sobre los emprendimientos y las relaciones de estos con el sector estatal, así como el divorcio de lo legislado con las prácticas y realidades de los negocios, no propician una contribución efectiva y sana en las relaciones laborales. Los diferentes emprendimientos relacionados con el sector estatal afín, inciden en las prácticas de esta, pues cuando son competentes y atienden bien a su personal, los empleados estatales pueden migrar hacia su organización o viceversa. También se

comparten las buenas prácticas en cuanto a las jornadas laborales, sistemas de pagos y protección laboral. En la comunidad, nuestros trabajadores colaboran ampliamente con nuestra responsabilidad social empresarial, muchas veces regalamos servicios a personas de la tercera edad o de menos recursos, y ayudamos de diversas maneras a muchos vecinos necesitados. En cuanto al entorno, contribuimos al embellecimiento de las áreas exteriores y comunes, dígase jardines, higienización y limpieza, pintura del edificio, entre otros.

Ramón M. López Alarcón: Creo que las instituciones estatales, lejos de apoyar, lo que hacen es entorpecer el trabajo privado. Casi nunca vienen con ánimos de ayudar desinteresadamente. De todas formas, esto no está a la vista de los empleados, los que más lo deben vivir son los empleadores (emprendedores). Las organizaciones de masas en el sector privado existen, como en todos lados, pero me parece que no cuentan. Hasta ahora todo se resuelve entre los mismos empleados, emprendedores u otros negocios dentro del mismo sector, siempre pensando en avanzar y resolver sin detenernos a esperar que otros nos ayuden; quizás porque ya estamos acostumbrados a hacerlo solos, o por desconocimiento del apoyo que nos pueden dar estas instituciones en la actualidad. Esta es una de las cosas que me motivó a participar en este panel: exponer mis vivencias y nutrirme de información valiosa para seguir en este sector. Pienso que los emprendedores ayudan mucho a la comunidad, ya que generan nuevos puestos de trabajo y prestan un servicio que, por lo general, no existe allí, y la comunidad lo agradece.

José L. Martín Romero: Aunque los discursos y las declaraciones vayan por otro lado —lo cual es evidencia de que se sabe qué es lo correcto—, la relación del sistema institucional vigente en el país con el espacio privado carece de una plataforma definida y transparente de colaboración y complementariedad. En la práctica, se han logrado no pocos éxitos, sobre todo en las actividades constructivas. Conozco de evidentes avances en términos de calidad, prontitud y probidad en cuanto al uso de los recursos. Esos casos debieran servir de referente para el establecimiento de esa plataforma de colaboración de la que hablo; sin embargo, en la conducta real de muchos de esos cuadros hay evidencia de acciones incongruentes, a veces sospechosas y, en general, distantes y descomprometidas.

La inspección estatal es correcta y conveniente en cuanto a higiene y protección al trabajador; no así en cuanto a las relaciones de trabajo, que parecen fuera del campo de análisis, lo cual es lógico, pues no es demasiado diferente para el sector estatal. También conocemos la posición de la CTC de acoger en su seno a los trabajadores por cuenta propia, pero sin distinción entre ellos —da lo mismo ser empleado que empleador—, en los sindicatos de cada rama de actividad y sin una plataforma de colaboración, definida de modo particular, para ellos, como otros trabajadores del sector. Eso explica la muy baja incorporación de los trabajadores privados a los sindicatos.

A mi juicio, sigue predominando la incomunicación, la creencia, por unos, de que es un mal necesario y tal vez temporal; y por otros, de que todo es reversible e inseguro y de que podríamos volver a la «Ofensiva Revolucionaria» de finales de los 60. O sea, dos absurdos basados en los prejuicios.

Esto pasa porque no hay plataformas claras, reglamentadas y con transparencia, de alianzas público-privadas. Esto pasa porque, si bien la solidaridad orgánica en Cuba está muy bien estructurada y, a escala personal o familiar —ya hablando de solidaridad mecánica, en los términos de Emile Durkheim— es un valor de cubanidad; por otro lado, la solidaridad orgánica a escala organizacional está lamentablemente muy inestructurada, a veces tiene barreras regulatorias o de prácticas descomprometidas con la comunidad y las personas. Hay ejemplos excelentes de solidaridad desde los emprendimientos privados; también hay prácticas ejemplares de ciertas organizaciones estatales; pero dependen de las personas, su formación y sus valores, y de cierta voluntad de algunos de demostrar que las cosas pueden funcionar de modo diferente. Los fundamentos de la llamada Economía Social y Solidaria dan un marco de referencia atendible que debiera ser valorizado por unos y otros. Es posible y necesario.

Rafael Hernández: ¿Qué políticas, regulaciones y prácticas podrían contribuir al clima de relaciones laborales, en beneficio de empleadores y empleados?

Caridad L. Limonta: Entre las políticas, regulaciones y prácticas que puedo sugerir para un mejor porvenir de empleados y empleadores, está la estrategia de suministro que, si bien ya está aprobada la importación de algunos renglones, el proceso de contratación debe ser dinámico y ágil de modo que sea una solución tangible y objetiva.

Otra práctica necesaria es la comunicación y retroalimentación por medio de realización de encuentros sectoriales donde los emprendedores muestren sus productos y servicios. Pudieran ser miniferias del sector emprendedor donde las instituciones estatales conocerían directamente cuantas soluciones y servicios pueden recibir. En estos encuentros participarían empleados y empleadores. Y también encuentros locales de emprendedores que pueden ayudar al desarrollo territorial y potenciar el emprendimiento que en ocasiones sale de su comunidad por la falta de apoyo y conocimiento en su contexto y radio de acción.

Ileana González Arteaga: La firma de un contrato escrito donde queden definidos los deberes, obligaciones y derechos de los empleadores y empleados, que defina las funciones que deben cumplir estos últimos, horarios de trabajo, descanso, vacaciones remuneradas, según su puesto de trabajo, compensación económica en caso de despido injustificado por parte del empleador; y asimismo, en caso de que el empleador sea el afectado, que pueda recibir una compensación.

Con este fin, se debería crear un sindicato único para los trabajadores no estatales, que los organice según las actividades económicas que desempeñan, pues la CTC ha intentado incluirlos en el modelo sindical vigente en el ámbito estatal, pero lo ha hecho mecánicamente, sin adecuarlos a estos nuevos espacios sociales y productivos que tiene ahora el país. De esta manera, la sindicalización no ha tenido mucha aceptación en ellos, ya que los intereses y los actores son totalmente diferentes al del sector estatal. Debe tomarse en cuenta, además, que el modelo sindical que rige en la empresa estatal socialista recoge una relación donde esta representa al Estado, que a su vez representa a los trabajadores.

Asimismo, sería conveniente crear asociaciones o sindicatos que reúnan solo a los emprendedores. No debe incluirse dentro de la misma organización sindical a empleados y empleadores, porque la amalgama de intereses es totalmente opuesta y contradictoria, lo que imposibilita una representación real de parte del sindicato.

El sindicato debe tomar posición como representante de los trabajadores, que le permita actuar de manera efectiva sobre aquellas regulaciones y conceptos que rigen esta relación, con el fin de transformar los procesos de conflicto a que se enfrenta el sistema de relaciones laborales actual.

Oscar R. Brito: Sin lugar a dudas, la legalización de las tantas veces mencionadas pymes y la promulgación de una Ley de Empresas contribuirían de manera significativa a mejorar y transparentar las relaciones laborales en el sector privado. Dotar de seguridad jurídica a todos los emprendimientos, adecuar lo referente a los tributos, viabilizar el comercio y el mercado, generaría, como consecuencia lógica, un incremento notable de los negocios y, por ende, aumentarían los empleos, beneficiando también a los empleados pues sus competencias serían más demandadas, por lo que deberían lograr mejores salarios y condiciones laborales. En algunos países, existe una estructura de gobierno independiente (como un OACE), subordinada al gobierno central, que atiende, protege y coordina lo relacionado con las pymes y el emprendimiento privado, por lo que sería muy acertado crear algo parecido en nuestro país. Es práctica en nuestro gobierno que las propuestas de las políticas públicas se elaboren por los rectores del ramo (por ejemplo, la Política Nacional del Agua fue redactada por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, como OACE rector), después se concilia y finalmente se aprueba por el Gobierno, lo que considero una práctica correcta y que logra que se refleje las verdaderas necesidades y posibles soluciones del sector, cuestión que se debería realizar también en lo referente al emprendimiento y las posibles pymes. Las universidades, los grupos de investigación, las OACE afines y otros, son de gran ayuda, pero quienes más conocen, sienten y padecen sobre el emprendimiento,

sin lugar a dudas, son los emprendedores, sus colaboradores y empleados. Pienso que la propia dinámica y composición de este panel así lo demuestra.

Ramón M. López Alarcón: Primero hay que tener bien claros los deberes de cada quien, de ser posible por escrito, para no dejar margen a la memoria o lógica de nadie. Los empleados deben conocer bien los puntos por los cuales se va a regir para hacer bien su trabajo, y por los cuales se les va a exigir. Los empleadores, por su parte, deben tener disponible todo lo básico que sus empleados puedan necesitar para cumplir lo que se les exige, para luego lograr los resultados que quieren y necesitan. Debe haber un lugar donde los empleados y empleadores respondan legalmente ante el incumplimiento de cualquier punto del contrato a la hora de solicitar una baja o causar un despido. A veces los empleadores toman decisiones en las cuales los empleados, que no pueden darse el lujo de perder su empleo, quedan desprotegidos. Como también, a menudo, aquellos se ven afectados cuando un trabajador decide no ir más a trabajar sin previo aviso y muchas veces dejando a medias su turno de trabajo. Que en todos los empleos las vacaciones sean un derecho y sean pagadas, teniendo en cuenta un porciento de sus ingresos mensuales guardados para este fin. En caso de compensación por despido o petición de baja con tiempo y sin causarle daño al negocio, creo que también se puede descontar un porcentaje de la mensualidad. Creo que sería una garantía, para los dos lados, que estos trámites se hagan bien.

José L. Martín Romero: Ya hablé de las alianzas público-privadas y de la Economía Social y Solidaria. Debiera ser parte de las estrategias de desarrollo local la incorporación del espacio privado, junto con los restantes espacios económico-laborales, con roles definidos y acordados. El respeto a los contratos, el arbitraje formalizado e imparcial, las licitaciones transparentes y auditables; en fin, las cuentas claras contribuirán a un emplazamiento ético absolutamente imprescindible para la recuperación económica.

Los emprendimientos mixtos entre cooperativas de todo tipo, las empresas y entidades de propiedad social y los colectivos del espacio privado deben ser una carta ganadora en manos de las administraciones territoriales, e incluso de las organizaciones superiores de dirección empresarial (OCDE) para dar soluciones a problemas concretos de la producción y los servicios.

La promoción, en todos los espacios, de las mejores experiencias y prácticas de las relaciones socialistas de trabajo debiera ser una línea estratégica de la Revolución ¡empezando por los espacios estatales! Pero sin quedarse allí. El socialismo porta y alimenta una cultura del trabajo diferente: de muy alta productividad y esencialmente solidaria y emancipadora. La formación y promoción de esa cultura es la solución en perspectiva. Es desesperante comprobar a cada paso aquella advertencia de Saint Exupéry de que «lo esencial es invisible a los ojos».

Rafael Hernández: Hasta aquí las respuestas de los panelistas. Cedo la palabra a los participantes para que hagan sus preguntas y comentarios.

William Bello: (Profesor universitario. Asesor de negocios y de responsabilidad social empresarial). Considero que las relaciones laborales entre empleados y empleadores, al menos en el sector privado, pasa por el hecho de que existe mayor solicitud, que demanda de empleo real, porque se hace muy interesante trabajar en el sector privado que, a todas luces, paga salarios mejores que el estatal y eso, de alguna manera, les da fuerza a los empleados sobre los empleadores. Martin decía algo interesante también, hablaba de que el sindicato tiene en el mismo grupo a empleados y empleadores, por tanto, es muy difícil que conflictos de intereses se pueden dirimir si los dos están en el mismo «lado». Yo creo que eso no puede funcionar de esa manera. Debería haber un gremio para los propietarios de negocios, para velar por sus intereses y un sindicato que acoja a los trabajadores contratados.

También muchas veces ese salario mejor hace que las personas estén dispuestas a pasar por alto ciertas cuestiones que, en otras circunstancias, no aceptarían. Por eso vemos que a veces algunos empresarios trabajan sin tener una política clara de remuneración ante los despidos, o exigen un poco más allá de lo que, a mi juicio, deberían; sin embargo, las personas continúan en ese empleo, solo porque reciben mejores salarios. Por otra parte,

moverse en el mercado laboral por cuenta propia resulta complicado pues no todos los trabajos pagan lo mismo y se hace complicado encontrar un segundo empleo con las prestaciones que uno cree que son las más ventajosas.

Hay una pregunta muy interesante a la que alude Martin y es de dónde vienen los emprendedores, y yo coincido con él: todos venimos del mismo lugar, y con la misma formación. Eso me resulta muy interesante porque cuando comencé a trabajar sobre responsabilidad social empresarial y la certificación que queríamos dar sobre ese tema, me preguntaba por qué a los emprendedores cubanos les interesaba ser socialmente responsables, y en algún momento trabajé la hipótesis de que eso disminuía los riesgos. La realidad para ellos era que aumentaban las vulnerabilidades, pero al final tomaban el riesgo de hacer responsabilidad social empresarial por la propia convicción que tenían; porque, como decía Martín, ser solidarios es parte del ideario e idiosincrasia de los cubanos. Y es lo que los diferencia, quizás, de emprendedores de otras latitudes. Venimos de una profunda formación socialista, solidaria y humana y, de alguna manera, son las mismas personas las que están trabajando en el sector estatal, que son parte de la sociedad cubana, y las que son emprendedores; con los mismos valores, ahora trabajando desde una nueva realidad, y eso, en la mayoría de los casos, han tratado de llevarlo a sus negocios. No digo que sea absoluto, que todos trabajen la responsabilidad social o quieran llevar un negocio socialmente responsable, sino que, a diferencia de otros escenarios, ese proceso en Cuba se ha dado con mayor celeridad. Por tanto, si buscamos legislaciones que acompañen esos procesos, vamos a tener un escenario laboral en el sector privado mucho más ventajoso para los empleados y para los empleadores.

Eric Caraballoso: (Periodista. *OnCuba News).* ¿Qué garantías sociales y de protección social ofrece hoy el Estado a los empleados en negocios privados en Cuba? ¿A partir de qué bases legales podría o debería mediar el propio Estado en las relaciones entre empleados y empleadores del sector privado? ¿Qué perspectivas ven los panelistas, a corto o mediano plazos, en cuanto a que se consolide un marco legal que establezca unas relaciones coherentes y ordenadas entre ambos actores, y ofrezca las necesarias garantías a ambas partes en su relación?

Daybel Pañellas: (Psicóloga y profesora. Universidad de La Habana): Aunque no hay un estudio nacional publicado, sí ha habido investigaciones de campo que arrojan resultados sobre la heterogeneidad y contradicciones de estas relaciones laborales. Primeramente, aunque es legítimo el título del panel, creo importante no limitar el término de emprendimiento y la relación empleador-empleado al sector privado. Si bien ambos adquieren características particulares, son también parte de relaciones sistémicas de las que un resultado es también la importación de estilos de relación entre los miembros y hacia el trabajo.

Por otra parte, si bien el marco jurídico es una condicionante, un protector de las relaciones empleador-empleado, estas también están atravesadas por cuestiones culturales, estructurales, ideológicas, subjetivas, y ejemplo de ello son las desigualdades de género, etarias, de color de la piel, que se expresan intra e intergrupalmente; las motivaciones para ejercer en el sector, las características que se perciben y se exigen para ejercer los roles, el tipo de liderazgo que se ejerce, las razones de movilidad, etcétera.

El sector privado resulta atractivo en lo concerniente a la economía, creatividad social y autonomía; sin embargo, no en cuanto a responsabilidad, falta de tiempo, estrés e inestabilidad. Tampoco es necesariamente la opción más visualizada por un grupo de profesionales, quienes, al no poder ejercer su profesión, no encuentran satisfacción dentro del sector.

Por otra parte, la CTC como organización denota significados muchas veces cuestionados y repelidos, en especial por los jóvenes, por el papel difuso que ha desempeñado, sobre todo defendiendo a la institución y no a los trabajadores. Sin embargo, queda muy clara la demanda de asociatividad, formalizada como necesaria para los miembros del sector, que representa apoyo, inclusión, visibilización y empoderamiento.

El acompañamiento y capacitación de empleadores y empleados es también un tema importante, tanto para el fortalecimiento del negocio, del ejercicio de sus funciones, como para su capacidad de diálogo con distintos públicos, incluidos los funcionarios

y los medios de comunicación que están desempeñando una función importante en la reproducción o la transformación de estereotipos hacia ese sector. Las políticas de empleo tienen también que incluir seguridad social, y este tema se ha hecho visible muy recientemente, especialmente en esta pandemia, atendiendo a vulnerabilidades que no se colocan solo en los empleados, sino también en muchos empleadores, pues, como se ha dicho mucho desde el principio, hay una amplia heterogeneidad en el sector.

Jackie Cannon: Desde Inglaterra, quiero preguntar a los panelistas si perciben —no sé si existen datos— una diferencia en la actitud del empresario o emprendedor cubano que ha viajado, que ha vivido en otro país, y la del que no lo ha hecho.

Adriana Sigüenza: (Ingeniera industrial. Proyecto Cubaemprende): Tengo una pregunta para los panelistas, y también quiero felicitarlos por sus tan buenas y profesionales intervenciones. Según su percepción, ¿cuáles son los elementos claves del éxito en una relación empleador-empleado en el contexto de los negocios privados en Cuba?

Maricel Ponvertiser: (Fundadora de D´Marie. Centro Holístico de Bienestar): Al inicio de abrir mi negocio, tuve muchas dificultades con el tema laboral. Nosotros somos masajistas reikistas, y eso funciona de una forma en que el servicio es muy dirigido, muy personalizado, y eso trae sus problemas. Pero yo los resolví inmediatamente. Monté un taller de masajes y otro de reiki; o sea, damos cursos, y de ahí salen nuestros trabajadores. Hoy por hoy, todos los que tengo son tomados de esos cursos y desde la primera clase tengo la posibilidad de ir conociéndolos e ir midiendo si es factible que se queden como empleados o se queden en la bolsa, o simplemente decidir que no sería posible que trabajaran en un negocio de este tipo.

Ricardo Herrero: (Cuba Study Group): Tengo unas cuantas preguntas. Quisiera saber cuáles son las vías más comunes en Cuba para que los empresarios anuncien ofertas de trabajo, e identifiquen y recluten talento. ¿Es principalmente de boca en boca, o usan sitios web u otras plataformas de redes profesionales como LinkedIn? Y también, ¿cómo es el proceso de creación de los importes salariales, quién establece los salarios de los trabajadores, y basados en qué parámetros?

Rafael Hernández: Tienen la palabra nuevamente los panelistas para comentar o responder a los que han intervenido. También pueden añadir algún asunto que se les haya quedado en el tintero.

Caridad L. Limonta: Estoy muy de acuerdo con los comentarios de la psicóloga y profesora Daybel Pañellas. Coincido grandemente con su enfoque. Es cierto que hay una diversidad y una composición en el sector no estatal que amerita una valoración. Sobre la pregunta de Eric Caraballoso, yo soy de la opinión de que, si bien existen algunas regulaciones, bases legales que respaldan tanto al empleador como al empleado, considero que debe haber un manual, un documento que sea la herramienta de la que nos agarremos todos para saber los derechos y deberes de cada cual. Eso hoy no lo tenemos.

Sobre el comentario que hacía Jackie Cannon relacionado con las experiencias que pueden adquirir, el empleador y el empleado, que salen de la Isla y regresan, es indiscutible que eso les da una visión diferente, sobre todo cuando tienen la posibilidad de contactar con otros negocios fuera del país, evaluar y hacer mentorías en otros negocios. Pero ojo, es preciso contextualizar esas experiencias, porque de nada vale venir con todo lo visto en el mundo y después llegar acá y no ser mucho más creativos, más resilientes y más dispuestos a buscar soluciones.

Ileana González Arteaga: Respondiendo también a Eric, estoy de acuerdo con Caridad —a mi entender, ella tiene más experiencia que yo porque continúa trabajando en este sector— en que no existe ninguna protección para el trabajador ni para el empresario. A raíz de toda esta situación de la COVID-19 y los problemas laborales y económicos que ha traído, he visto que el MTSS emitió una serie de medidas, que amparan solamente a los trabajadores del sector estatal; no contemplan, no regulan, no establecen nada en relación con los trabajadores no estatales y con los autoempleados. Entonces, ambos tipos de empleados están en riesgo de perder sus ingresos porque no tienen ninguna protección, a no ser lo que sea que

tengan reservado en su casa o el banco, o recurran a la asistencia social. Los trabajadores estatales sí tuvieron, en un primer momento, 100% de su salario y luego 60%.

Caridad L. Limonta: Hoy no existe ninguna bolsa empleadora para el sector no estatal, ni un canal debidamente establecido por el gobierno donde podamos presentar, como emprendedores o trabajadores independientes, nuestras demandas y necesidades, y que las personas en edad laboral que reúnan las experiencias y requisitos para desempeñarse en un puesto de trabajo, puedan aplicar para trabajar en él. Por otro lado, las categorías autorizadas por el MTSS para ejercer el trabajo por cuenta propia son casi todas de carácter obrero y de algunos servicios. Por ejemplo, un diseñador no puede solicitar trabajar en un negocio de diseño, o un abogado como asesor jurídico en cualquier negocio. Entonces, aquí pesa mucho esta condición de «personas naturales con autorizo para ejercer el trabajo por cuenta propia», en que tenemos negocios que no están nominalmente reconocidos institucionalmente; o sea, no somos empresas.

Sobre cómo se establecen los salarios, en mi caso, aunque yo pago por resultados, siempre busco un referente de cuál es la media que gana una costurera de una cooperativa que gana un buen salario, la de la industria estatal que gana menos, la del atelier del Estado, etc., y establezco un nivel de salario, de manera que gane con mi negocio, pero que la trabajadora se sienta satisfecha y complacida. En eso nos basamos generalmente, establecemos ciertas comparaciones, pero no es porque ninguna regulación legal me imponga que debo pagar tal salario mínimo o máximo.

Ramón M. López Alarcón: Estoy totalmente de acuerdo con el profesor William Bello, con sus posiciones, ya que se asemejan, con un poco más de argumentos, a lo que expuse en mis respuestas, e incluso me sirvió para aprender bastante.

Respondiendo a la pregunta de Jackie Cannon, sí se percibe diferencia entre los empleados que viajan y los que no, ya que ellos tienen la oportunidad de palpar en persona los sistemas de gestión que se usan en otros países, que, por supuesto, están mucho más pulidos que los nuestros, porque llevan muchos años trabajando en el sector privado. He podido ver en emprendimientos donde he estado gente que ha hecho negocios y han venido de afuera y otras que han tratado de hacerlo con los conocimientos de aquí.

Quiero felicitar a Maricel Ponvert por esa solución que le dio a la falta de personal calificado que tenía y, además, creo que se puede aplicar a muchos de los emprendimientos pues resuelve uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día.

A Ricardo Herrero le comento que para buscar empleos o empleados usamos cualquier forma, de boca en boca, muchas veces los mismos empleados conocen personas que nos pueden recomendar. Ahora se está usando la vía de las redes sociales, o páginas web de clasificados, como *Revolico* o *Bache Cubano*. Los salarios los fija la ONAT y, después, en dependencia del negocio, se incentiva al trabajador.

José L. Martín Romero: Voy a responder las preguntas que hicieron los participantes. Gracias a todos, creo que han hecho intervenciones muy interesantes y atinadas.

Eric preguntaba por las garantías del Estado, eso ya ha sido respondido por otros panelistas, y yo mismo ya dije en mi intervención que estamos hablando de un segmento básicamente desregulado. La falta de seguridad es la precariedad de este espacio privado. Ese es su problema, su ventaja es que ingresa mucho más. Pienso que, a mediano plazo, a medida que se vayan estimulando mejor los distintos segmentos económicos, y que el mercado logre, por mil maneras que sería largo enumerar, el lugar que le corresponde, y el vínculo que necesita con la planificación, entonces estará mucho mejor ordenada esta realidad. Lo estoy distinguiendo a mediano plazo.

Daybel hizo una intervención medular, excelente, sobre todas las peculiaridades de este espacio, la heterogeneidad, que es una de sus características esenciales.

Jackie hablaba del que ha estado afuera, y cómo influye eso. La cultura del trabajo influye siempre. Como un inglés que venga a trabajar a Cuba, cuando regresa a Inglaterra se mete con la gente, se mete en la vida de los demás, es confianzudo, hace veinte cosas que se hacen en Cuba y son normales, pero en Inglaterra y en otros países no. ¿Dónde está la diferencia? En Cuba yo he visto extranjeros trabajando, muy profesionales, pero muy

contenidos también, mucho menos familiares que los cubanos. Los cubanos establecen un *raport* diferente con los clientes. Por la parte negativa, está la facilidad que tienen para justificar las disfunciones de las cosas; esto salió mal y lo explican como si fuera lo más normal del mundo. Y eso también es cultura del trabajo.

Adriana preguntaba por los elementos de éxito entre empleados y empleadores; da lo mismo en esto el sector privado que el estatal: somos «primos», porque tú eres ingeniera industrial y yo soy sociólogo del trabajo. En cualquier espacio, organizar adecuadamente, en justas correspondencias, el sistema de relaciones sociales de trabajo, lo que da es efectividad, claridad, que coincidan las demandas de los contenidos con las competencias de la gente, que los sistemas de estimulación y de sanción tengan que ver con las motivaciones de los distintos grupos, que haya un nivel de participación, que no es solo dar opiniones, es también emular, dirigir, innovar. Que existan esas cosas y que se correspondan con las potencialidades de la gente es fundamental para mejorar las relaciones entre la gente y para que las cosas salgan mejor. Cuando las cosas salen bien, las relaciones son buenas también.

William hacía un comentario muy acertado, que coincide con lo que ya dije. Mientras más regulación y más justa sea, mejor va a funcionar la cosa. Y se está trabajando, lo puedo asegurar, en que el empleador pueda trabajar sin ilegalidad, y que también a unos y a otros se les premie el compromiso con la sociedad, en que la política impositiva y todas las regulaciones traten mejor al que mejor lo haga.

Finalmente, Ricardo Herrero preguntó por las vías para acceder al empleo. Sé que en las redes sociales se solicita trabajo a veces, pero generalmente lo que funciona son las redes personales y familiares. Sobre los montos salariales, los informes que tengo son que, partiendo de una referencia de lo que paga el Estado, se multiplica por 6, por 7, por 8, y eso es básicamente lo que se paga en el espacio privado.

Ileana González Arteaga: Me quiero referir al tema de la afiliación. Pienso que un hombre o una mujer que tenga un restaurante o un negocio de más de cincuenta trabajadores, ya no es un simple empleador, es un empresario. Entonces habría que elaborar normativas más específicas para este tipo de figura que está emergiendo en el mercado privado de nuestro país. El sindicato está y deberá estar para defender los intereses laborales, y esas asociaciones de empresarios a las cuales hago referencia deben existir también para defender los intereses de estos, porque ambas figuras tienen motivaciones diferentes. Negarlo no tiene ningún sentido. Sin dudas, los trabajadores se afiliarían mucho más a un sindicato si este cambiara su estructura y estilo de trabajo.

Rafael Hernández: Hemos contado con una nutrida participación, que no se mide tanto en cantidad como en calidad, siete intervenciones, de Cuba y de fuera de Cuba. Les agradecemos muchísimo por haberse mantenido atentos a este panel y haber hecho preguntas inteligentes y comentarios agudos. Por supuesto que les damos las gracias a los panelistas por el mucho trabajo que han tenido, por haber contestado de una manera tan elaborada y matizada, y puntiaguda diría yo, las preguntas, que eran complejas, y por haber contribuido a entender, a penetrar la naturaleza, la índole particular y relativamente rara de las relaciones laborales del sector privado cubano.

Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y por haber contribuido de manera tan especial y tan rica a producir un análisis sobre esta problemática.

Participantes:
Caridad L. Limonta. *Dueña de Producciones PROCLE.*
Ileana González Arteaga. Ex empleada de una paladar.
José Luis Martín Romero. Sociólogo del trabajo. Centro de Estudios Demográficos, UH.
Oscar Rafael Brito. Dueño del Salón de Belleza Habana Estilo.
Ramón Manuel López Alarcón. Chef de cocina.
Rafael Hernández. Politólogo. Director de *Temas*.

©Temas, 2023

ENTRETEMAS

Una perspectiva histórica atraviesa los tres ensayos reunidos aquí, todos sobre temas disímiles.

El primero analiza la ética como pilar del proyecto socialista cubano en su desarrollo.

El segundo aborda las regulaciones normativas para salvaguardar los archivos en Cuba, con sus antecedentes.

El tercero indaga el universo de los totonacas, en México, mediante el análisis de las relaciones de poder en esa sociedad.

Premio *Temas* de Ensayo 2022, Ciencias Sociales

La ética en el centro de definición sobre el futuro de Cuba

Gabriel Ramos Carrasco
Ensayista y especialista en estudios latinoamericanos.

> ¿Cuáles serían las ideas o el grado de conciencia que harían imposible la reversión de un proceso revolucionario?
>
> Fidel Castro Ruz

Un proceso revolucionario, en última instancia, triunfa o fracasa en la conciencia de las personas. La posibilidad de desarrollar una sociedad que pueda ser una alternativa al capitalismo requiere, forzosamente, desarrollar una conciencia y una práctica sociales distintas a la que propone el interés individual como único motor del trabajo humano. Este cambio se verifica a partir de la adherencia, masiva y deliberada, a una nueva moral, que modifique radicalmente las expectativas y satisfactores de realización personal y colectiva.

La moral es un conjunto de normas que regulan la conducta de las personas; construcciones subjetivas de leyes no escritas del comportamiento, que son producto de un consenso en torno a la legitimidad de cierto tipo de relaciones que se establecen en una sociedad. La moral se nutre de costumbres y hábitos, pero también de racionalidad y sentimientos. Se manifiesta como institución, convicción o relación; toma forma a partir de diversas influencias económicas, políticas y espirituales; por lo tanto, no es estática. No existe una moral universal, porque siempre está condicionada históricamente; sus condiciones objetivas determinan sus posibilidades de realización (Sánchez Vázquez, 1984).

El apego a las normas morales es socialmente obligatorio. Tal obligación, y la forma en que es interiorizada por los individuos, se modifican de acuerdo con la manera en que la moral cumple su función social de regulación. Implica una relación libre y consciente entre los individuos y la comunidad; surge de la libertad individual, es decir, es asumida por convicción. Como no existe el individuo aislado, tampoco existe una moral estrictamente personal. Al individuo lo moraliza la sociedad, que busca que las intenciones, medios y resultados del comportamiento individual estén en sintonía con ella.

La ética, es decir, la expresión de la moral en la práctica, conjuga la acción voluntaria con las normas establecidas; está formada tanto de factores objetivos (costumbres, tradiciones), como subjetivos (motivos, intenciones). Aunque a menudo se relaciona con el buen comportamiento, la ética no busca dictar normas de conducta, sino explicar que estas se corresponden a cada sistema moral históricamente determinado. A estos corresponde una ética específica, es decir, para cada conjunto de normas existe una forma de comportamiento que se evalúa de acuerdo con ellas. La ética como práctica individual es establecida por el marco de la moral social, pero también se desenvuelve según condiciones particulares (surgidas de situaciones de clase, género, color de la piel, religión, tradición familiar, etc.), que pueden existir dentro del sistema moral dominante.

Los elementos que determinan el comportamiento según usos heredados del pasado, como la costumbre o el hábito, funcionan como mecanismos regulatorios y son un típico ejemplo de los dispositivos de un sistema moral. Las prácticas de cada individuo son consideradas como virtudes cuando están en sintonía con dicho sistema (disposición al bien moral), o como vicios cuando lo contravienen o corrompen (disposición a la injusticia moral) (Wilson Leyva, 2013).

La moral de la clase dominante es la moral dominante en cada época (Marx y Engels, 1974). De modo que el sistema moral hegemónico promoverá el tipo de comportamiento, las relaciones sociales y las condiciones de existencia que respondan a sus intereses. Pero nunca se impone a todos los individuos de modo absoluto, por tanto, en una misma sociedad pueden convivir sistemas morales de distintas clases o grupos sociales.

El estudio de la ética es una herramienta útil para identificar cambios en la conciencia social, porque permite constatar cómo se modifican las normas que funcionan como parámetros de comportamiento, y también la forma en que las conductas individuales o sectoriales se corresponden o no con ellas. Dicho de otro modo: la ética permite analizar el sistema moral hegemónico, y el comportamiento que promueve (la norma); también cómo ese sistema afecta la conformación moral de cada individuo y su práctica concreta (el hecho); así como la relación entre ambas dimensiones (Sánchez Vázquez, 1984).

Los valores están determinados por lo que cada moral considera útil, bello, bueno o justo, y funcionan como fundamento de la práctica social. Existen valores dominantes, funcionales a la reproducción social, que se promueven desde el sistema moral hegemónico y pueden, incluso, estar institucionalizados. También existen los definidos, principalmente, por el lugar que cada individuo ocupa en la sociedad y por la interpretación social que realiza desde allí, que se conocen como valores subjetivos.

Como en las sociedades coexisten diversos sistemas morales, hay acciones que pueden ser consideradas, al mismo tiempo, virtud y vicio. Es decir, son sancionadas en el sistema moral dominante, y exaltadas desde una perspectiva o situación particular. El anhelo imposible en la construcción moral de una sociedad es la confluencia de los valores dominantes con los subjetivos, pero en todas las sociedades existe un desfase entre ambos.

El motor ético cubano

La proyección ética siempre ha sido determinante en la historia cubana, en particular como motor de moral revolucionaria, y fuerza que impulsa la creación y la transformación. En la propia génesis de la nación se cultivó la ética emancipatoria como principal rasgo de la moral, con la justicia social como la más grande virtud popular. A contrapelo del sistema moral colonial, el sentimiento de justicia y libertad se incubó en la sociedad cubana mediante la necesidad de liberarse de la situación de opresión. La conciencia pública se fue transformando a partir de las luchas por la independencia, formando un sistema moral que sería al mismo tiempo contrario al colonial y sustento de la patria por nacer. Esa máxima quedó consagrada en la definición que José de la Luz y Caballero (citado en Vitier, 1975) hizo de la justicia social como «ese sol del mundo moral».

Con José Martí se consolidó la ética emancipatoria, cuando el mundo moral se hizo expresión política a través de la acción.

Los pilares de la ética revolucionaria cubana fueron, por un lado, la militancia, el sacrificio redentor, la suerte echada con los pobres de la tierra; y, por otro, la necesidad del bienestar, la armonía entre las condiciones materiales para la reproducción de la vida, y su consistencia moral. De modo que, en el sistema moral revolucionario, las virtudes quedaron definidas por todo lo que procurara el desarrollo con justicia, como solidaridad, soberanía y liberación de toda opresión. Los vicios serían aquellas acciones que atentaran contra la colectividad, los intereses nacionales o populares, y contra la propia humanidad, como el desdén por el sufrimiento ajeno o el desprecio por lo popular. La ética revolucionaria se definió, en esos marcos, como antirracista, antioligárquica y antimperialista, lo que resultó en un sistema de valores estratégico para la lucha anticolonial, adecuado a las necesidades del momento. De este modo, al derrotar a los sistemas morales colonialistas y anexionistas, patria y revolución quedarían unidas en el imaginario de la identidad cubana.

> El secreto de la felicidad moral queda prendido, como una cuerda bien afinada, a los dos polos del arco de la vida: razón y corazón. La primera sirve para conocer el orden del mundo, para autolimitarse, para ser justo […] El segundo es, sencillamente, el amor comunicante, fraterno, unitivo, universal, el que lleva a identificarnos con débiles y oprimidos. (Vitier, 1975: 34)

La moral revolucionaria y emancipatoria, nacida en el siglo XIX, fue arrinconada durante la primera mitad del siglo XX, en el contexto de la República neocolonial, donde el sistema moral dominante se fundó en la desigualdad y en la exaltación del egoísmo. La naturalidad con que se expresaban la miseria, la corrupción, la prostitución, el racismo, en aquella sociedad revela un carácter viciado, promotor de valores contrarios a la dignidad humana (Wilson Leyva, 2013).

En oposición a la hegemonía del sistema moral neocolonial, sostenido por las élites y los intereses extranjeros, la tradición marxista comenzó a influir a partir de, entre otros, la labor teórica y práctica de Julio Antonio Mella. Fue un punto de convergencia entre los valores de justicia social y libertad de la tradición cubana, y los anhelos de eliminar las opresiones mediante la creación de una sociedad sin clases. Esta conjunción se fortaleció durante los convulsos años 30: el internacionalismo de Pablo de la Torriente Brau, la vía insurreccional de Rubén Martínez Villena y el anticapitalismo de Antonio Guiteras ayudaron a consolidar una estrategia revolucionaria para la ética emancipatoria, que luego se expresó en el asalto al cuartel Moncada en 1953. «Su grandeza no estaría solo en la hazaña […] sino también en los principios de moralidad revolucionaria, esencialmente martianos, con que se lanzaron a la lucha aquellos jóvenes» (Vitier, 1975: 167).

La moral dominante cambia a través del tiempo, en la medida en que son desplazadas unas clases sociales por otras. En el terreno de la ética, el triunfo revolucionario de 1959 significó la confirmación de que la moral neocolonial había sido subvertida, en las ideas y en la práctica. El nuevo sustrato moral asimiló a la tradición nacional con la práctica revolucionaria y encontró un marco de realización ética en el socialismo. Valores como el sacrificio individual a favor del bien común; la producción colectiva de riqueza social y su distribución equitativa; la realización personal mediante el trabajo como un servicio a la sociedad, la solidaridad, la dignidad, el heroísmo como hecho social, el internacionalismo y la honestidad, se practicaron de forma masiva y se instauraron como pilares del sistema moral emancipatorio, que se erigió como dominante.

Las heroicas historias de la lucha de liberación, el rápido florecimiento de nuevas relaciones sociales, los logros en la justicia social, la entusiasta participación popular en los primeros años de la Revolución (que incluso llegó a sumar por miles a quienes estaban dispuestos a arriesgar la vida para extender la revolución por América Latina), fueron bases de la ética que floreció con el triunfo revolucionario, y que marcaría su desarrollo posterior.

Quien teorizó aquel fenómeno moral, dándole su justa dimensión, fue Ernesto Che Guevara (1998): «Para construir el comunismo, simultáneamente con la base material hay que hacer al hombre nuevo» (7). El concepto de *hombre nuevo* (que en realidad se refiere a un nuevo tipo de ser humano) sintetizó el contenido de la ética revolucionaria en función de la construcción del socialismo como proyecto emancipatorio de transformación cultural, en su acepción más amplia, y que significó la sustitución acelerada de valores a partir de la práctica social. Esa sustitución expresó la radicalidad de la Revolución cubana, porque se dirigió a atacar el núcleo moral de la reproducción capitalista: el interés individual y el lucro como las motivaciones principales para ejercer la actividad humana.

El Che advertía sobre la importancia de elegir correctamente el instrumento de movilización de las masas, priorizando siempre que fuera de índole moral. Aunque hacía énfasis en la necesidad de utilizar estímulos materiales, los ponía bajo cuestionamiento constante, por considerarlos inhibidores del desarrollo de la conciencia socialista, cuya consolidación es vital, porque la prosperidad económica no hace brotar, por sí misma, la nueva moralidad social. Es la creciente politización del pueblo lo que permite una ética que genere relaciones sociales más justas. Por eso, en el terreno político, se entronizó como máxima virtud el «ser revolucionario», es decir, la capacidad de desarrollar un sistema moral por encima del desarrollo de las fuerzas productivas.

Tan grande fue el peso de lo moral en los primeros años de la Revolución, que se implementó una política laboral llamada «de emulación». Consistía en que cada trabajador, independientemente del salario recibido, procuraba aportar a la producción tanto como le fuera posible, emulando al trabajador modelo que requería el socialismo. Quien produjera más recibía un estímulo no monetario, de cosas útiles o recreativas (unos días en una casa de playa, una nevera, un televisor, etc.). Se selló la unidad entre lo ético y lo económico: crear bienes materiales se convirtió en una actividad moral y se buscó, incluso, moralizar la competencia. Fidel Castro lo confirmó el primero de mayo de 1971: «Debemos utilizar la conciencia como el arma fundamental en el desarrollo de las fuerzas productivas: vamos a crear riquezas con la conciencia y no conciencias con la riqueza» (Castro Ruz, 1971).

La dimensión moral de la que se nutrió el proyecto revolucionario permitió salvaguardar la integridad y la soberanía del país en distintos momentos. En las décadas de los 70 y los 80, se incrementó la cercanía y la influencia de visiones dogmáticas y burocráticas que consideraban a las personas como engranajes de la gran maquinaria del socialismo. Aunque en Cuba hubo asimilación de formas de dirección política y económica soviéticas (el cálculo económico derrotó al sistema presupuestario de financiamiento), la moral emancipatoria fue constantemente rescatada a través de las decisiones políticas en las que la ética tuvo un papel central.

Sobran ejemplos de momentos en que la acción consciente de las fuerzas sociales superaba el desarrollo de las fuerzas productivas y las instituciones: en 1973 se realizó una concentración masiva en La Habana donde se votó, a mano alzada, donar una libra de

La politización que requiere el proyecto socialista no solo se logra con los discursos y las campañas oficiales, que adolecen de formalismo y falta de actualización en sus formatos comunicativos. La forma más efectiva para fortalecer la ética socialista está ligada a la participación.

arroz —de las recibidas por cada cubano mediante la libreta de racionamiento— para la resistencia chilena; al inicio de la década de los 80, cuatro maestros cubanos fueron asesinados por la contrarrevolución en Nicaragua: en las veinticuatro horas siguientes se ofrecieron cien mil jóvenes para sustituirlos en su tarea; en 1987 se organizó la brigada Blas Roca, integrada por trabajadores de la construcción y voluntarios, que lograron una productividad mayor a la del propio Instituto Nacional de Vivienda. El internacionalismo cubano tiene una relación muy profunda con la fuerza moral de la Revolución. Ha sido clave para contrarrestar el aislamiento promovido por los Estados Unidos y, al mismo tiempo, un constante refuerzo ético de los valores fundacionales, a través del trabajo que miles de cubanos y cubanas han realizado fuera de Cuba.

Ética en tiempos de crisis

El más duro golpe que ha recibido el proyecto socialista cubano fue la crisis de los años 90. No solo porque la base material de su construcción se derrumbó estrepitosamente, sino por el desprestigio que sufrió el socialismo a nivel mundial y el recrudecimiento de la ofensiva neoliberal del capitalismo. La crisis no solo fue económica, sino también de paradigma.

El sistema moral hegemónico que la Revolución había construido sufrió una importante ruptura con respecto a las posibilidades materiales de realizarse. La situación objetiva impuso un cambio de comportamiento masivo, en orden de resolver las necesidades básicas más apremiantes. El desfase entre los valores dominantes y los que fueron surgiendo se hizo tan grande, que se puede decir que la sociedad cubana entró en una crisis moral de la cual aún no se ha recuperado y de cuya resolución resultará un nuevo tipo de moral hegemónica. Dicha crisis expresó la contradicción fundamental de los proyectos de futuro para Cuba: seguir por un rumbo autónomo en la construcción del socialismo, o buscar la solución a los problemas de la sociedad cubana en fórmulas del capitalismo.

La situación obligó a tomar medidas, inevitables para salvar el proceso revolucionario, pero que produjeron un caldo de cultivo propicio para el ascenso de los valores capitalistas. La apertura a la actividad privada, la dependencia de remesas por un amplio sector de la población, las adecuaciones para atraer inversión extranjera, la reestructuración de la economía en torno al turismo, entre otras medidas llevadas adelante por el propio Estado socialista, tuvieron repercusiones en la moral y la ética.

Por ejemplo, desincorporar bienes del Estado para entregarlos en pequeña propiedad y ofrecer espacios de mercado sin controles para su desarrollo, que fue indispensable para estimular la productividad, rápidamente vio crecer fenómenos de corrupción, especulación, intermediarismo, etc. Los cambios de los años 90 produjeron una distorsión en la relación entre el mérito y el resultado, el incentivo laboral y el acceso a bienes materiales. El pensamiento y las prácticas capitalistas avanzaron con la crisis más de lo que habían podido hacerlo en los treinta años anteriores.

La desigualdad y la segmentación del consumo sobre la base de situaciones aleatorias (como la posibilidad de acceder a monedas extranjeras) hicieron inviables algunos aspectos claves del sistema moral socialista. La Habana tenía tres horas de luz al día y hoteles llenos de turistas, donde, lógicamente, se fortalecieron fenómenos como la prostitución, el robo, la estafa, el contrabando, etc. Eso resquebrajó los valores socialistas. El alto deber social, que la Revolución encumbró como medio de realización personal, dejó de ser el eje primordial de la ética, porque los valores fueron concentrándose en torno a las necesidades que la nueva situación impuso.

Cuando hay una crisis grave, la ética individual se adecua más rápido que la moral hegemónica, porque pasa a primer plano la sobrevivencia. Los valores subjetivos sufrieron una sacudida que los diversificó en muy poco tiempo, mientras los dominantes institucionalizados quedaron muy disociados de la realidad social y han resultado muy lentos en adecuarse a la nueva situación. Tal disociación potenció en la sociedad un vicio particularmente dañino para el proyecto socialista: la doble moral. La inconsecuencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, la práctica cotidiana del oportunismo, o la obtención de beneficios personales apelando a los intereses colectivos, son actitudes de un comportamiento que aparenta cumplir con exigencias normativas en las que no cree, separando la configuración subjetiva y la actividad moral.

Como el socialismo tiene como condición esencial su construcción consciente, la doble moral actúa

soterrándola, al convertirla en simulación. La expresión más transparente de la situación creada por la crisis es la fuerza que adquirió el «mercado negro», alimentado por el robo al Estado y al sector público a todos los niveles, pero indispensable para resolver necesidades cotidianas de toda la población.

Si bien el proyecto revolucionario fue duramente golpeado, no fue totalmente derrotado, ni política, ni económicamente, y tampoco en el terreno de la moral. Entre la diversidad de actitudes que se asumieron frente a la crisis, hubo amplios sectores que nunca abandonaron una ética coherente con la moral socialista. A pesar de todo, no se derrumbó el consenso social de no aceptar al capitalismo como única solución, aunque sin duda fue afectado gravemente.

El precio a pagar fue muy alto, pero la crisis también fue una nueva oportunidad de contar historias de la heroicidad socialista cubana, como los contingentes trabajadores que se organizaron y movilizaron, a partir de los parlamentos obreros, para cubrir con trabajo voluntario las carencias del sistema productivo. De hecho, el siglo XXI se inició para Cuba con una muestra clara de la persistencia de la moral emancipatoria: la respuesta movilizativa que tuvo el caso de Elián González. Este permitió a la Revolución cubana afrontar la oferta moral y simbólica del capitalismo estadounidense, y derrotarla. Los intentos por comprar el afecto del niño secuestrado, y a la opinión pública, a partir del consumismo burdo, proyectaron un mensaje mezquino frente a su derecho de no ser separado de su familia. Cuba defendió valores como justicia, soberanía y respeto a los derechos humanos. La lucha se politizó y se judicializó; pero, de fondo, aquel episodio era una lucha en que la Revolución sacó una victoria moral.

El mismo papel tiene la votación anual, en la ONU, en contra del bloqueo, que permite exhibir el aislamiento moral de los Estados Unidos en ese tema.

De la lucha por recuperar a Elián, que quizá fue la última movilización masiva en defensa de la moral revolucionaria, surgió una ofensiva ideológica a favor de la tradición revolucionaria de Cuba, conocida como Batalla de ideas. En dicho proyecto, se apeló a la movilización de recursos populares para atacar la situación concreta que hacía mella en el sostenimiento de la moral socialista: la desigualdad económica generada por la crisis. El bastión participativo en que descansó la Batalla de ideas fue la formación expresa de trabajadores sociales, que realizaron trabajo de campo en los barrios más pobres de las ciudades cubanas, iluminando problemas de su cotidianidad, que permanecían ocultos en la marginalidad y ante los cuales se adoptaron diversas iniciativas para resolver las dificultades sin apartarse de la ética socialista.

Otra forma de actuar como fuerza moral de la Revolución fue la sustitución temporal de los despachadores de gasolina por trabajadores sociales en varios puntos de venta. El resultado fue que los ingresos registrados por estos eran el doble de lo habitual; lo que dio una medida del nivel de expansión de la corrupción en esa área. Al no contar con recursos para tomar medidas contra el mercado negro en la distribución de gasolina, se apeló al castigo moral de la exposición social. La efectividad y viabilidad de la Batalla de ideas puede ser discutible, pero es importante resaltar que fue un intento de ofensiva moral frente a la oferta capitalista.

Las ofertas en juego

En la disputa que hoy se libra en Cuba, entre la oferta moral del socialismo contra la del capitalismo, este último pelea con ventaja, porque en el mundo predomina su modelo cultural. Existe una cantidad inconmensurable de recursos destinados a promover el consumismo y el individualismo. Por todos los medios se ofrece como paradigma de éxito un referente de bienestar fácilmente asequible: quien tiene más que los demás, vive mejor. La exaltación del valor individualista, no solo como método de realización, sino como fundamento motivacional de la práctica social, configura una ética elitista y de un egoísmo extendido, despreocupada por el devenir social y la experiencia de vida de otros.

Cuando el *tener* es elevado como máximo valor moral (al grado de determinar el *ser*), todos los dilemas morales se supeditan al éxito asociado a la acumulación de bienes, sin importar su origen. La ética resultante desprecia al trabajo como aporte del individuo a la sociedad, y se inclina por formas fáciles de jerarquía social. En ese sentido, la corrupción y el robo al Estado son subproductos del capitalismo, no desviaciones. De modo que vicios del comportamiento resultan tolerados cuando son recursos que logran acumular dinero.

En contraparte, la moral que intenta desarrollar el proyecto socialista asigna valor a las personas no por lo que tienen, sino por lo que son. Al individualismo burgués se le opone la individualidad socialista, que busca superar la escisión entre los intereses personales y los de la comunidad. Esta visión permite asumir el trabajo no solo como medio de obtención de bienes materiales, sino como contribución activa del individuo a las condiciones que fomenten la felicidad común (Sánchez Vázquez, 1984).

Por eso, la oferta simbólica del sistema moral del socialismo cubano no se basa en las posibilidades de mayor consumo, sino en la realización espiritual,

definida por el objetivo consciente de hacer el bien a la humanidad. En ese sentido se presenta a los Cinco héroes, que fueron prisioneros del imperio, y a los médicos voluntarios, que combaten epidemias en todo el mundo, como ejemplos culminantes de la ética socialista. Llevarla adelante implica un compromiso libre y consciente de servir a la comunidad, que eleva la responsabilidad de quien la asume. Pero esta actitud no se limita a la intención de apegarse al sistema moral socialista; requiere también de una correspondencia en las relaciones sociales dominantes, que permitan el desarrollo de la conciencia y la participación activa en la regulación moral.

El desarrollo de la moral socialista afronta obstáculos como la dificultad de romper con valores y prácticas enraizadas en los hábitos y costumbres de la sociedad capitalista. Por ejemplo, la lógica del desarrollo económico como incremento de la producción de valor al infinito, o la supervivencia del espíritu de posesión y del individualismo burgués. Otros obstáculos se refieren a nuevas formas de enajenación que surgen del propio proceso de construcción del socialismo, como el burocratismo y el dogmatismo.

La transición moral en curso

La convulsión social que significó la crisis, fragmentó la antes estrecha correspondencia entre el sistema moral dominante y la asimilación ética de la mayoría. Junto con la reestratificación social forzada, se fortalecieron otros sistemas morales, lo que trajo una fragmentación en la ética de diversos actores sociales. Esa heterogeneidad se refleja en la diversidad de universos morales que hoy se expresan fuera del sistema moral socialista hegemónico. Ante la embestida del capitalismo, la Revolución cubana atrincheró la defensa de sus valores en los contenidos de más arraigo en el pueblo cubano: la solidaridad, el antimperialismo, el respeto a la dignidad humana y, aunque entró en crisis el paradigma del socialismo, se mantuvo la reivindicación de una ruta para la construcción de una alternativa anticapitalista.

La moral emergente de la crisis se formó a partir de la diversificación social y el derrumbe del paradigma socialista. Influye sobre ella, como en ningún otro momento de la Revolución, el efecto seductor que tienen los valores del individualismo y la desigualdad. La dificultad de acceso al consumo y la desaparición de incentivos positivos para el trabajo, trasladaron la posibilidad de realización personal a otros mecanismos.

La escala de valores del proyecto socialista se hizo incompatible con la realidad. Por ejemplo, médicos y maestros, que realizan tareas de alto valor social, viven en condiciones precarias, mientras una persona que recibe remesas puede vivir mejor, incluso sin trabajar. Esto ocasiona que disminuya el reconocimiento a las profesiones que deberían gozar del más alto reconocimiento en el esquema socialista.

La ética capitalista se hace fuerte en el sentido común de la gente a través de las necesidades cotidianas. Por ejemplo, ante la evidencia empírica, parece preferible un patrón capitalista que explota, pero paga bien, que un trabajo estatal donde se gana menos, aunque se contribuye más a la sociedad. La aparición de sectores de propietarios con medios para acumular recursos mediante la explotación de trabajadores sin más medios de sobrevivencia que su trabajo, trae forzosamente la aparición de una ética burguesa, que en Cuba se expresa en la imitación de formas de vida que se promueven desde la comunidad cubana de Miami.

A pesar de la expansión de los rasgos de la ética capitalista en distintos niveles de la sociedad, aún no se constituye dentro de Cuba un cuerpo teórico ni una fuerza política que defienda la superioridad del capitalismo como sistema social. Sin embargo, hay quienes impulsan su desarrollo.

A pesar de los reconocibles esfuerzos por parte de la institucionalidad, el mercado negro sigue arraigado en la ética cubana del presente siglo. La escasez general complicó la posibilidad de la resolución de problemas de modo comunitario, e hizo del robo al sector público una práctica no solo extendida, sino socialmente aceptada, tolerada como necesaria, cuando no alentada como forma legítima de «resolver» situaciones de desesperación. Estos hábitos son vicios del comportamiento ético, que ponen en peligro la estabilidad moral del socialismo. Si los incentivos para el acceso a un mejor nivel de vida se concentran fuera de la oferta socialista, entonces se construye una ética que actúa directamente en contra del socialismo.

La paradoja cubana del siglo xxi es que se debió tomar una serie de medidas para hacer viable la economía del país, y mantener así la soberanía y las banderas del proyecto nacional socialista. Esas medidas agudizaron la lucha entre los valores capitalistas y los socialistas, y si esa pelea la ganan los primeros, de nada habrá servido al proyecto emancipatorio lograr la viabilidad económica.

Más que una crisis de valores, se vive un período de transformación de los contenidos de la moral hegemónica, que puede resultar en el fortalecimiento de un nuevo tipo de moralidad socialista o en el acercamiento a la del capitalismo. La profundidad de la transformación se asienta en las rupturas que afectan directamente a la ética: la inseguridad sobre el verdadero sistema valorativo, la pérdida de legitimidad de lo que antes era considerado valioso, y el cambio de valores subjetivos.

Reservas morales emancipatorias y amenazas éticas a la Revolución

La ética revolucionaria se refuerza con los grandes momentos de movilización de masas, que garantizan al pueblo su protagonismo. Se expresa incluso rebasando a las instituciones de la Revolución, mediante iniciativas propias, y señalando los obstáculos que impiden la socialización de las herramientas para resolver problemas comunes. En la cotidianidad, se presenta en las relaciones personales, en costumbres heredadas de la lógica de la igualdad. Particularmente, se expresa en la persistencia de la solidaridad como una apuesta histórica de comportamiento social, pero también a nivel individual, como un buen síntoma del arraigo estructural de los valores socialistas.

También persiste el sentido común en torno a las llamadas conquistas históricas de la Revolución, que reflejan el arraigo a uno de los valores cardinales del sistema moral socialista: la concepción de derechos inalienables y universales. La familiaridad con que en Cuba se accede gratuitamente a una serie de derechos sociales está ligada a la presencia de la más importante reserva moral de la Revolución cubana: la cultura de la liberación.

Las dificultades para mantener una estabilidad económica y una base material que garantice una vida sin carencias básicas, han hecho mella en el desarrollo de la solidaridad. Ante una cotidianidad que a veces se torna asfixiante, es difícil percibir la ética del sacrificio y la liberación. En situaciones de carencia, el egoísmo individualista encuentra un campo propicio para fortalecerse. Pero esa misma gente que vive la desesperación de las dificultades diarias, y se va desarrollando en un medio donde el discurso individualista se presenta con más frecuencia, de pronto se embarca en acciones de solidaridad que resultan liberadoras y generan empatía social.

En situaciones como un accidente, un atentado o una catástrofe natural, de inmediato salta a la vista la persistencia de la ética solidaria, heroica y de sacrificio en favor de los demás, que está fundamentada en la cultura de liberación cubana. No se reduce a acciones aisladas de individuos, sino que funciona socialmente, incluyendo a las instituciones. Se expresa con nitidez, por ejemplo, en las misiones internacionalistas. Es decir, se realiza con más asiduidad cuando está vinculada a un hecho extraordinario, pero la disposición está ahí, agazapada como un valor latente que no abandona a la ética cubana.

Uno de los escenarios más adversos para la moral socialista que podría resultar del actual período de transición, es que el socialismo se asimile únicamente a la noción de algunos derechos económicos fundamentales, «habrá socialismo mientras existan educación y salud gratuitas», y se descuide la necesidad de la conciencia en su construcción. En ese caso, el proyecto sería reducido a un método de repartición, pero dejaría de identificarse con una moral emancipatoria.

La despolitización es uno de los fenómenos más nocivos para la moral socialista. Sin la práctica política, que constantemente regenera la creatividad popular en los valores emancipatorios, se pierde la noción de construcción consciente de una sociedad y la inercia del capital hegemónico impondría su lógica, casi sin resistencia. Cuba es un país que vive bajo fuertes influencias mediáticas de todo el mundo capitalista (primariamente de la principal potencia cultural del mundo). Como en todas las naciones, existe gente desentendida de los procesos políticos que, justamente por la vía de la sutil difusión de la cultura miamense, termina por asumir como principal fuente nutricia de su marco moral a la jueza de «Caso cerrado». Lo que aprenda mediante esa influencia va a tener, después, repercusiones en la forma en que se relaciona socialmente. El mismo caso sucede con el constante contacto con el turismo mundial: las visiones del mundo y los rasgos de comportamiento de los sectores que gozan del privilegio de vacacionar en el Caribe, son una fuerte influencia en sectores despolitizados de la población cubana.

La politización que requiere el proyecto socialista no solo se logra con los discursos y las campañas oficiales, que adolecen de formalismo y falta de actualización en sus formatos comunicativos. La forma más efectiva para fortalecer la ética socialista está ligada a la participación. Un grave problema para el proyecto cubano es el desgaste de los espacios institucionales de participación política. Por eso, la movilización y la apertura de espacios innovadores y frescos son vitales en la lucha contra el fortalecimiento de la moral capitalista. Es a través de la práctica que la moralidad revolucionaria puede acumular fuerzas eficaces y atractivas en esa lucha, y también en el combate por la transformación de las conciencias, las relaciones sociales, la naturaleza, e incluso el relanzamiento de sus propias instituciones.

El desafío para la ética revolucionaria no es la defensa a ultranza del sistema moral que la Revolución implantó, con enorme consenso social, hace sesenta años, sino la capacidad de resituar los valores imprescindibles para la construcción del socialismo en las circunstancias de la Cuba actual. La realidad no se apegará al concepto moral prestablecido. La moral socialista requiere reelaborar sus contenidos simbólicos para que respondan a las preocupaciones actuales, tarea íntimamente ligada a la reconceptualización misma del socialismo y sus formas peculiares de desarrollo. Sin abandonar sus principios y criterios

capitales, la ética emancipatoria enfrenta el reto de reproducirse reencontrando la convergencia entre el discurso político y la práctica ideológica, captando y reproduciendo, en sentido socialista, las nuevas subjetividades existentes.

El sector privado no va a desaparecer en el corto plazo de la economía cubana, al contrario. ¿Qué características políticas, qué capacidades organizativas, qué nivel de poder; pero, sobre todo, qué clase de moral debe distinguir a un sector privado que contribuye a la construcción socialista? ¿Cómo hacen quienes trabajan en él para que se respeten los derechos que la Revolución conquistó? En la respuesta a esas interrogantes se juega buena parte del futuro de la Revolución cubana.

La lucha por la prevalencia del sistema moral socialista, con sus valores de solidaridad y justicia social, que permitan el desarrollo de una ética con la fuerza transformadora que la superación del capitalismo requiere, es una batalla central. Si pierde en ese terreno, el socialismo no podrá triunfar en ningún otro aspecto.

Referencias

Castro Ruz, F. (1971) *Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, en el Acto Central por el 1º de Mayo, efectuado en el Teatro de la CTC, el 1 de mayo de 1971*. Disponible en <http://goo.su/EUJFTZc> [consulta: 9 marzo 2023].

Guevara, E. (1998) *El socialismo y el hombre nuevo*. Ciudad de México: Siglo xxi.

Marx, C. y Engels, F. (1974) *La ideología alemana*. Madrid: Grijalbo.

Sánchez Vázquez, A. (1984) *Ética*. Barcelona: Grijalbo.

Vitier, C. (1975) *Ese sol del mundo moral. Para una historia de la eticidad cubana*. Ciudad de México: Siglo xxi.

Wilson Leyva, P. (2013) *Virtudes y vicios de la sociedad cubana*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

©Temas, 2023

Documentos en Cuba: reflexiones desde la historia de la legislación archivística

Yorlis Delgado López
Profesor. Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana.

Los documentos o registros públicos constituyen la más importante evidencia del actuar de las personas naturales y jurídicas en una sociedad, de ahí su valor social. Su preservación es imprescindible, vista hoy como un derecho de los ciudadanos con el fin de lograr un verdadero Estado de derecho, donde prime la transparencia y la rendición de cuentas como elementos configurativos de la democracia (Mendoza, 2004). Toda la existencia de una persona colectiva se vincula a la generación documental desde su nacimiento, gestión y extinción por cualquiera de las causales legales que hasta hoy se conocen.

Además de esta mirada macrosocial, se da importancia al documento a la hora de configurarlo como prueba cuando se enfrenta un proceso jurídico o un simple trámite legal. Es lo transcendental y transversal como fenómeno científico, a muchos procedimientos y se usan para probar actos jurídicos tan sencillo como, por ejemplo, la muerte de un ser humano, para instar un proceso hereditario o adquirir un bien que legítimamente pertenece a una persona (Aberrch, 2013).

Cualquier definición de este bien jurídico instaura, como requisito fundamental, la actividad creadora del ser humano y no le incumbe el formato en que se presente, pero así es insoslayable la información para configurarlo (Archivo General de la Nación, 1997). Este es uno de los elementos más relevantes y de más necesario juicio actualmente, pues el mundo está viviendo una importante mutación del papel a lo digital, similar a la que se originó hace siglos, cuando en la antigua China se inventó el primero y se migró así de la piedra a este soporte. Los otros andamiajes configurativos, de más fácil comprensión, se relacionan con el objeto: un registro de información sin importar qué; y el sujeto: el ser humano y su actividad intelectual y creativa (Nahabetián, 2010).

A las normas jurídicas les corresponde garantizar la protección integral del documento. Existe una clara concepción, en el orden práctico, de la importancia de tener una legislación que respalde los procedimientos de archivos en su gestión (Palacios y Arias, 1997). En la medida en que esta sea más precisa y encauce los problemas de una forma más real y oportuna, más fuerte será el Sistema de Gestión Documental implementado (Jaén, 2001).

Es indiscutible el papel regulador del Derecho para fomentar una cultura archivística que permita la adecuada gestión, preservación, tratamientos y posterior servicio de la masa documental que se genera en las organizaciones. En su concepto no normativista, este fue definido por el catedrático cubano Julio Fernández Bulté (2004) como aquellos principios, leyes, categorías y normas que regulan las relaciones sociales acorde al interés de los grupos de poder político-económicos. Un simple análisis de esta

definición y una valoración histórica del fenómeno permiten darse cuenta de que no existe relación social que se escape de la protección jurídica suficiente y de su expresión a través de la legislación. Parece reiterativo afirmar, entonces, que los archivos y los documentos son sujetos del derecho, y, por tanto: las disímiles relaciones que se establecen entre sociedad-archivos-documentos-ciudadanos son objeto de una necesaria regulación jurídica.

Tal protección jurídica se sustenta en el carácter probatorio y testifical del registro en cualquiera de sus fases. Por esta razón, se insiste en que este recurso de salvaguarda no debe alcanzar solo a los documentos históricos de un país, sino a toda la papelería generada. De esta manera se asegura que cumpla con su ciclo de vida de manera natural y se enfrente a los procesos archivísticos imprescindibles para su gestión. Este tema se enfoca siempre de manera sistémica y holística, tratando de salvar la masa documental que se genera.

Un elemento importante que regular, a la hora de definir un documento o en cualquiera de las fórmulas jurídicas que se empleen, es el soporte en que se puede presentar el registro. El espíritu normativo no debe estar en función de restringir las formas que este puede adoptar, sino tener siempre una perspectiva muy amplia del asunto. Esto se traduce en que todos los demás preceptos que se regulan, relativos al tratamiento, valoración y acceso documental, le serán aplicables al registro público sin importar su formato.

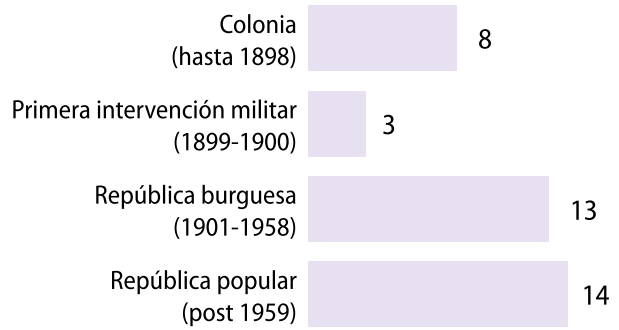
En 2020, el Consejo de Estado sancionó el Decreto-Ley 3, del Sistema nacional de gestión documental y archivos en la República de Cuba y sus normas complementarias, y este hecho me sirve de base para analizar históricamente la protección que, desde la legislación archivística, ha tenido entre 1559 y 2020, como, por ejemplo, la de un bien jurídico de imprescindible valor para gestionar la propia historia e ir alcanzando un Estado de derecho transparente y democrático. Se nutre así de historia, derecho y archivos, en un análisis multidisciplinario.

El estudio se hizo mediante una amplia revisión bibliográfica y la profundización en las normas jurídicas que hasta la fecha se conocen y que han regulado, de alguna manera, la actividad en Cuba. Tuvo como base fundamental el análisis de la magistral obra *Historia de los archivos de Cuba*, de Joaquín Llaverías (1949), capitán del Ejército Libertador y director del Archivo Nacional durante más de veinte años; artífice de la archivística cubana y a quien va dedicado este ensayo. Este libro, publicado en 1912 y actualizado en 1949, recoge el tránsito histórico de estas instituciones cubanas y las regulaciones jurídicas existentes en el país hasta esa fecha. El proceso de compilación impuso, además, la localización de estas disposiciones en la *Gaceta Oficial de la República*, desde su creación. Pretende que se comprenda la necesidad histórica de implementar, en el territorio nacional un sistema de gestión documental, eficiente, eficaz, racional y sobre todo que permita preservar los registros que este produce, y contribuir así a la inmensa tarea de gestionar y conservar el rico patrimonio documental cubano.

Una mirada integradora a la historia de la legislación archivística en Cuba

La importante y rica tradición en esta materia legislativa no se debe subvalorar a la hora de realizar cualquier análisis o proyecto en esta disciplina jurídica, ya que es referente y sustenta cualquier modificación o nueva ley que se promulgue en Cuba. El gráfico 1 muestra la distribución de disposiciones por períodos históricos, lo que evidencia un relativo balance en la aprobación de normas jurídicas.

Gráfico 1. *Distribución por períodos históricos de disposiciones jurídicas vinculadas a archivos en Cuba.*



La tabla 1 resume el devenir de la emisión de disposiciones regulatorias del tema archivístico en Cuba. Ello permite ver las etapas más importantes para el desarrollo y protección legal de estas entidades en el país. Es relevante que la regulación jurídica de tales elementos ha estado siempre a merced de las más altas disposiciones y entes estatales. Ello obedece a su carácter transversal y a la alta valoración que de ellos han tenido los decisores.

Tabla 1. *Línea de tiempo de las disposiciones jurídicas de archivos en Cuba.*

Año	Disposición
1602	Ordenanzas del Rey Don Felipe III
1664	Real Cédula (sin número)
1693	Real Cédula (sin número)
1796	Real Orden (sin número)
1840	Real Orden 531
1855	Real Orden (sin número)
1857	Real Orden 11999

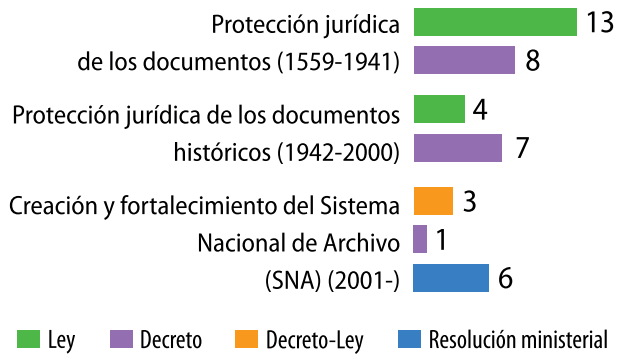
Año	Disposición
1883	Real Orden 655
1890	Real Orden 481
1899	Orden 167
1900	Orden 40
	Orden 74
1904	Decreto 386
1906	Decreto (sin número)
	Decreto 302
1907	Decreto 140
	Decreto 900
1908	Decreto 502
1909	Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
	Ley (sin número)
1913	Decreto 971
	Decreto 1233
1942	Ley 6
	Decreto 1780
1944	Decreto 2960
1959	Ley 289
	Decreto 1915
1960	Ley 714
1963	Ley 1108
2001	Decreto-Ley 221, de los Archivos de la República de Cuba
2003	Resolución 3/03 del CITMA
2004	Resolución 124/04 del CITMA
	Resolución 73/04 del CITMA
2009	Resolución 41/2009 del CITMA, Lineamientos para la Conservación de las Fuentes Documentales
2010	Decreto-Ley 265, del Sistema Nacional de Archivos de la República de Cuba

Del análisis de esta tabla se deduce tres momentos legislativos importantes. Para llegar a esta periodización se tuvo en cuenta el objeto de protección fundamental y propone las siguientes etapas:

1. 1559-1941. *Protección jurídica de los documentos*: se emiten disposiciones relativas a proteger el documento administrativo sin una mirada historicista. Se regula, además, su tratamiento, conservación y acceso.
2. 1942-2000. *Protección jurídica de los documentos históricos*: se sancionan regulaciones para proporcionarla, se pondera su valor y se declaran de utilidad pública y parte integrante del Patrimonio Nacional. Se regula el funcionamiento del Archivo Nacional de Cuba como depósito de esos documentos, y se protege su tratamiento, conservación, y acceso.
3. 2001 en adelante. *Creación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivo (SNA)*, creado como organización encargada de gestionar, preservar, tratar y poner en valor el patrimonio documental cubano. Se da una protección integral al documento desde su nacimiento hasta su depuración o depósito en un archivo histórico.

Aplicando esta periodización, el gráfico 2 visualiza las disposiciones para regular los asuntos archivísticos en Cuba. El análisis permite observar que la más empleada ha sido ley o una de similar rango jurídico,[1] seguidos por los decretos emitidos por el órgano ejecutivo en la etapa republicana burguesa. Esto alude al valor que le han dado los legisladores a sus archivos y documentación, ya que más allá de los valores históricos de estos, se ha tenido en cuenta los económico-políticos y sus influencias.

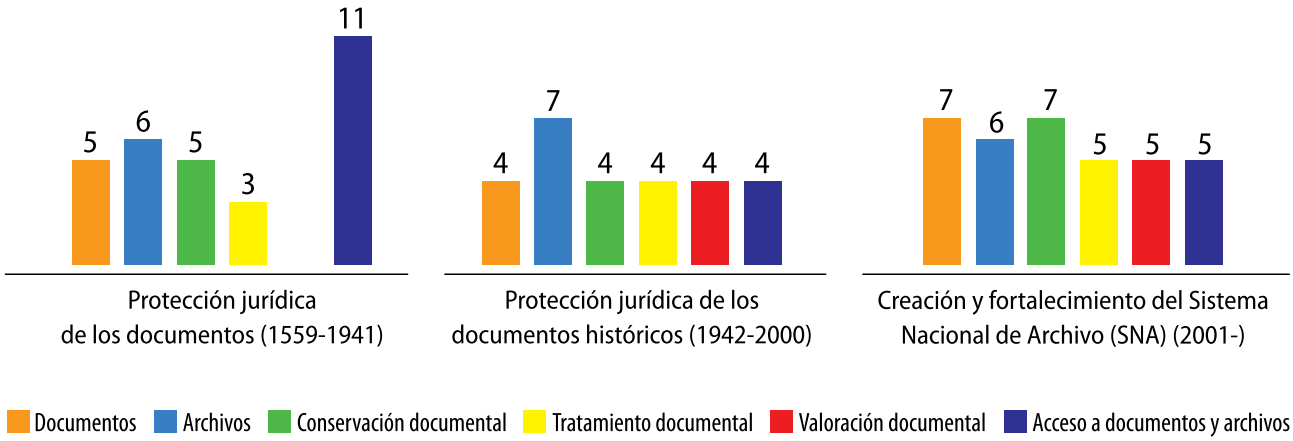
Gráfico 2. *Disposiciones jurídicas empleadas en Cuba con el fin de regular temas archivísticos según la periodización específica.*



El gráfico 3 expone los temas protegidos por la legislación a través de la historia patria. El acceso a los archivos y la información contenida en los documentos es el más recurrente en la Isla. En la colonia se acentuaba el aseguramiento de intereses de la metrópolis, la restricción del acceso, y posteriormente su flexibilización. Otro tema que ha resultado muy interesante es la protección del documento.

En Cuba siempre existió el mandato de preservación de los archivos en las agendas legislativas de sus órganos estatales. De igual manera, por el sentido de pertenencia y de responsabilidad, se presume la función de preservar a ultranza los soportes, como parte de la batalla que para ello libran los archiveros desde épocas remotas. Este precepto nace y se gestiona bajo el auspicio de una larga y hermosa tradición legislativa en esa materia, cuyo objetivo siempre ha sido luchar contra el desinterés de los funcionarios cubanos, y la población en general, en esta disciplina. Esta condición ha traído muchas pérdidas de significativas piezas de la documentación histórica de la nación.

Gráfico 3. *Temas archivísticos objeto de protección jurídica por períodos históricos.*



La protección legal de los documentos en Cuba

En Cuba, los registros públicos se protegen desde el inicio de la colonia. España estuvo consciente del valor documental como herramienta de poder y por ello emitió regulaciones sobre este bien jurídico. Así se logró resguardar una masa documental que avala disímiles procesos históricos de la Isla.

Al hacer un análisis de la evolución de tal protección, es posible percatarse de que el tema fue adquiriendo importancia según cada momento histórico y el valor de la ciencia en cada uno de ellos. Con sus aciertos y desaciertos, lógicos en toda obra humana, la legislación fue tocando, primero, los documentos de gestión emanados por la metrópolis, luego los históricos, y más tarde todas las piezas que conforman el gran rompecabezas que es el patrimonio documental.

Historia de la protección del documento desde la legislación archivística en Cuba

Etapa I (1559-1941)

Las primeras normativas que se recibieron en la Isla desde la otrora metrópolis española fueron las Ordenanzas del rey don Felipe II, en fecha tan temprana como 1559, que ordenaba a todos los súbditos, otorgar un tratamiento adecuado a los libros y demás papeles que se generaban en las colonias (Llaverías, 1949). La metrópolis se da cuenta del valor informativo de los registros, aunque el que prevalece es el económico, pues el reino se percata de cuánto se pudiera perder, en materia de transacciones mercantiles, con el deterioro de tales piezas.

En 1664, con esa misma línea de pensamiento, la Real Cédula de 7 de octubre prohibió la extracción de los documentos archivados en las oficinas, y facultaba solamente a los virreyes o gobernadores a enviar a un ministro de la Audiencia, con un escribano, para revisar los documentos que necesitasen (Llaverías, 1949). Aun sin definir las fases de vida del documento, este fue un intento bastante adecuado para aquellos bienes. Este instrumento jurídico se complementó con la Real Cédula, de 7 de noviembre de 1693, que ratificó la prohibición de la extracción de documentos, aunque mediara solicitud de los jueces. Autorizaba la expedición de noticias solo por certificación (Llaverías, 1949).

Ya en 1840, la reina regente de España, María Cristina de Borbón, emite la Real Orden 531 que sancionó, a propuesta de la Junta de la Real Hacienda de la Isla de Cuba, la creación de su Archivo General. Esta disposición aprobó, además, el primer reglamento de archivos para el país, que de manera implícita protegía los documentos que emanaba la colonia, y explicaba los procedimientos para el trabajo, organización y tratamiento de los registros (Llaverías, 1949). Esta normativa definió el término *documento* desde el objeto[2] elemental para componer un archivo. Para tan incipiente precisión, tuvo en cuenta el momento de creación del documento, obviando otros elementos importantes. A pesar de ello, fue el primer acercamiento a un concepto de *documento histórico* en la Isla.

Incluso con la amplia legislación en materia de archivos durante la etapa colonial (1511-1898) y en la primera ocupación militar (1898-1901), no se emitió ninguna donde la protección legal recayera sobre este bien. Por lógica no se definió jurídicamente el concepto *documento,* ni ninguna de las fases de su vida; se sobreentendió su comprensión.

En 1907 se emitió el Decreto 900, de 28 de agosto, que prohibió, como principio, la extracción de documentación de los archivos y la obligatoriedad de devolver todos los que fueron extraídos con anterioridad a la norma.

En Cuba siempre existió el mandato de preservación de los archivos en las agendas legislativas de sus órganos estatales. Este precepto nace y se gestiona bajo el auspicio de una larga y hermosa tradición legislativa, cuyo objetivo siempre ha sido luchar contra el desinterés de los funcionarios cubanos, y la población en general.

Etapa II (1942-2000)

En 1942 se sanciona la Ley 6, de 6 de mayo. Cuba en ese momento, trabajaba en función de aplicar lo más moderno que en la ciencia archivística se gestionaba a nivel mundial. Esta norma tampoco refirió una definición concreta, pero declaró, con una lista (Artículo 1), los documentos que se valorarían de utilidad pública y parte integrante del patrimonio nacional. Se enfocó más en los históricos. Fue la primera disposición que prohibió su destrucción o ponerlos en posición de abandono y lo consideró una actividad delictiva. Sancionó como ilícita la venta o transacción de la documentación, salvo que fuera con el Archivo Nacional.

Esta fue la primera ley cubana que estableció normas para evitar la extracción de registros de utilidad pública del país. Como regla, prohibió su exportación y estableció una tecnología autorizante para que el poder ejecutivo gestionara con gobiernos extranjeros la importación, por devolución o donación, de aquellas piezas documentales que fueran de interés histórico del país (L 6/1942). De esta manera, por primera vez, Cuba establecía un sistema de protección legal específico y adecuado para sus documentos históricos. Más allá de la limitación de seccionar la vida del documento, ajustándolo al momento histórico y al desarrollo de la archivística, el país se acercó a las tendencias internacionales.

En 1960 se aprobó la Ley 714, de 22 de enero, encaminada a regular el funcionamiento del Archivo Nacional. La disposición mantuvo, en su lógica formal, los criterios de no definir legalmente el documento. Declara, con similar letra que su antecesora, los de utilidad pública y que se consideraban parte integrante del patrimonio nacional (Artículo 4). Además, define como delitos el ocultamiento, sustracción, alteración, o inutilización de los documentos declarados de utilidad pública (Artículo 10). No obstante su limitación, esta normativa aportó un procedimiento judicial ante una denuncia de incumplimiento de esta Ley. Con una redacción muy similar a la de su antecesora, prohibió la extracción de documentos a manos de particulares; solo agregó la facultad del Archivo Nacional de autorizar la extracción del país de aquellos registros que no se considerasen de utilidad pública.

Igualmente, en sus normas, esta disposición, obligó, a los poseedores privados o personas jurídicas de estos documentos a declarar, en un plazo de un año, su tenencia a la dirección del Archivo y creó el Registro de documentos de utilidad pública, con la intención de controlar el patrimonio documental cubano y saber cuántas eran y dónde se encontraban las piezas documentales. Una tarea todavía pendiente.

La Ley 714/1960, aunque su objeto de regulación fue el funcionamiento del Archivo Nacional, sentó las bases para la futura conformación del Sistema Nacional de Archivos, al extender a las dependencias estatales de forma muy precaria, la protección jurídica de los documentos que en un futuro formarían parte de los fondos del Archivo (Artículo 20).

Debido al aprovechamiento de las experiencias acumuladas y los antecedentes, se logró una de las normas más completas hasta ese momento, que llegó a contemplar no solo la protección jurídica de los documentos ya depositados en el Archivo Nacional, sino de otros en manos de propietarios privados.

Etapa III (2001-actualidad)

El desarrollo de la archivística en el mundo y la experiencia acumulada en el país impusieron la necesidad de introducir importantes modificaciones a la legislación en esta materia. En 2001, el Consejo de Estado de la República de Cuba derogó la Ley 714/1960 y emitió el Decreto-Ley 221, De los archivos de la República de Cuba. Esta disposición surge luego de casi cuatro décadas de inactividad en el orden legislativo.

Entre los aportes más importantes de esta nueva norma estuvo un grupo de definiciones jurídicas, entre ellas el término *documento* (DL 221/2001: Artículo 2) que orientaba mejor al ciudadano, en cuanto el bien jurídico objeto de protección, cuando es interés para la archivística o es evaluado como histórico, por ejemplo.

En estas definiciones, ajustadas a las fases de vida estudiadas por la archivística, se ponderó la información que registra el soporte, los medios de producción y la actividad creadora del hombre como medio fundamental.

En el Artículo 6 se alude a la obligación de los funcionarios públicos de prohibir la destrucción o deterioro de bienes de archivos.

Este Decreto-Ley crea el Sistema Nacional de Archivos, con lo que se amplía el ámbito de protección de la documentación, pues literalmente alcanza al

que nace en un archivo de gestión, al que se conserva *a posteriori* en uno central o ramal, y al que se considera histórico o permanente. Estas acepciones fueron introducidas en la legislación cubana por esta disposición.

Heredera de su antecesora —la Ley 714—, creó, en una versión más contemporánea, el Fondo Estatal de Archivos (DL 221/2001: Artículo 26) y su registro, cubriendo así la necesidad de conocer las piezas del patrimonio documental. En él se inscribían todos los documentos de valor histórico o permanente y, en consecuencia, los declaraban de utilidad pública, lo que estableció normas generales muy similares a las de disposiciones anteriores, para su extracción del territorio nacional. La Ley elevó la facultad de autorizar la salida del país de piezas evaluadas como históricas, hasta el nivel de ministro de Ciencia, Tecnologías y Medio Ambiente (CITMA) (Artículo 34).

También en 2001 se emitió la Resolución 3 del CITMA. Por medio de ella se creó el Registro del Fondo Estatal de Archivos, previa autorización expresa del Ministerio de Justicia de la República de Cuba,[3] y pone en vigor el Reglamento para los procedimientos de inscripción en él de los documentos históricos del país. También se reguló que, ante cambios de dominio de los documentos inscritos, el registro debía conocerlos para un mejor control del patrimonio documental.

En abril de 2009, se sancionó el Decreto-Ley 265, Del Sistema Nacional de Archivos de la República de Cuba. Este, con una visión más integral y sistémica del fenómeno, establece, actualiza y moderniza definiciones[4] legales vinculadas al documento y garantiza la protección de los que constituyen la memoria histórica cubana a través del fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivos y la aplicación normalizada de los principios de disciplina, que aseguran la organización, control y acceso a la documentación administrativa e histórica del país. Para el concepto de *documento principal* se pondera el registro de información, la no importancia del soporte y la actividad creadora humana como importantes para su creación.

Esta norma jurídica se enfocó no solamente en proteger los documentos considerados de valor histórico, sino en lograr su gestión y control desde que nace en una oficina de la administración, como en su antecesor el Decreto-Ley 221/2001. En tal sentido, refuerza la tutela legal de los registros prexistentes y regula otros de interés para el país, como los universitarios y los generados por personas naturales o en su propiedad. Con ello logró expandir el alcance de la normativa a toda la documentación que se genera en el territorio nacional, y así regular todo el proceso desde el nacimiento en una oficina hasta su destrucción o conservación permanente en un archivo, sin tener en cuenta el formato en que se presente el registro.

Igualmente, continúa con la tradición preestablecida de prohibir la destrucción o deterioro de los documentos depositados en archivos, en otros lugares destinados a su conservación oficial, o confiados a la custodia de un funcionario. Mantiene el Fondo Estatal de Archivos (DL 265/2009: Artículo 33) y su registro con iguales fines, pero con una descripción más detallada de los bienes objeto del registro. Además, protege especialmente los documentos una vez desclasificados, al establecer su destino a un archivo central, lo que corresponde con su legislación especial vinculada al Decreto-Ley 199/1999, Sobre la seguridad y protección de la información oficial, de 25 de noviembre, y sus normas complementarias.

Este Decreto-Ley no fue reglamentado jurídicamente, pero se entiende que la percepción legal de tutela a que internacionalmente se refiere, y que el país requiere para salvaguardar sus documentos está presente en la norma. Ello se considera adecuado, pues estos temas, vinculados más a principios generales que al Derecho, se deben respetar y cumplimentar por todos los actores sociales.

Estas disposiciones jurídicas han devenido importantes antecedentes legislativos en la protección de la documentación de archivo, pues significaron un significativo avance en lo que doctrinalmente se concibe para estas disposiciones. Por primera vez en la nación se constituyen los archivos como un sistema que permite la protección legal de los documentos durante todo su ciclo vital que, sin lugar a dudas, sustentaron e inspiraron la legislación vigente hoy en la República de Cuba.

Protección jurídica de los documentos en Cuba desde otras legislaciones

La Constitución de la República de Cuba aprobada el 24 de febrero de 2019, solo tácitamente alude en su texto al término «documentos», al referirse a que los obtenidos por violar la correspondencia —derecho refrendado jurídicamente por el mismo texto—, no constituyen prueba en proceso alguno. No obstante, se infiere que la protección constitucional alcanza a todos los documentos generados por entidades públicas, pues tutela el derecho de los cubanos a solicitar información al Estado, sin precisar cuál, ni de qué fecha (Artículo 50). Ello indica que los órganos estatales deben estar prestos a satisfacer cualquier solicitud de la ciudadanía de un servicio informacional; en consecuencia, debe preservar sus registros informativos como soportes del ulterior servicio.

De igual manera, la Carta Magna protege los registros considerados patrimonio cultural de la

nación al reconocer como principio que el Estado cubano los defiende y protege (Artículo 32). Ello, en correspondencia con la legislación sobre bienes patrimoniales (L1/1977, de 4 de agosto; D 118/1983, de 23 de septiembre), en la que aparece una lista que enumera los elementos que se consideran como tales. Entre ellos figuran los documentos relacionados con la historia, la ciencia y la técnica; la vida de los forjadores de la nacionalidad y la independencia, dirigentes y personalidades sobresalientes; los acontecimientos de importancia nacional e internacional, incluidos los etnológicos o folklóricos; los manuscritos raros, incunables y otros libros, documentos y publicaciones de interés especial; los archivos, incluidos los fotográficos, fonográficos y cinematográficos; los mapas y otros materiales cartográficos, partituras originales o impresas, ediciones de interés especial y grabaciones sonoras (D 118/1983: Artículo 1).

Por su parte, el Código Civil de la República aprobado por la Ley 59/1987, de 16 de julio, no da una definición de documentos, pero sí mandata un grupo de actos jurídicos que deben constar por escrito a los efectos de que se consideren legales (Artículo 51). En tal sentido, los actos que ejecutaran las personas jurídicas y los que tuvieran un objeto mayor a quinientos pesos entrarían en tal categoría.

El Código de comercio (de 1885) de Cuba, aún vigente, estableció determinados documentos específicos (letra de cambio, libranzas a la orden, y pagarés) que proteger, sin dar una definición general del fenómeno (Artículos 443 y 532).

En plena concordancia, el Decreto-Ley 304/2012, De la contratación económica, aprobado el 1 de noviembre, entre las formas de establecer los contratos económicos dictaminó la escrita, así como varias maneras de presentación, entre ellas la digital (Artículo 31). La propia norma la establece y reafirma en su letra, como la más común y aceptada en la práctica mercantil cubana y deja solo los contratos verbales, de manera excepcional, a aquellos casos cuya naturaleza o la complejidad de las relaciones económicas lo aconsejen.

Un análisis de estas definiciones, imprecisas e inexactas, dan la medida de que las disciplinas jurídicas han dejado al Derecho Administrativo la función de precisar el entendido de qué es el documento o registro. Esta rama se apoya en la legislación archivística como una vía para dar respuesta a este mandato social.

En contexto con la realidad

Los antecedentes objeto de este estudio, unidos a la práctica archivística internacional y al interés estatal demostrado, propiciaron que Cuba enfrentara un proceso de actualización y completamiento de su legislación archivística. En 2020 se publicó una serie de normas (DL 3/2020, D 7/2020, R 201/2020, R 202/2020), encabezadas por la primera de estas, que completan la protección integral y holística del documento, una de las más contemporáneas de América Latina hasta la fecha. Aún perfectible, la legislación trata de tutelar este bien en todas las fases de vida del documento y en los principales formatos que se presentan. Se enfatiza en que la eficacia de las normas está en solucionar los problemas archivísticos de la práctica territorial y en salvaguardar jurídicamente y de una manera adecuada el patrimonio documental.

El corpus normativo es aún joven, pero muy completo, y abarca los procederes archivísticos de una manera integral, por lo que llega a los procesos de digitalización y al documento digital de una manera innovadora, debido a la ausencia de antecedentes nacionales y en el área iberoamericana. Se aprecia un adecuado devenir en la aplicación de la normativa y las estructuras encargadas de ella con un objetivo común: proteger el patrimonio documental cubano.

Reflexiones conclusivas

«Hay que crear una cultura de conservación de la memoria histórica, no solo desde las propias acciones de preservación, sino también desde el trabajo de los organismos formadores» (Díaz-Canel Bermúdez, 2019). Con esta afirmación, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aseveró la importancia del asunto, en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el año 2019. Esta cultura tiene, indiscutiblemente, un componente jurídico: cuál debe ser el papel y cómo proceder ante el fenómeno social de preservar los documentos generados por Cuba.

El archipiélago cuenta con una importante y hermosa tradición legislativa en materia de protección de los documentos y el funcionamiento de sus archivos, lo que nunca se debe olvidar al sostener cualquier proyecto.

Los temas archivísticos más aludidos en las disposiciones en la historia legislativa son el acceso a los archivos y la información contenida en los documentos, y la protección de estos

En Cuba, la legislación sobre archivos se ocupó tradicionalmente de proteger los documentos históricos, y en 2001 logra establecer la tutela a toda la documentación que se genera en el territorio nacional, y regular, con un enfoque integral, todo el proceso desde el nacimiento en una oficina hasta su destrucción o conservación permanente en un archivo, sin tener en cuenta su formato.

Sería oportuno aprobar un corpus normativo de mayor nivel, dígase una ley que jerarquice la disciplina. Esto hará más efectivo el cumplimiento de sus preceptos desde el proceso de su aprobación hasta la praxis de la norma, lo que coadyuvaría a una mayor eficacia normativa.

Los antecedentes en esta materia, siempre que se tengan en cuenta y sean de constante repaso y consulta, propician un ámbito de aplicación de la legislación archivística vigente en Cuba, enfocado al análisis de sus fortalezas y debilidades. Su valoración y apreciación será inherente a un patrimonio documental más protegido y a su vez más accesible a los ciudadanos en general.

Este ensayo, más que contar una historia desde las fuentes primarias de información, ha pretendido ayudar a la necesaria comprensión de la ocupación de las autoridades cubanas por sus archivos, en las diferentes etapas históricas. Este objetivo solo reafirma la necesidad de aplicar ciencia a una actividad que tiene el fin de preservar la *memoria histórica cubana.*

Notas

1. Se han equiparado las disposiciones a las que hoy se conocen, según el rango y la autoridad emisora de la norma.

2. Véase el Artículo 1 del Reglamento en Llaverías (1949).

3. Procedimiento establecido en Cuba para la creación de registros públicos. Se considera entre las funciones del Ministerio de Justicia la atención metodológica de aquellos.

4. Ver definición legal de *documento*, *documento de archivo* y *documento de valor histórico* o *permanente* (DL 265/2009: Artículo 2).

Referencias

Aberrch, R. (2013) *Archivos*. Barcelona: UOC.

Archivo General de la Nación (1997) *Hacia un diccionario de la terminología archivística*. Santa Fe de Bogotá: GITAA.

Constitución de la República de Cuba (2019) *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, edición extraordinaria, n. 5, 10 de abril. Disponible en <https://bit.ly/3ZBdRj0> [consulta: 9 enero 2023].

Cuba. Código de comercio/1885. La Habana: Casa Editorial «Librería Cervantes» de Ricardo Velosos, 1921.

_____ Decreto 7/2020, Reglamento del Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivos en la República de Cuba. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, n. 55, edición ordinaria, 31 de julio. Disponible en <https://bit.ly/3xzXeI8> [consulta: 18 febrero 2023].

_____ Decreto 900/1907, de 28 de agosto, *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, n. 52, 29 de agosto.

_____ Decreto-Ley 221/2001, de los Archivos de la República de Cuba. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, n. 57. 13 de agosto.

_____ Decreto-Ley 265/2009, del Sistema Nacional de Archivos de la República de Cuba. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, n. 18, 5 de mayo. Disponible en <https://bit.ly/3IJScPL> [consulta: 18 febrero 2023].

_____ Decreto-Ley 3/2020, del Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivos en la República de Cuba. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, n. 55, 31 de julio. Disponible en <https://bit.ly/3XLNANOL> [consulta: 18 febrero 2023].

_____ Decreto-Ley 304/2012, de 1 de noviembre, de la Contratación Económica. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, n. 62, 27 de diciembre. Disponible en <https://bit.ly/3YLfg6e> [consulta: 18 febrero 2023].

_____ Decreto-Ley 199/1999, de 25 de noviembre, sobre la Seguridad y Protección de la Información Oficial. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, edición ordinaria, n. 10.

_____ Ley 1/1977, de 4 de agosto, de Protección al Patrimonio Cultural. Disponible en <https://bit.ly/3ScJ493> [consulta: 18 febrero 2023].

_____ Ley 59/1987, de 16 de julio, Código Civil. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, edición extraordinaria, a. LXXXV. de octubre. Disponible en <https://bit.ly/3EfwhwY> [consulta: 18 febrero 2023].

_____ Ley 6/1942, de 6 de mayo. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, n. 280, 9 de mayo.

_____ Ley 714/1960, de 22 de enero. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, n. 17, 26 de enero.

_____ Resoluciones 201 y 202/2020. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, n. 55, edición ordinaria, 31 de julio. Disponible en <https://bit.ly/3Xlulyr> [consulta: 18 febrero 2023].

_____ Resolución 3/2001. Reglamento del Registro del Fondo Estatal de Archivos. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, n. 10, 24 de enero.

Fernández Bulté, J. (2004) *Teoría del Estado y del Derecho*, primera parte. La Habana: Editorial Félix Varela.

Jaén, L. (2001) «La legislación archivística en América Latina y el Caribe». *Diálogos: Revista Electrónica de Historia*, v 2, n. 3. Disponible en <http://ns.fcs.ucr.ac.cr/~historia/> [consulta: 6 enero 2023].

Llaverías, J. (1949) *Historia de los Archivos de Cuba*. La Habana: Publicaciones del Archivo Nacional de Cuba.

Mendoza, A. (2004) *Transparencia* vs *corrupción. Los archivos políticos para su protección*. Lima: Textos Editores.

Nahabetián, L. (2010) *Acceso a la información pública: Pilar fundamental del buen gobierno*. Montevideo: Editorial y Librería jurídica «Amalio M. Fernández».

Palacios, J. y Arias, V. (1997) *América Latina y el Caribe*. Informe mundial sobre la información. Madrid: UNESCO-CINDOC.

Díaz-Canel Bermúdez, M. M. (2019) «El país que no olvidará porque tiene memoria y no dejará de protegerla». *Granma*, 18 de diciembre. Disponible en <https://bit.ly/3CxZToE> [consulta: 6 enero 2023].

UNESCO. Decreto 118/1983, Reglamento para la ejecución de la Ley de Protección al Patrimonio. Disponible en <https://bit.ly/3ZqlVn2> [consulta: 9 enero 2023].

©Temas, 2023

El significado simbólico de construcciones sociales en la cultura totonaca

Arianna Re
Profesora e investigadora.
Universidad Autónoma de Campeche (UAC).

No pocos autores han debatido, desde la antropología, acerca de los significados de las prácticas cotidianas. En materia de cultura, por ejemplo, Edward B. Tylor (1976) expuso por primera vez que los comportamientos humanos no son aleatorios, sino que corresponden a determinadas normas sociales compartidas entre grupos.

En debates más actuales, es Clifford Geertz (1988) el principal referente para versar sobre el significado simbólico, que, según él, puede explicarse como un conjunto de «mecanismos de control: planos, recetas, reglas, construcciones, lo que los técnicos en ordenadores llaman programas para regir el comportamiento» (44). Estos programas, que Geertz compara con el proceder humano, sirven para trasmitir elementos culturales que se expresan y socializan, a través del tiempo, en determinadas conductas y tradiciones que definen nuestros ejes identitarios.

El siguiente ejemplo etnográfico expone el tema de manera descriptiva: las mujeres voladoras de Papantla (Veracruz, México) y la medicina tradicional totonaca, ambas bajo un elemento en común: la iniciación, el don y los saberes compartidos que dan significado a elementos culturales determinados. En ambos casos se mostrará cómo elementos culturales que surgen de lo individual, de una conciencia y de una voluntad propias, se transforman en un querer colectivo a través de la aceptación comunitaria. El grupo y la colectividad aceptan un nuevo elemento solo cuando este se transforma de individual cotidiano a excepcional, a través de elementos simbólicos compartidos y aceptados.

El juego del volador

El juego del volador se caracteriza por el uso de aparatos giratorios y maniobras acrobáticas. Es erróneamente conocido como «danza de los voladores de Papantla». El juego no es exclusivo de esta población veracruzana; tampoco es una danza en el sentido estricto del término. Sus orígenes se remontan al Período preclásico medio (1200-500 a. n. e), y se han encontrado representaciones del ritual en la cerámica funeraria de las culturas de occidente de México (Colima, Jalisco y Nayarit). Es muy probable que se relacione con el sacrificio gladiatorio (bélico) de la fertilidad. Sobrevive en la actualidad entre los nahuas y los totonacos de la Sierra Norte, de Puebla, y el Totonacapan veracruzano.

Es el ritual totonaco más importante y su intenso simbolismo astronómico es innegable. Está integrado por cinco hombres, uno por cada dirección del mundo precolonial.[1] Cuatro de ellos descienden dando trece vueltas, que multiplicadas por los cuatro representan

los cincuenta y dos años que conforman el siglo indígena.

Recientemente ha recobrado una importancia relevante; se ha ejecutado en Francia y España, por ejemplo. En 2009, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por UNESCO.

En cuanto a la coreografía, cinco integrantes suben a lo alto del palo, cuatro de ellos enlazados a una cuerda por los tobillos, se lanzan dando vueltas vertiginosas en el sentido de las manecillas del reloj. El quinto integrante, el cuzco —el maestro, también nombrado el capitán—, queda de pie, en la punta del palo, y toca el tambor y la flauta, sonidos que marcan el ritmo de descenso del resto.

Según nos indican los voladores entrevistados, el significado de la danza ritual consiste en la renovación del ciclo agrícola mediante una petición a los dioses: fertilizar la tierra. Cuando los danzantes suben al estribo del palo se presentan como los elegidos por los dioses para pedir lluvia al cielo, de manera que la tierra sea fertilizada y puedan donarse los nuevos frutos de la siembra.

Dispuestos los cuatro danzantes en los puntos de la circunferencia creada por la danza, representan los puntos cardinales y las estaciones del año, y el capitán, o cuzco, el cenit.

Como todos los aspectos culturales, este ritual está sujeto a cambios; muchos de los cuales acontecieron a partir del violento contacto con la cultura judeo-cristiana. Estos se advierten desde los sincretismos religiosos hasta la utilización de ciertos elementos en el vestuario. Asimismo, en la utilización de los materiales se han modificado por el cambio sistemático del medio ambiente. Se elaboran postes de metal en lugar de madera, ya que hoy es más difícil conseguir árboles tan altos. Otro ejemplo de incorporación de elementos occidentales, a consecuencia de la colonización, es el uso de espejos en los trajes, que no eran conocidos en la época precolonial.

Como ejemplo de sincretismo, observamos el significado católico que otorgan los entrevistados al descenso de los voladores como la representación de la resurrección de Cristo, y que dan gracias a Dios cuando el vuelo de los danzantes termina sin accidentes.

Otra consecuencia de la modernidad es que, antes, el corte del palo llevaba un ritual específico: ser llevado por toda la comunidad sin tocar el suelo y actualmente, en cambio, se emplean vehículos con motores de combustión interna para el arrastre (Castro de la Rosa, 1997).

Todas las tradiciones están sujetas a cambios, variaciones y sincretismos; pero también a discursos simbólicos de los que detentan el poder; que usan los rituales y los hábitos culturales para justificar. Se requiere ir más allá de la defensa y respeto de los *habitus* que se rehúsan a cambiar. Más provechoso sería investigar los contextos sociales en los que la supuesta continuidad se perpetúa, especialmente sobre quién participa en la «tradición ritual» y por qué.

Significado ritual de la danza de los voladores

La danza de los voladores es un ritual de fertilidad realizado para invocar al trueno, dios poderoso; sin él no habría lluvia, sin ella la tierra no sería fértil. Se representa la invocación del hombre al Dios, y así esperar una buena cosecha. Se afirma que la feminidad en el ritual está representada por la tierra, mientras que los danzantes son los mediadores que, invocándolo, establecen la comunicación entre una y otro.

Entonces son necesarios ambos aspectos, el femenino y el masculino. Y tratándose de «bailes» de fertilidad, la representación dual de sexos debe quedar representada en distintos elementos: el tronco como símbolo fálico que representa al dios, *ergo*, la mente humana que «gestiona la danza ritual en su aspecto masculino»; y la tierra como útero materno que es fertilizado, *ergo*, la mujer. Sin embargo, según la cosmología totonaca, esta no puede participar en la danza. Sobre el porqué, las respuestas de los entrevistados fueron dos: debido a las desgracias que podrían ocurrir por traicionar la tradición; y que el resto de los integrantes pudieran quedar infértiles.

En este orden de ideas, la posición de una mujer de forma activa en el baile significaría, según el pensamiento local, una doble transgresión de la norma: una mujer haciendo el papel de hombre (dios-falo-mediador ritual masculino) no puede fecundar y tampoco puede ser fecundada.

Un análisis sobre la infertilidad

Según los esquemas culturales totonacos, la posición invertida de los danzantes en el ritual (cabezas abajo, unidos a la parte superior del tronco a través de una soga) propiciaría la infertilidad, que sería, sin embargo, unidireccional; pues según se afirma en la propia comunidad, estaría restringida al sexo femenino. Por lo tanto, provocaría incapacidad de concepción en las mujeres que la practicasen.

Ahora bien, ¿por qué existiría una «disfuncionalidad de las mujeres» si participaran en la danza? Si bien existen ciertos conocimientos establecidos en una comunidad, no significa necesariamente que sean tomados en cuenta, mucho menos que sean categóricos. Bárbara, voladora del Tajín, pertenece a una comunidad que le ha prohibido seguir participando, aun cuando se conoce que tiene dos hijas. Lo mismo ocurre con Karina, madre de dos hijos, voladora de Cuetzalan junto

a sus dos hermanas y a su padre quien es el caporal del grupo. La gente cree que las voladoras se quedarán estériles porque sus interpretaciones no están fundadas en aspectos fisiológicos. Don Gaudencio Zimbrón, de Papantla, así lo explica:

> Se afirma que no deberían de hacerlo las mujeres. Al ser un ritual de fertilidad, el cielo es el varón y la tierra es la mujer. El elemento de la tierra es el fuego y lo del cielo es el agua. El objetivo, a través de la flauta del cuzco o capitán, es un ruego; es una oración a esta energía, a esta luz, a esta deidad superior para recibir la lluvia. Para que la tierra reciba esa lluvia. Así hay una fusión entre el cielo y la tierra. Entonces se crea la fertilidad de todo: las plantas, los animales, y también somos nosotros. En el descenso de los voladores hay un punto en que empiezan a abrir, de ahí la horizontalidad […] El hombre al no poder fertilizar biológicamente a la madre tierra, lo tiene que hacer a partir de una energía superior, y obviamente no podía ser masculino con masculino, pues el hombre biológico varón ruega a otro ser varón superior para que fertilice la Madre Tierra. Es la razón de que no encontramos mujeres voladoras.

Pero don Gaudencio sabe que, en realidad, sí existen. Afirma lo contrario porque se basa en su cosmología ideológica fundamentada en un juicio moral colectivo, ya que existe una norma de la práctica social y también una realidad corporal individual que se tiene que adaptar al conjunto de puntos de vista conformados (Héritier, 1996: 65). De esta manera, parte de la comunidad acepta lo que dicta la norma. Por consiguiente, si la colectividad modificase la tradición acaecería una desgracia, un castigo por contravenir el orden preestablecido. Entonces la «inversión física» debe ser comprendida como de esquemas sociales. No es tanto la física la que provocaría la infertilidad, sino concretamente una de tipo social: la del papel femenino dentro del contexto ritual totonaco; es decir, un nuevo papel activo de la mujer en el desarrollo de una danza tradicionalmente vinculada al sexo masculino.

De hecho, también hay otro prejuicio en contra de las mujeres voladoras: ser consideradas homosexuales. Las entrevistadas dicen que las llaman, de manera despectiva, «las pilatas o los pilatos», o sea, traidoras (probablemente refiriéndose a Poncio Pilatos quien propició la muerte de Jesús de Nazaret), y que quizá conlleva un miedo hacia lo diferente.

Según la explicación de Mary Douglas [1966] (2002: 115), una mujer que ejerce el papel del hombre no es mujer, pero tampoco hombre. Por ende, ello es una contaminación de la sociedad, en términos de puros e impuros, que veremos más adelante con la filosofía médico-griega. El binomio mujer/hombre no logra colocar a las voladoras de un lado ni de otro, sino en un estado intersticial, liminal, un binomio de puro/impuro: peligrosas.

Si la labor activa de «mediación» para la fertilización, que debiera ser llevada a cabo por «dios-falo-hombre», es efectuada por una mujer, el proceso no se completaría correctamente. Según la idea totonaca, este hecho acarrea desgracias en la cosecha, en las lluvias, etc., porque la fertilización no se ha realizado con éxito. Así, una mujer que ejerce el papel de hombre (fertilizar) no solo no puede ser fértil, sino que, por relación simpática, imposibilitaría la labor de la tierra en su condición de «ser fertilizada». Tal y como afirma Douglas «la persona que ha de pasar de uno a otro está ella misma en peligro y emana peligro para los demás» (115).

Françoise Héritier (1991) explica cómo se construyó el concepto de «naturaleza femenina» buscando los orígenes de las desigualdades. Según la teoría evolucionista de J. J. Bachofen (1992), en el principio se realizaban cultos a las diosas madres y había una dominación política y económica dada por las mujeres. Para Maurice Godelier (1976), en las sociedades supuestamente más arcaicas, o sea las cazadoras-recolectoras, se habla de paridad de género. Un ejemplo es la sociedad matriarcal iroquesa[2] (región de los lagos Finger, los Mohicanos, los Onondagas, los Oneidas, los Cayugas y los Senecas), en la que la filiación era a través de las mujeres, la residencia matrilocal, y las matronas gobernaban las casonas, y la vida económica y política de toda la sociedad. Administraban y redistribuían tanto los productos de la cosecha como el de los hombres cazadores. Además, podían decidir no alimentar a los guerreros si consideraban que no era efectiva la estrategia de guerra que querían emprender.

Pero no en todas las sociedades existió la igualdad o el respeto hacia las mujeres. Llama la atención que en donde primó la supremacía y la violencia de los hombres sobre las mujeres, hubo mitos de origen que justifican la actitud varonil. Algunos ejemplos son los de los *ona* de la Tierra de Fuego (sur de Argentina y de Chile), de los baruya (Nueva Guinea), y de los dogón (África occidental). En los tres ejemplos, se trata de sociedades con marcado poder masculino que justifica con el mito su organización social.

Los mitos son diferentes en cada una de estas sociedades, pero tienen como elemento común la historia de una inversión de roles. Los de los ona hablan de un principio cuando las mujeres gobernaban, pero luego los hombres se apoderaron de sus poderes mágicos y les escondieron a aquellas la verdad del origen del poder. Los de los baruya saben que fueron las mujeres quienes inventaron el arco, es decir, la caza; y la flauta, símbolo de comunicación con los espíritus; no obstante, los hombres robaron ambos objetos. También los mitos Dogón tienen un elemento de desposesión a las mujeres del poder sobre lo sagrado por parte de los hombres.

Recordemos que el mito no es la efectiva historia de un pueblo, ni la narración de hechos acontecidos

en la realidad, sino que trasmite un mensaje cuya función es legitimar el orden social existente (Héritier, 1991: 96). De acuerdo con Lévy-Strauss (1969), el mito funciona por un sistema de categorías binarias como calor-frío, alto-bajo, derecha-izquierda, crudo-cocido etc. Como ya se explicó respecto a estas dualidades, se trata de opuestos que no pertenecen solo a la mitología de América Latina. También los encontramos en la cuna de la filosofía griega aristotélica, al afirmar que el equilibrio del mundo se define por los hombres, a través del equilibrio del cuerpo. Hemos observado en el caso de las mujeres voladoras que, según los totonacos, de participar en la danza, ellas quedarían estériles, mas no los hombres.

El mito, la cosmogonía y la tradición cultural

¿Hasta qué punto el de los voladores de Papantla es un baile ritual en consonancia directa con la fertilización de la tierra, dentro del esquema del pensamiento totonaco? ¿Hasta dónde la reelaboración de este discurso dual planteado de fertilización (dios-activo-hombre-falo versus tierra-pasiva-mujer-útero) ha sido una forma de no perpetuar la situación social pasiva de la mujer en el contexto ritual totonaco? ¿Cuánto del valor de la participación femenina o masculina se resignificó a partir de que la mujer decidió tomar parte en el ritual?

Cuando hablamos de la prohibición a las mujeres de participar en él, no abordamos un tema exclusivo de género, entramos también en el discurso de la tradición, que se puede explicar con la obediencia y desobediencia, sea al culto o la tradición en general.

Mircea Eliade (1965) dice que a la desobediencia sigue el castigo, porque no se puede transgredir la voluntad de las divinidades, y, así como son capaces de hacer el bien, de no respetárseles también pueden hacer el mal. Los actos rituales se apoyan en esa fuerza ambivalente. Una es benefactora, protege cuando se cumple con las normas salvadoras, con las ofrendas; la otra, en cambio, es mala e impura, tiene aspectos negativos y causa desorden e incluso la muerte, cuando se infringen y se pasa a un estadio profano. Entonces lo sagrado se convierte en algo peligroso. Ambos aspectos, el sagrado y el profano son dos caras de una moneda, mas no son opuestos sino complementarios. Lo verdaderamente peligroso no es lo uno ni lo otro, sino los estados latentes e intersticios entre los dos mundos, que la mujer danzadora propicia.

Utilizar la tradición como medio para justificar la exclusión es, en todos los casos, una manera de empoderarse del discurso en aras del propio interés. En este caso, ejercer una superioridad ritual, y por ende social, frente a las mujeres.

Desde luego, no se trata de un caso aislado. Antes señalé cómo en diferentes etnias se construyó la justificación de la inferioridad de las mujeres a partir de sus mitos. Estos, y sobre todo los aspectos duales en ellos contenidos —como el calor y el frío, lo húmedo y lo seco, el cielo y la tierra, etc.—, sirven para sustentar y dar sentido a las prácticas sociales; representan un orden de signos culturales (Héritier, 1991).

Como veremos a continuación no solo con las voladoras, sino también con los curanderos, las tres mujeres entrevistadas que se resistieron ante las normas, tienen elementos comunes. El más importante, que les permite ser aceptadas, aunque no totalmente, al menos por su familia y gente cercana, es el sueño. Como expresión de manifestación de la vida no terrenal con la terrenal, aquel es una premonición y a la vez un auspicio.

El sueño

Para la mayoría de las sociedades, los sueños establecen una comunicación entre el «mundo real» y el «otro mundo». Poblado este por los espíritus de la naturaleza y los ancestros, quiere darnos revelaciones.

Tres fueron las voladoras entrevistadas —Viviana de Zozocolco, Karina de Cuetzalan y Barbara del Tajín—, quienes explican que antes de volar soñaron con los integrantes del grupo que lo hacía e incluso con el acto en sí. El sueño es condicionante y propicia el permiso comunitario para danzar; si no por toda la sociedad, al menos por las respectivas familias que, en efecto, fueron las primeras en oponerse, especialmente por el peligro que la danza representa. Esto debido a la altura que va de los treinta a cuarenta metros.

Pese a que fueron obstaculizadas por una comunidad aferrada a la tradición de no permitir a las mujeres participar en la danza, ellas utilizaron el sueño como elemento cultural de la misma tradición para tomar parte en el ritual; porque cuando en una comunidad totonaca se sueña con hacer algo, significa que se hará realidad, lo que genera aceptación por parte de la misma comunidad.

Existe una dimensión social de los sueños. Además de la conexión entre estos y los mitos, que se proyectan en lo que se percibe mientras se duerme, se expresan también en un lenguaje mítico. Por ello, en todas las sociedades yace un uso social del sueño, porque la comunicación no acontece solo entre «nuestro mundo» y «el otro», sino entre un grupo determinado que comparte los significados y las interpretaciones que los sueños reciben. El análisis de estos podría ayudar a comprender e interpretar el mundo simbólico de los mitos para atisbar cómo se trasforma en experiencia

Todas las tradiciones están sujetas a cambios, variaciones y sincretismos; pero también a discursos simbólicos de los que detentan el poder; que usan los rituales y los hábitos culturales para justificar. Se requiere ir más allá de la defensa y respeto de los habitus que se rehúsan a cambiar.

vivida por los grupos sociales. A ellos se les atribuyen cualidades proféticas y diagnósticas en muchas culturas. Aunque su cualidad simbólica es interpretada de diferente manera. Mientras que en algunas sociedades el sueño no debe narrarse para que pueda hacerse realidad, en otras, en cambio, debe explicarse en detalle para que su interpretación positiva surta su efecto, como es el caso de las tres voladoras.

Cada sueño puede interpretarse con la ayuda de los significados que se han elaborado localmente (Galinier, 1985: 69-77). Galinier estudió a los otomíes de la Sierra Madre mexicana, cercana a las tierras donde viven las tres voladoras. Él explica que los sueños representan «las visiones del mundo de abajo», donde es necesario que los mitos, a través de ellos, se conviertan en experiencias de lo vivido y de lo cotidiano para que tomen sentido.

Lo mismo explica Robin Ridington (1988) cuando afirma que los actores sociales encuentran el mundo mítico dentro de la experiencia de una visión o sueño tenido en la niñez, así como la gente encuentra la estructura profunda de sus mitos cuando sueñan. Otro ejemplo de «pueblo soñador»: los sioux o lakotas de América del Norte. Ellos encontraban en sus sueños unos animales denominados *wakan* (término equivalente al *mana*, fuente de energía de la región y mitología polinésica), los cuales les comunicaban diferentes mensajes sobre la vida cotidiana, para adquirir poderes sobrenaturales, capaces de ayudarles en sus tareas (Vazeilles, 1974). Los sueños y las visiones no son en sí mismos significativos sin un trasfondo de información culturalmente codificado para darles forma y contenido. Las revelaciones oníricas son informativas solamente dentro de un sistema de conocimiento que espera ser revelado (Orobitg Canal, 2004: 397-410).

Encontraríamos entonces en don Gaudencio una explicación fundada en cierta cosmogonía propia, reformulada y gestionada por una parte de la comunidad (la que detenta el poder); y que se impone en la congregación de voladores de Papantla, al afirmar que es precisamente la tradición totonaca la que prohíbe el papel activo de las mujeres en la danza. Sin embargo, ese discurso es, a su vez, contestado, de manera silenciosa, a través de los sueños. Es la propia consideración del sueño como profecía de lo que «ha de suceder» la que dotaría a las mujeres voladoras del derecho arrebatado de volar junto a los hombres.

Sin duda, ambos discursos son fundados mediante lo invisible o aquello que sin ser explícito (ya que ambos referentes simbólicos se encuentran entre lo onírico y lo tradicional) reformula el discurso actual y la realidad social de las danzadoras de Papantla. Voladoras como Viviana y Bárbara utilizan los medios a su alcance: la desacreditación de los «guardianes de la tradición», como Gaudencio, por ejemplo; así como otro tipo de medios que entrarían más en contacto con el submundo mágico, en este caso, la premonición onírica.

Ambos discursos parten de presupuestos mágico-religiosos: la fertilización de la tierra, los sueños premonitorios, la cosmogonía totonaca. Los dos esconden una realidad absolutamente social, llena de paradojas, de continuidad-transformación de la cultura. Si bien pretenden no ser contradictorios, de serlo, responden a lo que la realidad social representa.

Las situaciones se adaptan siempre a su propio contexto. El problema de la indignación a propósito de que las mujeres dancen, reside en querer ver y dar por sentado que las culturas se perpetúan a través de los rituales; aun cuando no son siempre iguales, sino cambiantes; tal como cambian los contextos que las definen. Para decirlo con M. L. Bullen y C. Díez Mintegui (2002):

Este concepto de la tradición tiene diferentes vertientes: por un lado, el valor que acumula con el tiempo, por otro, el modo de trasmisión de generación en generación. La dimensión temporal se basa en la repetición y la continuidad en el tiempo, cobrando más importancia por el hecho de haber perdurado desde un tiempo más o menos remoto. El aspecto de la trasmisión es significativo no solo porque engancha con la vertiente del tiempo, sino porque establece lazos con la comunidad de los ancestros y crea vínculos identitarios. Da un sentido de coherencia y continuidad a un pueblo (42).

Pese a la fuerza de las tradiciones que se entretejen, las sociedades no son compartimientos estancos sin posibilidad de acceso: la red social es una urdimbre de relaciones selectivas y diferenciadas, llevadas a cabo por una persona vinculada con un número limitado de individuos. Las redes se entrecruzan y conceptos como la identidad y la tradición toman parte de una suerte de estructuras de sociabilidad que garantizan el funcionamiento coherente de la sociedad; pero lejos de ser entidades fijas y sólidas, son de carácter móvil y fluido. En ese sentido, es sabido que ser mujer es fruto

de una identidad voluble que ha sido trazada y derivada socialmente en virtud de su necesidad, y que ha estado sometida a cierta idea de tradición históricamente consensuada. Tal y como señala Donna Haraway (1991):

> No existe nada en el hecho de «ser» mujer que una de manera natural a las mujeres. No existe incluso el estado de «ser» mujer, que, en sí mismo, es una categoría enormemente compleja construida dentro de contestados discursos científico-sexuales y de otras prácticas sociales. La conciencia de género, raza o clase es un logro forzado en nosotras por la terrible experiencia histórica de las realidades sociales contradictorias del patriarcado, del colonialismo y del capitalismo. (264)

A este respecto, resulta evidente que las normas establecidas para mujeres y hombres son diferentes y funcionan para reforzar las estructuras sociales de dominación-subordinación. Asimismo, estas están sujetas a crisis, como en el caso antes apuntado: las reivindicaciones de las mujeres voladoras y su dificultad a la hora de hacer uso de su libertad ritual son procesos de crisis que ayudan a reelaborar discursos y comprender mejor la realidad social que se vive.

Para Edgar Morin (1984), la crisis profunda comporta una ambigüedad entre su carácter destructivo (desorden, dislocación, desintegración) y sus posibilidades creativas que permite poner en marcha, en este caso, un esfuerzo de búsqueda que puede llevar al arreglo y a una nueva integración entre mujeres y hombres. Para muchas personas la actitud de las mujeres que intentan entrar en el juego de los voladores, más que una transgresión de las normas, es una provocación y casi un crimen. Pero las transgresiones tienen a veces efectos positivos. A fin de cuentas, estas brechas sociales suponen nuevas oportunidades que invitan a pensarse sociedad, totonacos y mujer. Por consiguiente, el propio hecho de pensarse supone una acción performativa hacia nuevos horizontes de significación.

Hemos tratado de forma más exhaustiva el caso de la danza de los voladores; pero, en general, encontramos el elemento del sueño también en otros contextos, como por ejemplo en el proceso de iniciación en el arte de la curación. Ser curandero nace de una capacidad propia, de una vocación y también del aprendizaje, ya que la mayoría son hijos, nietos o sobrinos de personas que también lo han sido. Por ello podemos afirmar que el arte de la medicina tradicional también es parte de la llamada enculturación, porque es cultura trasmitida.

No obstante, «un don» por sí solo no basta. El arte del curar también debe ser aceptado por la comunidad para poder ejercer como curandero. Alberto, curandero del parque temático del Tajín, nos cuenta su *kilhsukut*, que en lengua totonaca significa iniciación en el arte de curar. Su don despertó a los doce años, cuando se enfermó. Sus padres no tenían recursos para curarlo, así que le ponían cataplasmas en el estómago y le daban bebidas de hojas de chacá. No obstante, no se curaba. Por ello, una señora lo llevó a un curandero. Gracias a este, él entiende que también posee el don. Sin embargo, sus padres no aceptan que trabaje en la medicina tradicional.

Según Alberto, «el don es tener intuición», parte de las cualidades que se trasmiten de generación en generación. De hecho, él puede notarlas en su hija de diez años que, en sus palabras, «le está despertando el don». Pero lo más importante para detectarlo y que la comunidad pueda aceptarlo, es soñar con el suyo propio, tal como ocurre en el caso de las voladoras.

Durante los sueños, el don se revela a través de una epifanía, una experiencia mística que ilustra el destino y cómo debe encaminarse. En el caso de los curanderos, por ejemplo, a veces las hierbas que deben utilizar se aparecen durante los sueños.

En su iniciación como curandero, Alberto soñaba cada noche que viajaba, iba muy rápido y con pasos muy largos, pero sintiéndose ligero. Caminaba como si estuviera volando y cruzaba muchas tierras con pasos de gigante. La señora Guadalupe, partera y curandera, nos cuenta que en sus sueños de iniciación veía a Jesús bajar del cielo y darle las recetas. También le decía: «Baña tu cabello con la siempreviva, la flor de plátano, la penca de plátano colorado, para amarrar en las orejas del enfermo».

El don es llamado *staku* en lengua totonaca, que en castellano significa estrella. Según los totonacos, cada quien posee uno al nacer; y es a través del tiempo que lo va despertando, aunque muchas veces lo olvidamos, lo dormimos. Finalmente, para que se desarrolle necesita ser alimentado espiritualmente, afirman los totonacos.

Conclusiones

Evidentemente, es en relación con el ambiente y el contexto cómo se reconstruye la pertenencia, la propia condición, el propio eje identitario. A menudo convertimos elementos simbólicos en ejes de identificación consciente cuando los rescatamos del flujo de aconteceres que los modifican. De este modo, posibilitamos su preservación. Esto acontece cuando transformamos elementos de la cotidianidad en elementos de significados compartidos. Recordemos que solo a través de un proceso de socialización el significado puede volverse simbólico para una determinada cultura.

Los hechos sociales individuales se basan en la representación de una síntesis simbólica a nivel colectivo, que se manifiestan a través de una construcción práctica, la que otorga una identidad individual y colectiva simultáneamente, identidad

determinada por su complejidad cultural y en función de la pertenencia identitaria.

Los entramados subjetivos adquieren importancia para el sujeto cuando existe un consenso colectivo a lo largo de la experiencia de vida, transformando los procesos subjetivos en verdades inmersas en su espacio cultural. Cuando se unifica el conocimiento y la experiencia, acontece el proceso de construcción social del significado.

Respecto a las voladoras y los curanderos, en ambos casos se busca el consenso de los ancianos. Tal como indica en su entrevista el caporal Miguel Tirzo Vásquez, resulta crucial encontrar significados y acuerdos para que la comunidad integre y acepte, sea que las mujeres participen en la danza, sea que los curanderos ejerzan el don de curar.

Notas

1. Se refiere a los cuatro puntos cardinales más el cénit. Se trata de una visión tridimensional por la cual bajan los cinco voladores.

2. Los iroqueses o *haudenosaunee* son nativos de América del Norte. Ese pueblo surgió alrededor de la región de los grandes lagos, inicialmente en el sur de Ontario, Canadá, y en el noreste de los Estados Unidos.

Referencias

Bachofen, J. J. (1992) *El matriarcado: una investigación sobre la ginecocracia en el mundo antiguo según su naturaleza religiosa y jurídica*. Madrid: Akal.

Bullen, M. L. y Díez Mintegui, C. (2002) «Hombres, mujeres, ritos y mitos: los Alardes de Irún y Hondarribia». En: *Perspectivas feministas desde la antropología social*. Del Valle, T. (ed.), Barcelona: Ariel, 45-78.

Castro de la Rosa, M. G. (1997) «La danza en el norte de Veracruz». En: *México Antiguo: antología de arqueología mexicana*. Ciudad de México: Secretaría de Educación Pública.

Douglas, M. [1966] (2002) *Pureza y peligro: un análisis de los conceptos de contaminación y tabú*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Eliade, M. (1965) *Le sacré et le profane*. París: Gallimard.

Galinier, J. (1985) *La moitié du monde: essai sur les rituels des indiens Otomi*. París: Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales.

Geertz, C. (1988) *Antropología interpretativa*. Bologna: Il Mulino.

Godelier, M. (1976) «Antropología y economía. ¿Es posible la antropología económica?». En: *Antropología y economía*. Godelier, M. (ed.), Barcelona: Anagrama.

Haraway, H. (1991) *Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza*. Madrid: Cátedra.

Héritier, F. (1991) «La sangre de los guerreros y la sangre de las mujeres». *Alteridades*, v. 1, n. 2, 92-102.

_____ (1996) *Masculin/Féminin: le pensée de la diference*. París: Jacob.

Lévy-Strauss, C. (1969) *Las estructuras elementales del parentesco*. Buenos Aires: Paidós.

Morin, E. (1984) *Sociologie*. París: Fayard.

Orobitg Canal, G. (2004) «Soñar para vivir: memoria, olvido y experiencia entre los indígenas Pumé, Venezuela». En: *América Latina, historia y sociedad: una visión interdisciplinaria, cinco años de Aula Oberta en la UAB*. Piqué, R. y Ventura, M. (eds.), Barcelona: Instituto Catalán de Cooperación Iberoamericana, Centro de Estudios Internacionales e Interculturales, Departamento de Antropología i Prehistoria, UAB.

Ridington, R. (1988) «Knowledge, power, and the individual in subartic hunting societies». *American Anthropologist*, v. 90, n. 1, 98-109.

Tylor, E. B. (1976) *Cultura primitiva: los orígenes de la cultura*. Madrid: Ayuso.

Vazeilles, D. (1974) *Interactions des indiens et des balncs dans la Cheyenne River Sioux Indian Reservation, South Dakota*. Tesis de grado. Universidad de París V.

©TEMAS, 2022

Tres análisis sobre cine y literatura

lectura sucesiva

Los tres los artículos incluidos en esta sección comparten su interés por el mundo artístico.

El Premio *Temas* de Ensayo 2022 indaga en la estética de los poetas posorigenistas: Fina García Marruz, Cleva Solís y Fayad Jamís.

Los otros dos, centrados en el cine, examinan el origen y crecimiento de las mujeres directoras colombianas, y la relación con la danza (el coreocine), desde las obras de tres realizadoras exponentes de este género.

Premio *Temas* de Ensayo 2022,
Estudios sobre Arte y Literatura

Cosmos visual, nueva semántica poética: hacia un posorigenismo

Ivette Fuentes de la Paz
Investigadora, ensayista y profesora. Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos P. Félix Varela.

Dentro del Grupo Orígenes (GO) y de la peculiar órbita que atrajo a otros poetas de indudable valía, prosigue la expresión de una poesía cosmogónica, asida a los elementos de una insularidad marcada por la *physis* (develada u oculta) que señala una base de trascendencia y espiritualidad, donde se apoya una vertiente que, en su primer momento, representó la participación de algunos de los propios integrantes del Grupo en etapas posteriores a su escisión, junto a un círculo de poetas jóvenes: Cleva Solís —llamada por Fina García Marruz «la otra poetisa de Orígenes»—, Roberto Fernández Retamar y Fayad Jamís, entre otros.

La pléyade de creadores que constituyeron la órbita origenista también abarcó a pintores, que integraron en su quehacer elementos característicos de una poética grupal. Enmarcados primeramente en la revista *Orígenes,* continuaron proyectando lo esencial de aquella labor una vez concluidas sus ediciones.

La interconexión entre poesía y plástica que la impronta de estos jóvenes pintores proyectó en el GO otorgó un sustento esencial para condicionar en los poetas una «imagen visual» —que en José Lezama Lima fue determinante y lo llevó a fijar su «escritura figurativa». Aquí es donde encontramos un influjo atrayente para los meandros de un «posorigenismo»[1] en artistas con un doble visor —poetas y pintores—, como la paradigmática Cleva Solís y Fayad Jamís, en cuyas obras —escriturales y pictóricas— están los basamentos de una representación visual sostenida por el fervor hacia la naturaleza cubana.

Esta primera etapa fue deudora de la labor de René Portocarrero, Mariano Rodríguez, Amelia Peláez, Luis Martínez Pedro, Carmelo González, Wifredo Lam, Fidelio Ponce, Roberto Diago, Arístides Fernández, por mencionar a los más concurrentes en el «taller renacentista» que fuera la revista; concurrencia justificada por la sintonía estética entre ellos y los poetas, la cual fijó coordenadas de gran valía y decisiva expresión para los derroteros de la poesía cubana.

La importancia que tiene la naturaleza para la construcción de una imagen visual en la estética origenista marca la relevancia que se le da a esta en la pintura. El color —como regalo de la luz— es fundamental. El cromatismo destacado en las cubiertas e ilustraciones interiores de la revista es punto de apoyo para una mancomunidad entre artes plásticas y poesía. La manera de concebirlo —como esplendor de un referente natural abierto a un paisaje que crece como cultura— ha sido enfatizada por José Lezama Lima (1970), quien dice de los colores insulares: «Nuestro blanco no es una túnica penitencial de Zurbarán sino es el halo contrastado por el color amarillo, es también el cono de la luz del torbellino y del dios que huye» (131).

El referente natural aparece igualmente en la base configurativa de la imagen plástica como expresión visual, y de la profundidad de su arraigo dependerá el mayor coeficiente de tal visaje. Es por ello que la creación —poética y pictórica— adquiere una necesidad imperiosa de buscar sus correspondencias reales —paisajísticas, geográficas, culturales, históricas—; significación extendida de una semántica que enriquecerá la imagen lograda. Por este amplio significado, José Lezama Lima lamenta la falta de un período «larval», tradición sostenedora de la cultura de un país, y que en Cuba se deshace por una inconsistencia real, latencia tan desasida por la que el poeta cubano busca afanosamente signos visibles de enlaces con la historia universal, lo que expresa en su texto «Paralelos. La pintura y la poesía en Cuba...»:

> Entre nosotros es casi imposible configurar una tesis o un punto de vista aproximativo sobre nuestro pasado, ya de poesía, ya de pintura, porque los diversos elementos larvales aún no se han escudriñado, ni siquiera señalado su regirar ectoplasmático […] Lo larval solo podemos captarlo en sus mutaciones, en su devenir para llegar a ser cuerpo, una forma, una materia artizable. (126)

De este modo, la «materia artizable» constituye una clave de salvación para distinguir esa historicidad —larvalidad originaria— que, en su amplitud figurativa, va dando muestras de sus «más variados rostros». Aparecen unidas, tanto en su percepción como en su aprehensión, la poesía y la pintura; y se revela la integración del paisaje y el color en una «plenitud» que acerca la naturaleza a lo creativo, en una relación equitativa poesía-naturaleza.

Como orgánica evolución de una lírica que partiera de esta cosmología visual y poética, continúa el quehacer, más allá de la etapa origenista, de figuras que validaron con su propia obra una intertextualidad, urdimbre crecida que regalara una nueva semántica de la poesía.

Marcaciones y enlaces de pintura y poesía: Fina, Cleva y Fayad

Tanto en la etapa origenista como en la siguiente —y también en posteriores círculos de desarrollo—, existe una original forma de expresión que se manifiesta en la intertextualidad y enlace entre poesía y artes, donde destaca la plástica, anclada en esa urdimbre entretejida por la luz, que acoge una peculiarísima mirada poética, pero que se complejiza más a partir de ella para fijar otros lazos comunicativos con la música y la cinematografía; mancomunidad de intereses orgánicos, fuertemente conjugados en el quehacer origenista, cuando poetas, músicos, pintores, cohesionaban —con sus muy particulares cosmos visuales— una estética común que cimentó bases para un entrecruzamiento de miradas que, desde la poesía, supo insertarse en la dinámica de los nuevos tiempos.

La expresión «posorigenista» de una primera órbita fijada en Fina García Marruz, Cleva Solís y Fayad Jamís señala los cauces por donde transita la lírica cubana en su rumor de constante diálogo con la naturaleza, y que, más allá de continuidades o rupturas con anteriores etapas históricas, refuerza los enlaces por donde pervive el ritmo de gran todo que es la poesía cubana.

La obra de García Marruz, integrante de la llamada «segunda generación origenista», estuvo marcada, desde sus primeras expresiones, por un sentido acusado de la «forma», que ya prefiguraba la plasticidad que luego continuó, en una etapa posterior, sustentada en su concepto dialógico de lo «exterior conocido» y «exterior desconocido», cotas de su imagen visual. La especial connotación que otorga a los paisajes interiores, destacados a partir de un visaje de lo exterior, los comunica con la base objetual, próxima y familiar de sus contenidos, revelando la esencia que los enlaza con el entorno, y que ella alcanza por la profundidad de sus «miradas perdidas»;[2] allí donde solamente puede llegar, más que la razón, la emoción, para descubrir el «saber del alma» (Zambrano, 1987).

El dominio abarcado por la mirada se exterioriza como forma donde late una esencia aún más íntima. En concordancia con el pensamiento de Friedrich Schelling —pensador alemán, propugnador de una filosofía de la naturaleza, con quien le encontramos comunidades de espíritu y puntos de contacto sorprendentes—, Fina García Marruz parece decirnos que «la naturaleza es el espíritu visible, y el espíritu es la naturaleza invisible» (Schelling, citado en Castano Pinau, 1954: 14), secreto de su constante movilidad. La dicotomía entre lo visible y lo invisible, que para ella es la sutil diferencia entre lo «exterior-conocido» y lo «exterior-desconocido», es parte de una relación de semejanza, señalada por Michel Foucault (1968) en la «simpatía». Según el filósofo francés, la semejanza es «la forma invisible de lo que, en el fondo del mundo, hacía que las cosas fueran visibles, sin embargo, para que esta forma salga a su vez a la luz, es necesario una figura visible que la saque de su profunda invisibilidad» (35). Para García Marruz esta figura será la preponderante de «lo exterior».

La luz, como elemento de la naturaleza insular, se había expresado en sus primeros libros de la etapa origenista de manera metafísica; sin embargo, en un ciclo posterior, particularmente en *Habana del centro* (García Marruz, 2008, t. II: 33-7), se personaliza, muy en consonancia con la coralidad que representa su mundo más allegado. Es adecuado establecer la comparación entre la apropiación del tema de la luz en el poema «Príncipe oscuro» (t. I) —a nuestro juicio uno de los más imponentes y cosmogónicos de la

autora, a la vez que hermético y místico—, al atisbar con fuerza inusitada arcanos comunes y universales. Con la reverencia y suficiencia humana, se postra ante el *Deus absconditus* que habita lo oscuro:

Nada entiendo, Señor, di lo que he sido.
Virgen es todo acto, el más impuro.
Yo no puedo llegar a esos oscuros
ángeles que he engendrado y que he
movido.
Acto, reminiscencia de lo puro,
que tan solo una vez he poseído.
¡Oh su extraña inocencia en lo perdido,
que espera tus nevados ojos duros! (96)

El poema apoya su hermenéutica en la naturaleza de los dialogantes, esto es, entre el imprecado Príncipe oscuro como «luz negra» y la poeta que lo interroga, plena de oscuridad por la duda. La angustia de no entender la semejanza y no hallar la procurada unión dialógica: la verdadera intimidad —«que es siempre extraña como un ángel» (2003: 76)— es el no reconocimiento de Dios en «sus nevados ojos duros» (2008, t. I: 96).

En un acto de apropiación e integración con el entorno, el mundo y los hombres que la rodean, el tema de «lo oscuro» sigue crepitando como luz manifestada, pero continuada en su luminosidad no vista —ahora no reconocida—, ahí donde el brillo humano se esconde ante la incapacidad de «mirar» más allá de la forma apabullante de la excelsitud lumínica. El «príncipe oscuro» no será lo escondido en su misterio, sino el misterio develado al saber mirar. Tal dice en «También gloria al oscuro» (t. II):

Gloria al oscuro, al que no tocó el lado
Solar de la batalla, y padeció en la sombra,
al que bregó sin premio cada día,
aquel al que alcanzó solo
él informa mendaz, aquel que vigilaba
un tesoro incomprendido aun para los propios
hermanos, el que temió a sus solas
—y no por una impura posesión!— el que tembló
a sus solas, él sabe bien por qué. (158)

Ese «vencimiento de la luz» —tal como fuera para José Lezama Lima en su poema «Noche insular, jardines invisibles»— muestra una proyección desde el entorno íntimo hasta un universo mayor, testimonial de otras miradas.

El entrecruzamiento de ópticas poéticas y artísticas tonificarán su evolución posterior y alcanzan una propuesta original en tres secciones poéticas de *Habana del centro*—«admirables por unitarios», según la investigadora Carmen Ruiz Barrionuevo (2011)—: «Viejas melodías», «Créditos de Charlot» y «Los Rembrandt de L'Hermitage», que promueven, en la intertextualidad entre cine, poesía y música, una ampliación de semánticas poéticas que, según el investigador Wilfredo Hernández (2000), «componen una poesía que atiende más a los sentidos que a las preocupaciones sociales previstas en *Visitaciones* (1970) y *Viaje a Nicaragua* (1987)» (236), lo cual vemos como una incorporación de intereses que se sumarán a los anteriores, y que acusarán siempre una óptica para las formas —fenoménicas, anímicas— que comprende la riqueza y multiplicidad del mundo.

En «Viejas melodías» (2008, t. II: 160-72) se siente esta integración al engarzar las melodías del mundo como sonidos esenciales en su elementalidad. Los recuerdos —tal como aparecen en la poesía de Fina— se fijan en el entorno familiar y son evocados. La «pobreza», como síntoma reverencial del mundo que se ofrece en su pureza, se trata en el poema dedicado a la cantante y bailarina Josephine Baker:

Josephine Baker olvida
el baile de los platanitos años treinta,
los tiempos de la Mistinguette y el sombrero de pajilla,
los finos music-hall,
las grandes ropas de gran ave del Paraíso
[…]
Empieza a cantar (después de los doce números)
la primera canción de la noche:
«Oh, hazme creer».
Con acento entrecortado, y medias
palabras, entrando, sin querer,
siempre un poco a destiempo
(la vieja barcaza por el Mississippi,
Baritonalmente,
como una melodía). («Josephine Baker»: 167)

La conjunción poesía-música —la más raigal señal de sus comunes orígenes— aparece igualmente para develar ámbitos de la cubanidad, signo evidente del arraigo origenista que pervive; por ejemplo, algunas de sus piezas elegíacas: «Rita Montaner» (83), «La voz mulata» (82), «Convergencias de Miguel Cuní» (89), entre otras.

En «Créditos de Charlot» (173-205), Fina manifiesta sentida admiración por el emblemático personaje. En *Hablar de la poesía* (1986) le dedica varios párrafos y lo corona con la divisa de la sencillez y la pureza su figura: «Aun la existencia más dichosa —diría— es tan trágica que la alegría me ha parecido siempre lo más conmovedor, porque quien nos la da también es un mendigo. Adoro esa humildad desgarradora de la alegría» (437). En los poemas que agrupa, donde el verso corto remeda el sobresalto y las sensaciones del ritmo de las viejas películas, se descubren nuevamente las antiguas pasiones por el cine y el circo, evidentes en sus primeros poemas. En estos sobre Charlot, ceremonia su respeto por los seres más humildes e iluminados por su «saber del alma». Además del muy comentado «Cine mudo» (2008, t. II: 178), magnífico ejemplo de concisión y sabiduría poéticas, nos interesa resaltar «El equilibrista, la doncella y el vagabundo», ya que será un firme pilar —marcación—, donde la poesía «posorigenista» se apoyará en la búsqueda de figuras

claves y señeras que enuncien estados anímicos. Este poema nos trae la reminiscencia del que fuera «pórtico» del poemario *Sonetos a Gelsomina,* de Raúl Hernández Novás (1991), y que aparece como referencia de la pieza «Charlot y la luna», de Fayad Jamís (1985: 53), quien, al igual que Fina, establece concordancias y enlaces ejemplares con el entorno familiar y social de Hernández Novás. Citemos un fragmento ilustrativo de «El equilibrista, la doncella y el vagabundo» (García Marruz, 2008, t. II):

Los ojos de
Rex el equilibrista
fulguran
muy atrás ya
las carpas del mal tiempo
El negocio que va marchando bien
Inaugura
algo menor
Oficinista casi ya
de maletín
ultra rápido
atraviesa sin riesgo lo difícil
asciende a caballero
vuela a mago
o compra bombín
capa de estrellas
y deslumbra al público
pequeñito
allá abajo
y con el paso elástico
del vencedor
con juego limpio
roba a los ojos ilusos
del sueño. (173-4)

Aún con mayores resonancias en la poesía posterior a la segunda hornada «posorigenista», leemos: «A dónde irá», cuyos primeros versos recuerdan los de Hernández Novás sobre la figura de Gelsomina como «poverina», y ofrecen un paisaje semejante al que él brinda en su recreación del Gran Teatro del Mundo y el Gran Circo Giraffa; y que en Fina resume la figura de Charlot como símbolo:

A dónde irá la doncella
la siempre desvalida
este empresario no parece su padre
ella está sentadita en la puerta
de un carromato de circo estacionario
y un letrero de oro
los de la compañía comen
ella hace ojos
a dónde irá
atraída
por el fueguito del desconocido
que resulta el amigo único (174)

En «Los Rembrandt de L´Hermitage» (284-93), la autora vuelve a introducir el tema de la luz para una conjunción de plástica y poesía, iluminación proyectada en el mundo de las formas. La simbiosis entre ambas artes refuerza el sentido de la imagen visual en la poesía origenista —ya comentada— y que se perpetuará como tema en Cleva Solís y Fayad Jamís, y en ulteriores generaciones.[3]

En este enlace con la pintura, Fina reinterpreta la temática del cuadro de Rembrandt, introduciéndose en las develaciones (revelaciones) de la luz que hiciera el artista, en analogía exacta con la postura creativa, en un intento de identificación. Estamos en presencia de una conjunción plena entre poeta y pintor, que penetra «la luz del alma» del creador. Uno de las composiciones más ilustrativas de este bojeo lumínico por el ánima de lo visto es «Poema fallido a "Cristo y la mujer de Samaria"»:

Una luz rojiza toca
las gradaciones del pardo entre las sombras.
Pero no es lo más raro
el gracioso sombrero
rojo de que va tocada, ni las arremangadas
mangas dispuestas a su diario trabajo.
Ni siquiera ese desconocido
que pide como un mendigo y habla como un rey,
y ante quien ya es apenas pecadora, sino vuélvese
casi inocente, ante sus ojos,
arrasados de piedad. ¡Es ese diálogo
trino de las manos, la de él, que llama
a la fuente que salta a vida eterna,
la de ella, que se alza, como buscándola! (287)

Las metáforas intertextuales son manifestaciones de una misma condición: la dinámica dual entre los límites de una expresión corpórea que da fe de la importancia de la forma en su poética. Allí, en lo profundo, en la «naturaleza de las cosas»,[4] en su maravillosa circunstancia de existencia sensible y corpórea, acostumbra la luz hacer sus «visitaciones».

Cleva Solís participa del entorno origenista,[5] pero se desprende para ocupar un sitio propio que la hace diferente. Su universo poético se adentra en el vacío para iluminarlo con aquella luz que ha encontrado dispersa en el mundo, y que necesita, en todo su esplendor, para crear un orbe más suyo, donde halla las respuestas que la realidad no le otorga. Para llevar ese esplendor hasta el vacío, que es aún caos sin sentido, busca el alma de la tierra, aunque para eso deba «herir la luz con el espíritu de la locura» (Solís, 1998: 313). Se llena de la naturaleza del mundo, y organiza los colores para concebir su nueva urdimbre, no como una amalgama o empaste de inspiraciones superpuestas, amables o amistosas, sino engarzándolas como el pescador de perlas que hará de su firme red el más preciado cosmos. No podemos definir en ella los ámbitos precisos de la luz, porque no escapa a su mirada un matiz que no le diga alguna razón para ser la mayor cuando el color alcanza a ser una entidad animada, cuya ausencia demerita el espacio. En el poema «Lo desnudo» (139-42), Cleva habla de lo umbrío del bosque cuando la luz lo abandona en «abatimiento sombrío», lleno del «carbón de las sombras» (139).

Del mismo modo, los sentimientos blasonan alguna tonalidad, que se hace corresponder a esa cosmología cromática que va fijando nuevos espacios y visajes de luz. El «dolor» para ella será:

fuente
de negrísimas uvas, y fuertes moños de aceites lentos
que perece de ser acariciada
por sed alguna («Fuente negra»: 156)

Y el Ser, por el contrario, es capaz de vencer el claroscuro,

donde la luna y el sol
de la corriente titánica
de los escalones turbios
y las letanías
proyectan su luz
en la órbita
constante de su esfera» («Ser»: 114)

No es fortuito encontrar tal identificación entre su universo poético y el color, cuando el ojo avizor que mira la vida es el de la artista; por eso su contemplación es amplia y resbala por espacios que se expanden más allá de lo visible. Si bien ese animismo con que otorga vida a la naturaleza no es solo propio de ella —recordemos a los poetas de la luz, poetas de la noche, Juan Clemente Zenea, Luisa Pérez de Zambrano, José Martí, José Lezama Lima—, en Cleva se carga de un colorido inusual, al punto de sentirnos dentro de una espacialidad plástica que nos alcanza como si entráramos en su gran lienzo. Este colorido va creando un mundo totalmente ilusorio e imaginativo, de manera que, aunque tiene un parentesco con los arquetipos cromáticos de Goethe (1945) —que sintonizan con la corriente del psicologismo, y respaldan las más modernas de Max Luscher—, se desgaja de cualquier conformidad para dar su propia interpretación, pues es la «constelación articulada de significados» que organiza su propia cadena. Así, en su libro *Los sabios días* (Solís, 1998: 235-315) va nombrando los afanes de su nueva luz, la que reinventa. En «De los azules desconocidos»: «Los tonos acababan de bañar la luz tenue y la llovizna apacible. Las murallas apagaban sus oficios con la yedra y el cobre […] calmo azul volando en paz con la tarde» (249). En «De los grises»: «Son los huéspedes entre el esplendor y el naufragio, la cortina entre la oscuridad del tiempo y la claridad de los carruajes en las villas prodigiosas» (253). En «De los azules desconocidos» narra todas las tonalidades inimaginables como personajes: añil, azul marino, celeste, turquí, turquesa, pastel; aunque la mayor definición de color la encontramos en «Los documentos», al detenerse en el «sol blanco», donde nadie ha llegado. No se conoce poeta que le haya cantado a su corazón oculto y blando, pues siempre ha quedado en la superficie de su masa ígnea, quemante y fulgurosa, desde donde se le reverencia. Pero Cleva ha penetrado más y llegado a la calma del sol: «Solamente/ derribo el aliento/ de la espera/ larga y aterida/ Entro a un sol blanco» (240). Ha sido capaz de ver tras las apariencias y equivocaciones, porque su paseo está pleno de sabiduría. En «Los sabios días» enuncia la luz: «Hoy he visto las lámparas/ más fervorosas, de una iluminación/ inaudita» (296).

Con esa lámpara de iluminación inaudita, Cleva anuncia su mundo de nuevo color: una naturaleza que brinda un cromatismo que atiende a su íntima sabiduría, con la cual establece un diálogo, a través de cada color que impregna la vegetación, el bosque, las quintas, los recuerdos. En «El árbol» nos dice:

Guarda la luz
aquí sus prendas
más calladas.
Un niño de oros
rueda
buscando
su corazón más oscuro (248)

Bien ha comparado Fina García Marruz la poesía de Luisa Pérez de Zambrana con la de Cleva, pues en ambas existe un patetismo enlazado a lo natural, como si las salvara del cataclismo o las consolara. El poema «La vuelta al bosque», de Luisa (1997: 85), se llena de su queja y dolor. En «Las ofrendas», Cleva (1998) le regala a este lugar el color más plácido: el azul, y con él lo besa:

Es azul
y cae lento
y cruza las heladas
avenidas,
y va trastornado
y no intenta posarse
ni apartarse de su envío,
y es una suma breve
conmovida
de lo celeste (391)

Pero no se olvide: la supuesta placidez de la naturaleza que rodea la voz de la poeta no es el espacio apacible al que nos convoca, sino aquel del vacío que intenta llenar y rellenar con el colorido que reinventa. Los «ojos de la noche» —los de Lezama y William Blake— la miran, y pregunta: «¿Es la mirada grave de la vida?». Luego se responde:

Me trastorna
su seda lenta quemándose en mi fuego,
el sucio añil, el viejo ocre,
el blanco perla de las mariposas frágiles
bajo el chubasco frío. («Gris»: 115)

Las «frágiles mariposas» abren sus alas lejanas «musitando los amores/ de las materias/ de lo que sube sin rostro aún» («Limbo de las mariposas»: 119). Dibujar el nuevo rostro, informe aún, es tentación para la poeta que abre su diapasón para empastar su universo de luz, en ese Mundo Otro —del que hablara Patrik Harpur en su ensayo *Realidad daimónica* (2007)—, donde la imaginación despliega todo su

La expresión «posorigenista» de una primera órbita fijada en Fina García Marruz, Cleva Solís y Fayad Jamís señala los cauces por donde transita la lírica cubana en su rumor de constante diálogo con la naturaleza, y que refuerza los enlaces por donde pervive el ritmo de gran todo que es la poesía cubana.

arsenal sin que lo desdiga algún arquetipo, y la luz es herida sin que venga en su auxilio la cordura. Es cuando comienzan a asomarse las dríadas y las sombras de la tierra, la mancha, la trampa, la primera cifra.[6] Y más allá del blanco sol, se establece el «Diálogo con el fuego» (Solís, 1998): «Ha caído la luz como una lluvia/ pero la oscuridad/ como distancia fiel lo baña» (63).

El universo poético de Cleva Solís se instaura en un abismo, y allí lanza a jugar sus colores para iluminar tanta oscuridad y desequilibrio. Busca el espacio vacío con afán, para encontrar su lugar en el cosmos. Lo impreca: «Enséñame a volar aprisa, más aprisa que el viento» («El verbo»: 177). Ella parece habitar un lugar impropio, donde no se le ve. Desde allí convoca el mundo y los hombres para habitarlo y hacerlo existir:

> ¡Agregad dibujos a las arenas! ¡Hojas pecioladas, estrellas y difíciles animales que comen en la mano! Acostaos y observad vuestro techo y vuestras lámparas no os faltan. Que estamos dentro de un hogar infinito, que solo el cuerpo será separado del espíritu como el mar y la tierra, y todo lo demás es una sola criatura que se asiste, y nuestra tarea es consumación y alto sitio en la esfera. («Al viajero»: 192)

Es el hogar que ella forja el que recibirá la luz del fuego domesticado. Salta de uno a otro extremo del abismo para recoger colores, y a veces le asiste el temor de nunca regresar,

> *porque cada uno es una experiencia*
> *que Dios abandonó,*
> *un gesto con el cual solía valerse*
> *a tocar él mismo*
> *las abejas rubias de los Salmos*
> («Nunca regresaré a mí»: 152)

Cleva conoce la soledad, el espacio en que la luz se duerme y abandona. Pregunta Fina: «¿Hay una sabiduría de la luz, la simple luz física? Ella, ¿tiene que ver con nosotros? La visitante diaria, ¿nos ignora?» (García Marruz, 1998: 34). La otra poetisa la hace parte de sus dones, como un ofrecimiento y dice: «Cuelga la luz tejiendo/ la oscuridad siniestra/ de su llama/ con guirnaldas de flecos» (Solís, 1998: 215). La mejor respuesta, de la que son deudoras ambas poetas, la trae la española María Zambrano (1987) cuando habla de un nuevo modo de conocer por un «saber hacia el alma» que es apoyo a su filosofía como «sentir iluminante» (114). Esta ontogenia de la Luz hace entender la relación dialógica que llega a establecer con la razón humana y las distintas denotaciones que ha tenido, con similar correspondencia, en el largo proceso de conocimiento, entre las cuales está la de «iluminación divina» que permea el filosofar zambraniano. En semejante línea de entendimiento, la luz en Cleva se desgaja en su espectro de colores, pero con la misma función ontogénica: para crear —iluminar— el mundo. Pero con la luz, penetran las sombras, a las que no teme, porque sabe que «son la otra mitad/ del Canto de la Vida» (1998: 347-8). Son los colores evadidos, como los sentimientos de amor y de alegría que han huido. En uno de sus más bellos y profundos poemas, ella traduce ese imperio de la «desolación» (tan cercano a aquel de Gabriela Mistral):

> *¿Dónde están aquellas vigilias*
> *de contornos de esperanzas?*
> *¿la puerta presta a una cálida recepción?*
> *¿el oro fiel de la ternura de la madre,*
> *esa embriaguez de la serenidad de la casa?*
> *[…]*
> *Ya no arden los leños de la ensoñación,*
> *los días prodigiosos se han ido.*
> *La desolación cubre*
> *el tramonto, el quebranto, es un fiel alarido.* (365)

El universo poético de Cleva Solís es quebranto de quien clama por ser visto, por requerir el abrazo humano para entrar en el mundo que nos dibuja y pinta, que nos regala como ensueño. Ubicar su poesía en medio de un contexto de voces trepidantes, pero con otra vocación, aun las propias de los origenistas, es difícil. Centrarla en su propia generación, la de los años 50, adentrada en una poesía coloquialista o conversacional, ocuparía las formas dialógicas en las que se expresa, pero no los tonos intimistas y los temas de plena espiritualidad y trascendencia. Su mundo no es el real, sino aquel de los *daimones* secretos que todos llevamos, pero que en ella escapan y se delatan con particular brío. A veces algunos poemas —«Pan»— recuerdan la poesía matérica de la Mistral:

> *Y hay un pan*
> *que vino*
> *—pura alondra—*
> *en un recodo*
> *de la sal del día* (258)

En otros —«Los ofrecimientos»— la poesía quejumbrosa y rebelde de Alfonsina Storni, a ratos metafísica, que se esconde bajo la común estampa:

> *Cuelga la luz tejiendo*
> *la oscuridad siniestra*
> *de su llama*
> *en guirnaldas de flecos* (215)

Y hasta un neorromanticismo —«Coralillo»—, el que nunca abandonará la lírica, más allá de exteriorismos que lo quieran ahuyentar:

> Cuando la belleza cae sordamente echada en el arroyo de la corriente, cuando su rostro se deshace pulcro en rotos contornos de flor sin tregua, se escucha el sonido de sus lágrimas, abandonando los pliegues de su seda, y su andar distante se oscurece en las sombras (192).

Gran exégeta de su compañera en Orígenes, Fina supo ver, tras el frenético colorido de su verbo, el aura feérica e imaginaria de la luz y el color (García Marruz, 1998: 7). Como Juan Ramón Jiménez, con sus blancos perfectos, José Martí con el audaz violeta, Darío y su azul, los colores en Cleva se conjuntan para darnos el raro prodigio de lo siempre comenzante.

Otra de las voces más peculiares de la órbita inmediatamente posterior al origenismo, momento cuando los deslindes y pertenencias a la hornada fundacional se entretejen, es Fayad Jamís. Desde muy joven ya recorría con propio paso la «aventura de Orígenes», para luego, aún sujeto a la gravedad del centro irradiador del movimiento, transitar por el coloquialismo donde fue también una de sus figuras connotadas.

Nos gusta, sin embargo, recorrer el hilo que se atara al primer momento de su poesía, y desde allí ver los recodos donde fue fijando su huella. De este modo, vemos en él la primera y más fuerte marcación de un enlace con la naturaleza que, en su caso, no esplende paisajes rurales, campestres, sino las perspectivas urbanas que persiguió para, desde ellos, buscar la luz insular. No es de extrañar que el paisaje insular apareciera bajo el ropaje de lo urbano, develado por las argucias de la luz, cuando sabemos que estamos en presencia de un poeta que fuera a la vez pintor, lo que permitió las relaciones más agudas en los entrecruzamientos de ambas artes, para hacer de su poesía una *summa ars* que la colma de originalidad.

Fayad Jamís, como cantor de su época, índice muy notorio de la pléyade lírica de la Generación de los 50, no quedó, sin embargo, anclado en las formas y contenidos poéticos que el momento del gran fervor revolucionario exigiera, sino que guardó un espacio de mayor intimismo, visaje de amplia intensidad, que siguió expresando los nuevos paisajes, físicos y animicos. Próximo a lo que el ensayista Virgilio López Lemus (1988) dijera sobre los «signos de tipificaciòn de lo cubano» —en Fayad, que luego aparecerían en «la reafirmación revolucionaria» (308)—, asumimos ese engarce de su poesía al entorno social y político como segmento de una *physis* que engloba una «arquitectura espiritual» —diría Juan Ramón Jiménez (citado en Quiñonero, 2009: 11)— de gran poderío y atracción. Para Fayad, las luces de los nuevos tiempos se contemplan como parte de la solar de la ciudad, iluminada ahora por las convulsiones sociales que son parte cierta de los sentires humanos. No hay mejor ejemplo de esta cosmovisión que su conocido poema «Por esta libertad» (1985), donde concuerda la iluminación que su alegría otorga con las sombras que se han vencido, en un juego de luces que descubre las dimensiones de la revelación:

Por esta libertad que es la noche de los opresores
Y el alba definitiva de todo el pueblo ya invencible
Por esta libertad que alumbra las pupilas hundidas
[…]
Por esta libertad
bella como la vida
habrá que darlo todo
si fuera necesario
hasta la sombra
y nunca será suficiente. (103)

La relación palpable de la poesía de Fayad con el devenir histórico y con la circunstancia, no subyuga el sentido de una visión metafisica de esa realidad que se da a través del epifenómeno natural, con una total imbricación rara vez encontrada en nuestra lírica. En su poema «La antigua luz» se advierte nuevamente la relaciòn del claroscuro como índice contradictorio entre la belleza de esa naturaleza interna que es avasallada por las sacudidas de la injusticia social. Así dice:

La antigua luz
persiste
tiembla sin cesar
en las paredes los rostros de las botellas
Relámpago interminable sobre los cuerpos las cosas que van a morir
ahora mismo
mientras una paloma cae del cielo cubierta de sangre
mientras el viento destruye una puerta que que se cerraba sobre
un jardín
mientras las manos heridas de los albañiles le dan forma al mañana
en hierro y en ladrillo y en bloques de angustia y de sudor
los árboles estallan en colores o caen
la luz resbala suavemente en la piel de cada objeto
A veces las cosas se abren frutas maduras
para que nazca otra realidad (65)

La mirada del artista sabe bucear a través de la luz, y encontrarla aun en los espacios más sombríos. Influido por la poesía francesa, por las *Iluminaciones* de Rimbaud, por los balanceos de los ahorcados de Villon, por la grisura de la ciudad de las luces que es París para los marginados, en las metáforas de Fayad aparecen los transidos contrastes, físicos y anímicos, en pos de un anclaje en los terrenos firmes que son los propios e íntimos del hombre. Tal expresa en su poema «A la orilla del río»:

A la orilla del río hay un pescador
contemplando las estrellas de la tarde

Un mendigo duerme abrazado a su botella vacía
La oscura boina por alohada
Los pájaros picotean y saltan cerca de sus pies.
[…]
Y no es lo mismo la tarde en el flanco de un ahogado
que en las ramas donde toda la blancura del mundo
resplandece. (59-60)

Más allá del paisaje circustancial de otras latitudes, el panorama siempre develará la cubanidad como propia e íntima que lleva y encuentra bajo cualquier claroscuro. Todo se lleva «en el palacio de la memoria, en el humo del cuerpo» (35), lo cual expresa en uno de sus más memorables poemas, «Cuerpo del delfín» (Jamís, 1985), que parece no querer salir de los círculos gravitatorios de su primer origenismo, tan cercano a «El arco invisible de Viñales» y a «Bahía de La Habana», de José Lezama Lima (1985: 214 y 651), y al monumental «Testamento del pez», de Gastón Baquero (1998: 160):

En el jadeo de las aguas, en la incesante eclosión de las
/verdosas aguas,
¿qué cuerpo es más durable que la espuma?,
¿qué arrecife salta más ariba que la espuma?,
¿qué templo es más inmóvil que el templo de la espuma?
La ciudad está aquí, el amor está aquí,
Tú y yo estamos aquí, enre el amor y la ciudad,
Miedosos del mar y la ciudad,
Amando el mar y la ciudad
Y olvidando el mar y la ciudad por temernos y amarnos
/y olvidarnos
A nosotros mismos. (35)

La poesía de Fayad establece un hilo conductor desde la acusada espiritualidad de la poética origenista hasta una vertiente tan visitada por la poesía posterior, al entroncar formas y decires de sabor conversacional con una profunda simiente humana. En el entrecruzamiento de cauces artísticos, preminentemente la plástica por su óptica llena de luminosidad, acude también a las imágenes del cine en un afán de similitudes, para situar un emblema salvífico para la humanidad desvalida y sufriente, a lo que siempre cantara. Es ese el sentido de «Charlot y la luna», donde acude a la figura del «hombrecito» —tal y como hiciera Fina en los aludidos poemas de «Créditos de Charlot»— para regalarle al mendigo «un pedazo de luna»:

Charlot está ahí soñando entre los niños
Sus zapatos tropiezan en todas partes
Charlot está ahí los grillos han dejado de chillar
De la luna salen doce palomas
Que vienen a revolotear sobre el coro de los que juegan
Hasta que se posa en el pie izquierdo de Charlot.
[…]
Charlot aparece allá debajo de nuevo
Y se pone a silbar al son de su mambo
Mientras de su sombrero sale la luna la lámpara
/dulce del arrabal. (53)

Má allá de anclajes o pirotecnias verbales, siempre se encontrará un mundo de colores, los del pintor de la luz, cuando se entra al suyo que se acierta al abrir, como un pórtico, la verja de hierro.

En esta derivación constante de figuras que se metamorfosean para perfeccionar una imagen surgida de sus remanentes más auténticos, las formas creativas se ciñen como necesario diálogo. La conjunción de la poesía con el mundo natural explica el movimiento integrador del universo, que no es más que la figuración del mundo como imagen prevista en la mirada de estos poetas, que regalan con su cosmos visual nuevas semánticas poéticas.

Notas

1. El investigador Virgilio López Lemus (1997) propone el término de «neorigenismo», lo que infiere —a nuestro juicio— un resurgimiento, que creemos deja fuera una orgánica continuidad, sí recogida en el término propuesto del «posorigenismo», asunto que estudiamos con mayor profundidad en otros textos.

2. Aludimos al tercero de los libros de Fina García Marruz, titulado *Las miradas perdidas* (1951). Antes había publicado *Poemas* (1942) y *Transfiguración de Jesús en el Monte* (1947).

3. Dentro de estas generaciones es representativa la obra del ensayista y poeta cubano Roberto Méndez (2007), no solo por las constantes intertextualidades, sino por su interés temático en la pintura —en este caso, es cercano a Fina García Marruz—; y subraya esta inclinación que su tesis doctoral fuera un estudio de la pintura en la obra poética de tres escritores origenistas.

4. Aludimos a la importante obra de Lucrecio, *De rerum natura* (siglo I a. de c.), básico para todas las corrientes de la filosofía de la naturaleza.

5. Fina García Marruz (1997), en memorable ensayo la llamó «la otra poetisa de Orígenes», para dejar constancia de su integración al Grupo y de la valía de su impronta poética. El texto fue leído en el Coloquio «Las vanguardias tardías en la poesía hispanoamericana», organizado por la Universidad Complutense de Madrid en 1993, y publicado en las *Memorias* del evento, y posteriormente en la revista *Vivarium*.

6. Se alude a los poemas de Cleva Solís (1998): «La mancha» (62), «La trampa» (230), y «La primera cifra» (94).

Referencias

Baquero, G. (1998) «Testamento del pez». En: *Poesía completa*, Madrid: Verbum, 160.

Castano Pinau, A. (1954) «Prólogo». En: *La relación de las artes figurativas y la naturaleza*. Schelling, F., Buenos Aires: Aguilar, 7-23.

Foucault, M. (1968) *Las palabras y las cosas.* Ciudad de México: Siglo xxi Editores.

García Marruz, F. (1951) *Las miradas perdidas*. La Habana: Ediciones Orígenes.

_____ (1986) *Hablar de la poesía*. La Habana: Letras Cubanas.

_____ (1997) «La otra poetisa de Orígenes». *Vivarium*, v. XV, n. 1, 16-27.

_____ (1998) «La poesía de Cleva Solís». En: *Cleva Solís. Obra poética*, La Habana: Letras Cubanas, 5-42.

_____ (2003) «Lo exterior en la poesía». En: *Ensayos.* La Habana: Letras Cubanas, 75-85.

_____ (2008) *Obra poética*. La Habana: Letras Cubanas.

Goethe, J. W. (1945) *Teoría de los colores.* Buenos Aires: Poseidón.

Harpur, P. (2007) *Realidad daimónica.* Girona: Ediciones Atlanta.

Hernández Novás, R. (1991) *Sonetos a Gelsomina*. La Habana: Ediciones Unión.

Hernández, W. (2000) «Ni arte puro ni arte para: Fina García Marruz y la poesía de los noventa». *Romance Notes*, v. 40, n. 2, 235-44.

Jamís, F. (1985) *La pedrada*. La Habana: Letras Cubanas.

Lezama Lima, J. (1970) «Paralelos. La pintura y la poesía en Cuba (Siglos XVIII y XIX)». En: *La cantidad hechizada*. La Habana: Ediciones Unión.

_____ (1985) *Poesía completa*. La Habana: Letras Cubanas.

López Lemus, V. (1988) «Puertas a Fayad». En: *Palabras del trasfondo*. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 297-313.

_____ (1997) «Prólogo». En: *Doscientos años de poesía cubana*. La Habana: Editorial Abril.

Méndez, R. (2007) *La dama y el escorpión*. La Habana: Letras Cubanas.

Pérez de Zambrana, L. (1997) *Antología poética*. La Habana: Editorial Arte y Literatura.

Quiñonero, J. P. (2009) «Prólogo». En: *Querencia americana*. Fornielles Ten, J. (ed.), Sevilla: Ediciones Espuela de Plata, 9-21.

Ruiz Barrionuevo, C. (2011) «Fina García Marruz, el secreto del encuentro». En: *De qué, silencio, eres tú silencio*. García Marruz, F. (sel.), Ediciones Universidad de Salamanca, 9-78.

Solís, C. (1998) *Obra poética.* La Habana: Letras Cubanas.

Zambrano, M. (1948) «La metáfora del corazón». *Orígenes,* v. V, 114.

_____ (1987) *Hacia un saber sobre el alma*, Madrid: Alianza Editorial.

©TEMAS, 2023

Una aproximación al cine coreográfico de las pioneras norteamericanas

Carolina Martínez
Profesora e investigadora. Universitat de Girona (EU ERAM).

El objetivo de este estudio es analizar desde una perspectiva performativa, fenomenológica y poscinematográfica las posibilidades y la vocación inmersiva de la relación entre el cine y la danza, al tomar como eje el punto de inflexión producido con el nacimiento del denominado *choreocinema,* a partir la película de la cineasta de vanguardia Maya Deren, *A Study in Choreography for Camera* (1945).

El cine —nacido con la intención de registrar de la manera más fiel posible la realidad y su movimiento, y eternizándola, de alguna forma— y la danza —efímera por naturaleza— se unieron, fructífera y complejamente, desde los inicios del primero. Así lo vemos en los experimentos precinematográficos de Étienne Marey y de Eadweard Muybridge, a mediados del siglo XIX, con la cronofotografía de secuencias de movimiento; o en las imágenes generadas para aparatos como el kinetoscopio, cuyos temas recurrentes son los acróbatas y bailarinas. Podríamos señalar tres etapas en la evolución en paralelo y de afectación mutua entre ambas disciplinas.

La primera corresponde a las filmaciones de los orígenes del cine, caracterizadas por un plano fijo, un espacio uniforme, decorados pintados sin profundidad, y una danza que se adapta al encuadre propuesto por el camarógrafo, cuya mirada o intención apenas es perceptible, y el objetivo es la imitación de la realidad existente y la búsqueda de su inmortalidad. Como ejemplos de este momento inicial están las danzas filmadas a finales del siglo XIX: las de la bailarina Carmencita, por Thomas Edison en 1894 (las primeras conservadas); las diferentes «serpentinas» creadas por la bailarina Loïe Fuller y realizadas, entre otros, por Edison y los hermanos Lumière (1896); o las danzas acrobáticas de las Leigh Sisters, registradas por Alfred Clark (1895).

La segunda etapa gira en torno al mencionado punto de inflexión que se produce con el coreocine, a partir de la película de Maya Deren,[1] en la que se observa una evolución en la búsqueda de las posibilidades espacio-temporales de la cámara y el montaje, con el fin de crear coreografías para la cámara y el bailarín juntos, y, después, pasar a coreografiar todo lo que está al otro lado de la lente. Impera la fluidez que, por otra parte, tendrá su correspondencia en la danza moderna (impulsada por Marie Louise Füller e Isadora Duncan y consolidada con Martha Graham), que dejará de ser una suma de poses estáticas.

La tercera etapa comienza a mediados de los años 60 del siglo pasado con los experimentos de videoarte y danza posmoderna. Se consolida en los 80, con el uso generalizado del cine y el video por parte de la danza contemporánea (de la mano de coreógrafos como Anne Teresa de Keersmaeker o Wim Vandekeybus,

entre otros); y se extiende hasta la actualidad: un presente «caleidoscópico», en el que se aplican todas las tecnologías posibles al lenguaje coreográfico, y donde el cine y la danza se presentan como creadores de nuevas realidades que alteran el orden espacio-temporal establecido, al usar diferentes tecnologías inmersivas y de multimedia.

Esta perspectiva poscinematográfica nos servirá para analizar tres películas claves de Maya Deren, Shirley Clarke y Marie Menken, cineastas exponentes del primer coreocine, que nos ayudarán a entender cómo funciona esa concepción coreográfica expandida de la película, en la que intervienen el cuerpo del bailarín, los elementos al otro lado del objetivo y la cámara, pero también el cuerpo de las cineastas. En última instancia, intentaremos dilucidar cómo estos filmes actúan a modo de dispositivos coreocinematográficos generadores de una experiencia inmersiva en el espectador, y crean las bases para multitud de experimentos, los cuales —bajo diferentes denominaciones en función del soporte y los dispositivos utilizados— aúnan el cuerpo, la coreografía, las imágenes móviles y las nuevas tecnologías.

Pioneras del cine de vanguardia norteamericano y del coreocine

No es casual que el revolucionario género del coreocine viniera de la mano de esas cineastas mujeres que, como afirma Lauren Rabinovitz (2003), aprovecharon su marginalidad para crear un tipo de cine subversivo, que se adelantaría a su tiempo. Deren acompañó, además, sus avances técnicos y artísticos con numerosos textos teóricos, propulsó nuevas maneras de producción y canales de distribución, y abrió la puerta al New American Cinema,[2] al cual pertenecerán después Shirley Clarke —ganadora del premio de la crítica en el Festival de Cannes, en 1961, con *The Connection*—,[3] y Marie Menken —que acabó convirtiendo todas sus películas abstractas en coreografías reveladoras de una realidad, en principio imperceptible, para la fisiología humana.

Mientras que en Europa el que podemos considerar primer cine de vanguardia empezó a aflorar en la década de los años 20, en los Estados Unidos los experimentos fílmicos de esta naturaleza eran aún excepciones aisladas, cuando en los 40 y 50, Deren, Menken y Clarke empezaron a reivindicar el lenguaje cinematográfico como forma de arte y terreno de reflexión y experimentación. Sin embargo, a pesar de ser consideradas precursoras del New American Cinema —que no publicaría su manifiesto hasta el verano de 1961—, tanto ellas como la mayoría de las directoras de esa vanguardia norteamericana siguen siendo grandes olvidadas, al quedar sepultadas por sus contrapartes masculinos Jonas Mekas, Stan Brakhage, Willard Maas, Lionel Rogosin o John Cassavetes, entre otros.

Si seguimos la definición de película *underground,* que el propio Mekas hizo en 1964 (citado en Möller, 2019: 23), como «un acto de expresión radical, una revelación, desinteresada en la legibilidad general, preocupada nada más que por ser honesta con sus propias ideas y sus sentimientos más íntimos», las tres fueron, sin duda, de las primeras cineastas *underground* estadounidenses. Se acercaron al cine de una manera «amateur, en el sentido de amante» (Deren y Martínez, 2020: 207), sirviéndose de la libertad de movimiento de sus pequeñas cámaras Bolex de 16 mm, para salirse del marco impuesto por el Hollywood de planos estáticos y la industria cinematográfica mercantilizada de su época. Esto les permitió alcanzar un enorme grado de innovación y de borrado de los límites espacio-temporales. Abrieron la danza a otra dimensión, al jugar con la velocidad y el orden de los movimientos, y producir coreografías holísticas sobre la base de descontextualizar los elementos al otro lado del objetivo, recombinándolos de manera gestáltica en formas similares a telas de araña que atraviesan el espacio y el tiempo.

Maya Deren y *A Study in Choreography for Camera*. El nacimiento del coreocine

A Study in Choreography for Camera (1945) fue la cuarta película terminada[4] de Maya Deren. A partir de su colaboración con la coreógrafa de danza moderna Katherine Dunham, empezó a manifestar un gran interés por el coreocine, el cual comienza a aparecer de manera tímida en sus primeros filmes y se asienta definitivamente en la película que nos ocupa, acompañada, a nivel teórico, por el texto «Coreografía para la cámara» (Deren y Martínez, 2020: 69-72), publicado en el mismo año en *Dance Magazine.* En él, Deren explica su principal objetivo con la película: darle al bailarín «el mundo como escenario», para que la «danza trascendiese los límites pedestres» (70), y liberarlo de la fuerza de la gravedad. También manifiesta su esperanza de que comience a emerger «una nueva era de colaboración entre los bailarines y cineastas» en el terreno del *cine-danza* (71).

La película empieza con una panorámica —creada gracias al movimiento de la cámara y a la edición— de casi 360º, atravesando diferentes espacios no conectados en la realidad. La cámara gira de izquierda a derecha para detenerse en un plano general de Talley Beatty —bailarín de la compañía de Dunham—[5] quien, a lo largo de la película, va realizando su coreografía mientras aquella «baila» con él. Deren rebautizó el filme como *Pas de deux* porque, «aunque solo se ve

a un bailarín, la cámara es como una pareja de ese bailarín» (Deren y Martínez, 2020: 255). Lo acompaña en un *développé* imposible, que empieza en un bosque y termina en un apartamento, y lo traslada, gracias al montaje, al salón egipcio del Metropolitan Museum de Nueva York, donde él realiza —ayudado por la manipulación de la velocidad de la cámara— un giro de cabeza imposible, y después de pies. El filme acaba con un *grand jetée*, un salto ideal, también improbable por duración y longitud, que conecta diferentes espacios.

Deren explica cómo funcionaba ese dueto: «Mis coreografías para la cámara no son danzas grabadas por la cámara, son danzas coreografiadas para e interpretadas por la cámara y los seres humanos juntos» (citada en Clark *et al*., 1988: 289). Esta afirmación será clave en la configuración del género coreocine. Lo más característico de esta película, a nivel visual, es su fluidez y manera de conectar un movimiento del bailarín con otro, mientras atraviesa tiempos y espacios diferentes. Fascinada por la teoría de la relatividad desde el punto de vista conceptual, esta le serviría a Maya para seguir indagando, a nivel teórico-práctico, sobre el uso del espacio y el tiempo en el medio cinematográfico, al colocar al ser humano en ese nuevo mundo «relativo», y materializar las ideas de Henri Bergson (1977) sobre la imagen-tiempo e imagen-movimiento.

A partir de esta, al resto de sus películas lo denominará «coreografías para la cámara», porque ese elemento estaría siempre presente, traspasando las cualidades dancísticas a todo lo que tuviera delante de su objetivo, y diferenciando la función del coreógrafo de cine del de danza: «No se trata de coreografiar a un bailarín. Se trata de coreografiar todo lo que tienes en el plano, incluyendo el espacio, los árboles, los objetos animados e incluso los inanimados» (Deren y Martínez, 2020: 255); algo que Menken lleva hasta sus últimas consecuencias. Para Lauren Rabinovitz (2003),

> Deren materializó a través de medios cinematográficos lo que los coreógrafos de danza moderna como Martha Graham o Katherine Dunham podían solo imaginar dentro del medio espacial y temporalmente limitado de la actuación en vivo. (92)

Aunque esta fue, propiamente dicho, su primera película coreográfica, ella menciona en su texto algunos precedentes en secuencias de filmes anteriores —*Meshes of the Afternoon* (1943) y *At Land* (1944)—, donde la protagonista (la propia Deren) se desplaza de manera fluida y continua por espacios no conectados en la realidad, con la diferencia de que lo hacía con movimientos cotidianos y no bailando. Esta concepción dancística de lo cotidiano se prolonga en el cortometraje *Ritual in Transfigured Time* (1946), al producir una coreografía de acciones habituales en una reunión social; en *Meditation on Violence* (1948), que crea una parábola de movimiento que empieza igual que termina; y en *The Very Eye of Night* (1958), al coreografiar a los bailarines como si de constelaciones en el universo se tratase, creando varias danzas superpuestas y conectando el microcosmos de los danzantes con el macrocosmos, lo cual, en última instancia, era el objetivo final de su cine.

Shirley Clarke y *Dance in the Sun*. Asentando los principios coreocinematográficos

Dance in the Sun (1953), filmada por Clarke después de estudiar cine con Hans Richter, muestra cómo ella vuelca en sus primeros trabajos —incluidos *Paris Parks* (1954), *Bullfight* (1955) y *A Moment in Love* (1957)— la formación recibida, como bailarina, de las grandes coreógrafas de danza moderna Martha Graham, Hanya Holm y Doris Humphrey. Con coreografía e interpretación de Daniel Nagrin, *Dance in the Sun* cumple fielmente los principios «coreocinematográficos» que Deren había empezado a formular, sin ser Clarke consciente de ello y sin haber visto aún sus películas (Rabinovitz, 2003: 92). Premiada por la New York Dance Film Society, se filmó en un estudio de danza (aunque nada tiene que ver con otras filmadas así) y en una playa. Al principio de la película, el bailarín se prepara para su entrenamiento cotidiano, y, desde ese primer momento, la cámara lo sigue utilizando distintos planos: acercándolo, alejándolo, recorriéndolo y acompañándolo por el estudio y la playa, mientras él realiza un modelo de coreografía bastante repetitivo al que añade pequeñas variaciones. Gracias al uso del montaje, se ven las mismas transiciones imposibles que en la película de Deren, trazadas por los *développés* y los giros del danzante. El dueto entre la cámara y él se amplía a una danza más global, al jugar con los fuera de campo del artista y coreografiar las dunas, el cielo, las olas. Con todo ello se crea un patrón rítmico de movimiento que se acelera hasta su clímax, después del cual, el intérprete, a modo de epílogo, empieza a recoger su chaqueta en la playa para terminar esta acción en su estudio.

Clarke formuló su película, conceptualmente, de manera muy similar a como lo hizo Deren, sin conocer aún sus ideas:

> La clase de cosas que descubrí sobre la coreografía del montaje y […] el espacio/tiempo venían ya de mi primera película. La idea de saltar de la escena para aterrizar en la playa […] se me presenta como un salto maravilloso, no solo mágico, sino conceptual, como una manera de abarcar el universo. (Clarke, citada en Rabinovitz, 2003: 97)

En esta cita, se refleja de manera clara la concepción expandida y gestáltica del coreocine: conceptual y con una vocación de desbordamiento.

Maya Deren, Marie Menken y Shirley Clarke empezaron a reivindicar el lenguaje cinematográfico como forma de arte y terreno de reflexión y experimentación. Sin embargo, a pesar de ser consideradas precursoras del New American Cinema, tanto ellas como la mayoría de las directoras de esa vanguardia norteamericana siguen siendo grandes olvidadas.

Marie Menken y *Lights*. Cine coreográfico abstracto

Mientras que *A Study in Choreography for Camera* y *Dance in the Sun* son coreografías para la cámara y el bailarín juntos, *Lights* (1964-1966), de Marie Menken, es una danza de luces, sin bailarines, que revela, debido al trabajo con la abstracción de las imágenes, otro plano de la realidad, y manifiesta otras posibilidades del género. Esta película se realizó dos décadas después que la de Deren, aunque Menken, desde su primer filme, *Visual Variations on Noguchi* (1945), expresó un gran interés coreográfico. Sus películas —donde ella siempre está presente fuera de campo, si no visible, intuible— nacen de la interactuación del cuerpo con la realidad del otro lado del objetivo, y componen coreografías que esperan, en alguna de sus capas de existencia, ser descifradas. De entre ellas,[6] *Lights* —filmada durante la medianoche de tres navidades consecutivas en la ciudad de Nueva York— es la de más marcado carácter coreográfico, hasta el punto de que es posible contemplarla como la notación de su propio movimiento. Se la puede considerar heredera de los experimentos del primer cine de vanguardia europeo, que manifestaban de manera evidente la cualidad dancística del medio, por ejemplo los de René Claire o Fernand Léger, y algunas de las denominadas «sinfonías de ciudades». Estos, recurriendo a los primeros y primerísimos planos, convierten el realismo en una suerte de expresionismo abstracto, como también hará Clarke, en 1958, en *Bridges-Go-Round*. *Lights* —igualmente heredera de *Feu d'Artifice* (1916-1917), ballet de luces futurista de Giacomo Balla— ofrece una coreografía que tiene que completar el espectador, al integrar los elementos visibles de la película (las luces grabadas) y los no-visibles (el cuerpo de Menken y la cámara), y mostrar esa voluntad gestáltica y universal hacia la que apuntaban Deren y Clarke. Esta «poeta del cine»[7] y «bailarina de la cámara», como la llamaría Jonas Mekas (2013: 61; 2017: 133), que la usa de forma performativa, como si fuera una brocha, va trazando movimientos circulares, verticales y horizontales, que se suman a su caminar. Crea una coreografía virtual integrando el movimiento de su cuerpo con el del aparato y el de las luces de las fuentes de Park Avenue, las fachadas de los edificios y de las iglesias. Juega con la velocidad de las imágenes, tanto en la filmación como en el proceso de montaje y, hacia mitad de la película, estas se aceleran y se hacen cada vez más borrosas; descomponen este collage móvil, donde al principio podíamos adivinar algunas figuras, en líneas y puntos de luz bajo los cuales subyace la latencia de la ciudad; una sinfonía abstracta que revela la realidad que Menken percibe. La artista, produciendo «efectos de manchado, borrosidades, frotado, difuminado y retorcimientos, hace que las zonas de indiscernibilidad emerjan a través de líneas, movimientos, volúmenes y colores» (Rodowick, 2018: 103), al derivarse la abstracción en la película de una gestualidad concreta.

Este cine abstracto sería en sí, para David Norman Rodowick, uno realista que actúa como revelador de lo no perceptible y «reajusta nuestras condiciones de interactuación con el mundo como experiencia visual» (108); anuncia la participación implícita del espectador, que tiene que completar lo que ve y cuya experiencia perceptiva de la realidad es modificada. Estas ideas entroncan con la categoría de «cine visionario», de Adams Sitney (2002), a la cual adscribiría a las cineastas aquí tratadas.

Dispositivos coreocinematográficos: cuerpo-cámara-imagen-montaje

A partir de estas tres películas, hemos visto cómo el movimiento de la cámara, del cuerpo del bailarín (en las dos primeras), de las luces (en la segunda), y de la cineasta (fuera de campo) crean una relación compleja, gestáltica, que en su totalidad diseñaría una coreografía global, completada en el proceso de montaje, pero también en el visionado por parte del espectador. Aunque *Lights* sea la única abstracta de las tres, *A Study in Choreography for Camera* y *Dance in the Sun* también lo proponen, de algún modo, más allá de las danzas visibles, «interpretadas» por el bailarín y la cámara. Se puede hablar de dispositivos coreocinematográficos, al entender «dispositivo» como «un esquema, un juego dinámico de relaciones que articula discursos y prácticas entre sí», descriptible a partir de tres términos que, en cada caso, deben ser «totalmente redefinidos y entendidos en sus relaciones recíprocas: el espectador, la maquinaria, la representación» (Albera y Tortajada, 2015: 44). Si Bergson (1977) afirmaba que «esencialmente virtual, el pasado no puede ser captado

por nosotros como pasado a no ser que sigamos y adoptemos el movimiento mediante el que se abre en imagen presente, emergiendo de las tinieblas a la luz» (49), estas danzas congeladas en el tiempo se nos abren desde su pasado encapsulado cada vez que visionamos las películas. Al activarse el dispositivo, esta «imagen presente» nos abriría a un mundo donde las «relaciones entre exterioridad e interioridad son fluidas y parte de un único *continuum* material, aunque uno infinitamente variable» (Rodowick, 2018: 108-9); un *continuum* al que Clarke hacía, de cierto modo, mención cuando hablaba de «abarcar el universo» (citada en Rabinovitz, 2003: 97) con las películas coreográficas.

El cuerpo de la cineasta como revelador de lo invisible

Si seguimos las reivindicaciones de Giorgio Agamben (2000), en las que el elemento del cine es el gesto y no la imagen, las tres películas serían una representación en sí del concepto de «imagen-movimiento» de Gilles Deleuze (1984). Imágenes cinematográficas que no son ni «poses» ni «cortes», sino «el paso regulado de una forma a otra […], como en una danza» (17), y revelan el gesto de las cineastas dentro de un todo continuo coreográfico virtual,[8] latente, que permanece invisible por nuestras limitaciones fisiológicas para percibirlo. La cámara y el cuerpo de las cineastas actuarán como un relé energético «que traduce la materia y la luz en una Imagen o Figura, en lugar de duplicar la percepción natural o proyectar la experiencia interior» (Rodowick, 2018: 110). En la misma línea, Mekas (2017) afirma: «lo que sea que el hombre expresa a través de la danza […] se transfiere a la película a través de la cámara, que a la vez es nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, nuestra intuición, nuestra alma» (134). Al actuar las cámaras de 16 mm como extensiones de los cuerpos de las cineastas, estos liberan las fuerzas de lo no-visible para producir una sensación (en sentido deleuziano) en el espectador y su sistema nervioso. Aquellas lo llevan más allá de la mera percepción fisiológica de lo tangible, y actúan de intermediarias entre dos sistemas de imágenes: unas filtradas por el cuerpo y sus límites, otras universales e inmanentes, que existen como potencial que subyace en el organismo y el sistema nervioso.

El cuerpo del espectador se abre a la experiencia del mundo

La participación activa del espectador y su implicación fisiológica entrarían dentro de los postulados de la «estética de lo performativo», tratados por Erika Fischer-Lichte (2013) en el campo de las artes, y extendidos a partir de los años 60. El uso performativo que hacen Deren, Clarke y Menken de sus cuerpos, de la cámara y del montaje nos devuelve, a la conciencia del nuestro, un cuerpo que completa una coreografía, materializada, actualizada en nosotros. Por un lado, los ojos del espectador hacen de pareja de baile de las imágenes, acompañándolas; por otro, él trata de descifrar, a partir de sus propias sensaciones corporales, casi inconscientemente, el movimiento del cuerpo latente de las cineastas y va por donde ellas lo van conduciendo, aunque no se mueva de su sitio; tiran de él; aumentan y reducen la velocidad a su antojo; lo detienen y vuelven a ponerlo en marcha. En última instancia, Deren, Clarke y Menken traducen su sensación de presencia y su conciencia fisiológica del presente y las traen al nuestro, ilustrando las ideas de Stan Brakhage (2001) sobre el cine como meditación y danza, cambiando nuestra manera de percibir la realidad.

La coreografía virtual oculta

Si Pierre Lévy (1998), al tratar el concepto de lo virtual, propone una mirada inversa a la habitual —de lo virtual a lo actual—, en este análisis partimos de las imágenes actuales de las películas para encontrar la latencia virtual de sus coreografías ocultas, que acabarían en una nueva actualización consolidada en nuestro cuerpo de espectadores en tiempo presente. Igual que refiere que el problema de la semilla es hacer que crezca un árbol, el de estas películas es crear una coreografía total que se actualice en nosotros y en nuestro presente, al funcionar como un pasatiempo donde se deben unir los puntos para conseguir un dibujo final. En este caso, es la notación coreográfica. Estos filmes son las huellas de una danza cristalizada en el tiempo del cine, de una desaparición y aparición constantes. Danza virtual como rastro de la que ejecutó cada cineasta al filmarla, pero actual, puesto que está presente y se configura, debido al cerebro del espectador. Este reconstruye sus intervalos y traslada, inevitablemente, el referente del cuerpo de las realizadoras al nuestro. Se trata de coreografías fuera de campo, reveladoras de «una presencia más inquietante, de la que ni siquiera se puede decir que existe, sino más bien que "insiste" o "subsiste", una parte. Otra más radical, fuera del espacio y del tiempo homogéneos» (Deleuze, 1984: 35). En ellas, el uso del cuerpo de las cineastas es metonímico, y propone un tipo de percepción infinitamente nueva (Phelan, 1993), y en las que el referente se vuelve cada vez más borroso para hacer emerger destellos de lo invisible.

Coda. Danzas de la vida en una realidad caleidoscópica

Como se apuntó en la introducción, antes de que Deren rodara *A Study in Choreography for Camera*, ya existía una multitud de danzas filmadas, pero es con su llegada cuando se produce, intencional y materialmente, un contrapunto y un diálogo reales entre la cámara y el bailarín. Ese es el punto de partida para muchas cuestiones estéticas, que vendrán después, en el terreno de las imágenes móviles y la coreografía, y que se consideran de plena actualidad. Cerraremos el texto con dos, que son principales en este estudio.

Por un lado, el diálogo presente en las películas analizadas es fílmico y directo entre lo representado y el instrumento que registra esa representación, y subraya el vínculo ontológico planteado por André Bazin (2004) entre ambas categorías. En este caso, el objetivo es «eternizar» algo tan efímero como una danza. Este fin dará la vuelta a la teoría del «desmoronamiento del aura», de Walter Benjamin (1989). Asistimos, en las tres películas, a la «manifestación irrepetible de una lejanía» (24), por la humanización del dispositivo (convertido en compañero de baile), y al cuerpo intuible de las cineastas y su gestualidad fuera de campo.

En segundo término, podemos considerar a Deren, Clarke y Menken también pioneras de cierto tipo de coreografía inmersiva. Ellas rompieron con las convenciones de producción, realización y distribución cinematográficas de su tiempo, al desafiar al sistema de Hollywood. Estéticamente rompieron con la narrativa, las convenciones espacio-temporales y la relación pasiva con el espectador, pero también con el encuadre y todos los bordes, para alcanzarnos en este presente y escapar a cualquier posible análisis del marco estético o sociocultural (Goffman, 1986). Una lectura contemporánea permite decir que estas películas funcionan como piezas de realidad virtual inmersiva, en las que se han borrado los límites y el marco de representación, y se abren a nuevas relaciones que atraviesan el espacio y el tiempo, a una realidad caleidoscópica. Son coreografías holísticas que alteran también nuestra percepción de espectadores y nos invitan a abrirnos al mundo, coqueteando con la idea de que el ser humano es un microcosmos análogo al universo porque «está abierto a un mundo, y el mundo, el universo, es en sí mismo lo abierto» (Deleuze citado en Rodowick, 2018: 134). Son «iluminaciones estéticas» (Mekas, 2013: 258), danzas de la vida que revelan, a partir del entorno físico, los misterios del mundo. Su relectura, desde el momento actual, es útil y pertinente para analizar las manifestaciones contemporáneas artísticas que aúnan coreografía e imágenes móviles, cualquiera que sean los dispositivos utilizados y sus formatos.

Notas

1. Aunque no se analiza en este texto, *Introspection*, es una pieza indiscutible de ese primer coreocine, realizada por otra artista que reivindicar: Sarah-Kathryn Arledge, y que empezó a rodarse en 1941 y se estrenó en 1946, el mismo año que la de Deren.

2. Corriente cinematográfica, considerada emblema del cine de vanguardia norteamericano, que toma como referentes fundamentales el Free Cinema británico y la Nouvelle Vague francesa (N. de la E.).

3. Deren también fue premiada, en 1947, en Cannes por su primera película, *Meshes of the Afternoon* (1943), con el galardón de Mejor Película Experimental en 1947.

4. En 1943, Deren filmó con Marcel Duchamp, *Witch's Cradle*, pero nunca la terminó.

5. Para una lectura multicultural, léase la propuesta de Franko (2001).

6. Todas profundamente sensibles con el movimiento, como se observa en *Glimpse of the Garden* (1957) o *Arabesque for Kenneth Anger* (1961).

7. Mekas consideró a Menken miembro del tercer período de la corriente que él denomina «poesía cinematográfica» —y a la que pertenecerían desde Cocteau a Brakhage y Menken, pasando por Maya Deren o Willard Maas, entre otros (Mekas, 2013: 61).

8. Respecto al concepto de lo virtual, seguimos la idea de Pierre Lévy (1998), quien recuerda el origen latino del término como *virtualis:* virtud, fuerza, potencia; y para el cual es un proceso de transformación de un modo de ser en otro, que no se opone a lo real, sino a lo actual; este y lo virtual son dos maneras de ser/estar diferentes.

Referencias

Agamben, G. (2000) «Notes on Gesture». En: *Means without End. Notes on Politics*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 49-62.

Albera, F. y Tortajada, M. (2015) «The Dispositive Does Not Exist!». En: *Cine-Dispositives. Essays in Epistemology Across Media*. Albera, F. y Tortajada, M. (eds.), Amsterdam University Press, 21-44. Disponible en <https://bit.ly/3Uxj2Nu> [consulta: 6 diciembre 2022].

Bazin, A. (2004) *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp.

Benjamin, W. (1989) *Discursos interrumpidos I*. Buenos Aires: Taurus.

Bergson, H. (1977) *Materia y vida*. Madrid: Alianza Editorial.

Brakhage, S. (2001) *Essential Brakhage*. Nueva York: McPherson & Company.

Clark, V. A., Hodson, M. y Neiman, C. (1988) *The Legend of Maya Deren*. Nueva York: Anthology Film Archives, v. I.

Deleuze, G. (1984) *La imagen-movimiento*. Barcelona: Paidós.

Deren, M. y Martínez C. (ed.) (2020) *El universo dereniano. Textos fundamentales de la cineasta Maya Deren*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha/Artea Editorial.

Fischer-Lichte, E. (2013) *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada Editores.

Franko, M. (2001) «Aesthetic Agencies in Flux. Talley Beatty, Maya Deren, and the Modern Dance Tradition in A Study in Choreography for Camera». En: *Maya Deren and the American Avant-Garde*. Nichols, B. (ed.), Berkeley: University of California Press, 131-49.

Goffman, E. (1986) *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*. Boston: Northeastern University Press.

Lévy, P. (1998) *Qu'est-ce que le virtuel?* París: Éd. La Découverte.

Mekas, J. (2013) *Diario de Cine. El nacimiento del nuevo cine norteamericano*. Ciudad de México: Mangos de Hacha.

_____ (2017) *Cuaderno de los sesenta. Escritos 1958-2010*. Buenos Aires: Caja Negra Editora.

Möller, O. (2019) «Un momento en el tiempo». En: *The New American Cinema Group. Antología de textos de Film Culture (1959-1968)*. Del Buey Cañas, R. (coord.), Madrid: Shangrila, 10-25.

Phelan, P. (1993) *Unmarked: The Politics of Performance*. Routledge: Londres/Nueva York.

Rabinovitz, L. (2003) *Points of Resistance. Women, Power & Politics in the New York Avant-garde Cinema, 1943-71*. Chicago: University of Illinois Press.

Rodowick, D. N. (2018) «The Force of Small Gestures». En: *What Philosophy Wants from Images*. University of Chicago Press, 103-36.

Sitney, A. (2002) *Visionary Film: The American Avant-Garde, 1943-2000*. Nueva York: Oxford University Press.

©TEMAS, 2023

La presencia de directoras en el cine colombiano

Jerónimo Rivera-Betancur
Escritor y profesor investigador.
Universidad de La Sabana.

Si bien más de la mitad de la población mundial está conformada por mujeres, su representatividad en la mayoría de las esferas de la vida cotidiana sigue siendo sumamente baja, aunque no se puede desconocer los espacios que, poco a poco, han ido conquistando. El campo cinematográfico no es la excepción; muchas son las directoras que han hecho aportes significativos a este arte, pero han sido olvidadas por la historia oficial. Nombres como Alice Guy, pionera del cine, se han borrado por obra y gracia de una sociedad con predominio patriarcal y un registro de la memoria cinematográfica que invisibiliza a las periferias.

El cine colombiano tiene una tradición irregular que, como a la mayoría de los países latinoamericanos, no le ha permitido consolidar una industria. No obstante, desde la primera década del siglo xxi, ha ido en franco crecimiento la cantidad de largometrajes documentales y de ficción que ha llegado a las salas del país, la de premios y reconocimientos obtenidos por las películas, y la de directores surgidos o consolidados. Este panorama prometedor, aunque se vio afectado por la COVID-19, ha permitido que esta cinematografía empiece a figurar entre las más importantes de Latinoamérica, con una participación significativa en festivales de primer nivel,[1] y un número creciente de estrenos nacionales que, aun en pandemia, supera en un año todos los de la década de los 90.[2]

Las mujeres han ganado posiciones en las producciones cinematográficas al consolidar funciones muy importantes como script, diseño, maquillaje, vestuario, producción, entre otros. Es notable, igualmente, la importancia creciente de productoras; sin embargo, no son muchas las directoras que logran mantener una carrera sólida.

Para efectos de este artículo, nos remitiremos de manera exclusiva al largometraje (documental o de ficción), y solo se hablará de mujeres directoras, pero se hará énfasis en la labor sobresaliente de las féminas en posiciones como producción y dirección de arte. Es importante resaltar a productoras como Diana Bustamante, Ana Piñeres, Clara María Ochoa, Diana Pérez, Cristina Gallego y María Fernanda Barrientos, entre otras, cuyos nombres están asociados a algunos de los proyectos televisivos y cinematográficos más significativos de los últimos años.

La decisión de elegir al largometraje obedece a la carencia de una base de datos consolidada para los cortos, que se realizan en gran cantidad en el país. Durante la época del sobreprecio[3] de FOCINE (Compañía del Fomento Cinematográfico) se tenía un registro relativamente completo de estos, pues se hacían con cintas de películas y con el apoyo financiero del Estado, pero hoy la tecnología es cada vez más accesible y ha ganado fuerza la realización con cámaras

digitales más sencillas y teléfonos móviles. La única base de datos oficial del país solo cuenta con 68 títulos recientes, que han pasado por el proceso de resolución de cortometraje nacional.[4]

El objetivo del estudio, como se ha dicho, es evaluar la presencia de las mujeres directoras en el cine colombiano.[5] Se partirá de un análisis cuantitativo del porcentaje de películas que han sido dirigidas por mujeres y, a partir de allí, se ponderará la presencia de directoras en el universo histórico de películas. Se tomó como base la lista consolidada de películas del sitio web *Jerónimo Rivera presenta*, donde aparecen 699 proyectos de largometraje consignados entre 1915 y octubre de 2022.[6] En esta lista se tuvo en cuenta, para la definición de largometraje, películas documentales o de ficción de más de 70 minutos que hubieran tenido una exhibición comercial en salas de cine o en plataformas (desde 2020, a raíz de la pandemia).

El contexto

La producción cinematográfica en Colombia tuvo una pequeña bonanza en la década de los 80, gracias al impulso dado por FOCINE. Entre 1978 y 1992, esta compañía apoyó buena parte del cine hecho en el país mediante políticas públicas como la del sobreprecio; pero luego declinó para aumentar el recaudo de los exhibidores, y pocos años después se evidenció una tendencia a presentar trabajos de mala calidad, a veces elaborados por encargo de ellos mismos, para elevar sus ganancias.

Aunque FOCINE supuso una reactivación importante del sector cinematográfico, en este período se constataron esos y otros problemas; además, en reiteradas ocasiones, se perdieron los dineros públicos en proyectos que no se desarrollaron, y algunos directores quebraron con procesos fallidos de producción. Todo esto, y más, llevó a la quiebra del organismo estatal hacia 1992.

La década siguiente fue de muy baja actividad cinematográfica. Al igual que algunos países latinoamericanos, Colombia tuvo gobiernos de tendencia neoliberal que impulsaron la apertura de la nación al libre comercio internacional y a la firma de un tratado de este carácter con los Estados Unidos, el cual impidió la permanencia de políticas públicas proteccionistas del bien cultural. Esto, sumado a la ausencia de un organismo estatal de fomento y protección de la cultura, llevó a que en los años 90 cayera dramáticamente la producción de películas. Entre 1990 y 2000 solo se registra la proyección de alrededor de veintisiete largometrajes en las salas de cine colombianas.

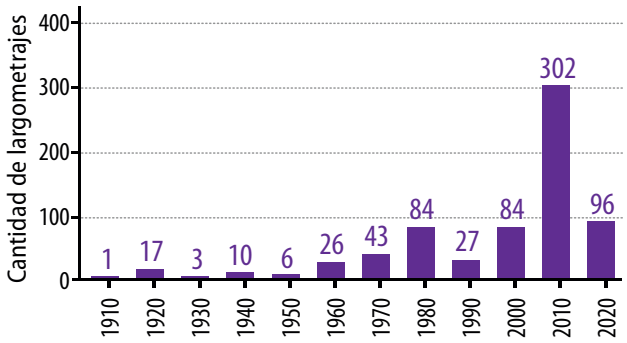
En 1997 fue promulgada la Ley General de Cultura (L 397/1997, de 7 de agosto) que, entre otras disposiciones, proponía la creación del Ministerio de Cultura con una división dedicada a la cinematografía. Desde ese momento, se empieza a plantear la creación de una ley que promoviera el cine nacional, teniendo en cuenta los aciertos y los errores de FOCINE, y permitiera que el sector se consolidara en sus distintos procesos (producción, exhibición y distribución), sin depender de la voluntad de los gobiernos de turno.

La Ley 814, de 2 de julio de 2003, o Ley de Cine, crea el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) que, por medio de convocatorias públicas, fomenta este sector en el país. Se alimenta de la contribución de productores, exhibidores y distribuidores, y no depende directamente del presupuesto anual de la nación. Este modelo demostró ser muy exitoso e incidió, de manera fundamental, en el aumento de las producciones, con efectos colaterales positivos como la activación de los servicios cinematográficos, cualificación del personal técnico y artístico y representación de las regiones del país en el cine nacional.

El FDC es una cuenta bancaria que recibe lo recaudado a través de esa cuota parafiscal que paga la industria del cine como resultado de la muestra de obras cinematográficas nacionales y extranjeras en Colombia. El CNACC (Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía) es el ente encargado de dirigir, recaudar, administrar y ejecutar el destino de estos recursos.

El aumento de las películas colombianas producidas y exhibidas es realmente sobresaliente: en el siglo xx se contabilizan alrededor de 217 largometrajes y en lo que va del xxi se han exhibido ya 482.[7] Esto significa que aproximadamente 69% de la producción nacional se concentra en este nuevo siglo. Más interesante aún es que en la década de 2010 se exhibieron 301, o sea, 43% del total de las películas, a pesar de la gran caída de 2020, por causa de la pandemia de la COVID-19 (gráfico 1).

Gráfico 1. *Largometrajes colombianos 1915-2022*



Fuente: «Filmografía del cine colombiano», en *Jerónimo Rivera presenta,* ob. cit.

La mirada de las mujeres puede aportar nuevas perspectivas a la cinematografía colombiana. También es importante analizar con mayor profundidad otros temas como las representaciones de las mujeres en la ficción del país, su posición en el mercado laboral del audiovisual, la estética de sus películas, y la relación entre la cinematografía dirigida por ellas y el feminismo.

En 2012 se crea la Ley 1556, de 9 de julio, o Ley de Filmación, que, como complemento a la 814, promueve al país como locación para proyectos cinematográficos de gran envergadura. Si bien esta legislación gira alrededor de la actividad fílmica, su impacto en la industria cinematográfica nacional no ha sido tan importante, pues las exenciones de impuestos y devoluciones de la inversión han sido realizadas, mayoritariamente, para proyectos extranjeros y han impactado más en la producción turística.

Las directoras

La industria del cine ha sido históricamente masculina; las mujeres han ido ganando terreno poco a poco, pero a un ritmo más lento que el deseado. A través del tiempo, son pocas las que han logrado consignar sus nombres en los libros de historia del cine o alcanzado algún reconocimiento. Por ejemplo, un premio de larga trayectoria y prestigio como el de la Academia de Hollywood, en noventa y dos años solo ha premiado a dos directoras: Kathryn Bigelow, en 2010, y Chloé Zhao, en 2021. Más allá del reconocimiento, es evidente que el porcentaje de directoras frente a sus colegas masculinos es muy bajo, aunque ha ido creciendo.

Florencia Tundis y Maitena Minella (2020) hablan de segregación horizontal y vertical en la industria fílmica y se refieren no solo al conocido concepto del techo de cristal relacionado con una menor remuneración, sino también a «paredes de cristal»: labores del cine tradicionalmente asociadas a las mujeres, como maquillaje, peinado, vestuario y arte.

En Latinoamérica hay esfuerzos interesantes para registrar y visibilizar el trabajo femenino en las distintas posiciones y oficios del medio cinematográfico. Cabe mencionar el primer informe de igualdad de género en la industria audiovisual argentina (citado en Tato Jardon, 2020: 9), que arroja datos interesantes; por ejemplo, en 2017 las mujeres representaron 61% de los graduados de pregrado y grado en Artes Audiovisuales, y una inmensa mayoría (76%) hizo posgrados en este campo; sin embargo, en el ámbito laboral se invertía esa proporción: 62% de hombres y 38% de mujeres (con una tendencia marcada hacia la publicidad). Cynthia Tato Jardón (2020) señala que

> las mujeres representan más de 50% en los roles de administración, producción, arte, vestuario, maquillaje y peinado —en las últimas cuatro categorías, rondan 80%—, mientras que en otras áreas técnicas, van desde 15% a 25%; el caso extremo fue en el rol de grip, donde no hubo mujeres registradas ese año; en el rubro de dirección se llega a 47%, pero porque se incluye a todas las asistentes, ayudantes, continuistas, aprendices y responsables de casting; solo 12% de los proyectos presentados al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales [INCAA] en 2018 tenían como directora a una mujer. Los hombres, por su parte, están presentes es todos los roles. (9)

C. Rojas Ugarte *et al.* (2018) citan, para el caso de Chile, un estudio realizado en 2008 donde se afirma que del total de graduadas de carreras de audiovisuales, 57% elige dirección, pero luego, en el mercado laboral, solo 25% se desempeña en este oficio, 38% en producción, 37% en guion y ninguna en dirección de fotografía. En cuanto al porcentaje de películas dirigidas por mujeres, entre 1969 y 2019 en Chile, es solo 15%. Estos autores expresan que ellas ocuparon, entre 2005 y 2015, casi 90% de los puestos de vestuario y maquillaje, y 60% de dirección de arte. En el resto de las áreas su participación es visiblemente menor: 47% en asistencia de dirección y 48% en jefatura de producción, 36% en montaje, 28% de productoras, 24% de guionistas y 6% en dirección de sonido y fotografía. En esos diez años, su participación en el cine chileno alcanzó 19%.

En México, IMCINE (Instituto Mexicano de Cinematografía) (2020) registra que, de 186 largometrajes estrenados en 2018, solo 47 (25,3%) fueron dirigidos por mujeres. Si bien hay un aumento frente a 2010 (15 películas), aún sigue siendo bastante inferior al de los hombres. Sin embargo, ese año se constata la participación femenina en otras posiciones: 28,5% como guionistas y 47,3% como productoras. El año siguiente (2019) ocuparon 20% de los puestos de dirección, 30% de guion y 43% de producción.

En Brasil, la ANCINE (Agência Nacional do Cinema) (2019) informa que en 2018 las directoras tuvieron una presencia de 26%. Solo en el área de dirección de arte superan en cantidad a los hombres, seguido por la de producción (40%) y dirección de fotografía (14%), la más baja.

La situación en Colombia es similar. Enrique Uribe *et al.* (2020) analizan los efectos de la Ley 1556, de 9 de julio de 2012 —Ley de Filmación— en la industria audiovisual colombiana, y muestran que estas

también suelen desempeñarse mayoritariamente en los departamentos de arte y producción y menos como directoras de fotografía. Además indican que en el cine colombiano representan 10,9% en fotografía, 63% en producción y 51,2% en arte (99).

Aunque es un problema de vieja data, que ha afectado el desempeño femenino en la industria audiovisual, desde hace algunos años se ha venido denunciando los casos de acoso sexual y laboral que han dañado a un alto porcentaje de trabajadoras de esta área. A este movimiento, que se hizo mundialmente famoso con la campaña del *Me too* en los Estados Unidos, se han sumado colectivos y asociaciones de mujeres que han encarado a productores, directores y altos ejecutivos por usar su posición de poder para vulnerar sus derechos. En Colombia se han materializado experiencias como la de Rec Sisters, que realiza investigaciones y denuncias de acoso sexual. Mariángela Urbina (2020) pone en evidencia la preocupante cifra de 147 mujeres de la industria audiovisual que manifiestan haber sufrido algún tipo de violencia sexual en su ambiente de trabajo.

Las pioneras

En el caso colombiano, la primera mujer en hacer un largometraje de ficción, Camila Loboguerrero, logró estrenar su ópera prima, *Con su música a otra parte*, en 1982, casi sesenta años después del primer largometraje del país. Llama la atención que en los dieciocho años que transcurrieron desde la fecha hasta el 2000, solo se registran doce largometrajes de ficción dirigidos por mujeres.

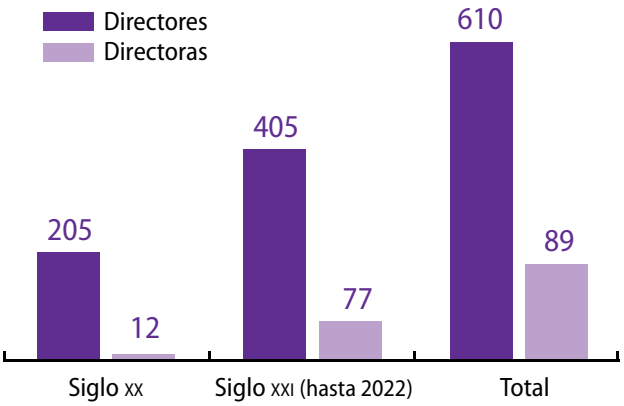
Con los documentales, la situación es diferente, por la presencia de realizadoras como Martha Rodríguez, quien, en 1971, junto a Jorge Silva, incursionó con éxito en el género, con su mediometraje *Chircales,* obra emblemática del cine nacional. Su primer largo (codirigido con Silva), *Nuestra voz de tierra, memoria y futuro* (1982) resultó ser el primero dirigido por una mujer.

Después de la muerte de Silva, en 1987, Martha Rodríguez continuó su carrera como documentalista. Su obra más reciente, *La sinfónica de los Andes*, realizada a la edad de 87 años, fue estrenada en 2020. En sus películas siempre han estado presentes el compromiso social —como herencia del cine militante de los años 70— y una mirada crítica a las problemáticas colombianas derivadas de la pobreza y la violencia. A ella se suman otras directoras como Gabriela Samper y Gloria Triana, que realizaron cortos y mediometrajes en la década de los 80, para cine y televisión.[8]

Con la puesta en marcha de la citada Ley 814 y el aumento de proyectos cinematográficos en Colombia, no fue evidente el incremento de las mujeres en el cine. Entre 2000 y 2010 solo se estrenaron siete películas dirigidas por estas, lo que, sumado a los doce largometrajes anteriores, muestra que hasta 2010 solo 19 de los 301 largos realizados fueron dirigidos por ellas.[9]

La década de 2010 inició un cambio significativo en cuanto a la presencia de directoras en las películas exhibidas en el país: en los últimos diez años (aun con más de dos de pandemia) se han exhibido 70, lo que corresponde a 9,6% del total histórico. En síntesis, el número de realizadoras ha aumentado significativamente: de 5,5% en el siglo xx a 16% en menos de veintidós años del xxi. Aunque está lejos de ser lo deseable, sí presenta un escenario positivo para el futuro de las directoras en el cine nacional (ver gráfico 2).

Gráfico 2. *Directores vs. directoras en el cine colombiano*



Fuente: «Filmografía del cine colombiano», en *Jerónimo Rivera presenta,* ob. cit.

Los 89 largometrajes dirigidos por mujeres son diversos en estilo y temáticas; queda como asignatura pendiente la búsqueda y caracterización de la llamada «mirada femenina» en la dirección, para determinar si realmente el género del director tiene una influencia determinante en la estética o narrativa de las películas. Aunque esa búsqueda excede los límites de este texto, sí se plantean algunas recurrencias temáticas y genéricas, que pueden servir para una futura reflexión. Es importante señalar que de las 89, trece son codirigidas con hombres y dos comparten la dirección entre dos mujeres. Igualmente, es significativo que diez de las directoras no son colombianas (aunque sí las películas), y 17 del total han dirigido (y exhibido en Colombia) más de un filme.

Los géneros y las temáticas

Se tiende a señalar que el cine realizado por mujeres suele tener como centro las tramas sentimentales, los conflictos íntimos o emocionales, y las relaciones

de pareja. Estas afirmaciones pueden partir de prejuicios o de consecuencias directas de los roles que tradicionalmente han ocupado las mujeres en nuestras sociedades patriarcales occidentales. Diana Bustamante (2016), reconocida productora colombiana, afirmó en un foro organizado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano: «Mi cine no vale porque soy mujer sino porque es un buen cine. Lo importante es pensar qué es lo que se quiere y contar qué formas se quieren transgredir».

En la década de los 80, Giles Deleuze (1985) se refiere a la mirada femenina en el cine y sugiere que las directoras no deben su importancia a un feminismo militante, lo que cuenta es «la manera en que han innovado en el cine de los cuerpos, como si las mujeres tuvieran que conquistar el origen de sus propias actitudes y la temporalidad que les corresponde en tanto *gestus* individual o común» (56). Aunque constituye un enfoque interesante que contribuye a la reflexión, Michèle Soriano y Laurence Mullaly (2014) afirman que esta posición impone al cine hecho por mujeres una marca que lo opone al «universal» y que, desde una visión masculina,

> delimita lo importante, oponiéndolo a lo que no lo es y no debe serlo, enunciando así lo que puede funcionar como marca legítima: define la propiedad, lo propio, lo que se concede a lo «femenino», por un lado, y designa por otro lo que va a ser rechazado en tanto marca infamante: lo impropio, lo político, *desnaturalizado* —el *feminismo*. (11)

Para completar este enfoque, sugieren que las escuelas de cine han formado, en el siglo xxi, una nueva generación de mujeres que ha alcanzado un protagonismo importante en Argentina y «tomado distancia del posicionamiento feminista, a menudo condenado por demasiado arriesgado: si el "cine de mujeres" implica el poco deseable encierro en un *ghetto*, la etiqueta "feminista" resulta todavía peor» (16).

Esta reflexión también se suscita para realizadoras colombianas, como Josephine Landertinger (2022), quien, en un artículo publicado en su blog «*Making of* —mi vida como artista en progreso», se pregunta por la posible mirada femenina (*femenine gaze*) de su cine, y llega a la conclusión de que, en su caso, es una condición relevante y se traduce en:

- Los personajes principales suelen hacer un viaje interior (*vs.* viajes «exteriores» de mirada masculina, donde el héroe —en su mayoría— o la heroína necesitan cumplir una misión; hay un objetivo externo). Los viajes de la mirada femenina son internos y suelen ser reflexiones muy profundas, transformaciones de autoconocimiento, aprendizajes internos del alma, de la conciencia.
- Los finales suelen ser abiertos o circulares, haciendo referencia a la misma naturaleza femenina que es cíclica (*vs.* finales cerrados de la mirada masculina).
- Los personajes (mujeres u hombres) son observados en su humanidad completa (*vs.* mirada masculina en la cual la mujer se reduce a un solo aspecto, por ejemplo, su sexualidad, o un hombre también se reduce a un solo aspecto).

Ante la dificultad para acceder a las películas del siglo xx, se hablará de manera exclusiva de los 77 largometrajes dirigidos por realizadoras en el siglo xxi. Para cada uno se hizo un análisis del género predominante y las temáticas más recurrentes, que evidencia una gran variedad tanto de uno como de otras, que quizás desvirtúe la afirmación anterior, pero plantea algunas recurrencias dignas de futuros estudios.

Después de ver y revisar 52 filmes de los 77 (67,5%) y de leer las sinopsis de los restantes, se puede plantear como variables algunas temáticas reiteradas en las narrativas del cine colombiano (gráfico 3).

Gráfico 3. *Temáticas recurrentes en las películas colombianas dirigidas por mujeres (siglo xxi)*



Fuente: «Filmografía del cine colombiano», en *Jerónimo Rivera presenta,* ob. cit.

Algo que podría constituir una tendencia es la gran cantidad de películas que abordan tópicos relativos a las relaciones humanas por encima de otros centrados en temas de violencia. Como indica el gráfico, sexo/amor y las relaciones familiares son los más repetidos, seguidos de la búsqueda de la identidad, conflicto armado y espiritualidad/religiosidad. De todas formas, sería necesario hacer un análisis más detallado para llegar a conclusiones definitivas al respecto.

En cuanto a género cinematográfico, los filmes fueron diferenciados entre documental y ficción. Es interesante constatar la alta tendencia de las directoras hacia el documental, pues este tipo de producciones es escaso en la cartelera nacional. Frente a sus homólogos masculinos, claramente inclinados hacia la ficción, casi la mitad de las películas fueron documentales: 38 (48%). Los de ficción fueron separados en drama (16), thriller (6), comedia (4), aventura (2) y romance (1).

Es importante aclarar que el cine colombiano no necesariamente es de género y, en ocasiones, es difícil encuadrar una película en alguno. Sin embargo, puede verse tendencias que marcan una línea sobre las principales preocupaciones de las directoras. Aunque el drama suele ser muy variado, y por lo general viene asociado con otros subgéneros, llama la atención que más de la mitad de los filmes de ficción dirigidos por mujeres se pueden vincular con historias de tinte dramático, y que existen pocas realizadoras de comedias, un género con alta incidencia en el cine colombiano y que prefiere gran parte del público nacional.[10]

Conclusiones

Aunque la presencia de las mujeres directoras aún está lejos de ser equitativa, en los últimos años se evidencia un aumento en la cinematografía nacional. Esto, sumado a su papel históricamente protagónico en posiciones relacionadas con diseño de producción, asistencia de dirección, *script* o producción, configura un panorama alentador para las que se dedican al cine y quieren llegar a dirigir largometrajes.

Este incremento también puede ser consecuencia de una mayor concurrencia femenina en las escuelas de cine y comunicación, y un buen precedente para que en el futuro pueda hablarse de equidad en las artes y oficios cinematográficos. Sin embargo, aún persisten preocupantes indicadores en cuanto a la remuneración inequitativa y a los residuos de un machismo que se ha expresado en casos de acoso sexual o laboral hacia las mujeres. Por otra parte, es necesario que ellas tengan acceso en igualdad de condiciones a cualquiera de las funciones de un cineasta, y no solo a aquellas que, por sus características (definidas desde la mirada masculina), son consideradas femeninas.

Para superar esta brecha de género, es imprescindible seguir impulsando iniciativas que propicien un mayor acceso a las instancias de producción; la creación de circuitos de exhibición y festivales, enfocados en el cine hecho por mujeres, que permitan visibilizar sus películas; y se ofrezcan becas o estímulos dirigidos a directoras colombianas. También está pendiente propiciar narrativas incluyentes que faciliten la autorrepresentación de la comunidad LGTBIQ+.[11]

La mirada de las mujeres puede aportar nuevas perspectivas a la cinematografía colombiana. Sus intereses, temas y motivaciones deben representarse en la pantalla. También es importante analizar con mayor profundidad otros temas como las representaciones de las mujeres en la ficción del país, su posición en el mercado laboral del audiovisual, la estética de sus películas, y la relación entre la cinematografía dirigida por ellas y el feminismo, entre otros.

Queda claro que en el cine esta mirada no puede ni debe desconocerse y que es necesario avanzar hacia una mayor presencia femenina delante y detrás de las cámaras, y en los relatos del cine colombiano.

Notas

1. En años recientes, películas colombianas como *La tierra y la sombra*, *Los reyes del mundo*, *La jauría*, *El abrazo de la serpiente*, *El olvido que seremos*, *Memoria,* y el cortometraje *Leidy* han obtenido importantes reconocimientos en festivales como Cannes, San Sebastián, Berlín, y premios Goya y Oscar.

2. Entre enero y octubre de 2022 se han estrenado 42 largometrajes en salas y plataformas.

3. Política promulgada en la Resolución 315, de 6 de septiembre de 1972 (citada en Czestochowa Molina, 2020), cuyo espíritu era la promoción de cortos y largometrajes nacionales en las salas de cine, permitiendo un cobro mayor a los teatros que los exhibieran.

4. Este proceso, que cuenta con la curaduría de un grupo de expertos, es necesario para acceder a los beneficios tributarios de la legislación, y negociar con los exhibidores la proyección en salas de cine comerciales.

5. Para efectos de este texto, nos limitaremos al análisis de películas dirigidas por mujeres cisgénero, al no contar aún con ningún largometraje realizado por una mujer transgénero en Colombia.

6. Véase «Filmografía del cine colombiano» (2015-2022) en el sitio web *Jerónimo Rivera presenta*, disponible en <https://bit.ly/3D2H8cS>.

7. Las cifras y porcentajes son estimados de acuerdo con la información oficial recopilada en varios sitios. La cantidad de títulos puede variar ligeramente entre unas fuentes y otras. También es posible que exista un gran margen de error en la filmografía más antigua, debido a la ausencia de bases de datos u organizaciones estatales que recopilan esta información. El organismo más importante del fomento del cine colombiano, la Fundación Patrimonio Fílmico colombiano, fue creado en 1986.

8. Entre estos trabajos sobresale la serie documental *Yuruparí,* emitida entre 1983 y 1989, dirigida por Gloria Triana, que constituye un importante documento audiovisual sobre las fiestas, costumbres y tradiciones colombianas. La serie fue emitida por la televisión pública de la época y realizada por la productora *Audiovisuales.* Hoy puede verse 62 capítulos completos y restaurados a través de la plataforma RTVC Play del sistema de medios públicos de Colombia, disponible en <https://bit.ly/3X5Q8Wl>.

9. En esta cifra no se ha considerado películas terminadas, pero sin estreno comercial en Colombia.

10. De las diez películas más taquilleras de la historia del cine colombiano, siete pertenecen al género comedia.

11. Son muy pocas las películas colombianas que han explorado las temáticas relacionadas con la diversidad de género; entre ellas cabe resaltar las de Ruth Caudelli, así como la existencia del ciclo rosa, que por más de veinte años ha promovido el cine LGTBI+ en el país.

Referencias

ANCINE (Agência Nacional do Cinema) (2019) *Participação feminina na produção audiovisual brasileira (2018).* Disponible en <https://bit.ly/3VFToXu> [consulta: 10 diciembre 2022].

Bustamante, D. (2016) *El rol de las mujeres en el cine colombiano ¿inclusión o poca representación?* Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Disponible en <https://bit.ly/3jL81LH> [consulta: 10 diciembre 2022].

Colombia. Ley 1556/2012, de 9 de julio. *Diario Oficial*, n. 48 486. Disponible en <https://bit.ly/2X2Zwzp> [consulta: 10 diciembre 2022].

_____ Ley 397/1997, de 7 de agosto. Ibídem, n. 43.102. Disponible en <https://bit.ly/3j0Eb5I> [consulta: 10 diciembre 2022].

_____ Ley 814/2003, de 2 de julio. Ibídem, n. 45 237, de 3 de julio. Disponible en <https://bit.ly/3FuuAM1> [consulta: 10 diciembre 2022].

Czestochowa Molina, S. M. (2020) «Cine en Colombia: historia de una industria», *Ñawi: arte, diseño, comunicación,* v. 4, n. 2, 169-81. Disponible en <https://bit.ly/3jwuFYr> [consulta: 10 diciembre 2022].

Deleuze, G. (1985) *Cinéma 2 – L'image-temps*. París: Les Éditions de Minuit.

IMCINE (Instituto Mexicano de Cinematografía) (2020) *Anuario estadístico de cine mexicano 2019*. Disponible en <https://bit.ly/3X2lPQs> [consulta: 10 diciembre 2022].

Landertinger, J. (2022) «*Making of* —mi vida como artista en progreso». *Blog de Josephine jlf*. Disponible en <https://bit.ly/3icOgfP> [consulta: 10 diciembre 2022].

Rojas Ugarte, C., Dávalos Bachelet, F. y Hurtado Quiñones, A. (2018) «Participación de la mujer en la Industria Cinematográfica Nacional. Informe final». Santiago de Chile: Fondo Audiovisual Línea de Investigación/Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Soriano, M. y Mullaly, L. (2014) «De cierta manera. Cuando las cineastas latinoamericanas reconfiguran las normas de género». En: *De cierta manera: cine y género en América Latina*. Mullaly, L. y Soriano, M. (eds.), París: L'Harmattan, 9-24.

Tato Jardón, C. (2020) *La inclusión de la mujer en los roles técnicos en la producción del cine latinoamericano.* Tesis de grado. Universidad de Lamus: Remedios de Escalada. Disponible en <https://bit.ly/3YpjBMz> [consulta: 10 diciembre 2022].

Tundis, F. y Minella, M. (2020) «El cine machista también se va a caer: análisis del sexismo delante y detrás de cámara». *Economía Femini(s)ta*. Disponible en <https://bit.ly/3HakWPD> [consulta: 10 diciembre 2022].

Urbina, M. (2020) «Unas 147 mujeres de la industria audiovisual dicen haber sido víctimas de violencia sexual». *El Espectador*. Disponible en <https://bit.ly/3GhXnnx> [consulta: 10 diciembre 2022].

Uribe, E., Mora, C., Corredor, M. y Martínez, R. (2020) *Los trabajadores colombianos del cine internacional*. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano.

©TEMAS, 2023

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

1. La extensión de los trabajos no deberá exceder los 40 000 caracteres con espacios, incluidas las notas y referencias bibliográficas. En ningún caso se aceptarán artículos que sobrepasen la extensión declarada.
2. Debe adjuntarse un resumen del trabajo (en español y en inglés) de dos párrafos como máximo y se indicarán palabras claves que describan las esencias del objeto de estudio.
3. Se podrán incluir tablas o gráficos sencillos, con no más de 8 cm de ancho.
4. Las notas aclaratorias deberán indicarse con números consecutivos, con supraíndices.
5. Las referencias bibliográficas deberán ajustarse a la norma Harvard, la cual consigna entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación, y las páginas referenciadas, en el sitio del texto donde se hace la referencia, y al final del texto se lista el cuerpo de referencias.

Al entregar el trabajo el autor deberá consignar su ocupación, un resumen de su *curriculum vitae;* y dirección, teléfono, dirección electrónica o cualquier otro dato que facilite su localización.

Los artículos pueden ser enviados a la dirección electrónica temas@icaic.cu. También se pueden entregar impresos en las oficinas de *Temas* o enviarlos por correo postal, siempre acompañados de una versión en soporte digital.

Temas *está presente en las redes sociales. Invitamos a nuestros lectores a seguirnos también por estos caminos virtuales:*

Temas:
www.facebook.com/revistatemascuba
Último Jueves:
www.facebook.com/ultimojuevesdetemas

Temas:
www.twitter.com/temascuba

Catalejo, el blog de Temas:
www.medium.com/revista-temas

TemasTV:
www.youtube.com/temascubatv

Último Jueves (podcast):
www.ivoox.com/perfil-ultimo-jueves-temas

Temas:
t.me/TemasCuba